

De La Matanza obrera a capital nacional del piquete

Etnografía de procesos políticos y cotidianos en contextos de transformación social

Autor:
Manzano, Virginia

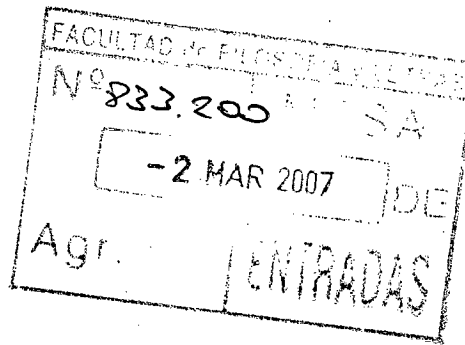
Tutor:
Grimberg, Mabel Adriana

2007

Tesis presentada con el fin de cumplimentar con los requisitos finales para la obtención del título Licenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Antropológicas.

Grado

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras



***De La Matanza Obrera a Capital Nacional del Piquete:
Etnografía de procesos políticos y cotidianos en
contextos de transformación social***

Tesista: Lic. Virginia Lilián Manzano

Directora: Dra. Mabel Grimberg

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
Dirección de Bibliotecas

Buenos aires
Febrero de 2007

AGRADECIMIENTOS

En el trayecto de esta tesis fueron muchas las personas que colaboraron para que el trabajo llegara a su término. Quiero expresar, entonces, mi agradecimiento hacia aquellos que contribuyeron para que este resultado sea posible.

Realizar un trabajo de campo en diferentes grupos barriales de La Matanza vinculados a la FTV y la CCC fue una de las experiencias más ricas que tuve la oportunidad de vivir. Es imposible agradecer con palabras a todas aquellas personas que confiaron en mí para compartir sus expectativas, sus emociones y sus sufrimientos. Comprendo que será injusta por no mencionar a todos, pero no quiero dejar de nombrar a aquellos que me prestaron una colaboración permanente, que se entusiasmaron como mi tarea, que me facilitaron contactos, que me permitieron circular libremente por distintos espacios, y que me abrieron las puertas de sus casas. Expreso mi profunda gratitud a: Kuki y Beto, Juanjo y Sara, Margarita y su familia, Susana e Hilda, Noma y Susana C., Carlitos y Pancho, Dr. "Chino" y Moni, Miguélina y Pelusa, Fredy y Mary, Juan Carlos y Gladys, Ramón y Alicia, Lalo y Blasco, Roxana, Marta y Jorge. A las "chicas" de Amas de Casa del País de La Matanza. A SUTEBA Matanza, en especial a Marta, Mara, Facundo, Osvaldo y Mary. A los integrantes de ATE Matanza, en particular a Ana y Bety. A Soraya de la CTA.

Con Laura Recoder tengo una deuda impagable: sin ella se hubiese hecho sumamente difícil soportar el "2001". Su influencia fue decisiva para convencerme de la importancia de emprender esta investigación. Una amiga entrañable que me brindó toda su generosidad y me aportó sus incisivas observaciones sobre los "sectores populares" mientras caminábamos junto con los "piqueteros" en el "caluroso" verano de 2002 desde Liniers hacia Plaza de Mayo o cuando visitamos el gimnasio del Sagrado Corazón para seguir las alternativas de la "1º Asamblea Nacional de Organizaciones Sociales, Territoriales y de Desocupados".

Laura Santillán es mi íntima amiga en la ruta que emprendimos hace años. Su profunda sensibilidad antropológica, su capacidad de trabajo y su comprensión de los pobladores del conurbano bonaerense fueron incentivos permanentes para seguir avanzando. Mi

profundo agradecimiento por su aliento constante para ayudarme a ganar confianza en esta tarea.

María Inés Fernández Álvarez es una compañera invaluable, con quien he compartido las aventuras del trabajo de campo, las pasiones de la formación teórica y la maravillosa sensación de los descubrimientos. Agradezco sus lecturas, sus sugerentes comentarios y su apoyo constante en la tarea cotidiana.

La solidaridad y generosidad de Marcela Woods y Cristina Cravino me abrieron las puertas a la comprensión de ese apasionante mundo del conurbano bonaerense y de las organizaciones territoriales. Faltan palabras para agradecerles toda la ayuda que me brindaron y los innumerables aportes que realizaron.

Con mis compañeros del equipo de investigación sobre Resistencia y Protesta Social fuimos forjando interrogantes, certezas y camaradería. Valoro enormemente cada una de sus virtudes: la pasión por el conocimiento y el compromiso político de Aldo; la generosidad, responsabilidad y serenidad de Matías; las profundas reflexiones y la solidaridad de Marcelo; y la voluntad y el deseo permanente de aprender de Juanjo.

A mis compañeras de Antropología Sistemática I, les expreso una gratitud especial, por el trabajo colectivo y fraterno, y por las reflexiones conjuntas sobre los fascinantes temas de la antropología política.

En el equipo de investigación del Programa de Antropología y Educación, dirigido por María Rosa Neufeld, he aprendido la importancia de cuestionar lo obvio, de interrogar, de buscar interpretaciones alternativas. Para con todos ellos tengo un agradecimiento profundo. Debo una gratitud especial a María Paula Montesinos, por su lucidez para detectar nudos de tensión en las políticas sociales y a Patri Redondo, por las inquietudes compartidas acerca de la desigualdad social y porque me llevó hacia el "camino" de La Matanza.

Susana Margulies y su equipo resultaron ser una compañía invaluable. Admiro de ellos la virtud del trabajo compartido, la responsabilidad, la alegría, el entusiasmo y el sentido de la justicia. En especial, quiero expresar mi profundo agradecimiento a Nely Barber, porque

me permitió compartir aspectos sustanciales de su vida, por su paciente escucha, su compromiso político y sus palabras justas y sabias para proyectar el pensamiento en la universidad y en universos mucho más amplios.

Gloria Rodríguez y su equipo, en la Universidad Nacional de Rosario, fueron unos interlocutores formidables durante los últimos diez años. La inmensa solidaridad de Gloria y su intensa capacidad de trabajo contribuyeron a generar ámbitos de intercambio fraterno con colegas del país, del exterior y con representantes del mundo sindical. Hacia ellos expreso mi sentida gratitud.

A Gaby y Gustavo, Alicia y Juan Carlos, Vane y Víctor y a los solcitos de Lauti, Manu y Julia, les agradezco enormemente su amistad, el interés por mi trabajo y la paciencia para escucharme y para motivarme, pero fundamentalmente mi gratitud es por los buenos momentos compartidos y porque con sólo verlos recordaba que la vida era más que la tesis. Me faltan palabras para agradecerle a Vane todo el trabajo que realizó para embellecer estilísticamente mis reflexiones.

Ana Linares Quintana fue una persona decisiva para que pudiera lograr cumplir con este objetivo, supo ahondar en los resortes más íntimos de mi subjetividad para ayudarme a tomar las mejores decisiones, hacia ella va también mi profunda gratitud.

Con Valeria, mi hermana, nos tuvimos que separar por miles de kilómetros pero se las ingenió para continuar cerca de mí. Desde su pasión y su formación en historia, me escuchó, aportó ideas y me amplió el horizonte del presente hacia el pasado. Va hacia ella mi agradecimiento pero sobre todo mi gran amor.

A mi mamá y mi papá, porque superaron la década del 90, perdieron trabajos pero continuaron resistiendo. Siempre estuvieron atentos a escuchar y a aprender de mis experiencias. Son lectores incansables, preocupados por la realidad social, ávidos por sentir, atender y comprender lo que le sucede al "otro". Hacia ellos no sólo va mi agradecimiento, sino también mi amor y mi orgullo porque sean "mis papás".

Expreso también mi agradecimiento a cada uno de los profesores que impartieron los cursos y seminarios de doctorado de los que he participado. En especial a la Dra. Elena

Achilli, por su compromiso ético, y a la Dra. Lygia Sigaud porque me enseñó el valor de la "evidencia" y de la "explicación" sustentada en el trabajo y la sensibilidad etnográfica.

María Rosa Neufeld me brindó su generosidad y su apoyo constante a lo largo del trabajo de tesis. Admiro enormemente su sabiduría en teoría antropológica y su agudeza para observar procesos políticos. Su intensa convicción en la posibilidad de un mundo menos desigual logró generar los mejores sentimientos entre quienes trabajamos con ella, nos invitó a buscar normas colectivas y fraternas para compartir la tarea diaria. Hacia ella va mi infinita gratitud y mi profundo cariño.

Con Mabi Grimberg, mi directora, contraí una deuda impagable. Su apoyo, su inteligencia y su capacidad para transmitir los secretos del "oficio" son invaluables. Sin contar con su formación hubiese sido imposible llegar a las preguntas, el enfoque y los resultados de este trabajo. Admiro su virtud de actualizar en cada sugerencia toda su vida, su compromiso militante, su frescura, alegría y sabiduría. Por sobre todas las cosas, me enseñó a reírme de mis errores para seguir avanzando, "siempre avanzando".

Finalmente a Dani, por su infinita paciencia, su inmensa bondad, su humildad y sus consejos simples para sortear las encrucijadas de la vida (como esta tesis). Va para él todo mi amor, y a él le dedico este trabajo.

INDICE

INTRODUCCION

Entrada al campo y definición del problema de investigación	01
Reelaboraciones desde un enfoque de las tramas de relaciones políticas y cotidianas	05
Los enfoques de la acción colectiva y los movimientos sociales: la acción como <i>sistema social</i>	09
Tradiciones de estudios antropológicos sobre la política y el poder	18
Reflexiones metodológicas	29
Estructura de la tesis	33

CAPÍTULO I

El piquete: ocupación de espacios públicos y compromisos del Estado	36
El piquete en la matanza	39
La trama social del piquete	48
La apropiación de la forma-piquete en La Matanza	48
Estar en la ruta: un acto con múltiples sentidos	58
Desbloquear (conceptualmente) al piquete	69

CAPITULO II

La desocupación como problema: configuración de un espacio de disputa y negociación 72

Censar y demandar: primeras movilizaciones en torno a la desocupación 74

Restituir la historia, actuar desde experiencias 82

Tierra y trabajo: las ocupaciones de tierra en la década del 80 82

"Caminar por el barrio con la palabra de Dios": las particularidades de las CEBs 88

De la fábrica al barrio: proyectos y estrategias sindicales 96

Alimentos, hambre y desnutrición: la movilización de nociones legitimadoras 103

El espacio social de la disputa y la negociación 110

CAPÍTULO III

Los planes como objeto de demanda 112

Proyectos y beneficiarios: características de los principales programas de empleo 115

Orientaciones internacionales sobre política social: las propuestas del banco mundial 124

Entre la *conquista*, el *mérito* y la *organización*: procesos de construcción de demandas 130

La configuración de un campo transaccional	151
CAPÍTULO IV	
Trayectorias de vida y relaciones barriales	154
<i>Planes y piquetes en los recorridos de la vida</i>	156
<i>Don Tevez: Un hombre de trabajo</i>	156
<i>Susana: El plan, la ruta y el evangelio</i>	162
<i>Zulema: Las formas de "arreglárselas"</i>	167
<i>Dora: Ayudar y luchar</i>	170
Los marcos de las opciones	175
<i>Referentes y dirigentes: entre planes y formación política</i>	179
Un barrio, diferentes grupos	190
CAPÍTULO V	
La gestión cotidiana de programas de empleo	195
<i>Entrar y permanecer en los planes: tensiones del intercambio diferido</i>	197
<i>Computadoras y planillas: la especialización técnica</i>	210
<i>Trabajo con los planes y trabajo genuino: modalidades y sentidos del trabajo</i>	224
La gestión de la vida	236
CAPÍTULO VI	
<i>La Matanza Obrera y Piquetera: las imágenes del pasado en la trama política</i>	239
Orígenes de la "capital obrera": industrialización y configuración socio-espacial	241

<i>La matanza y el peronismo: indicios de los alineamientos políticos de los 90</i>	255
<i>Capital nacional del piquete: articulaciones nacionales y locales</i>	264
De imágenes y tradiciones	274
CONCLUSIONES	
Ocupar para negociar	278
Los sujetos en la(s) trama(s)	282
Escenarios de disputa y procesos transaccionales	287
De la fuerza teórica de los campos a los <i>campos de fuerza</i>	299
Últimos desplazamientos, últimas conclusiones	305
FUENTES CONSULTADAS	310
BIBLIOGRAFIA	316

INTRODUCCIÓN

ENTRADA AL CAMPO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En octubre del año 2000 llegué a La Matanza¹ con el objetivo de profundizar una investigación sobre obreros metalúrgicos que había realizado en mi tesis de licenciatura². Quique, estudiante de la carrera de Ciencias Antropológicas, quien militaba en una agrupación política *peronista* de esa zona, ofreció guiarme para conocer algunas de las grandes fábricas que albergaba ese distrito, pero en el trayecto encontramos galpones vacíos y estructuras fabriles abandonadas (sin techos, vidrios rotos, las paredes laterales desmontadas, etc.). Descansamos en un *centro de capacitación laboral* que funcionaba en el predio de la que había sido la fábrica más grande de La Matanza, inaugurado para adiestrar a los trabajadores en el uso de nuevas tecnologías; el propio centro había tenido que abrir sus puertas a jóvenes de los barrios aledaños por falta de "obreros". Desolada, como la zona que había recorrido, antes de emprender el regreso a la ciudad de Buenos Aires decidí acompañar a Quique hasta la sede del gobierno municipal. A diferencia de lo que ocurría en las antiguas zonas fabriles, allí había un bullicio ensordecedor y un gran número de personas alzaban sus voces para discutir sobre *mercaderías y planes*. Quique se acercó a un grupo de hombres, que eran sus compañeros de militancia, varios de ellos *referentes barriales*, y me explicaron que el gobierno nacional adeudaba *mercadería y planes* a La Matanza y a *la Red de Barrios*. Me recomendaron, si tenía interés, que mantuviera el contacto porque, si fracasaban los acuerdos con el gobierno, era probable que "*cortaran la ruta*" (ruta nacional 3).

Ese día me había desplazado de la ciudad de Buenos Aires a La Matanza. De las antiguas zonas fabriles al edificio municipal. De la desolación a la exaltación de disputas y discusiones. De categorías laborales (*obreros, reconversión, capacitación*

¹ La Matanza, con 1.249.958 habitantes, es el municipio más poblado del Gran Buenos Aires (Censo de Población y Vivienda: INDEC, 2001). Según el mismo censo en el Gran Buenos Aires habitan 11.460.575 personas.

² La tesis se titula "Del ascenso social a la precarización: Un enfoque antropológico de la producción de significados en torno al trabajo en el sector metalúrgico". Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, febrero de 2000.

laboral) a otro conjunto de categorías como *red de barrios*, *referentes barriales*, *mercaderías* y *planes*. Aquel día sólo logré comprender que *Red de Barrios* era la denominación de una organización que mantenía algún tipo de lazo con miembros de una agrupación política denominada Frente Grande y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA, de ahora en adelante), que los *referentes barriales* eran responsables de temas vinculados con la distribución de *mercaderías* y *planes*, que la *mercadería* (alimentos secos y frescos) formaba parte de programas estatales de alimentación dirigidos a poblaciones de bajos recursos, y que *planes* era el término popular con el que se conocía a los Programas de Ocupación Transitoria destinados a personas desocupadas.

Como habían anticipado los *compañeros* de Quique, durante los seis primeros días del mes de noviembre de 2000, la ruta nacional 3 se mantuvo cortada a la altura de la localidad de Isidro Casanova³. Una semana después inicié el diálogo con los responsables de aquel bloqueo. Se trataba de concejales municipales que eran al mismo tiempo militantes de la agrupación Frente Grande y dirigentes de gremios incorporados en la CTA, docentes, médicos, *militantes* católicos vinculados a la orientación de la Teología de la Liberación y, principalmente, miembros de dos organizaciones que de ahí en adelante lograrían reconocimiento público: la "Red de Barrios", perteneciente a la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV, de ahora en adelante), a su vez integrante de la CTA, y la Corriente Clasista y Combativa (CCC, de ahora en adelante).

En los medios masivos de comunicación y en la mayoría de los trabajos de científicos sociales (Svampa y Pereyra, 2003; Massetti, 2004; Delamata, 2004), esos grupos sociales y políticos, con sus múltiples pertenencias y sus tramas relacionales, se fundieron en la imagen de un actor colectivo homogéneo: *los piqueteros*. A diferencia del enfoque sobre el "actor colectivo", continué preguntándome por las relaciones entre los diversos grupos que había identificado desde mi primer día en La Matanza. Me interesé por el modo de relación entre los *referentes barriales* y los

³ En el año 1997 se produjeron 140 cortes de rutas en todo el país, mientras que en 2002, la cifra aumentó a 2336. Asimismo, a lo largo del período 1997-2005, la mayor incidencia de esta modalidad de protesta, el 30% sobre el total del país, se concentró en la provincia de Buenos Aires. (Fuente: *Nueva Mayoría*)

habitantes de los barrios; por el lugar de los *planes* de empleo y la *mercadería* en esas relaciones; por el papel de dirigentes políticos y sindicales en la articulación de éstas, y por la forma en que el corte de ruta o piquete se insertaba en esa trama relacional. Además, me intrigaba cómo el Estado organizaba e imprimía una tonalidad particular al conjunto de esas relaciones. De acuerdo con esto, el tema de investigación del proyecto doctoral se centró en las modalidades de relación entre el Estado y los grupos subalternos. Sin embargo, en el transcurso del trabajo de campo —que inicié de manera sistemática a partir de abril de 2002— se produjeron dos desplazamientos que me permitieron precisar el enfoque de esta tesis y la tesis misma.

Las personas con las cuales me había vinculado me advertían que había *dos Matanzas*: una que rodeaba el edificio municipal y “otra” que empezaba al cruzar el *Camino de Cintura*. La ruta provincial 4 o *Camino de Cintura* es una circunvalación que atraviesa internamente diferentes distritos del Gran Buenos Aires y al mismo tiempo los une. Una vez que inicié el trabajo de campo crucé a la “otra *Matanza*”; allí se emplazan barrios obreros formados durante la década del 60 y asentamientos urbanos conformados tras los procesos de ocupación de tierras durante la década del 80. En dos de esos asentamientos funcionaban las sedes centrales de la FTV, y de la CCC. En esos espacios, donde el ritmo cotidiano de las actividades estaba pautado por la *gestión colectiva* de programas estatales de asistencia social, observé reuniones, asambleas, cursos y escuelas de formación política. Así, comencé a interesarme por el modo de vinculación cotidiana entre esas organizaciones y el Estado; quería saber cómo tradiciones políticas y sindicales modelaban la gestión de esos programas de asistencia social, y qué márgenes de autonomía respecto de las propuestas estatales se iban configurando en esos procesos.

Con la ayuda de algunos *referentes barriales* me desplazé desde las sedes centrales de ambas organizaciones a barrios más alejados. En esas sedes había recorridos pautados para periodistas, investigadores, estudiantes y delegaciones de otros movimientos sociales que deseaban conocer la *experiencia piquetera*. También había recorridos pautados para los *dirigentes o referentes barriales*, y para las personas que se acercaban a tratar problemas vinculados con *planes* y *mercaderías*,

o con causas particulares (enfermedades o problemas judiciales). Realicé trabajo de campo en dos barrios durante tres años; allí pude seguir de cerca la relación entre los *referentes barriales* y sus grupos de referencia. En los ambientes más íntimos de los espacios domésticos y barriales conocí personas y familias, mujeres y varones, adultos y jóvenes. De manera progresiva, entendí que pertenecer a una organización de desocupados constituía un aspecto dentro de experiencias más amplias de vida, que combinaban, entre otras cosas, trabajos eventuales con períodos de no trabajo; vínculos con el Estado a través de centros de salud, iglesias y escuelas; inserción en circuitos religiosos y deportivos.

Los interrogantes planteados se entretrejan con las características de las transformaciones sociales que ocurrieron en el distrito de La Matanza durante la década del 90. De algún modo, esas transformaciones eran la expresión local del proceso de reestructuración social y económica que afectó a toda la Argentina desde la última dictadura militar (Villarreal, 1985; Basualdo, 2001), cuyas manifestaciones han sido la concentración de capitales (Azpiazu, 1997; Basualdo, 2000; Castellani, 2003), la desindustrialización (Aspiazu, Basualdo y Schorr, 2000; Schorr, 2004), la precarización de las condiciones de trabajo y del mercado laboral (Galín y Novick, 1990; Beccaria y López, 1994; Beccaria, 2002; Lindenboim, 2003), y el aumento en los niveles de desempleo, subempleo y pobreza en comparación con épocas anteriores⁴.

El conjunto de esas transformaciones ha tenido un impacto profundo en el distrito de la Matanza. Entre 1940 y 1960 se instalaron en esa zona industrias de la rama textil, metalúrgica y automotriz, que atrajeron contingentes migratorios del resto de las provincias argentinas y ampliaron la urbanización a partir de la conformación de barrios obreros (Chiozza, 2000). Si en la década del 70 se registraron 12.000 establecimientos industriales, en el año 2002 sólo quedaban en funcionamiento 4000. Por otra parte, se estima que en 2001, sobre un total de 575.654 personas que formaban la población económicamente activa, el 17,5% eran desocupados abiertos

⁴Según mediciones del INDEC, la tasa de desocupación aumentó de 2,4 en abril de 1975 a 20,2 en mayo de 1995; mientras que la tasa de subocupación pasó de 4,7 en abril de 1975 a 12,6 en mayo de 1995. Uno de los hitos más significativos ha sido el índice de desocupación de mayo de 2002, que

(100.739 personas) y el 15,2% eran subocupados (87.499 personas).⁵ Desde el gobierno municipal, se interpretaron estos cambios a partir de la evocación de imágenes del pasado que definían a La Matanza como la *ciudad obrera* más importante de Argentina y con la construcción de un espacio en el presente que reserva a este distrito la condición de *Capital Nacional del Piquete*. De modo que el trabajo que presento también se trama en función de explicar, desde el registro de procesos políticos y cotidianos, la transformación de *La Matanza Obrera en Capital Nacional del Piquete*.

Esta tesis, entonces, no intenta ser un estudio de la acción colectiva, ni de la formación de un actor colectivo (los piqueteros); tampoco aspira a ser un análisis de la implementación de políticas sociales. Se trata de un análisis antropológico de los procesos políticos y cotidianos en los que se insertaron *los piquetes* y las organizaciones de desocupados durante los últimos diez años de la historia argentina. Desde otro ángulo, esta tesis explica por qué *el piquete* y las organizaciones de desocupados se constituyeron en "*sitios*" donde se procesaron tradiciones políticas e ideológicas, alianzas políticas y sindicales, experiencias de vida cotidiana y modos estatales de gestión de la población en contextos de transformación social.

REELABORACIONES DESDE UN ENFOQUE DE LAS TRAMAS DE RELACIONES POLÍTICAS Y COTIDIANAS

La mayoría de las contribuciones académicas vinculadas con el tema de esta tesis se han centrado en el análisis de la implementación de políticas sociales, en el estudio de la protesta social o en la descripción de actores colectivos (los piqueteros). Son recientes los trabajos que analizan cómo los programas sociales y la participación en organizaciones de desocupados se inscriben en la vida de las personas (Quirós, 2006; Ferraudi Curto, 2005); no obstante, estas contribuciones se concentraron exclusivamente en contextos locales y familiares, sin estudiar cómo se

alcanzó al 21,5% de la población económicamente activa. Asimismo, en el transcurso de dos décadas se acrecentó la desigualdad social.

⁵ Fuente: Consultora Equis.

relacionan las experiencias de la vida cotidiana con procesos políticos e históricos más amplios.

Entre los trabajos que analizan políticas sociales, algunos de ellos contienen un interesante y minucioso relato etnográfico sobre los esquemas de percepción y acción de los actores involucrados en proyectos de asistencia social (Masson, 2004; Zapata, 2005), pero el sentido de las acciones se explica en función del campo que la propia política genera; es decir, los *campos* se convierten en totalidades esencializadas y escindidas del flujo de la vida histórica y social. Otros trabajos (Andrenacci, Neufeld y Raggio, 2000; Neufeld et al., 2002; Raggio, 2003) reconstruyeron modalidades de funcionamiento de la vida cotidiana en barrios del Gran Buenos para explicar cómo los actores sociales experimentaban diferentes políticas sociales, pero el eje en estos estudios pasa por el análisis de la implementación de esas políticas desde la óptica de sus "receptores". Otra serie de trabajos analizó la relación entre las gestiones locales de gobierno y el clientelismo político (Scaglia y Woods, 2000; Auyero, 2001). Estudios más recientes han corrido el foco de indagación del clientelismo político para restituir, en términos de la propuesta de Bourdieu (1981), una mirada sobre los procesos de *división del trabajo político*; así, mostraron cómo los "sectores populares" fueron desplazados de la gestión gubernamental durante la década del 90 por medio de mecanismos de profesionalización de la política (Frederic, 2004).

Más allá de estas contribuciones, durante los últimos cuatro años, varios trabajos se han concentrado en temas tales como la protesta social y los actores colectivos. Estas elecciones temáticas, según creo, se vinculan con los sucesos de movilización social que ocurrieron en diciembre de 2001 en Argentina, que no sólo incluyeron la experiencia de organizaciones de desocupados sino también la de empresas/fábricas recuperadas y asambleas barriales⁶.

Los temas que se han tratado en los estudios sobre la **protesta social** han versado sobre la forma en que la sociedad produce demandas, cómo éstas generan posiciones de sujetos colectivos y cómo impactan en el sistema político (Schuster y

⁶ Sobre el problema de las empresas y fábricas recuperadas se puede consultar el trabajo antropológico de Fernández Alvarez (2006); por su parte, los trabajos de Grimberg et al. (2004) y Triguboff (2005) abordan el caso de las asambleas populares/barriales.

Pereyra, 2001; Schuster y Scribano, 2001; Schuster, 2005; Naishtat et al., 2005). Con este concepto también se procura dar cuenta del carácter segmentario de la acción colectiva contemporánea en dimensiones como la identidad y la localización, y la diversidad de temas y de formatos de protesta (Schuster y Pereyra, 2001; Schuster y Scribano, 2001; Schuster, 2005). Se afirma que el sentido de la protesta está dado por su relación con otras acciones de protesta, y para ello se construyen analíticamente "redes de protesta" sobre la base de preguntas como quiénes, por qué, cuándo, dónde, cómo y para qué protestan (Schuster y Pereyra, 2001; Schuster y Scribano, 2001). Otros trabajos han propuesto el concepto de **campo de protesta** (Auyero, 2002) para explorar las causas estructurales de la acción colectiva junto con las vivencias e identidades de quienes la protagonizan. El campo de protesta, entonces, alude a un ensamble de "factores" políticos, culturales y determinantes externos (pobreza y desempleo).

Considero que los trabajos centrados en el concepto de protesta social y campo de protesta descuidan el análisis de la vinculación entre la acción de protesta y la cotidianidad de los sujetos, reducen la narración del proceso histórico a la sucesión de ciclos o repertorios, y dejan un vacío explicativo en torno a la relación entre el Estado y los sujetos sociales. Es cierto que estudios más recientes (Auyero, 2004) sostienen que en la propia protesta se construyen sentidos que motivan la participación de los individuos en busca de reconocimiento social. En este marco, se reconstruyeron biografías e historias de vida, pero el punto aquí es que la vida de los sujetos está puesta en función de explicar la protesta; es decir, sus vidas se acotan al campo de la protesta en lugar de explicar cómo la protesta se inserta en ellas. También se produjeron trabajos que procuraron enmarcar las protestas sociales en un proceso histórico de larga duración para analizar la manera en que éstas fueron variando debido a la transformación del trabajo asalariado y a las cambiantes oportunidades políticas que ofrecieron los regímenes políticos (Lobato y Suriano, 2003). El mérito de esta producción es el intento por comprender la acción colectiva desde la historia; sin embargo, se historian solamente *las formas* de protesta y se dejan fuera del análisis las relaciones de vida de los sujetos que las protagonizaron.

Las contribuciones centradas en **actores e identidades colectivas** (Svampa y Pereyra, 2003, 2005; Svampa, 2005; Delamata, 2004; Massetti, 2004; Cross y Montes Cató, 2002) procuraron dilucidar las causas que propiciaron la emergencia de *los piqueteros* como actor colectivo. Algunos trabajos, como el de Svampa y Pereyra (2003, 2005), consideran que el anclaje de la identidad colectiva de los piqueteros se encuentra en la narración de los primeros piquetes que se produjeron en las provincias del sur de Argentina, ya que dicha narración conecta un modo de protesta (el piquete), una identidad (piqueteros) y una demanda (trabajo/planes asistenciales). Entiendo que el conjunto de estos trabajos se preocupan por tres aspectos entrelazados. El primero de ellos es la productividad de la *identidad piquetera* para colectivizar la experiencia individual del desempleo y transformar al desocupado en un actor social y político activo. El segundo es la potencialidad del desocupado como actor colectivo para quebrar la dependencia de los "sectores populares" tanto de relaciones de clientelismo político con el Partido Justicialista como de políticas "asistenciales" del Estado. El tercero es la creación de formas alternativas de organización democrática centradas en espacios deliberativos de toma de decisiones, como las asambleas.

Estas tres preocupaciones aparecen también en otros trabajos que abordan las formas de sociabilidad de las "clases populares" (Merklen, 2005). La hipótesis central de esos estudios es que los procesos de desafiliación e inestabilidad amenazan la reproducción social de los antiguos trabajadores convertidos en pobres y que éstos desarrollan comportamientos individuales, familiares, barriales y colectivos guiados por la *lógica del cazador urbano*; es decir, como individuos y como actor colectivo se han especializado en la búsqueda de recursos que dispensan organismos estatales e internacionales. En consecuencia, los movimientos sociales populares desarrollan una dimensión estratégica, que los obliga a negociar recursos, y otra expresiva, centrada en la lucha por el reconocimiento de identidades (Merklen, 2000, 2005).

Una mirada de conjunto indica que en algunos trabajos la protesta social se independiza de los sujetos y de los contextos de vida cotidiana en los que estas acciones colectivas cobran su impulso y su forma. A la inversa, en otros estudios, los

sujetos y sus múltiples trayectorias sociales, históricas y cotidianas se transforman en una identidad colectiva homogénea y esencializada que parecería cobrar vida por encima de las relaciones sociales: *piqueteros o clases populares*.

Considero que los problemas que presentan los enfoques sobre la protesta social y los actores colectivos se vinculan con las referencias teóricas sobre las que se apoyan. Estas referencias son las propuestas estadounidenses sobre la acción colectiva y las europeas sobre nuevos movimientos sociales. En el siguiente apartado presento las principales características de ambas con el objetivo de mostrar que el estudio que aquí propongo no puede constituirse en un complemento de las brechas que dejan esas teorías, sino que debe enraizar en la tradición de estudios antropológicos sobre la política y el poder.

LOS ENFOQUES DE LA ACCIÓN COLECTIVA Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES: LA ACCIÓN COMO SISTEMA SOCIAL

El estudio de la acción colectiva y los movimientos sociales se constituyó en un área de trabajo en sociología a partir de la década del 60, especialmente en Estados Unidos y Europa, en el marco del contexto de movilización social en el cual se destacaron la lucha por los derechos civiles, la agitación contra la guerra de Vietnam y el movimiento estudiantil de 1968 (Edelman, 2001; Gledhill, 2000; Wallace, 1998). Esos trabajos tenían como uno de sus principales objetivos revertir los enfoques que explicaban los comportamientos colectivos como producto de la anomia, de la irracionalidad de las masas; y de mecanismos de sugestión y manipulación colectiva que arrastraban a los individuos a la acción por efecto de contagio y de patologías (Goodwin, Jasper y Polleta, 2001; Edelman, 2001). El concepto de acción colectiva ha sido central en las elaboraciones teóricas en Estados Unidos, mientras que los sociólogos europeos se concentraron en la definición del concepto de movimiento social (Edelman, 2001).

La acción colectiva se definió en tensión con la noción de acción individual. El economista Marcus Olson entendía la acción colectiva como la suma de decisiones estratégicas realizadas por individuos que eran inducidos a juntar sus esfuerzos con

los de otros a través de incentivos y sanciones (Edelman, 2001; Munck, 1995). El actor racional individual reemplazó a la muchedumbre como referente para el análisis de la acción colectiva. En este marco, el problema de la acción colectiva era "agregativo"; se debía explicar cómo se implicaba la mayor proporción de individuos posibles en aras del bien colectivo, sobre todo cuando aparecían terceros dispuestos a defender esos intereses en su nombre (Cohen, 1985). Este dilema, conocido en la extensa bibliografía sobre el tema como *free-rider*, modeló las preocupaciones de las distintas vertientes de la escuela norteamericana. Para Olson, los aspirantes a líderes debían imponer restricciones a sus seguidores u ofrecerles incentivos selectivos a fin de convencerlos de que su participación merecía esfuerzos. La teoría de la movilización de recursos respondió al dilema planteado por Olson, atendiendo a los recursos organizativos y al accionar de cuadros y profesionales de los movimientos sociales, a los que se denominó empresarios políticos del movimiento, y el eje explicativo giró desde los individuos hacia la gestación de procesos grupales y organizativos (Craig Jenkins, 1994).

Las vertientes teóricas europeas –que con el correr del tiempo fueron identificadas con el rótulo de "paradigma de los nuevos movimientos sociales" o "paradigma orientado a la identidad" (Cohen, 1985)– se centraron en la definición del concepto de movimiento social antes que en la acción colectiva, con el objetivo de proponer una alternativa a la actividad política basada en la "clase obrera" y un enfoque diferente al de la sociología del *sistema social* (Touraine, 1984, 1987; Melucci, 1994). Touraine propuso identificar conflictos centrales de la vida social que dieran lugar a *hechos sociales* que pudieran ser definidos como **movimientos sociales**. De acuerdo con esto, caracterizó a los movimientos sociales como acciones conflictivas que perseguían la transformación de las relaciones de dominación social ejercidas sobre los principales recursos culturales, la producción, el conocimiento y las reglas éticas (Touraine, 1984). El conflicto central que define a un movimiento social se produciría en torno a la "historicidad", es decir, en torno a modelos culturales alternativos que gobiernan las prácticas sociales y el funcionamiento de la sociedad. Así definidos, los movimientos sociales se diferenciarían de las conductas colectivas y de las luchas sociales; estas últimas eran

entendidas como conflictos centrados en la redistribución, cuyo exponente central era el movimiento obrero, y unificadas por un agente exterior, el partido político, que orientaba la acción hacia la conquista del Estado antes que hacia la transformación de relaciones sociales. Si en el planteo de Olson el individuo racional reemplazó a la muchedumbre, en el de Touraine, el movimiento social no sólo expresa un tipo de conflicto social sino que también designa a un actor: el movimiento es el sujeto clase que se define por su posición de dominación o de dependencia en el modo de apropiación de la historicidad.

Durante las décadas del 80 y el 90, diferentes enfoques han precisado y afinado las categorías de acción colectiva y movimiento social, incluso varias propuestas intentaron elaborar síntesis entre dimensiones desarrolladas por la teoría estadounidense de movilización de recursos y por la europea de los nuevos movimientos sociales (Melucci, 1994; Tarrow, 1997; McAdam, McCarthy y Zald, 1999).

El enfoque de los *procesos políticos* en Estados Unidos, cuyos exponentes son autores como Tilly y Tarrow, ha trabajado dentro del esquema de problemas configurado por el estudio de Olson, pero, a diferencia de éste, consideraba que los incentivos para la acción colectiva no se encontraban en el liderazgo sino en la **interacción** entre los grupos y el sistema político. El historiador social Charles Tilly (2000) sostuvo que el fundamento para la acción colectiva se hallaba en las prácticas y en las instituciones, porque éstas contenían combinaciones variables de incentivos solidarios, materiales o coercitivos para la acción. En la propuesta de Tarrow (1997), el problema de la acción colectiva no consistía en averiguar cómo los individuos se sumaban a ella, sino en saber cómo se coordinaban poblaciones desorganizadas, autónomas y dispersas, de cara a una acción común. La respuesta a este problema era social e histórica, y se expresaba en la emergencia de movimientos sociales⁷ que habían resuelto el dilema de la acción colectiva respondiendo a las **oportunidades políticas** mediante el uso de formas conocidas y modulares de acción colectiva,

⁷ Uno de los aspectos más originales del planteo de Tarrow es su idea acerca de que los movimientos sociales surgieron en el siglo XVIII en el marco de los procesos de transformación social en Europa. El autor considera que esos movimientos no fueron el resultado directo de la industrialización sino de la

movilizando a la población en el seno de redes sociales y a través de supuestos culturales compartidos. Para Tarrow, si las estructuras del Estado crean oportunidades estables, son las oportunidades políticas cambiantes (alineamientos gubernamentales, disponibilidad de aliados influyentes, divisiones dentro de las elites, etc.) las que ofrecen incentivos a los grupos pobres en recursos para crear nuevos movimientos.

La forma que asume la acción colectiva es otro de los núcleos sobre el cual se han concentrado los trabajos de los investigadores del enfoque de los procesos políticos. Específicamente, la **acción colectiva contenciosa** se definió en tensión con la política institucional y con las rutinas cotidianas. Este planteo se enmarca en discusiones sobre la organización del campo académico de Estados Unidos, dentro del cual se han desarrollado áreas de investigación separadas sobre fenómenos similares; por ejemplo, departamentos sobre movimientos sociales, huelgas y revoluciones, que han dado lugar a diferentes vocabularios, técnicas y modelos (Tarrow, 1997; McAdam, McCarthy y Zald, 1999; McAdam, Tarrow y Tilly, 2001). En años recientes se generaron proyectos de estudio sobre *política contenciosa* con el objeto de mostrar que las dinámicas de contención se originan por mecanismos y procesos causales similares (MacAdam, Tarrow y Tilly, 2001). Según estas definiciones, la acción colectiva se torna contenciosa cuando es utilizada por personas que carecen de acceso regular a las instituciones y que actúan en nombre de reivindicaciones nuevas o no aceptadas. Esta forma de acción es disruptiva y asume un carácter de desafío a las elites, autoridades y otros grupos. Asimismo, es pública, e interrumpe, obstruye e introduce incertidumbre en las actividades de otros (Tarrow, 1997; Tilly, 2000).

En el marco de las vertientes europeas, Melucci (1994) procuró elaborar un modelo para la comprensión de la acción y el actor colectivo dentro de la línea general inaugurada por Touraine. Propuso un enfoque cognoscitivo y constructivista, centrado en los procesos mediante los cuales los actores producen significados, comunican, negocian y toman decisiones. Melucci se preguntaba a través de qué

difusión de la prensa, las comunicaciones, el asociativismo y la formación de Estados nacionales centralizados.

procesos se construían los actores de una acción común y cuáles eran los procesos y las relaciones que propiciaban la implicación de los individuos en la acción colectiva. Para responder a estos interrogantes elaboró un modelo intermedio —entre factores macroestructurales e individuales o motivacionales— al que denominó *sistema de acción multipolar*, cuyos polos eran los fines, los medios y el ambiente. En oposición a los planteos de Tarrow y Tilly, sostuvo que la descripción de la acción de los movimientos sociales en términos de protesta conducía a una especie de reduccionismo político, puesto que se utilizaban sucesos como unidad de análisis y las preguntas giraban en torno a los efectos de esos acontecimientos en el sistema político. Además, consideró que el hecho de circunscribir el análisis a la escena pública y al enfrentamiento con las autoridades excluía de la mirada la red sumergida de los movimientos y la acción de éstos para la creación de modelos culturales y retos simbólicos.

Para algunos autores (Giménez, 1994), la sociología de los movimientos sociales introdujo a los sujetos en escenarios histórico-sociales como reacción frente a la sociología de escenarios vacíos, sin actores, que se ocupaba de estructuras/sistemas o instituciones. A mi criterio, el desarrollo de una mirada exclusivamente centrada en la acción no introdujo al actor sino que produjo la **escisión de la acción respecto de los actores y de sus contextos históricos y cotidianos de vida**. Considero que esta escisión obedece, sobre todo en los estudios estadounidenses, a la continuidad soterrada de la tradición de estudios sobre el sistema social impulsada por Parsons.

La preocupación por establecer el origen, el desarrollo y el resultado de la acción colectiva teniendo como referencia el sistema político o el sistema social, es decir, lo que algunos llaman “la evolución secuencial del ciclo de vida de los movimientos” (Craig Jenkins, 1994), es una de las muestras más acabadas de la autonomía de la acción colectiva respecto de los “actores” que la sostienen. En el caso de Tarrow (1997), las oportunidades políticas se constituyeron en factor explicativo del origen de la acción, y también de su dinámica y efectos. Con el objetivo de captar este movimiento, el autor empleó el término “**ciclo de protesta**”, al que definió como:

“(...) Fase de intensificación de los conflictos y la confrontación en el sistema social, que incluye una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados; un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación; marcos nuevos o transformados para la acción colectiva; una combinación de participación organizada y no organizada; y unas secuencias de interacción intensificada entre disidentes y autoridades que pueden terminar en la reforma, la represión, y a veces, en una revolución” (Tarrow, 1997: 263-264).

El **ciclo de protesta** se inicia cuando algún grupo lleva a cabo una acción disruptiva, logra resultados e invita a otros a promover acciones similares. El incremento de la acción colectiva, el clímax del ciclo, crea incentivos para la formación de nuevas organizaciones, para que las antiguas radicalicen sus tácticas, para la elaboración de nuevos marcos culturales y símbolos, y para la innovación en los repertorios de acción. De este modo, la lógica de acción colectiva que tiene lugar en un ciclo puede conducir a reformas políticas o, en su extremo, a revoluciones. Tarrow y el conjunto de autores enrolados en la teoría de la movilización de recursos (Craig Jenkins, 1994) no se han centrado en las revoluciones sino en temas tales como la manera en que el sistema político procesa demandas y las transforma en reformas estructurales, en las modalidades de “cooptación” de líderes, en la institucionalización de la acción disruptiva, en la incorporación de símbolos, repertorios y marcos de acción colectiva dentro de la “cultura política” de la sociedad en general, y en los cambios en las coaliciones de gobiernos y en las biografías personales de quienes han protestado.

Los trabajos europeos señalaron las debilidades de la distinción entre el sistema político y el sistema social. Melucci (1994), como mencioné en párrafos anteriores, consideraba reduccionista la referencia exclusiva al sistema político y a los actores sociales en tanto actores políticos; para este autor, el cambio sistémico en las sociedades avanzadas tendría otras dimensiones. Esta mirada, compartida por autores como Cohen (1985), se centra en el “radicalismo auto-limitante” de los movimientos sociales, entendido como una manera de defensa de vínculos culturales y sociales frente al Estado y la economía de mercado. El objetivo de los nuevos movimientos sociales no sería lograr concesiones del sistema político, sino controlar regiones de la sociedad civil y democratizar estructuras de la vida cotidiana a partir

de la importancia otorgada a la comunicación directa y a la elaboración de identidad (Cohen, 1985). Touraine (1987), por su parte, se preguntaba por las dificultades que encontraron los movimientos sociales, por los motivos de su decadencia y quizás de su desaparición, ya que habían quedado atrapados en la disyuntiva entre la institucionalización y la violencia. Este autor se inquietaba por la manera en que podía debilitarse el carácter social y cultural de los movimientos sociales de una sociedad posindustrial debido al predominio político; es decir, su interés se orientaba a observar en qué medida estos movimientos podrían abandonar la lucha por el control de la historicidad si se involucraban en una lógica de disputa política en la cual el dominante era totalmente dominador y el dominado quedaba reducido a la función de excluido.

En el conjunto de estas reflexiones, la acción colectiva y los movimientos sociales se independizaron de la experiencia y de los contextos de vida históricos y cotidianos. En todas las vertientes teóricas reseñadas, el sentido de la acción está dado por su referencia al sistema social, fuera de los procesos históricos y de las prácticas y sentidos que construyen sujetos activos. De esta manera, se elaboró un relato histórico atento a la cristalización de formas de acción colectiva, siguiendo fases lineales de origen, desarrollo y resultados, y se trabajó con periodizaciones que indicaban su sucesión evolutiva y su estabilización en ciclos, olas y repertorios.

Como he señalado anteriormente, esta mirada centrada exclusivamente en la acción hunde sus raíces en la tradición iniciada por Parsons en torno al tratamiento de lo que denominó "**sistemas sociales de acción**". Parsons (1984) sostenía que la interacción de los actores individuales tenía lugar en condiciones tales que era posible considerar ese proceso de interacción como sistema y someterlo al mismo orden de análisis teórico aplicado a otros tipos de sistema en otras ciencias:

"Un sistema social –reducido a los términos más simples– consiste, pues, en una pluralidad de actores individuales que interactúan entre sí en una situación que tiene, al menos, un aspecto físico o de medio ambiente, actores motivados por una tendencia a obtener un óptimo de gratificación y cuyas relaciones con sus situaciones –incluyendo a los demás actores– están mediadas y definidas por un sistema de símbolos culturalmente estructurados y compartidos (...)" (Parsons, 1984: 17).

El enfoque de los sistemas sociales de acción tiene dos efectos teóricos que, según creo, han guiado el estudio de la acción colectiva en las distintas vertientes teóricas analizadas. Por un lado, el tratamiento del actor se reduce al estudio de sus orientaciones cognitivas, catéticas y evaluativas respecto de su situación y de las diferentes clases de objetos; por ello, Parsons proponía prestar atención a las motivaciones para la acción y a las expectativas heredadas de cierta experiencia y tradición cultural que iban más allá de la situación. Por otro lado, este autor sostenía que el sistema social era uno de los aspectos de la estructuración de un sistema total de acción, mientras que los sistemas restantes eran el de la personalidad de los actores individuales y el cultural. En la propuesta de Parsons, cada uno de estos sistemas debía ser considerado como un foco independiente que actuaba sobre los elementos del sistema de acción, ya que a nivel teórico ninguno de ellos era reductible a los otros, aunque existía algún tipo de relación e interdependencia entre ellos.

Las propuestas de análisis sintéticas sobre la acción colectiva desarrolladas a partir de la década del 90 (McAdam, McCarthy y Zald, 1999) expresan de manera acabada el enfoque del sistema de acción. En esos trabajos, la referencia de Parsons a sistemas independientes correlacionados dentro del sistema total de acción fue redefinida bajo la terminología de "factores", los cuales explicarían el origen, el desarrollo y el declive de la acción colectiva. En este sentido, McAdam, McCarthy y Zald (1999) propusieron una explicación de la acción colectiva basada en un esquema de tres "factores" interrelacionados: las oportunidades políticas, las formas de organización (formal e informal) a disposición de los "contestatarios" y los procesos colectivos de enmarcado, entendiendo el proceso de enmarcado como el "factor cultural" mediador entre las oportunidades políticas y las formas de organización.

La mayoría de los trabajos que siguieron a las propuestas sintéticas se han concentrado en lo que se definió como "factor cultural", dentro del cual se engloban la identidad colectiva y las emociones, para explicar la emergencia, la trayectoria y los resultados de la acción colectiva (Cerulo, 1997; Calhoun, 1999; Polleta y Jasper, 2001; Goodwin, Jasper y Polleta, 2001). Los estudios que se centraron en la

identidad colectiva procuraron redefinir esquemas interpretativos sobre las motivaciones para la acción que se habían polarizado en torno a identidad/interés, identidad/incentivos y lucha expresiva/lucha material⁸. Algunos consideraron que la obligación, la reputación y el honor eran incentivos para la movilización tan poderosos como los materiales (Calhoun, 1999). Otros se preguntaron en qué medida la identidad era el resultado de la acción antes que su condición (Gould, 1995) y cómo los activistas hacían uso estratégico de ella (Polleta y Jasper, 2001). Una serie de aportes consideraron que la identidad no debía ser asociada exclusivamente a los resultados culturales de la acción colectiva, ya que ésta había influido en cambios y reformas político-institucionales. Finalmente, los trabajos sobre emociones pretendieron descentrar el peso otorgado a la racionalidad de los actores y complejizar el tratamiento de elementos *culturales* atendiendo exclusivamente a aspectos "cognitivos"; por ejemplo, acuerdos cognitivos sobre lo que se considera justo e injusto, o las concepciones de la identidad colectiva como fronteras cognitivas (Goodwin, Jasper y Polleta, 2001).

Es indudable que, a lo largo de los años, estos trabajos han contribuido a renovar la visión sobre la acción política. Mostraron de qué manera los grupos que se encontraban en una posición de poder subordinada generaban procesos de movilización colectiva que extendían los límites de las actividades políticas formales de las democracias liberales, centradas en el voto y en la participación en partidos políticos. Abrieron las formulaciones marxistas centradas exclusivamente en la acción de clase social para tratar con un escenario de confrontación en el cual se incorporaban diversos actores y grupos sociales que respondían a variadas formas de opresión (género, raza, etc.). Llamaron la atención sobre las formas de politicidad de la vida cotidiana y sobre la capacidad de actuar colectivamente sobre problemas que eran vistos como propios del orden de lo privado/individual. Finalmente, los análisis que articulan de modo tenso las emociones y lo cognitivo resultan un aporte, quizás no para comprender la acción colectiva en sí misma, sino para estimular

⁸ En líneas generales, los estudios europeos trataron de explicar cómo la identidad motivaba la acción sobre la base de la búsqueda de reconocimiento, mientras que las primeras formulaciones hechas en Estados Unidos, como ya ha sido mencionado, procuraban establecer cuáles eran los incentivos e

preguntas sobre la configuración de la experiencia de vida y sus sentidos. Sin embargo, como ya lo he expresado en párrafos anteriores, el problema axial de estos planteos es el tratamiento de la acción colectiva o el movimiento social en sí mismo, separado de la experiencia de vida y de los procesos socio-históricos.

TRADICIONES DE ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS SOBRE LA POLÍTICA Y EL PODER

Los trabajos antropológicos que procuran definir como área de estudios a los movimientos sociales son recientes (Escobar, 1992; Alvarez, Dagnino y Escobar, 1998; Edelman, 2001; Nash, 2005). Desde la década del 90, en el caso de América Latina, los interrogantes giraron en torno a la capacidad de los movimientos sociales para impulsar proyectos democráticos y concepciones de ciudadanía alternativa frente a los niveles de violencia, pobreza, discriminación y exclusión, y en oposición al modelo neoliberal que revalorizaba el vínculo del individuo con el mercado (Alvarez, Dagnino y Escobar, 1998). Se estudiaron los modelos de ciudadanía social que impulsaban los movimientos populares (Dagnino, 1998; Paoli y da Silva Telles, 1998) y las políticas de identidad alrededor *del feminismo, la etnia y la raza* (Alvarez, 1998; Gomes da Cunha, 1998; Grueso, Rosero y Escobar, 1998; Schild, 1998; Stephen, 2005). Otras propuestas se orientaron a indagar el papel de los movimientos sociales en la articulación de procesos locales, nacionales y globales; en particular, estos trabajos se preguntaron por las tensiones similares producidas por el proceso de globalización, que se reelaboraron en contextos locales y configuraron respuestas colectivas de las poblaciones (Nash, 2005). En este sentido, se abordaron temas tales como la construcción de “sociedades civiles transnacionales” a partir de redes creadas por movimientos sociales y ONGs (Alvarez, 1998; Edelman, 2005; Lins Ribeiro, 1998), y la espacialidad de la política de los movimientos sociales, expresada a nivel transnacional y en procesos locales de

intereses que movilizaban a los individuos hacia una acción colectiva. Estudios detallados sobre estas polémicas se encuentran en Cohen (1985), Giménez (1994) y Munck (1995).

resistencia frente a la conversión de recursos como la tierra, el agua y el gas en mercancías (Albro, 2005; Doane, 2005; Nash, 1992, 2005a).

Más allá de los temas abordados, algunos autores sostienen que el principal aporte de la antropología al estudio de los movimientos sociales radica en un enfoque, a partir del cual se podría descentrar la mirada de la organización de la acción colectiva para restituir el campo político y social dentro del cual la movilización ocurre (Escobar, 1992; Burdick, 1998; Edelman, 2001). En el marco de este enfoque, considero que uno de los mayores aportes ha sido el trabajo desarrollado por el equipo coordinado por Lygia Sigaud sobre las ocupaciones de tierras en Brasil (Sigaud et al., 2006). Esta investigación procuró explicar por qué ocupar tierras y montar campamentos se constituyó en una forma legítima de anunciar conflictos sociales y demandar la intervención estatal en torno a la reforma agraria en Brasil (Sigaud, 2000, 2004). Para responder esta pregunta, se reconstruyó la trama social en la que se inscribían las ocupaciones en la región de Pernambuco, prestando atención a la interdependencia entre los cambios en la producción y las exportaciones de la caña de azúcar; el rol de los *patrones* de los ingenios y los administradores de usinas, que habían ejercido coerción sobre las relaciones sociales desde la implantación del sistema esclavista en el área; las estrategias, así como también la cooperación y el conflicto, del Movimiento Sin Tierra y los sindicatos rurales; las trayectorias sociales de quienes ocupaban tierras, y las acciones del Estado (Sigaud et al., 2006). Dentro de este esquema general, otras contribuciones se centraron en las ocupaciones como formas características de la acción colectiva en el Brasil contemporáneo (Carvalho Rosa, 2005), las modalidades de movilización de las familias que toman parte en las ocupaciones (Ernández Macedo, 2005), y la gestión cotidiana de las relaciones políticas y las sanciones disciplinarias hacia el interior de los campamentos (Rangel Loera, 2005).

El trabajo de tesis que he desarrollado se inscribe dentro de este enfoque antropológico. En él procuro restituir la trama de relaciones políticas y cotidianas en las que se inscribieron los piquetes, en tanto ocupaciones de espacios públicos, y las organizaciones de desocupados. No obstante, difiero con propuestas como las de Edelman (2001) y Escobar (1992), las cuales sostienen que el enfoque antropológico

debe aportar un nuevo impulso a las teorías sociológicas de los nuevos movimientos sociales y la acción colectiva. Considero que dicho enfoque no puede convertirse en complemento de las teorías sociológicas que, tal como lo señalé en el apartado anterior, conciben la acción colectiva como un *sistema* escindido de las prácticas y los sentidos de sujetos activos. En las claves epistemológicas de esas teorías, la experiencia cotidiana y la historicidad de los procesos políticos podrían reducirse a “factores” explicativos del *sistema de acción*. En contraposición, el enfoque adoptado hunde sus raíces en una tradición antropológica de estudios sobre el poder y la política, a la cual debe continuar aportando.

La tradición de estudios sobre el poder y la política a la que hago referencia se configuró a partir de las décadas del 60 y el 70 como respuesta a las etnografías de corte estructural-funcionalista que habían conformado la subdisciplina de la antropología política en el decenio de 1940⁹ (Gledhill, 2000; Vincent, 2002). El impulso de estas perspectivas se vinculó con el período de descolonización y la formación de nuevas naciones en el denominado “Tercer Mundo”. El núcleo de esta tradición está constituido por diversas aproximaciones para el abordaje tanto de contextos y experiencias locales de vida como de procesos de dominación y resistencia (Vincent, 2002; Gledhill, 2000).

Situación social, campo político y acción son conceptos que se han empleado desde fines de la década del 50 en estudios antropológicos de la política e indican el desplazamiento de intereses académicos desde la taxonomía, la estructura y la función de los sistemas políticos hacia los procesos, el conflicto y el cambio social (Gluckman, 2003; Barth, 1959; Swartz, Turner y Tuden, 1966; Lewellen, 1985). El supuesto compartido de esos enfoques era la visión del Estado como productor del orden social; de ese modo, consideraban que la sociedad civil en los países del “Tercer Mundo” se encontraba fragmentada debido a la influencia limitada del Estado

⁹ Dos supuestos articularon la definición de lo “político” en esos trabajos: por un lado, la influencia del pensamiento de Durkheim en la conceptualización del orden social; y por el otro, la noción de Weber de la política como la organización de la dirección de un agrupamiento político (el Estado moderno), cuya característica central residía en el uso legítimo de la fuerza física para mantener el orden en un territorio delimitado. De esta forma, se recortaron como temas de investigación los *sistemas políticos*, *las instituciones*, *los cargos de autoridad con capacidad de coerción*, *las normas*, *las reglas* y *los valores consensuados*, y se estableció que la función social de éstos no era otra que contribuir al

a escala local (Gledhill, 2000). Así, se dedicaron al estudio de las estructuras intersticiales, suplementarias y paralelas al sistema político formal, prestando especial atención a las relaciones de obligación recíproca, como la parentela, la amistad, los cuasi grupos, el liderazgo y el patronazgo (Barth, 1959; Lande, 1977; Mayer, 1980; Wolf, 1980). A pesar de las limitaciones de estas perspectivas –que han sido señaladas por una extensa literatura en antropología social: Alavi (1976), Asad (1992) y Gledhill (2000), entre otros– considero que han aportado en el sentido de proponer que la política no es sólo una cuestión que atañe al Estado sino que puede expresarse en una variedad de ámbitos y contextos locales. De algún modo, los resultados de esos trabajos pueden ser actualmente resituados para preguntarse hasta qué punto *la política local* ha sido la expresión de una forma de construcción de Estado y una modalidad de resistencia de las poblaciones (Das y Poole, 2004; Joseph y Nugent, 1994). Además, las preocupaciones que instalaron fueron redefinidas posteriormente en el vocabulario y los conceptos propuestos por Bourdieu (1990, 1991, 1996) sobre campos, habitus y estrategias, así como también en las reflexiones de Foucault (1976, 1992) acerca del ejercicio reticular del poder en la totalidad de la trama social.

Desde fines de los años 50, la resistencia a la dominación del orden colonial y a la expansión de las relaciones capitalistas ha sido otro tópico de indagación en antropología. Algunos antropólogos intentaron establecer si los cambios que ocurrían en las sociedades que eran su objeto de estudio estaban dando lugar a revoluciones sociales.¹⁰ Balandier (1975), por ejemplo, abogaba por una **“antropología de la contestación”** que pusiera especial atención al estudio de formas y lenguajes de la protesta en “sociedades tradicionales”, y se interesó por aquellas protestas que se mantenían en el interior del orden contra el cual expresaban una disidencia (*protest within*), es decir, aquellas que no llegaban a convertirse en revoluciones. Por esa misma época, Wolf (1971) se pronunciaba a favor de una ciencia social más radical

mantenimiento de la cohesión y el orden. Un trabajo ilustrativo de este enfoque es el de Fortes y Evans-Pritchard (1979).

¹⁰ La preocupación por el cambio es anterior a la década del 70; en ese sentido, pueden consultarse los trabajos de Gluckman (2003), quien sostenía que el equilibrio del sistema social era en sí mismo un problema que debía ser explicado. Para ampliar este punto también puede consultarse Frankenberg (1982).

que se ocupara del estudio de los procesos de "liberación nacional" y de temas tales como la espontaneidad, la conciencia, la coerción y la auténtica participación; el papel de los líderes revolucionarios en el aprendizaje y la invención de un orden nuevo; la institucionalización de las revoluciones; las posibilidades de transformación de los campesinos en sujetos revolucionarios, y los factores que limitaban las posibilidades de una revolución, como la relación patrón/cliente (Wolf, 1971).¹¹ Si bien el debate sobre patronazgo/clientelismo está actualmente perimido en antropología, me interesa detenerme sobre el concepto de **economía moral** introducido por Scott (1976), a fin de tomar posición en esa polémica. Este concepto fue inicialmente empleado por el historiador E. Thompson (1995) para llamar la atención sobre la manera en que los motines de subsistencia en Inglaterra durante el siglo XVIII se apoyaban en costumbres y derechos tradicionales, en el marco de la incipiente configuración de relaciones sociales capitalistas; en el caso de Scott, fue utilizado para comprender las raíces de la acción política campesina en el sudeste asiático. Scott propuso un abordaje fenomenológico de la explotación, que atendiera a la manera en que la ética de subsistencia y la búsqueda de seguridad primaria se integraban en una "economía moral" que proveía a los actores de estándares de justicia y equidad para evaluar las relaciones sociales. De ese modo, las relaciones asimétricas, de tipo patrón/cliente, podían ser vistas como generosas, legítimas y no explotadoras; sin embargo, en situaciones de un balance de subsistencia desfavorable se produciría un espacio para rebeliones abiertas. Estas acciones abiertas podrían ocurrir como no, porque bajo regímenes represivos era común que la resistencia se expresara de manera encubierta (Scott, 1976, 1985). Estudios contemporáneos utilizan este concepto para analizar temas variados, como la constitución de un movimiento campesino transnacional, que articula sus demandas en torno a las consignas de *comercio y precio justo* frente a los requerimientos de un mercado globalizado (Edelman, 2005a), o los argumentos esgrimidos por obreros de

¹¹ Un intenso debate se concentró sobre la política campesina y la funcionalidad de las relaciones patrón/cliente. Las posiciones en disputa pueden encontrarse en Alavi (1976), Gellner (1986), Silverman (1986) y Weingrod (1986). Una revisión crítica acerca del desarrollo de las perspectivas sobre el clientelismo en antropología social puede consultarse en Lazzari (1993).

extracción laborista para resistir reformas estatales neoliberales en países nórdicos (Vike, 1997).

Otros trabajos han analizado las formas que asumía la resistencia al colonialismo. En este marco se destaca la obra de Worsley (1980), quien estudió la conformación de movimientos milenaristas en el área de Melanesia, a los que consideraba formas significativas de acción política, en contraste con aquellos que interpretaban esos fenómenos como producto de la anomia y el "choque cultural". La visión evolutiva de la política fue una de las limitaciones de ese trabajo,¹² pero la descripción aguda de los cultos-cargo puso de relieve dimensiones que, con distintos énfasis y andamiajes conceptuales, han sido retomadas en estudios posteriores. De un modo similar a los estudios contemporáneos sobre "performance", Worsley mostró una serie de pasos repetitivos ligados al uso del cuerpo (gesticulaciones, exclamaciones, danzas, sensaciones en el estómago, sonidos ventrílocuos, etc.) que señalaban posesión y meditación como actos ritualizados del culto. Describió procesos de apropiación y resignificación de objetos de los europeos que funcionaban, según los contextos, como aspiraciones de los nativos o como objetos y símbolos de protesta. Analizó el lugar de la voluntad, las emociones y las estrategias en el desarrollo de prácticas del culto en relación con la trayectoria social de los participantes. Trabajó los códigos morales de estos movimientos y los efectos disciplinarios sobre la conducta de las personas; por ejemplo, la manera en que instaban a sus miembros a abandonar el robo y el adulterio, a observar el domingo, limpiar las aldeas, comer limpiamente y lavarse las manos. Investigaciones posteriores han abordado temas similares para explicar la resistencia al capitalismo; entre ellos, el estudio de Nash (1979) sobre los mineros del estaño en Bolivia mostró cómo la rebelión se alimentaba en ciclos rituales que fortalecían los vínculos primordiales con un pasado prehispánico, y cómo desde esas creencias ancestrales los sujetos se apropiaban y resignificaban ideologías marxistas internacionales. Otro

¹² Worsley consideraba que esos movimientos resolverían el problema de la dirección política para articular una ideología común impulsada por un partido revolucionario o se disolverían en la pasividad. Esta postura se desarrollaba en los círculos marxistas de esa época, donde se analizaba el fracaso de movimientos utópicos, como los religiosos, a lo largo de la historia y se veía en el socialismo el fundamento racional para la acción revolucionaria de los oprimidos. Los fundamentos de esta postura pueden consultarse en Hobsbawm (1983).

ejemplo es el estudio de Taussig (1993), quien se focalizó en los trabajadores de las plantaciones colombianas y también en los mineros del estaño de Bolivia para explicar que el diablo constituía un símbolo de la alienación experimentada por los campesinos al proletarizarse.

Otros estudios se detuvieron en el análisis de formas “encubiertas” de resistencia (Scott, 1985, 1990). Estas propuestas consideran que los grupos subordinados generan una transcripción oculta (*hidden transcripts*), a espaldas del dominador, como respuesta a situaciones de indignidad producidas por el ejercicio del poder. El supuesto que guía el trabajo de Scott –recuperado de la teoría de la reactancia en psicología social– es la existencia de un deseo humano de libertad y autonomía que, al verse amenazado, genera una reacción de oposición. A diferencia de la transcripción oculta, la pública se caracterizaría por la actuación de los subordinados de acuerdo con las expectativas de los poderosos; en tanto los dominantes sobreactúan la dominación, los subordinados disfrazan su resistencia bajo la forma de rumores, chismes, cuentos populares, canciones, gestos, el teatro, el hurto, los engaños y las fugas. Este conjunto de acciones fueron definidas como la “infra-política de los desvalidos”, con el propósito de señalar un ámbito discreto de conflicto político, distinto al de los espacios relativamente abiertos de las democracias liberales, las rebeliones o las protestas. La invisibilidad de estas acciones, según el autor, sería el resultado deliberado de decisiones tácticas de los desvalidos, que son conscientes del equilibrio desfavorable de poder.

Tanto los aportes de Scott (1985, 1990) como los de la escuela india de estudios subalternos (Guha, 1983) introdujeron preguntas relativas al papel de los *subalternos* o *subordinados* en la redefinición de estrategias de dominación. El énfasis en la acción de los sujetos, en sus experiencias y percepciones abrió nuevas líneas de trabajo que complejizaron los resultados de los estudios centrados en el sistema mundial y la economía política (Mintz, 1985; Wolf, 1993). Frente a propuestas sociológicas limitadas a la protesta pública, estos planteos han mostrado que el hecho de que en determinados contextos no se registren confrontaciones abiertas no implica la existencia de consenso ideológico respecto de las condiciones y relaciones de dominación (Grimberg, 2005). No obstante, se les ha cuestionado a

estas posiciones la distinción dicotómica entre subalternos y dominantes, la cual promueve una visión romántica de un "sujeto resistente unitario" (Abu-Lughod, 1990; Ortner, 1995; Gledhill, 2000). También se ha puesto en cuestión la existencia de un espacio autónomo de la subalternidad; algunos autores se han preguntado en qué medida esos espacios son limitados y configurados por un orden dominante (Roseberry, 1994), mientras que otros han enfatizado que la resistencia no puede ser vista en función de situaciones represivas sino en términos de los espacios y los sentidos de autonomía que se logren sostener (Grimberg, 2005).

Uno de los tópicos que ha generado mayor discusión en la literatura antropológica durante las últimas dos décadas ha sido la relación entre **resistencia/hegemonía**. El trabajo de Scott (1985, 1990) entiende la hegemonía como "consenso ideológico". En ese sentido, considera que no existe consenso en situaciones sociales de dominación, ya que los dominados, lejos de aceptar su situación, inician todo tipo de maneras sutiles de resistir, socavar y, en algunos casos, enfrentar esos mundos desiguales. El planteo de Scott se inscribe en los modos de recepción que ha tenido la obra de Antonio Gramsci en circuitos intelectuales de Estados Unidos durante la década del 80. En particular, los estudios de antropología en ese país han priorizado una interpretación de la hegemonía en clave "idealista" y "culturalista", atendiendo fundamentalmente al consenso de los subordinados frente a la situación de dominación (Kutz, 1996; Gledhill, 1996; Crehan, 2004).¹³ En este marco, uno de los aportes más interesantes ha sido el trabajo de Jean y John Comaroff (1991), quienes sostuvieron que la hegemonía no podía asumir todos los signos del mundo como propios, y por lo tanto, se preguntaron por qué algunos significados y prácticas culturales se transformaban en convencionales, mientras que otros se convertían en objeto de resistencia. En respuesta a ese interrogante, los autores afirmaron que la ideología y la hegemonía son formas mediante las cuales el poder se vincula con la cultura. El poder se expresa en forma

¹³ Este uso del concepto de hegemonía se vincularía, entre otras cosas, con los intentos de construir un proyecto intelectual basado en la escritura de una antropología histórica del colonialismo; la mediación de la obra del crítico literario R. Williams (1980) para el acercamiento a Gramsci; la adaptación de este concepto a marcos más tradicionales de preocupación por la cultura, y la redefinición de los enfoques de economía política en la versión de Wolf y Mintz (Pires do Rio Caldeira, 1989; Kutz, 1996; Crehan, 2004).

de agencia, o sea, en la capacidad de control que ejercen algunos hombres en contextos específicos, y en forma de vida cotidiana, es decir, como aquello que aparece como no cuestionado, lo que está más allá de la agencia humana, lo internalizado como convenciones y como valores. La primera forma de poder se correspondería con la ideología, definida como la capacidad para imponer visiones del mundo; la segunda, con la hegemonía, que sería lo dado, la forma del mundo heredada que no se cuestiona, el habitus, en el sentido de Bourdieu. La resistencia, entonces, sólo podría efectuarse por fuera de la hegemonía a partir de signos culturales articulados como ideologías.

En otras propuestas se sostiene que el concepto de hegemonía debe ser utilizado para comprender la lucha antes que el consentimiento (Roseberry, 1994). Se procura analizar cómo los subordinados deben adoptar formas y lenguajes de la dominación para que sus protestas sean escuchadas y registradas, y cómo, al mismo tiempo, detentan la capacidad para definir sobre qué ejes se plantea la disputa (Roseberry, 1994). En esta línea, diferentes aportes han mostrado cómo y desde qué marcos poblaciones campesinas acomodaban, resistían y reelaboraban propuestas estatales de reforma de tenencia de la tierra promovidas por estados revolucionarios, como el mexicano (Nugent y Alonso, 1994) o el boliviano (Lagos, 1997). En otros casos, se ha seguido la lucha por la hegemonía a partir de la transformación de rituales religiosos (Lagos, 1993) o por medio de procesos de apropiación de reformas educativas en contextos rurales (Rockwell, 1994, 2004).

Otras contribuciones han enfatizado que la categoría de hegemonía en Gramsci tiene un carácter holístico que no se reduce a dimensiones culturales e ideológicas (Gledhill, 1996; Kutz, 1996; Grimberg, 1997; Crehan, 2004). Algunos trabajos mostraron cómo esta categoría se nutrió de la influencia y la discusión que Gramsci mantuvo tanto con Benedetto Croce, acerca de aspectos ético/morales, como con versiones economicistas del marxismo (Grimberg, 1997). Producto de esas polémicas, la categoría de hegemonía incorporaría aspectos políticos, económicos e histórico-culturales, que no son considerados de manera independiente sino que cobran sentido en la noción de praxis (Grimberg, 1997). Se ha destacado también

que el concepto de hegemonía estuvo siempre ligado a contextos de disputa política; por ello, sus sentidos aluden a capacidades diferenciales para dirigir, para articular intereses divergentes en alianzas y para dar cuenta de equilibrios inestables que combinan coerción y consenso (Anderson, 1981; Kutz, 1996; Gledhill, 1996; Grimberg, 1997). Más allá de las diversas interpretaciones, la mayoría de los investigadores coinciden en que este concepto renovó las maneras de comprender las relaciones de poder. En este sentido, Grimberg, en su estudio sobre las prácticas de los trabajadores gráficos en Argentina en relación con la salud-enfermedad en el espacio social del trabajo, considera que esta categoría refiere a relaciones de poder activamente construidas, que articulan de manera tensa coerción y consenso, y destaca la interacción entre dominantes y subalternos, así como también los procesos de mutuas apropiaciones y resignificaciones (Grimberg, 1997, 2005).

El trabajo de Gramsci sobre la categoría de hegemonía se nutre también de sus reflexiones sobre la relación entre el Estado y la sociedad civil. Este tópico, por sí mismo relevante, ha sido retomado en los estudios antropológicos sobre América Latina que se concentraron en el problema de la construcción de Estados y la incorporación de las clases subalternas en esas formaciones (Joseph y Nugent, 1994; Falcón, 1994; Gledhill, 1998). Para Gramsci, el ejercicio de poder de los grupos dominantes no puede efectivizarse sin el consenso de los gobernados; por eso, su análisis se concentra en el proceso de direccionalidad política que produce formas de unidad dialéctica entre el consenso (basado en el aspecto ético-moral para ganar el apoyo de aquellos que resisten o para mantener el de aquellos que consienten) y la organización de la dominación; y en este proceso se destaca el papel "intelectual" de determinados agentes (Kutz, 1996; Soares, 2000). Desde su punto de vista, la sociedad civil se organiza al mismo tiempo como forma de resistencia a la represión del grupo dominante –constituyéndose como el lugar de asociación de los intereses contrarios a la orientación gubernamental– y como el espacio donde los grupos dominantes buscan vencer la resistencia de otros grupos sociales; de este modo, los partidos y las asociaciones se convierten en la trama privada del Estado (Gramsci, 1997; Soares, 2000). La *noción de Estado ampliado*, entonces, refiere al doble aspecto de las relaciones de poder; es decir, se define al

Estado como la sociedad política más la sociedad civil o, en otros términos, como *hegemonía revestida de coerción* (Gramsci, 1997).

Las preguntas de Gramsci sobre la relación entre el Estado y la sociedad civil, a mi modo de ver, son similares a las que décadas después iluminó Foucault (1991) con el concepto de **gubernamentalidad**. Ese concepto remite a una concepción amplia de gobierno, entendido como “la conducta de la conducta” (Dean, 1999), una forma de actividad que procura modelar, guiar o afectar la conducta de una o varias personas. Foucault concebía múltiples prácticas de gobierno: el gobierno de sí mismo, de una familia y del Estado; y se interesaba tanto en indagar las conexiones entre estas prácticas como en atender especialmente al gobierno del Estado, a fin de hacer aparecer un tipo de racionalidad que sería intrínseca al arte del gobierno. La categoría gubernamentalidad, entonces, define un tipo de racionalidad cuyo blanco es la **gestión de la población**, e incorpora un conjunto de instituciones, procedimientos, análisis, reflexiones, cálculos y tácticas que han permitido ejercer esta forma específica y muy compleja de poder, que tiene a la población como blanco, a la economía política como saber y a los dispositivos de seguridad como instrumentos técnicos (Foucault, 1991).

En síntesis, tanto la visión de hegemonía, en lo referente a la relación entre el Estado y la sociedad civil, como el concepto de gubernamentalidad se formularon en oposición y por fuera del modelo iusnaturalista. Si en este modelo el Estado se había transformado en una entidad con vida propia que corporeizaba la soberanía independientemente de la población (Asad, 2004), tanto Gramsci como Foucault recuperaron críticamente la tradición del renacimiento italiano, en particular la obra de Maquiavelo sobre el “arte de gobierno”, para analizar las articulaciones entre gobernantes y gobernados.

Partiendo de estos aportes teóricos, en este trabajo intento echar luz sobre los procesos políticos en los que se inscribieron las protestas (piquetes) y organizaciones de desocupados. Reconstruyo experiencias y modalidades históricas de organización política a fin de comprender la formación de un escenario de disputa, demanda y negociación en torno al problema de la desocupación. Al mismo

tiempo, examino procesos de intercambio y transacción que se configuraron en la relación entre la población y el Estado.

Desde un enfoque de hegemonía, sostengo que durante la década de los noventa, se configuró un escenario de disputa demanda y negociación permeado por tradiciones políticas y gremiales, descentrado de la de la fábrica y modelado por políticas estatales. En ese escenario, las ocupaciones de espacios públicos se tornaron una forma apropiada para reclamar compromisos del Estado sobre diferentes dimensiones de la vida. Las políticas estatales orientadas por principios neoliberales perfilaron prácticas y objetos de demanda, y generaron procesos transaccionales que extendieron la intervención estatal sobre diferentes áreas de la vida, al tiempo que redefinieron sentidos apelando a costumbres, tradiciones previas y experiencias cotidianas. En definitiva, procuro mostrar procesos que expresan la formación conjunta de modalidades de acción de los grupos subalternos y políticas estatales.

En particular, analizo la trama de relaciones políticas y cotidianas en la que se inscribieron las ocupaciones de ruta y las organizaciones de desocupados del distrito de La Matanza-Gran Buenos Aires. Para comprender esa trama reconstruyo de manera articulada las transformaciones sociales ocurridas en ese distrito durante la década del 90, las cambiantes alianzas políticas y gremiales, las experiencias de vida cotidiana, la reconfiguración de las modalidades y el sentido del trabajo, y las formas de gestión colectiva de los programas estatales ocupación transitoria.

REFLEXIONES METODOLÓGICAS

Los análisis y las interpretaciones de esta tesis se basan en datos provenientes de un trabajo de campo que inicié a fines del año 2000 pero que llevé a cabo de manera sistemática desde abril de 2002 hasta diciembre de 2005. Durante los dos primeros años (2000-2001), mi tarea se limitó a registrar *cortes de ruta, marchas* hacia Plaza de Mayo y la “1º Asamblea Nacional de Organizaciones Sociales, Territoriales y de Desocupados”. A partir de 2002, con el apoyo de una beca de la Universidad de Buenos Aires y, posteriormente, con otra del CONICET,

dispuse del tiempo necesario para seguir las actividades diarias que realizaban distintos grupos inscriptos en la FTV y la CCC.

Relaciones interpersonales me facilitaron el desplazamiento por diferentes barrios del distrito de La Matanza. Si bien registré actividades en siete de ellos, desarrollé un trabajo intensivo en tres: Santa Emilia, Tierra Nueva y San Alfonso. Esta selección obedeció a circunstancias azarosas que suelen ocurrir en intercambios diarios pero que me resultaron significativas desde el enfoque teórico-metodológico adoptado en la investigación. Un antiguo edificio escolar abandonado en el barrio Santa Emilia era el punto de convocatoria de la CCC, en tanto que la oficina de una cooperativa de consumo y vivienda del barrio El Campo se había transformado en la sede central de la FTV. Como ya anticipé, en ambos espacios se había delineado un recorrido estandarizado para todos aquellos interesados en conocer la "*experiencia piquetera*".

Sin embargo, el movimiento rutinario en ambas sedes escapaba a las capacidades de observación de una "visita" esporádica y ávida en escuchar el relato de los protagonistas de la "*lucha piquetera*". A la par de asambleas, reuniones y cursos de formación política, las tareas diarias se ordenaban en función de la *gestión colectiva* de políticas estatales como el reparto de mercaderías y la contraprestación laboral en programas de empleo transitorio. Decidí, entonces, iniciar un trabajo de campo intensivo en el barrio Santa Emilia debido a la buena recepción que tuvo mi presencia entre los *líderes* y *dirigentes* de la CCC.

En el caso de la FTV, concurrí en varias oportunidades a la sede de la cooperativa del barrio El Campo para observar asambleas, cursos de formación política o festivales para homenajear a delegaciones de movimientos sociales de otros países, como el arribo de una comitiva de Sudáfrica. En cambio, registré el movimiento cotidiano en los barrios Tierra Nueva y San Alfonso. En virtud de la intermediación de una antropóloga, que había estudiado las ocupaciones de tierra de la década del 80, logré entablar un vínculo directo con *referentes* de la FTV del barrio Tierra Nueva. En tanto que el trabajo de campo en San Alfonso fue posible por la curiosidad que había despertado en Sandra, una *referente* de ese barrio, mi presencia en las asambleas de la FTV.

En los intercambios con *dirigentes y referentes* barriales pude descubrir que el barrio representaba mucho más que una demarcación catastral, era un espacio de poder desde donde se consentían o se disputaban *modos de hacer política*. Era un sitio de “trabajo social y político” que se expresaba en cortes de ruta o manifestaciones públicas y que esperaba el reconocimiento de los “*políticos*” o los “funcionarios” que “*bajaban al barrio*”. “*Estar en el barrio*” también implicaba armarse de saberes específicos para cuestionar criterios impuestos por “técnicos” encargados de la implementación de políticas públicas, varias veces me confiaron: “*esos se equivocan porque tienen mucho estudio pero no caminan el barrio.*”

En mi caso “*estar en el barrio*” y “*caminar el barrio*” representaba una posibilidad para la construcción de datos desde el contexto global de las relaciones sociales en la vida cotidiana. Sin embargo, desde la óptica de los *dirigentes y referentes* eran criterios para definir cualidades y compromisos de las personas. Percibí, entonces, que esos parámetros de evaluación se imponían sobre mi propio trabajo, como consecuencia debía negociar continuamente ***mi ausencia antes que mi presencia***. Las ausencias temporarias obedecían a la dedicación puesta en otras fases del trabajo como la recopilación de documentos, el relevamiento hemerográfico, la sistematización escrita de resultados parciales, el cursado de seminarios de doctorado, el dictado de clases o la participación en congresos de la especialidad. Explicar las ausencias periódicas, viviendo en la misma provincia y en el mismo país, implicaba explicitar de modo recurrente las particularidades del quehacer antropológico y del proyecto que estaba llevando adelante.

A pesar de mis aflicciones, *estar allí* me permitió captar prácticas y sentidos heterogéneos a partir de la observación de rutinas diarias en espacios barriales y domésticos. La recuperación de puntos de vista divergentes y contradictorios contribuyó a relativizar las expresiones sistematizadas que pronunciaban los *líderes* de la FTV y la CCC frente a investigadores, en actos públicos y en situaciones de disputa política. Para comprender estos procesos de significación reconstruí contextos de interacción y trayectorias de vida. En este sentido, me basé en los aportes de Grimberg et al. (1998) que desde el concepto de modos de vida sugieren un enfoque de trayectorias para:

"(...) captar hitos significativos de la vida de un sujeto relacionados con áreas estratégicas de la práctica social. Cabe aclarar primero, que son significativos desde la perspectiva de esos sujetos; segundo que no es una 'historia de vida' porque intenta contener-relacionar pasado y presente desde la definición de problemas y los objetivos de estudio. " (Grimberg et al., 1998: 226)

A lo largo del trabajo, utilicé técnicas de investigación clásicas en antropología como la observación con y sin participación combinada con entrevistas abiertas y en profundidad. Los registros de observación incluyeron las tareas diarias en proyectos enmarcados en programas estatales de empleo, conversaciones y charlas espontáneas, reuniones de *dirigentes* y *referentes* barriales, asambleas, seminarios de formación política, cortes de ruta, actos, festivales y manifestaciones callejeras. Solamente pude tomar nota en las asambleas, en esa situación la escritura era una práctica común, incluso era frecuente que *referentes* o *dirigentes* cotejaran sus anotaciones con las mías. Sin embargo, esa práctica era más difícil de implementar en otros espacios de interacción, por ello me esmeraba en escuchar, retener y memorizar la textualidad de los diálogos o en recordar los detalles de las escenas presenciadas con el objetivo de reconstruirlas al final del día en el cuaderno de campo.

En el caso de los entrevistados, mantuve con cada uno de ellos vínculos permanentes durante los años de trabajo de campo también visité sus viviendas y con algunos compartí la dinámica diaria de la vida personal y familiar. Desde ese marco más amplio de interacción, el objetivo de las entrevistas consistió en sistematizar una serie de reflexiones que se expresaban de manera fragmentaria en las conversaciones cotidianas y, sobre todo, recuperar hitos significativos de esas trayectorias de vida. En total grabé cincuenta entrevistas y entregué el registro escrito de la desgrabación a cada uno de los entrevistados. Esa devolución se convirtió, a su vez, en material de observación, ya que era frecuente que las personas, especialmente las mujeres, irrumpieran en llanto cuando leían pasajes de su propia vida e intentaran compartir sus emociones con otros miembros del grupo y con algunos de sus familiares.

Otra fase del trabajo de investigación resultó ser la localización de fuentes secundarias. Recopilé y analicé resoluciones gubernamentales referidas a

programas de empleo, escritos e informes del Banco Mundial, censos de población y vivienda, libros y documentos sobre la historia del partido de La Matanza, semanarios de partidos políticos, discursos de dirigentes políticos, y materiales elaborados por la FTV y la CCC - boletines informativos, trabajos de investigación, presentación de proyectos para obtener subsidios, relatos históricos, etc.-. Además, relevé ediciones de periódicos de circulación nacional y local (La Matanza) para completar información sobre algunos hechos particulares.

La totalidad de la documentación recopilada y relevada está consignada en el apartado *fuentes consultadas*. Tomé esta decisión con el propósito de distinguir esos materiales de la bibliografía producida en ambientes universitarios o en institutos de investigación. Esas fuentes constituyeron, a diferencia de la bibliografía, un insumo clave, una materia prima que modelé desde el enfoque de investigación adoptado de manera conjunta con la evidencia obtenida en el trabajo de campo.

Finalmente, cambié el nombre de personas y barrios para conservar la confidencialidad. Sin embargo, por razones que serán apreciadas a lo largo de los capítulos, decidí conservar el nombre original de los líderes de ambas organizaciones: Luis D'Elía (FTV) y Juan Carlos Alderete (CCC), como también así de figuras públicas del ámbito local, provincial y nacional.

ESTRUCTURA DE LA TESIS

La tesis está organizada en seis capítulos que tienen como eje el análisis de la trama relacional en la que se inscribieron los piquetes y las organizaciones de desocupados de La Matanza.

En el capítulo primero, *El piquete: ocupación de espacios públicos y compromisos del Estado*, presento una descripción detallada de dos cortes de ruta con un doble objetivo, por un lado, mostrar la especificidad del piquete atendiendo a la trama de relaciones sociales en las que se inserta. Por otro, explicar por qué se transformó en una forma social orientada a generar compromisos del Estado en torno a la distribución de programas de empleo. Desarrollo una serie de relaciones que serán retomadas en profundidad en cada uno de los restantes capítulos para analizar

detalladamente los procesos de disputa, demanda y negociación modelados por políticas estatales y permeados por tradiciones de organización histórica y cotidiana, en los que se destacaron las ocupaciones de espacios públicos.

En el segundo capítulo, *La desocupación como problema social: La configuración de un espacio de disputa y negociación*, reconstruyo experiencias de ocupación de tierras, prácticas religiosas y tradiciones político-gremiales que contribuyeron a la conformación de un escenario de disputa, demanda y negociación en torno al problema de la desocupación. Analizo la manera en que las primeras movilizaciones se basaron en nociones legitimadoras que apelaban a modos normativos y estandarizados de intervención estatal sobre la pobreza. La propuesta general, entonces, consiste en descentrar la preocupación mayoritaria por el *sujeto de protesta* o el *actor colectivo* para indagar sobre las tramas relacionales que configuraron un espacio social de disputa y negociación referenciado en el Estado.

En el capítulo tercero, *Los planes como objeto de demanda*, intento explicar cómo los programas de empleo transitorio se convirtieron en objeto de demanda desplazando a las primeras iniciativas que reivindicaban el reparto del trabajo socialmente existente. Para ello analizo dos procesos interrelacionados: las modalidades de política social de la década de los noventa inspiradas en orientaciones mundiales propiciadas por Organismos Internacionales de Crédito, centralmente el Banco Mundial, y las iniciativas de sujetos sociales activos que transformaron a los componentes de esas propuestas en objeto de demanda y gestión colectiva.

En el capítulo cuarto, *Trayectorias de vida y relaciones barriales*, analizo las modalidades mediante las cuales los *planes* de empleo estatales y la participación en organizaciones de desocupados se constituyeron en una expectativa y en una norma para los sujetos. Describo diversos recorridos emprendidos para acceder a programas de empleo e inscribo los mismos en trayectorias sociales de vida y en tramas locales en las que *referentes* o *dirigentes barriales* asumieron un papel preponderante. En lugar de mostrar cómo la vida modela los sentidos de la protesta, muestro cómo el piquete y los programas de empleo se insertaron en trayectorias y

modos de vida. En términos generales se trata de iluminar la vida de los sujetos y sus tramas relacionales antes que la "acción colectiva".

En el capítulo quinto, *La gestión cotidiana de programas de empleo*, describo prácticas y modos de hacer cotidianos que se entretajan en función de la gestión de programas estatales, prestando especial atención a los deberes y obligaciones implicadas. Con este objetivo, reconstruyo las prácticas de acceso a este tipo de programas, el proceso de especialización en la función técnica y las modalidades de trabajo configuradas en torno a los *planes* de empleo. Propongo redefinir la mirada centrada exclusivamente en la formulación e implementación de políticas públicas para echar luz sobre la trama de relaciones que se genera en el encuentro cotidiano entre el Estado y la población.

En el capítulo sexto, *La Matanza Obrera y Piquetera: las imágenes del pasado en la trama política*, analizo el entramado del piquete y las organizaciones de desocupados en procesos históricos y políticos locales. En ese sentido, describo la especificidad del distrito de La Matanza a nivel social e histórico y en el marco del conurbano bonaerense, reconstruyo alineamientos políticos durante la década de los noventa y estrategias del gobierno municipal que favorecieron la inscripción del piquete en la dinámica de oposición entre el municipio y el gobierno nacional, y sigo la construcción de tradiciones selectivas en tanto iniciativas para conjurar los efectos de la transformación social de la década del 90.

En las conclusiones retomo elaboraciones y resultados parciales de cada capítulo para resituarlos en una propuesta de análisis antropológico de la política y el poder basada en la reconstrucción de procesos transaccionales y campos de fuerza como alternativa a los enfoques de la acción colectiva o el actor colectivo. En este sentido, sugiero profundizar sobre una serie de núcleos problemáticos vinculados con el análisis de los modos de relación entre los grupos subalternos y el Estado.

CAPÍTULO I

EL PIQUETE: OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y COMPROMISOS DEL ESTADO

El 20 de junio de 1996, cinco mil manifestantes bloquearon la ruta nacional 22 y la provincial 17 en los accesos a Cutral-Có y Plaza Huincul, en la provincia sureña de Neuquén. Ambas ciudades habían crecido desde 1918 vinculadas con la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales. El 24 de septiembre de 1992, el Congreso Nacional aprobó por ley la privatización de esa empresa; como consecuencia, se redujeron sensiblemente los puestos de trabajo: había 52.000 personas empleadas en la planta de Cutral-Có en 1991, y tras la privatización, sólo quedaron 13.500; en tanto, en Plaza Huincul, la cifra de trabajadores disminuyó de 4200 a 600 (Auyero, 2004). En ese marco, la cancelación de un contrato de instalación de una planta de fertilizantes en la región se convirtió en uno de los fundamentos para iniciar la protesta que mantuvo bloqueadas las rutas durante siete días.

Sobre la ruta se levantaron tiendas de palos y plásticos, y se formaron diez puestos-barricadas señalizados con neumáticos encendidos, denominados *piquetes*; alrededor de éstos se reunían manifestantes que usaban barbijos blancos para evitar los efectos nocivos del humo de las cubiertas.¹ La prensa gráfica se refirió a ellos con el término "*piqueteros*". Durante los siete días que se prolongó la medida, también confluieron allí trabajadores estatales, estudiantes, miembros de Organismos de Derechos Humanos y el Obispo de Neuquén, quien ofició una misa frente a la torre central de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

Fuerzas de la Gendarmería Nacional arribaron a la zona el 25 de junio por la noche y durante la madrugada del día 26 avanzaron con gases lacrimógenos tomando los primeros puestos-barricadas. La jueza que intervino se declaró incompetente en el asunto y el gobernador de la provincia de Neuquén, junto con los integrantes de su gabinete, se trasladó a la "zona de conflicto". El 27 de junio, las autoridades gubernamentales y los delegados de los manifestantes alcanzaron un

¹ Diario *Clarín*, 27/6/96.

acuerdo mediante el cual el gobierno provincial se comprometía a promulgar un decreto de emergencia ocupacional y social para la región, a reconectar en un plazo de 48 horas los servicios públicos a quienes los tenían suspendidos por falta de pago, a elaborar un plan de obras públicas y a repartir 650 cajas de alimentos. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación se comprometió a enviar 40.000 raciones de alimentos deshidratados, leche, harina y aceite.

Los bloqueos de ruta no constituían una novedad en la historia argentina;² sin embargo, los piquetes de Cutral-Có y Plaza Huincul, y posteriormente los que sucedieron en las localidades de Mosconi y Tartagal (provincia de Salta), y en el Ingenio Ledesma (provincia de Jujuy), se convirtieron en modelos que fueron retomados en otras regiones del país. En otros términos, el piquete se transformó en la forma apropiada para demandar la intervención del Estado sobre los problemas de “trabajo” o, más específicamente, sobre el problema de la “desocupación”.

Diversos trabajos académicos vieron en el piquete un indicador de la transformación de los *repertorios de acción colectiva* en Argentina (Auyero, 2002; Svampa y Pereyra, 2003, 2005; Schuster, 2005). Este enfoque contribuyó a revertir explicaciones mecanicistas que entendían la protesta social como reacción espontánea frente a la pobreza y el desempleo (Auyero, 2002). Para esta línea de investigación, los procesos estructurales no inciden de forma directa sobre la forma y el sentido de la “beligerancia popular”, sino que impactan en los intereses, las oportunidades y la organización colectiva. Prestando atención a las regularidades en la acción se ha propuesto una interpretación que coloca a los piquetes en el centro de un nuevo repertorio de acción colectiva vinculado a desocupados y empleados públicos, y que se distingue de la protesta del movimiento obrero centrada en la huelga (Farinetti, 1999; Auyero, 2002).

² En el año 1987, los trabajadores del Ingenio Las Palmas en la provincia del Chaco bloquearon la ruta en reclamo por el cierre de ese establecimiento. En el mes de septiembre de 1991, mineros de Sierra Grande (provincia de Río Negro) reclamaron ante la Casa Rosada por el cierre de Hipasam. Tres días después, las mujeres de los mineros bloquearon la ruta nacional 3, y lograron la reapertura de la mina y el pago de salarios atrasados; no obstante, la empresa se cerró un año después. Otro hecho con características similares fue el “Tractorazo”, en julio de 1993, impulsado por sectores del agro (Senen González y Boser, 1999).

Otros estudios sostienen que los cortes de ruta en las provincias de Neuquén, Salta y Jujuy representaron el punto inicial a partir del cual una nueva identidad –los piqueteros–, un nuevo formato de protesta –el corte de ruta–, una nueva modalidad organizativa –la asamblea– y un nuevo tipo de demanda –el trabajo– quedaron definitivamente asociados, originando una importante transformación en los repertorios de movilización de la sociedad argentina (Svampa y Pereyra, 2003, 2005; Svampa, 2005). También se afirmó que las ocupaciones ilegales de tierras (asentamientos), los cortes de ruta (piquetes), las revueltas populares para exigir la renuncia de autoridades provinciales o nacionales (estallidos), y el asalto de comercios en situaciones de crisis económicas agudas (saqueos) constituían los componentes de un nuevo repertorio de acción de las clases populares argentinas (Merklen, 2005). Esta transformación se explica conectando tres elementos: la exterioridad de los sectores populares respecto de las relaciones salariales clásicas, el anclaje territorial de estos grupos sociales y una nueva relación con el Estado, centrada en el conflicto por la distribución de ayuda social (Merklen, 2005).

Los trabajos sobre repertorios de acción colectiva recuperan la propuesta teórica del historiador Charles Tilly (2000). Esta propuesta, así como también la de Tarrow (1997), se concentra en el estudio de los cambios de repertorio en función de *tiempos largos*, retomando las ideas de la Escuela Historiográfica de Annales. El objetivo de ambos investigadores era mostrar que los incentivos para la acción colectiva se formaban en la interacción entre los grupos sociales y el sistema político. Se interesaron, entonces, por la variación de los incentivos en el marco de la “Gran Transformación” que tuvo lugar en Europa entre los siglos XVII y XIX.³ En otras palabras, analizaron los cambios de los repertorios de acción colectiva en la transición entre el modo de producción feudal y el capitalista, prestando especial atención a la influencia de la prensa escrita, las asociaciones y la alfabetización

³ Tilly considera que se produjo un pasaje desde un repertorio **parroquial** (orientado a objetivos y asuntos locales antes que nacionales), **particular** (con formato variable de situación en situación, de grupo en grupo, de tema en tema) y **bifurcado** (acción directa en torno a objetivos locales y pedidos de intervención de autoridades establecidas –curas, terratenientes, funcionarios– en lo que concierne a asuntos nacionales) hacia otro **cosmopolita** (que cubría un amplio rango de objetivos y asuntos, incluyendo asuntos nacionales), **modular** (porque se utilizaba el mismo formato para una amplia gama de asuntos) y **autónomo** (porque sus participantes se dirigían al objeto de sus reclamos en su propio nombre, a través de interlocutores de su mismo rango) que se consolidó en el siglo XIX.

(Tarrow, 1997). El resultado de esos análisis, sobre todo por la adopción de un enfoque temporal de larga duración, tendió a enfatizar la homogeneidad en las formas de acción colectiva, tomando como criterio la comparación entre una época y otra. Como consecuencia, los estudios argentinos que se apoyaron en este marco teórico, aunque trabajaron con una escala de tiempo corto, sobredimensionaron la homogeneidad del repertorio de acción colectiva en el que se inscribe el piquete en comparación con las protestas del movimiento obrero.

En este capítulo, propongo desplazar la mirada que concibe al piquete como elemento de un repertorio de acción colectiva homogéneo frente a la movilización del movimiento obrero, para iluminar el cuadro de relaciones sociales que hicieron de él una forma apropiada de establecer vínculos con el Estado. Con el propósito de reconstruir su forma y la trama de relaciones sociales e históricas en las que se inscribe, describo los piquetes de La Matanza. El objetivo que persigo es doble: por un lado, mostrar la especificidad del piquete en relación con otras formas de acción colectiva, atendiendo a la trama de relaciones sociales en las que se inserta; y por otro, comenzar a explicar por qué se constituyó en una forma óptima para anunciar un conflicto social y producir compromisos del Estado en torno a la distribución de programas de empleo.

EL PIQUETE EN LA MATANZA

Entre los años 2000 y 2001, la FTV y la CCC organizaron piquetes sobre un tramo de la ruta nacional 3, a 21 kilómetros del centro de Buenos Aires, que se distinguieron de otros por su duración: seis días en noviembre de 2000 y dieciocho días en mayo de 2001. Ambas acciones se incorporaron en los recuerdos de sus protagonistas como el "*corte de los seis días*" o el "*corte de los dieciocho días*"; este último también es evocado como el "*corte histórico de Matanza*". De acuerdo con mis registros de campo, más allá de las innovaciones que se produjeron entre uno y otro piquete, ambos presentaron una serie de elementos comunes.

El inicio de un piquete o el momento de “*instalación*” en la ruta era un acto ritualizado. He observado cómo mujeres, varones, ancianos, jóvenes y niños marchaban a pie por diferentes calles y confluían en el kilómetro elegido previamente para erigir el piquete. Los manifestantes vestían chalecos y sombreros, y enarbolaban banderas con las siglas de las organizaciones a las cuales pertenecían. Una vez que todos se reunían en el punto seleccionado, se entonaba el himno nacional argentino, se vivaban consignas y los organizadores pronunciaban las demandas al Estado. Finalizado ese acto, se montaban carpas –estructuras hechas de palos, nailon y lonas– bajo las cuales permanecían los asistentes por el tiempo en que se extendía el piquete.

En su organización espacial, el piquete cubría aproximadamente seiscientos metros a lo largo de la ruta. Los límites se señalaban con hileras de neumáticos encendidos, custodiadas por grupos denominados *seguridad* por la FTV o *autodefensa* por la CCC. Para quienes estaban fuera del piquete, estos límites expresaban que los vehículos no podían circular por ese tramo de la ruta; no obstante, se permitía el paso de ambulancias, cortejos fúnebres y transeúntes. Se monitoreaba la marcha de los transeúntes para detectar posibles “infiltrados” que, se suponía, pondrían en peligro la seguridad del piquete. Dentro de esos límites, se ordenaban las carpas en hileras; cada una exhibía la bandera con las siglas de la organización en la cual se inscribía y el nombre del barrio al que pertenecía. Por lo general, sobre una calzada se montaban las carpas de la CCC y sobre la otra, las de la FTV. También se distinguían una carpa sanitaria atendida por médicos, enfermeras y agentes de salud del barrio Santa Emilia, y otras dos que enarbolaban las banderas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE, de ahora en adelante) y del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA, de ahora en adelante).

La zona del piquete se elegía con antelación y sumo cuidado para asegurar la provisión de agua potable y el acceso a sanitarios. En noviembre de 2000 se montó sobre un tramo de la ruta 3, próximo a una gasolinera, una estación ferroviaria y un local sindical de ATE, mientras que en mayo de 2001 se erigió en las adyacencias del Hospital Diego Paroissien. Se seleccionaban lugares que se encontraban

distantes de supermercados o comercios con el propósito de enfatizar la diferencia del piquete respecto de “los saqueos”:

“Nosotros no queríamos que esto lo tomaran como un corte más, donde viene una manga de vándalos a saquear todos los negocios.” (Lara, 43 años, dirigente gremial de ATE, ex concejal municipal por el Frepaso).

Los grupos se organizaban en torno a la figura de dirigentes locales que en la FTV se denominaban “*referentes barriales*” y en la CCC, “*dirigentes de barrio*”. Estos dirigentes se encargaban de coordinar la vida dentro de las carpas y eran responsables de organizar la “participación” de quienes formaban parte de su grupo. Los términos “*relevo*” y “*reemplazo*” indicaban dos modalidades de organizar la “participación”. El primero hacía referencia a un sistema de turnos; por lo general, mujeres, niños y ancianos permanecían en la carpa durante el día y eran relevados por los varones durante la noche; el segundo indicaba cómo se organizaba la participación en el marco de relaciones familiares o de amistad, ya que una persona registrada en el listado de un dirigente podía ausentarse del piquete, pero debía dejar en su lugar a otra –un familiar cercano o un amigo– para demostrar que seguía participando de la medida. En definitiva, la cantidad de personas en las carpas indicaba la capacidad de movilización de los diferentes barrios y, como veremos, se trataba de un indicador relevante para la reasignación de vacantes en programas de empleo. En este sentido, las organizaciones “*levantan listado*”; es decir, monitoreaban la cantidad de personas presentes en el piquete por medio del control de la asistencia en la carpas.

Para sostener el piquete en el tiempo se requería de la especialización y coordinación de tareas. Los líderes de la CCC y la FTV, junto a quienes los secundaban, mantenían negociaciones con funcionarios estatales y difundían el conflicto en los medios masivos de comunicación, en el Parlamento Nacional y en universidades. Otros se encargaban del abastecimiento y la distribución de alimentos, agua mineral y pañales, que se obtenían como donaciones de sindicatos, partidos políticos, centros de estudiantes y comercios mayoristas. Algunos coordinaban las tareas de limpieza y controlaban el uso correcto de los sanitarios (se

procuraba evitar la sustracción de bombitas de luz, grifería u otros objetos de los locales sindicales y del edificio hospitalario). Médicos, enfermeras y agentes comunitarios de salud desarrollaban actividades en una carpa sanitaria y atendían, según ellos, *típicos* casos de un *piquete*, como *hipertensión, insolación y deshidratación*. Las tareas sanitarias también eran llevadas adelante por afiliados de ATE, dado que este gremio, en el caso de La Matanza, agrupa sobre todo a auxiliares escolares y al personal de salud del hospital zonal. Finalmente, los delegados del gremio docente (SUTEBA) organizaban actividades con niños, tales como jornadas de escritura, dibujos y juegos, con el propósito de demostrar que “en el piquete se aprendía”.

Se prohibían la ingesta de alcohol, el consumo de drogas y el robo. Las regulaciones se expresaban en dispositivos de control a cargo de los dirigentes barriales y de los grupos de *seguridad* o *autodefensa*. Las sanciones para quienes quebraban esas normas eran variables; en algunos casos, no sin conflicto, se botaban las sustancias, sobre todo bebidas alcohólicas, y se conversaba con los “acusados” para disuadirlos de su actitud; en otros, se los excluía del piquete.

Como surge de los relatos y las charlas con los participantes, el piquete resultaba una experiencia contradictoria; por un lado, se asociaba con el *riesgo* y el *sacrificio*, y por otro, con la *solidaridad* y la *alegría*. El riesgo estaba representado por la probabilidad del “*daño físico*”. Este temor se acentuaba entre aquellos que cumplían la función de *seguridad* o *autodefensa*. Era común escuchar relatos acerca de incidentes en los límites del piquete:

“Hay algunos que toman gilada, salen a guardar y después se meten en el piquete para esconderse; entonces, los sacaban del corte, y a uno le dieron un palo, pero después volvió con una púa; entonces se armó medio un lío ahí.” (Quique, 42 años, integrante de la Agrupación Felipe Vallese-Frente Grande-).

De ese modo, quienes debían cumplir funciones de seguridad muchas veces se rehusaban a realizar esa tarea o, en todo caso, a utilizar palos:

“Yo llegaba a mi casa y me debatía, me debatía, me debatía... Y hacíamos corte, movimientos, todo. Conocí compañeros que se desmayaban; el temor de no volver a

la casa, y en el caso mío, el temor de yo hacerle daño a uno, o del otro hacerme daño a mí... no sabés la tristeza que tenía.” (Rojas, 49 años, integrante de la autodefensa de la CCC, barrio Altavista).

El riesgo también se asociaba con acciones que pudieran escapar al control de los grupos de *seguridad* o *autodefensa*, como *infiltraciones* y *sabotajes*. Integrantes de la CCC del barrio Santa Emilia frecuentemente rememoraban un incidente, al que definieron como *sabotaje*, que consistió en la introducción de *soda cáustica* en el piquete a través de una donación de alimentos y que había provocado quemaduras en aquellas personas que confundieron esa sustancia con sal:

“En el barrio Sana Emilia nos pusieron soda cáustica, y las compañeras, pensando que era sal, le echaron a la olla; era una olla así, grandísima, porque éramos el barrio más grande. Al terminar de echarla, pensando que era sal, una de las compañeras ve que se hace como una cosa así, que hierve, pero en el medio de lo que hacía, el fuego como que no se notó mucho, pero igual dijo: ‘Voy a probar cómo está de sal’. Cuando prueba, era una cosa que le quemó toda la boca, le salieron llagas, le lastimó todo. Llegaban a comer los compañeros eso y podría haber sido un desastre. Eso había llegado como donación, como que era sal; fue una cosa muy jodida la que vivimos los dieciocho días.” (Adelina, 45 años, integrante de la Mesa Ejecutiva de la CCC)

El *sacrificio* se asociaba con la permanencia prolongada en la ruta y con la exposición al sol, a la lluvia, al viento y al frío para lograr ingresar en el *plan* o *defender el plan*:

“Pasamos en la ruta los dieciocho días de viento, lluvia, agua; no teníamos nada, teníamos dos o tres pedacitos de nailon” (Chavez, 55 años, integrante de la CCC, barrio Altavista).

Para algunos manifestantes, ese *sacrificio* se expresaba en enfermedades:

“Yo tengo alergia, pero por el corte de los dieciocho días tuve dos veces neumonía, por el frío y la lluvia que pasamos” (Marcela, 29 años, integrante de la FTV, barrio San Alfonso).

Al mismo tiempo, el piquete se experimentaba como una instancia *solidaria* que se definía con el término “compartir”: en el piquete se “compartían” la comida, las

actividades, el espacio y el propio miedo. Desde el palco oficial –montado sobre una caja de camión en uno de los ingresos al piquete– se acentuaban esas relaciones de cooperación; por ejemplo, se anunciaba:

“Al barrio X de la CCC le sobró leche; los que quieran pueden pasar a buscar la leche por la carpa del barrio (...). Se informa que al Sr. X del barrio X de la FTV lo trasladamos al hospital y quedó en observación”.

Otro aspecto que se resaltaba era el carácter festivo del piquete, haciendo referencia a concursos de baile, juegos grupales (fútbol, truco, etc.) y recitales de bandas musicales que se acercaban a la ruta para expresar su adhesión a los *piqueteros*.

El piquete concluía o se *“levantaba”* cuando se abría una instancia de negociación con los funcionarios estatales: *“Pasamos día y noche, pero logramos que los funcionarios bajen a la ruta”*, decían. En verdad, ningún funcionario estatal implicado en las negociaciones sobre las demandas del piquete estuvo en la ruta, porque la firma de las actas-acuerdo en las que se establecían los “compromisos” de las partes se celebraron en otros lugares; en un caso, en la sede del obispado de La Matanza, y en el otro, en el edificio municipal. De todas formas, se intentaba expresar con esa frase un “acto de lograr” en el marco de correlaciones de fuerzas específicas, ya que los pronunciamientos iniciales de ministros y autoridades nacionales enfatizaban que la condición para iniciar el diálogo era el levantamiento del corte –que *“se levante totalmente el corte”*–, mientras que los manifestantes contraproponían desplazarlo hacia las banquinas de la ruta.⁴

Tras la firma de los acuerdos, los líderes de la CCC y la FTV retornaban al piquete y desde el palco oficial leían las propuestas formuladas por los funcionarios estatales para que se sometieran a votación; en los dos cortes de ruta, la mayoría de los manifestantes alzó sus manos en señal de voto afirmativo. Después de esa instancia se pronunciaba la frase: *“Se aprobó por unanimidad”*, y estallaban aplausos, llantos y abrazos. Ese momento indicaba que comenzaba el final del piquete: se desmontaban o *“levantaban”* las carpas, se desplazaban las hileras de

⁴ Diario *Clarín*, 12/5/01.

neumáticos para que volviera a circular el tránsito, y los grupos se encolumnaban para emprender el regreso a los diferentes barrios. Filas de caminantes, micros, camionetas, autos y bicicletas cargando pertrechos se alejaban coreando consignas tales como: *“Olé, olé, olé, olé, como en Matanza y en Tartagal, la esperanza es la lucha popular”*.

Una mirada global permite establecer que el piquete contiene actos ritualizados que indican su comienzo y su final, categorías sociales para definir modos de participación, técnicas de organización del espacio y las actividades, normas y prohibiciones, y terminologías para definir la experiencia de los sujetos. En virtud de ello, sostengo que el piquete constituye una forma social que anuncia un conflicto y produce vínculos con el Estado.

Recupero la idea tal como fue empleada por estudios antropológicos recientes sobre las ocupaciones de tierras en Brasil (Sigaud, 2000, 2006; Carvalho Rosa, 2005). Originariamente, esta categoría fue formulada por Simmel con el objetivo de redefinir la dicotomía individuo/sociedad. Lo interesante de ella es que expresa una visión dinámica que intenta explicar cómo las relaciones se convierten en formas y cómo la forma constituye futuras relaciones (Simmel, 2002 [1908]). En definitiva, en el caso que estoy abordando, se trata de restituir, a través de la descripción de la forma-piquete, las relaciones sociales en las que dicha forma se entretiene y que, al mismo tiempo, son expresadas por ella.

En tanto forma social, el piquete adquiere su especificidad en comparación con otras. Para los organizadores, se asemeja a la forma del proceso de ocupación de tierras y formación de asentamientos que tuvo lugar en La Matanza durante la década del 80.⁵ Incluso algunos dirigentes bautizaron a los piquetes con el nombre *“Asentamiento Germán Abdala”*, en homenaje a un sindicalista fallecido.⁶ En varias

⁵ En el capítulo II analizo ese proceso. De todas maneras, un estudio pormenorizado sobre las ocupaciones de tierras y formaciones de asentamientos en La Matanza puede consultarse en Merklen (1991).

⁶ Germán Abdala murió el 13 de julio de 1993, cuando tenía 38 años de edad, a causa de un cáncer localizado en la base de su columna vertebral, que durante años lo había obligado a movilizarse en silla de ruedas. Fue pintor de autos en la Secretaría de Minería de la Nación y en esa dependencia fue electo delegado, posteriormente, junto con Víctor De Gennaro formaron una agrupación sindical que ganó la conducción de ATE. En la década de los setenta, había iniciado su militancia en el peronismo y durante la última dictadura militar participó activamente en Organismos de Derechos Humanos. Integró la nómina de diputados nacionales en la lista que llevó como candidato a presidente

conversaciones y entrevistas que mantuve con ellos me preguntaron si yo había estado en una “toma de tierras”. Ante mi negativa, respondieron: “*Un piquete es como una ocupación de tierras*”, y me señalaron sus aspectos comunes:

“La gente llega con lo poco que tiene, se instala en los terrenos, levanta una carpa de lona y nailon, o un ranchito de cartón, y si se va, tiene que dejar a algún amigo o pariente para que no le saquen el lugar.” (Selva, 36 años, integrante de una Comunidad Eclesial de Base y de la FTV).

Más allá de las diferencias y semejanzas, me interesa remarcar que el modelo de la ocupación de tierras se reactualizó en el piquete tanto a partir de la trayectoria de los dirigentes de la FTV y la CCC como de un gran número de personas que provenían de los asentamientos formados durante los años 80. En este marco, considero que el piquete no constituye simplemente un **bloqueo** de ruta sino una **ocupación** de la ruta, cuya base es el modelo de ocupación de tierras. Como se verá en el siguiente capítulo, los protagonistas de los piquetes no sólo han ocupado tierras y rutas sino también otros espacios públicos, como plazas y ministerios.

Con el mismo énfasis con que se asimila la forma del piquete a la ocupación de tierras, se procura diferenciarla de otra forma social: los “saqueos a comercios”.⁷ Como señale anteriormente, los piquetes se erigieron sobre tramos de la ruta distantes de hipermercados o comercios mayoristas, y los dirigentes mantenían un diálogo asiduo con comerciantes y vecinos de la zona aledaña para mostrarles que no eran “saqueadores”:

“Yo hablé con los comerciantes. Había gente que primero nos puteaba porque se les llenaba la ropa de humo; bueno, todas esas cosas, el hollín, qué sé yo... Es cierto, pero después yo hablé con el carnicero, con el señor de la verdulería, con Chinchulandia; hablé con todos para este lado. Después del segundo día tenían la

a Carlos Menem en el año 1989, pero junto con otros siete legisladores peronistas conformaron un grupo (“el Grupo de los Ocho”) para oponerse a las medidas neoliberales adoptadas por el gobierno, como la privatización de los ferrocarriles. Este grupo se distanció del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, y Abdala protagonizó intensos debates públicos contra el neoliberalismo entre 1990 y 1992.

⁷ Un estudio sobre la percepción y las experiencias de los saqueos en el Gran Buenos Aires es el de Neufeld y Cravino (2001).

persiana abierta." (Lara, 43 años, dirigente gremial de ATE, ex concejal municipal por el Frepaso).

Una vez finalizados los "piquetes", he presenciado el envío de cartas de agradecimiento y disculpas a comerciantes de la zona y al personal de salud del Hospital Diego Paroissien, que había tenido que reforzar las guardias de atención. Refiriéndose a esta práctica, me comentaban:

"Esta semana ya parten todos los agradecimientos y las disculpas por si ocurrió alguna cosa y nosotros lo hayamos desconocido, que te digo que hablé con la gente de la departamental y me dijeron que no ocurrió nada, nada que ellos tuvieran que haber actuado como saqueo, como asalto; porque se corrió mucho la bolilla de que cobraban peaje para pasar y la policía lo desmintió, porque de hecho estaban muy cerca nuestro." (Lara, 43 años, dirigente gremial de ATE, ex concejal municipal por el Frepaso).

En el marco de los intentos por diferenciar al piquete de otras formas de acción, cobran nuevos sentidos las prácticas disciplinarias, ya que éstas tenían por objetivo proyectar una imagen de "tranquilidad" y "orden" hacia los "vecinos", en contraste con las imágenes de "violencia" y "caos" asociadas con los "saqueos". De todas maneras, esas regulaciones no eran privativas del piquete; también se ejercieron en cuatro movilizaciones en las que los manifestantes recorrieron a pie la distancia que separaba a La Matanza del centro político de la ciudad de Buenos Aires:

"Yo con un grupo de compañeros estuvimos con dirigentes del Movimiento Sin Tierra. Estuve en una marcha donde habría aproximadamente 30.000 personas. Y allá marchan en fila india, uno atrás del otro, marcando distancia. Y yo decía: '¡Qué bárbaro!, ¡qué bárbaro!'... qué organización, qué colores... y todos consignas... Veías criaturas con tres años que iban con una cruz en la mano y cantando consignas. No veías lo que ves acá, todo el cachivacherío: fumando porro, tomando alcohol... No, eso no; ahí iban con consignas claras. Les preguntaba a mis compañeros: '¿Alguna vez llegaremos a eso?'. No hemos llegado, no hemos llegado. Es furor para nosotros como organización; de hecho, si en la marcha encontramos a alguno tomando alcohol, se lo sacamos; si hay alguno que quiere fumarse un porro, no es el espacio; no es el espacio para ir armados. Tenemos consignas, propósitos claros, y les decimos que cada paso que hacés marca un propósito. Yo esto lo hablo mucho con

los compañeros. Digo: 'No sólo expresa nuestro propósito el compañero que habla en el escenario, sino que expresa nuestro propósito cada uno de nosotros'; cada paso marca un propósito; ese sacrificio de caminar treinta, cuarenta kilómetros tiene que tener un propósito, no tiene que ser en vano. Entonces no hay espacio para el borracho, para el falopero, para el que va a robar. Todo eso lo descartamos; eso lo hemos conseguido, pero no caminamos en fila india" (Marcelito, 40 años, miembro de la Secretaría de Organización de la FTV)

LA TRAMA SOCIAL DEL PIQUETE

La apropiación de la forma-piquete en La Matanza

Los integrantes de la FTV reconocían haber aprendido los secretos de un "piquete" a partir de la experiencia previa de la CCC:

"Mirá, la CCC venía teniendo experiencia de corte de ruta, nosotros no; es más, una vez intentamos hacer uno y como la cosa venía pesada, sólo marchamos hasta el Sagrado Corazón." (José, 46 años, ex seminarista salesiano, coordinador de la escuela de formación política de la FTV).

En efecto, a lo largo de la década del 90, algunos de los barrios que luego se incorporaron a la CCC habían bloqueado la ruta nacional 3 para reivindicar la titularidad de las tierras ocupadas o para "apoyar" a los piqueteros de la provincia Salta, que habían sido desalojados de la ruta 34 por la Gendarmería. Sin embargo, esos cortes se habían mantenido por pocas horas, sin llegar a implicar el conjunto de elementos que, como mostré en el apartado anterior, definen a un piquete:

"No me acuerdo muy bien, pero por el tema de las tierras fue el primer corte que hicimos, que éramos poquitos... Ah, sí, ya me acuerdo: fue para que se pronunciara el Concejo Deliberante sobre las tierras. Pero eran cortes muy lights." (Ramón, 58 años, miembro de la Junta Vecinal 7 de Mayo del barrio Santa Emilia, integrante de la CCC).

En términos generales, la CCC de La Matanza se apropió de la "tecnología" del piquete en un marco más amplio de relaciones políticas y sindicales. Esta organización, conformada en 1994, se define como una corriente político-gremial de

alcance nacional; así, los dirigentes de La Matanza mantuvieron contactos asiduos con representantes de las provincias de Salta y Jujuy, y éstos fueron los encargados de transmitir, en diálogos informales o en plenarios nacionales, las principales técnicas empleadas en los piquetes del norte argentino. Además, la CCC se encuentra vinculada con un partido político de orientación maoísta que, en virtud de su caracterización del capitalismo argentino, dedicó gran parte de sus intervenciones a consolidar “frentes políticos” en áreas rurales. En relación con esto último, los dirigentes de la CCC de La Matanza refieren haberse inspirado en la experiencia de los trabajadores del Ingenio Las Palmas, de la provincia del Chaco, quienes bloquearon rutas en el año 1987 por el cierre de ese centro productivo:

“Nosotros tomamos como experiencia, aprendimos muchos de ellos, que los primeros cortes de movimiento obrero de acá fue del Ingenio Las Palmas, en el 87; fueron los primeros cortes prolongados. Entonces nosotros aprendimos mucho de ellos. Pero lo que pasa que en el primer corte que nosotros quisimos hacer, de quedamos un tiempo largo, no escuchamos a ellos. Decíamos: ‘No, pero es otra provincia’. Lo de ellos era más difícil que lo nuestro porque donde ellos cortaban era monte, no era que tenían barrios, casas donde esconderte, donde correr... Pero después aprendimos” (Juan Carlos, 53 años, coordinador nacional de los desocupados de la CCC)

Las experiencias del Ingenio Las Palmas y de los piquetes de las provincias de Salta y Jujuy actuaron como referencias generales para la organización de “cortes prolongados” en La Matanza. A partir de 1997, esas técnicas se pusieron en práctica y resultaron parcialmente modificadas o resignificadas:

“Como desocupados, cortamos, fuimos con una cabeza y volvimos con la otra. Al corte fuimos creyendo que iban a bajar los funcionarios, a quedamos: ‘Eh, nos vamos a quedar, eh’... Estuvimos cuarenta y ocho horas, los ojos así de no dormir, del humo; pero después no sé qué era, si era un mundial o un partido que jugaban Argentina y Uruguay... a eso no le dimos bola. Pero después aprendimos todo; que había que tener un televisor cerca... Nos habíamos quedado unos cincuenta, y aparecieron esos cascos, la cana... Hicimos que tiramos algunas piedras, pero nos sacaron con soplar. Ahí aprendimos de cómo hay que hacer los cortes prolongados: relevos para descansar y todas esas cosas” (Juan Carlos, 53 años, coordinador nacional de los desocupados de la CCC)

“Yo me acuerdo que jugaba el mundial juvenil. Ahí estaba el hollín de los neumáticos, y como yo, viste que tengo este problema de los pulmones, no me sentía muy bien, me vine un rato a mi casa y de paso me quedé a mirar el partido. Cuando volví, nos habían sacado de la calle sólo con tirar cohetes” (Ramón, 58 años, miembro de la Junta Vecinal 7 de Mayo del barrio Santa Emilia, integrante de la CCC).

La CCC procuró impulsar cortes de ruta prolongados en La Matanza con el objetivo de *“hacer bajar a los funcionarios”* cuando demandaba la incorporación de los primeros setenta beneficiarios en un programa de empleo de la órbita de la provincia de Buenos Aires. Si bien en el capítulo siguiente analizo esa acción, me interesa señalar aquí que su propósito era anunciar la ruptura de acuerdos en torno a programas de empleo e instar a la intervención directa y personalizada de funcionarios estatales. Esos primeros cortes de ruta, que duraron como máximo cuarenta y ocho horas, resultaron ser, entre otras cosas, ensayos para ir precisando y redefiniendo algunos elementos de la forma del piquete, tales como la organización de un sistema de relevo y la intensificación en el entrenamiento de la *“autodefensa”*:

“Al principio, cuando nosotros preparábamos palos para salir, había una resistencia porque no querían la violencia, eran muy pacifistas; entonces se armaban discusiones sobre lo que había que tener para defenderse. Después, ya el palo es como que está incorporado; si no tenés el palo, es como andar desnudo” (Ramón, 58 años, miembro de la Junta Vecinal 7 de Mayo del barrio Santa Emilia, integrante de la CCC).

En síntesis, la CCC se apropió de la forma del piquete desde marcos de relaciones políticas y sindicales, y procuró adaptarla al distrito de La Matanza en varias ocasiones desde mediados de la década del 90. Desde las trayectorias sociales de varios de los integrantes de la CCC y la FTV de La Matanza, la forma del piquete se resignificó apelando a prácticas históricas enmarcadas en los procesos de ocupación de tierras que tuvieron lugar en el distrito durante los años 80. Para entender el curso de esta apropiación, resulta pertinente un aspecto de la propuesta de Tilly (2000) que define los repertorios de acción tomando como referencia los repertorios teatrales para enfatizar la combinación entre libreto histórico e improvisación, y para apuntar, como hemos visto aquí, la manera en que los sujetos innovan, aprenden y construyen el propio sentido de la acción.

Si bien la forma del piquete fue apropiada progresivamente por las organizaciones de La Matanza, los mismos testimonios ponen de relieve la debilidad de esa práctica para establecer vínculos con funcionarios estatales durante la segunda mitad de la década del 90. Vale entonces preguntarse por qué fue recién en el año 2000 cuando se consolidó como una forma de establecer vínculos con el Estado.

Es indudable que el piquete se afianzó en el distrito de La Matanza en un contexto de transformación social donde el índice de desocupación de ese partido alcanzaba al 17,5% de la población económicamente activa y el de subocupación, al 15,2%.⁸ Como se verá en el capítulo III, donde me ocupo de este aspecto en particular, la política estatal frente a la desocupación consistía en la puesta en funcionamiento de programas de ocupación transitoria, conocidos popularmente como "planes".⁹ Sin embargo, las transformaciones sociales y las políticas estatales no explican por sí mismas por qué se generalizó el piquete como una forma de demandar la intervención del Estado sobre el problema de la desocupación y cómo los programas estatales de ocupación transitoria pasaron a formar parte de las demandas de la FTV y la CCC, y de las expectativas de quienes confluyeron en el piquete. Para esto, es necesario poner de relieve un conjunto de relaciones que se tensionaron y expresaron a través del piquete.

El gobierno municipal de La Matanza sancionó en mayo de 2000 la Ordenanza 10.786/00, por medio de la cual se declaraba al municipio en "Emergencia Ocupacional, Sanitaria y Educacional", y se creaba un Consejo de Emergencia integrado por el intendente, miembros de los tres bloques del Concejo Deliberante – en aquella época, el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical y el Frepaso– y representantes del Obispado de San Justo, de Cáritas, de las pequeñas y medianas empresas, de la Confederación General del Trabajo (CGT), de la CTA, de la CCC y de la FTV.

⁸ Datos elaborados por la Consultora Equis.

⁹ Desde 1996 se sucedieron diferentes programas: Trabajar, Programa de Emergencia Laboral, Barrios Bonaerenses (del ámbito provincial), y Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, entre otros.

El 28 de junio de 2000, la CCC y la FTV, organizaciones miembro del mencionado Consejo, realizaron un boqueo sobre la ruta nacional 3 que se prolongó durante veinticuatro horas y se “levantó” a cambio del compromiso asumido por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de aumentar la cantidad de programas estatales de ocupación transitoria y el volumen de alimentos destinados a La Matanza. El reporte de algunos medios gráficos afirmaba:

*“No consiguieron todo lo que pedían, pero sí bastante para levantar el corte: 650 mil kilos de comida fresca, 70 mil de alimentos secos y el compromiso de enviar más planes de trabajo (...). Todo se repartirá a través del Consejo de Emergencia y, para avanzar sobre seguro, se firmarán convenios sobre el tonelaje de alimentos que debe llegar cada mes, la construcción de nuevos centros de salud y la provisión de medicamentos”.*¹⁰

Por aquella época, el distrito de La Matanza contaba con un total de 1400 beneficiarios de programas estatales de ocupación transitoria. Algunos de esos beneficiarios, como se podrá observar en el capítulo III, habían sido incorporados en los programas estatales a partir de movilizaciones y “gestiones” emprendidas por la CCC y por algunos barrios de la FTV. Frente a esas cifras, la propuesta conjunta elaborada por autoridades nacionales, provinciales y municipales consistió en el incremento del número de beneficiarios, a razón de 1000 por mes, en los citados programas, y en la entrega mensual de 70.000 kilos de alimentos secos y 65.000 de alimentos frescos.

Sin embargo, debido al incumplimiento del gobierno nacional respecto de lo pactado en el mes de junio, a lo que se sumó la cancelación de beneficiarios en los programas estatales de ocupación transitoria y la falta de pago del beneficio para otros, se fue configurando un pliego de demandas que se expresaron públicamente a partir de los piquetes de noviembre de 2000 y mayo de 2001:

“Esto comenzó a partir del 28, cuando nosotros dimos el tiempo que correspondía. Los planes Trabajar teníamos que tener 1000 mensuales. Conclusión: cada vez que vos vas, te bajaban. ¿Por qué? Porque la ‘ñ’ no la registra la computadora, porque le falta el punto a la ‘i’, porque su número de documento no coincide... Conclusión: todas las organizaciones que formaban parte del Consejo de Emergencia, cada vez,

¹⁰ Diario *Página 12*, 29/6/00.

en vez de tener 1000 más, lo que teníamos en todo Matanza era 1400; cada vez se tenía menos. Entonces llegó un momento que se habló con las autoridades. Se dijo: 'Bueno, vamos a ver cómo hacemos, cómo es esto'. Los alimentos secos llegaron, bárbaro, y también llegó el aporte de provincia más el municipal, pero los alimentos frescos nunca llegaron, nunca; los 650.000 kilos nunca llegaron. Y los planes Trabajar, en lugar de ir en alza... porque hoy yo tengo que decir que tendríamos que tener 5000 y tenemos 3700... ¿Por qué esa diferencia, esos 1300? Porque son los que no te los aceptan porque les falta una tipología, porque les falta la coma, porque les falta el punto, porque les falta... Conclusión: la gente está haciendo la vereda, está haciendo todo y no está cobrando (...). Es denigrante; hay gente que hace cuatro meses que está trabajando en el plan, haciendo zanjas; mujeres y hombres... y quedaron colgados. ¿Y qué explicación le da Patricia Bullrich a eso? Entonces, ¿qué se hizo? Tanto Luís D'Elía como la Corriente Clasista y Combativa, que son las organizaciones que forman parte del Consejo de Emergencia, le mandaron cartas documento a las distintas autoridades que estuvieron (...). Hubo cartas documento, hubo llamados telefónicos. No es que nos quedamos y que esto los tomó de improviso, no fue así; las cartas documento están, las reuniones con funcionarios estuvieron, la reunión con De la Rúa todavía la estamos esperando... Hubo cosas que te marcan, te marcan y mucho; y cada vez tenemos más desocupados porque es producto de la crisis que vivimos en todo el país" (Lara, 43 años, dirigente gremial de ATE, ex concejal municipal por el Frepaso).

"Vino el gobierno de De la Rúa y ahí se endurecieron más las cosas, ahí se endureció más la cosa porque estaba la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, una persona bastante soberbia. En ese momento, Felipe Solá, diríamos, estaba para querer ser gobernador, porque todavía estaba como gobernador Ruckauf, pero como que quería ganar los porotos, entonces él decía: 'Pobre gente, la necesidad que tiene, y hay que cubrir la necesidad; qué malos que son los de Nación'... Una cosa así, una rivalidad y en el medio nosotros; una situación muy fea. Bueno, salimos a cortar la ruta, nos movilizábamos al Ministerio; en medio de todo esto dejaron un tendal de compañeros sin planes, nos quedó una minoría, pero muy chiquita, que sí habían quedado en los programas (...). La necesidad de los compañeros nos superaba a nosotros mismos inclusive, entonces dijimos: 'No, tenemos que salir, tenemos que salir y tenemos que reclamar'. Y nos instalamos seis días y no tuvimos respuesta; nos hicieron promesas, documentos firmados, compromisos firmados, pero nunca tuvieron en cuenta de querer cumplir. Y después dijimos: 'Bueno, no podemos quedarnos con esto, se están burlando de nuestra gente, tenemos que instalarnos y que sea lo que Dios quiera, no podemos seguir así'. Nos instalamos en la ruta dieciocho días y dieciocho noches" (Adelina, 45 años, integrante de la Mesa Ejecutiva de la CCC)

“Tenemos menos planes a nivel nacional; el principal problema que tenemos por delante es el pago de 580 compañeros antes de fin de año” (CCC, Guión de Discusión Política, septiembre de 2000).¹¹

Los testimonios citados permiten formular una primera precisión: el objetivo principal de los piquetes de La Matanza fue generar el compromiso del Estado en relación con la distribución de programas de empleo. Se solicitaba el aumento del número de beneficiarios en programas de empleo con la misma fuerza que se requería al gobierno nacional que “cumpliera” con compromisos asumidos, reintegrara a los beneficiarios “caídos” y abonara la deuda que mantenía con otros beneficiarios de los mencionados programas. En otras palabras, con los piquetes se procuraba “resituarse” la relación configurada con el Estado, por lo menos desde el año 1997, en torno a los programas de ocupación transitoria.

Con el piquete de noviembre de 2000 se demandaba al gobierno nacional: 10.000 vacantes en los programas oficiales de empleo, un aporte de 5 millones de pesos del Tesoro Nacional para el Consejo de Emergencia Social de La Matanza y el aumento de la cantidad de alimentos.¹² A los pocos días, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se comprometió a distribuir 20.000 kilos de alimentos secos por mes durante un semestre, a construir cinco escuelas y reparar las existentes, a otorgar 5500 planes de empleo (Bonus y Segunda Oportunidad) y a destinar a La Matanza los primeros tres hospitales móviles de la provincia.¹³ Si bien esa propuesta fue aceptada por las organizaciones que protagonizaban el bloqueo de la ruta, la medida se prolongó a la espera de un acuerdo más favorable con los funcionarios del gobierno nacional. La primera propuesta enviada por los ministerios nacionales de Trabajo y de Desarrollo Social se comprometía a mantener 4000 planes mensuales en La Matanza, a entregar 10.000 pares de zapatillas, a implementar un plan de reparación de escuelas, a ejecutar un programa de asfalto para barrios, a incorporar el programa Médicos de Cabecera, a proveer de cloacas y agua potable a algunos

¹¹ El Guión de Discusión Política es un documento que produce la CCC para difundir entre los dirigentes, cuyas características analizo en el capítulo IV.

¹² Diario *Clarín*, 2/11/00.

¹³ Diario *Clarín*, 1/11/00.

de los barrios carenciados, y a entregar 10.000 becas escolares de 600 pesos.¹⁴ Finalmente se reestructuraron las propuestas parciales de los gobiernos provincial y nacional, y se alcanzó un acuerdo sobre los siguientes puntos:

*“7500 planes aportados por el gobierno bonaerense y 2000 por el nacional, el desembolso de 2 millones de pesos que serán entregados por la nación en medicamentos y herramientas para trabajar, reconstrucción de escuelas y el envío de alimentos secos por parte de nación y provincia”.*¹⁵

Sin embargo, el 7 de mayo se reinició otro corte de ruta prolongado —“el corte de los dieciocho días”— para reclamar el cumplimiento de los acuerdos logrados en noviembre de 2000 y la restitución del beneficio de los programas de ocupación transitoria a 5100 personas que habían quedado fuera de ellos desde el 28 de febrero de 2001:

*“Los manifestantes dicen que se cayeron más de cinco mil planes con el reempadronamiento que dispuso la ministra Bullrich y los quieren de vuelta. Además exigen: 10.000 pares de zapatillas, 2 mil becas estudiantiles, dos millones de pesos en medicina y herramientas de trabajo, arreglos de escuelas y mejoras en la ruta 3”.*¹⁶

El Ministerio de Trabajo de la Nación admitió la cancelación de 2000 beneficios mensuales en el Programa Trabajar debido a denuncias de irregularidades.¹⁷ En otro orden, las primeras intervenciones de funcionarios estatales, como la del Gerente del Plan Trabajar del Conurbano Bonaerense, descartaban la posibilidad de cumplir con el compromiso asumido en noviembre de 2000 de elevar a 10.000 la cifra de beneficiarios en programas de ocupación transitoria:

*“En La Matanza hay cupo para 5200 beneficiarios y no vamos a sacarles a otros distritos porque nos extorsionen con cortes de ruta”.*¹⁸

¹⁴ Diario Clarín, 3/11/00.

¹⁵ Diario Clarín, 5/11/00.

¹⁶ Diario Clarín, 21/5/01.

¹⁷ Diario Clarín, 23/5/01.

Finalmente, el 23 de mayo de 2001, con la intervención directa del secretario privado del Presidente de la Nación, se alcanzó un acuerdo entre los ministros de Trabajo de los gobiernos nacional y provincial, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, el intendente de La Matanza y representantes de la CCC y la FTV. Los puntos del acuerdo fueron los siguientes:

"La provincia de Buenos Aires se comprometió a:

- Mantener cinco mil planes (Bonus o similares), hasta lograr una caída drástica de los índices de desocupación.*
- Entregar tres hospitales móviles, los dos primeros en un plazo de 30 días.*
- Incluir en su primer llamado a licitación el equipamiento para el hospital del kilómetro 32 de González Catán.*
- Hacer las gestiones para mejorar las condiciones de detención de Emilio Alí hasta tanto se obtenga su libertad.*
- Realizar la regularización dominial de barrios que son propiedad de la provincia de Buenos Aires, tomando a su cargo la mensura y subdivisión de los barrios 17 de Octubre y María Elena, y del barrio Latinoamérica.*

El gobierno nacional se comprometió a:

- Otorgar al partido de La Matanza, por intermedio del Consejo de Emergencia del distrito, los 7500 cupos de planes Trabajar o similares acordados oportunamente, de acuerdo a la tipología de los planes actualmente en ejecución para La Matanza, y sostenerlos hasta arribar a una drástica caída de la desocupación.*
- Implementar los 7500 cupos de beneficiarios a partir del 1 de mayo de 2001. Para cumplir con el pago de mayo, se procederá a la prórroga de los proyectos y beneficiarios restantes hasta cubrir el cupo de 7500. Para el mes de junio el Consejo de Emergencia de La Matanza deberá presentar los proyectos respectivos que cubran la cantidad de beneficiarios remanentes hasta los 7500 comprometidos. El Ministerio de Trabajo reconoce al Consejo de Crisis de la Municipalidad de La Matanza como una de las oficinas de empleo habilitadas.*
- Destinar hasta la suma de \$ 900.000 al pago de ayudas económicas retroactivas correspondientes al período marzo-mayo de 2001 a beneficiarios del partido de La Matanza que finalizaron a partir del 28 de febrero de 2001. Las prestaciones retroactivas serán abonadas antes del 30 de junio de 2001.*
- Construir aulas o refaccionar escuelas del distrito hasta la suma de \$ 180.000.*
- Aportar \$ 600.000 para afectar a 1000 becas para estudiantes del distrito de La Matanza en el marco del Programa Nacional de Becas.*
- Gestionar la incorporación en el Plan de obras de infraestructura de la Nación la ampliación de la ruta nacional número 3 entre los kilómetros 29 y 47 de la misma.*

¹⁸ Diario Clarín, 12/5/01.

*-Aportar \$ 1.000.000 para medicamentos e insumos hospitalarios, y 1.000.000 con las siguientes proporciones: 25 por ciento para herramientas y 75 por ciento en materiales para los proyectos de empleo”.*¹⁹

Las organizaciones que integraban el Consejo de Emergencia de La Matanza, entre ellas, la CCC y la FTV, se comprometieron a reempadronar a los beneficiarios de programas de ocupación transitoria en un registro habilitado a tal fin en una sede del obispado de San Justo, situada en la localidad de Gregorio de Laferrere.

Una mirada global sobre este proceso permite establecer una serie de precisiones. Desde el año 1998, la CCC y la FTV habían incorporado aproximadamente cuatrocientos beneficiarios en programas de empleo transitorio mediante movilizaciones hacia dependencias gubernamentales o vínculos con funcionarios estatales centrados en la tramitación, la apertura de expedientes y la presentación de proyectos. Si a partir de esos procedimientos, basados en el conocimiento del funcionamiento de las dependencias gubernamentales, ambas organizaciones habían logrado vacantes en programas de empleo, ¿por qué comenzaron a demandar al Estado aplicando la forma del piquete? Para responder a esta pregunta es preciso atender a la confluencia y reforzamiento mutuo de una serie de procesos.

Hacia el año 2000, a medida que se difundía que la CCC y la FTV habían obtenido vacantes en programas estatales de empleo, se acercaron masivamente representantes barriales en busca de *planes*. Ante el “desborde”, como calificaron los dirigentes a esos años, se comenzaron a confeccionar listados con el nombre y apellido de quienes aspiraban a obtener un programa de empleo, y los dirigentes barriales se dedicaron a “*abrir barrios*”; es decir, a recorrer calles y viviendas ofreciendo la inscripción en esos listados. Las personas que se inscribían quedaban comprometidas a participar en las acciones que fueran necesarias para ingresar en los programas estatales, según expresaron algunos dirigentes: “*Nosotros no ofrecíamos un puesto de trabajo sino un puesto de lucha*”.

¹⁹ *Semanario del Comunismo Revolucionario de Argentina. Hoy. Servir Al Pueblo. N° 863, 30 de mayo de 2001. También pueden consultarse los puntos de este acuerdo en el diario Clarín, 24/5/01.*

Al mismo tiempo que aumentaba la cantidad de personas inscriptas con la expectativas de acceder a un programa de empleo, el gobierno disminuía el número de beneficiarios de ese tipo de programas. En 1999 se produjo un cambio de gobierno y la Alianza gobernante, integrada por la Unión Cívica Radical y un agrupamiento conocido como Frepaso, procuró implementar un registro único de beneficiarios de programas sociales, para lo cual endureció los requisitos que debían cumplir los destinatarios. Como consecuencia, comenzó a disminuir la cantidad de vacantes en programas de empleo, y esto afectó a quienes ya habían logrado acceder a ellos. El beneficio se cancelaba, tal como lo pusieron de manifiesto los testimonios citados, aduciendo fallas administrativas: errores ortográficos en las planillas, incompatibilidad de la letra "ñ" con el programa informático u omisiones en números de documentos.

En suma, el aumento en los niveles de desocupación y subocupación, el tipo de intervención estatal centrado en programas de ocupación transitoria, el engrosamiento de los listados que registraban la cantidad de personas que aspiraban a obtener un programa de empleo a partir del vínculo con la FTV y la CCC, y la disminución de vacantes en programas de empleo durante el año 2000 contribuyeron a que el piquete se instalara como forma social óptima para demandar y comprometer al Estado. En otros términos, sostengo que los cortes de ruta prolongados (piquetes) resultaron ser la forma apropiada para demandar la intervención del Estado en torno a la desocupación y generar obligaciones a partir de la circulación de vacantes en programas de ocupación transitoria.

Estar en la ruta: un acto con múltiples sentidos

Además de la apropiación de la forma-piquete y del contexto local que generalizó su uso como una forma de producir vínculos con el Estado, es preciso abordar con más detalle cuáles fueron los significados del "corte de ruta" para aquellas personas que se convocaron en noviembre de 2000 y mayo de 2001.

La mayoría de las personas a las que entrevisté o con quienes conversé a lo largo de mi trabajo de campo refirieron como principales motivos de participación en el piquete la falta de trabajo y las expectativas de acceder a un *plan* o defender el *plan* que ya se había logrado:

“Esa temporada, no sé si te acordás, era muy fea; decían que nos iban a sacar el trabajo. Íbamos por todos lados, íbamos a Plaza de Mayo... A mí me gustaba salir porque todo estaba tranquilo. Íbamos al corte porque los trabajos no salían, pero todo tranquilo” (Zulema, 53 años, integrante de la FTV, barrio Tierra Nuestra).

“Cuando yo comencé acá, en el piquete, yo no tenía nada. Me quedé sin laburo; el mundo se me acababa a mí. Yo creía que no había nada, que iba a perder mi matrimonio, todo; me sentía muy mal. Y de pronto, por un amigo mío, entré al movimiento de Luisa Alegre y empecé a andar en los piquetes. Cobraba el plan de 150 y todo eso; bueno, no lo cobraba todavía porque estaba en Luisa Alegre. Pasaron dos años caminando al ñudo, arriesgando, llevando leña, trabajando para ellos. Venían cupos y no los agarraba yo, lo agarraban los familiares. Hasta que yo me pasé a la Corriente y ahí agarré cupo” (Rojas, 49 años, integrante de la autodefensa de la CCC, barrio Altavista).

Ingresar como beneficiario a un programa estatal de ocupación transitoria o “defender” el beneficio que se había logrado previamente se constituyeron en las principales motivaciones para formar parte de un piquete. Estas expectativas remiten, por un lado, a la falta de trabajo, y por otro, a la manera en que los dirigentes barriales pertenecientes a la CCC o la FTV convirtieron esos *planes* en una demanda para los habitantes de los barrios.

En algunos casos se enfatizaba la expectativa de obtener un “plan” (*puesto de trabajo* o *cupo*, como también suele decirse) como parte del ejercicio del “rol materno” y el compromiso con el cuidado y la alimentación de los hijos:

“Yo no estaba trabajando y me querían hacer participar de los cortes, las marchas que se hacían. Yo quería trabajar para que mis hijos no pasen miseria, no pasen hambre; no les puedo dar ningún lujo, pero lo principal es que no pasen hambre. Como ahora que van al comedor, pero que a la noche tengan un plato de comida, porque es muy triste irse a dormir con un mate cocido. Nunca les pasó y no quiero que les pase; aunque sea un poco de arroz hervido, pero que coman. Es lo más triste para una madre que no le pueda dar un plato de comida a sus hijos. Me fui con

Alderete, después me fui a una unidad básica; la unidad básica me decía que me tenía que afiliar y los de Alderete, que tenía que ir a los cortes. Y eso no me gusta a mí. Después, cuando empecé a trabajar con el plan, sí que fui a los cortes; y ahora, si tengo que ir a defender mi cupo de trabajo, sí que iría. Ahora que estoy trabajando, sí; mientras no estaba trabajando, no iba a ir” (Carmen, 40 años, integrante de la FTV, barrio Tierra Nuestra).

En tanto, para algunos varones, participar en un piquete representaba una alternativa para “reemplazar” a sus mujeres e hijos en una tarea que consideraban “sacrificada”:

“En mi casa se fue creando una crisis, porque primero que no conseguía nada, ningún trabajo, ni changa, nada; después, una desmoralización de aquéllas, porque los chicos y tu señora estaban acostumbrados no a un ritmo de vida pomposo, pero a unas zapatillas medianamente, porque podés... Y de repente: ‘No tengo, no puedo’... Fue creando un conflicto, o sea, de última me llevó a la separación eso, de última, no fui de los que dijeron: ‘Me voy porque no puedo bancarlos’; o sea, llevó a una crisis. Entonces bueno, muy, muy mal... Una vuelta me golpearon la casa, un conocido que iba a armar un barrio, que él iba a armar, si quería participar... La primera que se anotó fue mi señora. Yo no quería saber absolutamente nada con eso, la criticaba mucho. Yo digo: ‘No, sigo buscando’. Me subía a los camiones conocidos, me llevaban por todos lados buscando laburo, total no pagaba pasaje. Y un buen día salió un corte de ruta, el corte de los seis días en Casanova. Entonces mi señora iba con los chicos, y entonces agarré un día y me dije: ‘Me voy a ver qué es’, porque ella se tenía que venir temprano y como era por puntaje, llovía, todo eso... la participación... Y fui. Y me digo: ‘Dentro de todo, vos te merecés un plan’. Fui y me quedé esa tarde; y bueno, cuando volví a casa a la noche, yo le dije: ‘¡No!, vos no vas más’... Qué sé yo, la ruta... No es que se me ponían los pelos de punta, pero decía: ‘Si vengo yo, que no venga ella’. Y bueno, me quedé yo participando por ella en ese momento; era el reemplazo de ella. Y bueno, fui haciendo amistad, qué sé yo... Y como sin querer, me quedé dentro del movimiento como un beneficiario. Y bueno, después en el barrio” (Mario, 40 años, dirigente barrial de la CCC).

Otros casos acentuaron la “obligación moral” de continuar participando para “ayudar” a que otros “compañeros” lograran ingresar en estos programas:

“Trabajé varios meses en el plan y no venía mi cobro. Como no venía mi cobro, dejé. Y al tiempo me volvieron a aceptar; y bueno, cuando había que ir a los cortes, había que ir. Yo no siento que tenga que ir porque D’ Elía sea el cabeza o porque Sandra sea nuestra coordinadora. Yo siempre digo que siempre he tratado de ir por mis compañeros, porque a mí los cortes no me gustan, pero si no voy, siento que les falto

el respeto a ellos, porque el que cobra está bien, ya cobró, pero tiene que ir a apoyar al otro que no cobró también, ayudarlo al otro” (Nora, 55 años, integrante de una Comunidad Eclesial de Base, integrante de la FTV, barrio San Alfonso).

Desde un punto de vista relacional, formar parte de un piquete, así como también marchar, se constituyeron en un requisito para acceder a programas de empleo o para mantener en el tiempo ese beneficio. Como consecuencia, estas obligaciones se añadían a las normativas estatales vigentes sobre el asunto,²⁰ que sólo precisaban que el “destinatario” de los mencionados programas debía ser jefe o jefa de hogar desocupado, con hijos menores de dieciocho años o discapacitados de cualquier edad a cargo.

Permanecer en los piquetes también representaba una forma de sociabilidad, distracción u ocupación. Por lo general, se compartía la comida y se visitaban carpas de otros barrios, donde se encontraban parientes o amigos que hacía tiempo que no se frecuentaban:

“Nosotros, con el grupo, estábamos todo el día ahí, entre nosotros, charlando, tomando mate. Yo llevaba mi tejido ahí para no perder tiempo. Llevé mi tejido; me tejí no sé cuántos pulóveres” (Nora, 55 años, integrante de una Comunidad Eclesial de Base, integrante de la FTV, barrio San Alfonso).

“Cuando fui al piquete, estaban todos mis vecinos de acá, del barrio, y mi compadre. Era retranquilo allá. Me llamaba la atención la cantidad de gente y cómo se van ubicando todos, a cada cuadra, para que no haya ni un problema... todo eso. Porque a veces uno va a un corte y se arma un lío, pero acá, gracias a Dios, no pasó nada. Me hice de muchísimos amigos ahí, cuando empecé a ir seguido a los cortes; empecé a encontrar todos compañeros. Gracias a Dios no tengo nada de qué quejarme” (Don Bena, 55 años, integrante de la FTV, barrio San Alfonso).

“A veces nos reaburríamos porque no salimos más a los cortes, no hacemos nada; pero ahora que hay de nuevo más seguidos, vamos para todos lados, estamos todo el día metidos ahí. Nos quedábamos una banda de tiempo antes, ¿viste? Ahí, en Casanova, nos quedamos como dieciocho días; ahora nos quedamos una hora nada más. Nosotros estábamos todos juntos y nos quedamos cerca de gente conocida. Juntábamos unas cuatro monedas que le pedíamos a la Migue o a la Pelu, y con eso nos comprábamos algo para cocinar, un poco de achuras y así (...). Los instrumentos de la batucada estaban siempre con nosotros; a veces se lo dejábamos

²⁰ Estas normativas y el marco interpretativo en el cual se inscriben están reconstruidas, en detalle, en el capítulo III.

a cargo de alguna persona mayor cuando nos íbamos a caminar por ahí, pero después volvíamos y seguíamos tocando” (Entrevista colectiva a los Jóvenes de la Batucada de la CCC, barrio Santa Emilia).

También se aprovechaban las carpas sanitarias para realizar consultas por distintas dolencias:

“Los que teníamos algún conocimiento en salud nos turnábamos para atender a la gente, pero después nos dimos cuenta que la función que nosotros proponíamos para la carpa, que era si pasaba alguna emergencia en el corte poder resolverla, después nos dimos cuenta que la usaban como una carpa de contención, porque la gente iba por nada, y a veces solamente para hablar. Nosotros no éramos muchos, éramos dos o tres enfermeros, y a veces un médico que venía, pero no venía siempre; entonces no podíamos estar permanentemente atendiendo gente. Aparte venían con problemas, o sea, un hipertenso pero de hace cinco años que no se medica y justo iba a ir a medicarse al corte, que no tenemos ningún recurso... Era medio complicado. Es verdad que había problemas que tratábamos de resolverlos, porque hubo casos de emergencia, pero la gente, sobre todo la más grave, es la gente que necesita ser medicada, pero que ya fue diagnosticada y que va al corte sin nada, como hipertensos, los diabéticos, por ejemplo, epilépticos; o sea, medicación de gente crónica (...). Nosotros no teníamos una carpa; en realidad, nuestra carpa era la de ATE, ellos ponían la carpa y los elementos porque ellos trabajaban en el hospital, y después había una carpita que tenían los de la CCC. Pero ahí nos diferenciaban porque ellos tienen al Chino, ellos tienen al médico, y es distinto; porque el Chino trabaja en el barrio, conoce a la gente, sabe los que están enfermos, los que lo van a chamullar, o sea, él conoce su gente y él podía manejar de otra manera” (Selva, 36 años, integrante de una Comunidad Eclesial de Base y de la FTV).

Me interesa puntualizar otros aspectos vinculados con la expectativa de quienes formaron parte de los piquetes. Participar en cortes de ruta prolongados no era la única alternativa disponible para ingresar como beneficiarios a programas de ocupación transitoria; en ese sentido, los testimonios citados dan cuenta de pasajes por diferentes organizaciones y por centros barriales vinculados con partidos políticos, tales como las unidades básicas. Se vuelve relevante, entonces, explicar por qué para un conjunto de personas el vínculo con la CCC y la FTV, y la participación en los piquetes, se transformaron en una posibilidad para acceder a los mencionados programas. Explicar este proceso requiere de una mayor profundidad

de análisis, por ello representa el núcleo del capítulo IV; pero aquí anticipo dos procesos vinculados con él. Por un lado, un gran número de personas que participaron en los piquetes eran pobladores de los asentamientos formados en la década del 80; todos ellos habían logrado el título de propiedad de las tierras ocupadas y mejoras en la infraestructura de los barrios a partir de procesos de demanda al Estado impulsados por dirigentes locales que luego se incorporaron a la CCC o a la FTV. Así, permanecer junto a estas organizaciones formaba parte de la confianza depositada en esos líderes barriales, cimentada en su probada pericia para lograr un ingreso masivo en programas de ocupación transitoria. Por otro lado, ambas organizaciones extendieron su influencia sobre distintas zonas de La Matanza a partir de la labor de *referentes* o *dirigentes* barriales. Éstos contribuyeron a crear la demanda de *planes* entre los pobladores de sus respectivos barrios y, a la vez, se erigieron como una alternativa en el trayecto que diferentes personas emprendieron para ingresar a los programas de ocupación transitoria.

Participar del piquete se revestía de otros significados para los afiliados de ATE o SUTEBA:

“En el 96 fue la Olla Popular de la plaza de San Justo, y empieza todo el proceso del movimiento de desocupados, los cortes... Y bueno, seguir el trabajo con el gremio docente, tratando de unir, todo el tiempo tratando de unir las necesidades. Bueno, lo que yo fui descubriendo es que ahí estaban los papás de los alumnos y las necesidades no sólo desde lo reivindicativo, sino también desde lo pedagógico, porque yo me daba cuenta que detrás de eso formal, como el saludo a la bandera, atrás de todo eso había vida, necesidades, procesos de lucha. Entendí que se podía unir desde lo reivindicativo y cortar un poco lo sectorial, y empezar a hacer una cosa más integral entre las necesidades del desocupado, el tema de la salud y lo docente. Yo creo que eso se plasmó en el corte del 2001, donde se hace un programa único que abarca la educación, la salud, la vivienda y el trabajo” (Marina, 38 años, sindicalista de SUTEBA, integrante de la CCC).

“Lo piola de todo esto del corte de ruta es que por primera vez no sólo las organizaciones sociales reclamaban el tema de tierra, el tema de trabajo, el tema de alimentos, sino que también las organizaciones sindicales reclamábamos cada una nuestras reivindicaciones: el tema de la salud, el tema de la educación, que son las dos cuestiones, y el tema de todos los trabajadores estatales, que son las cuestiones más importantes (...). Nosotros le hicimos meter a los compañeros del hospital en la cabeza que el hospital no es nuestro, no es mío, como enfermera, es de la comunidad, y si nosotros no abrimos las puertas y no les explicamos por qué a veces

le damos el turno a treinta días, por qué no le podemos dar determinada cosa, es porque realmente les tenemos que mostrar cómo estamos trabajando; y son ellos los que nos van a defender a nosotros, a defender el hospital público” (Lara, 43 años, dirigente gremial de ATE, ex concejal municipal por el Frepaso).

El piquete, para los miembros de esas asociaciones sindicales, se transformó en la posibilidad de expresar la articulación de alianzas construidas históricamente que, como se verá en detalle en el capítulo II, habían ido cambiando a lo largo del tiempo. De todas maneras, se manifestaba una relación de “exterioridad” respecto de los “desocupados”, ya que la presencia en el piquete remitía a la acción de “apoyar” o “acompañar” el reclamo de personas desocupadas que eran “padres de alumnos”, en el caso de los docentes, o “pacientes”, para el personal de salud. Desde otro lugar, el piquete también representaba la posibilidad de expresar demandas sectoriales tendientes a mejorar las condiciones de trabajo en los sectores educativo y sanitario (nombramiento de personal, construcción de nuevos hospitales o escuelas, insumos, reparaciones edilicias, etc.). La visión del piquete como un espacio de “unidad” se relacionaba con el hecho de que en él confluían diversas demandas dirigidas al Estado, entre las que se destacaba el pedido de programas de empleo y de modo subordinado otras vinculadas con la salud y la educación. En otros términos, el piquete se convirtió en una expresión, como hubo y habría otras,²¹ de *“defensa del hospital público y la escuela pública”*.

Dirigentes nacionales de entidades sindicales como la CTA y la CCC interpretaron al piquete en el marco de los proyectos y estrategias gremiales que venían impulsando desde los inicios de la década del 90. En relación con esto, Víctor De Gennaro, titular de la CTA, expresaba:

²¹ Me refiero, por ejemplo, a una movilización que consistió en una caminata durante cuatro días para unir los puntos cardinales del conurbano bonaerense y arribar a la casa de gobierno provincial, en demanda de trabajo, escuelas y hospitales. El contingente de caminantes fue aportado por partes iguales entre el gremio de trabajadores estatales, docentes y las dos organizaciones de desocupados que estamos estudiando (FTV y CCC). Un estudio detallado sobre las alianzas entre organizaciones de desocupados y el sector salud se puede consultar en Manzano (2005) y las articulaciones con el sector educativo, en Manzano (2006).

*“El acuerdo fue muy importante. Es la primera vez que en el mismo interviene toda una nueva clase trabajadora, que surge como el gran hecho del piquete de La Matanza”.*²²

En la visión de la CTA –entidad a la cual, además de la FTV, pertenecen gremios como ATE y SUTEBA– el piquete de La Matanza representó la posibilidad de plasmar un *convenio colectivo de trabajo de nuevo cuño*, que incluyó las demandas de una “nueva clase trabajadora”. Este significado se entiende en el marco de los diagnósticos que esta Central venía realizando desde 1991, como parte de las denuncias sobre los efectos del modelo neoliberal. La nueva clase trabajadora se componía de jubilados, trabajadores activos y trabajadores desocupados, y por ello se pretendía incorporarla en un modelo sindical descentrado del espacio productivo y referenciado en el territorio/barrio. El piquete, entonces, se convirtió en un ejemplo de esta nueva estrategia sindical.

En el caso de la CCC, el piquete se convirtió en un ícono de la lucha “histórica” y “heroica” del movimiento obrero, y en una demostración de las potencialidades del “Frente Único”. En este sentido, en una crónica sobre los piquetes publicada en el Semanario del Partido Comunista Revolucionario, se afirmaba:

*“La lucha heroica, histórica, de los desocupados de La Matanza basada en el frente único de la CCC y la FTV, con la participación de numerosas fuerzas y el apoyo (en algunos casos, y en otros la neutralidad) de sectores peronistas ganó el apoyo de los desocupados de todo el país: Una acción solidaria única en la historia del movimiento obrero argentino. Y ganó, también, el corazón de millones de argentinos”.*²³

Esta valoración del piquete se relacionaba con los diagnósticos políticos de la CCC, que caracterizaban, desde 1996, un “auge de masas” y proponían una estrategia insurreccional tendiente a un “Argentinazo”, sobre la base de la conformación de un Frente Único que impulsara un programa de transición de un

²² Diario Clarín, 6/11/00.

²³ Semanario Del Comunismo Revolucionario de Argentina. Hoy. Servir Al Pueblo. Nº 863, 30 de mayo de 2001; p. 2.

gobierno "Patriótico y Popular". En este marco, el piquete representó un hito en el camino hacia el "Argentinazo".

Otros fueron los sentidos que evocó el piquete para integrantes de Comunidades Eclesiales de Base (CEBs, de ahora en adelante). Estas comunidades, conformadas en La Matanza hacia fines de la década del 70, se encuentran vinculadas a sacerdotes de la Orden Salesiana. En el capítulo II presento un análisis de ellas; aquí, sólo me interesa recuperar una serie nudos del siguiente relato que hacen a la significación del piquete:

"Yo te digo, yo tenía un trabajo, trabajaban todos en mi casa; pero después nos fuimos quedando sin trabajo, la única que quedaba era yo, y dos veces a la semana o una vez. Pero gracias a Dios que yo sé coser, sé hacer cosas, hacer pan, que vendo pan, o que hago unas empanadas y las vendo... No me quedo así, con las manos quietas. Pero ver el sufrimiento de tanta gente, que viene y golpea: 'No tengo nada para mi hijo'... Hombres que vinieron: 'Señora, si tiene una leche para mi hijo'... Esas cosas que me movieron para ir y acompañar un piquete. 'Yo no tengo trabajo, vayan allá, luchen'... Me iba yo también, me iba a apoyar. Pero fue terrible con la gente de la iglesia, era como que vos, piquetero, allá; y nosotros, de la iglesia, acá. Fue el patito mojado. Yo escucho y empiezo a decir: 'Pero ¿cómo es? ¿Dónde está Jesús? ¿Dando la catequesis, nomás? ¿Viniendo a misa todos los días? ¿O estar con la gente que necesita, estar en un piquete, acompañarlos?'... Lo de la comunidad, una cosa; los piquetes, otra cosa. No es así. Yo soy de la comunidad y soy piquetera. Rosa es de la comunidad, tesorera y piquetera; ella también dijo: 'Soy piquetera'. Claudia: 'Soy catequista y no tengo trabajo, y no consigo trabajo, y soy piquetera, que no me gusta – dijo Claudia–, pero lo tengo que hacer porque no tengo trabajo y mi marido no tiene trabajo'. Esta chica que se fue recién también es catequista y dijo: 'Yo también soy piquetera'. Eloy piquetero. Santo Piquetero. Pero no lo hacemos porque nos gusta ser piqueteros, no nos gusta ir a cortar las rutas y nada, sino por necesidad, y también, al mismo tiempo, a apoyar al otro. Porque el que cobra está bien, ya cobró, pero tiene que ir apoyar al otro que no cobró también, ayudarlo al otro, porque si yo tengo trabajo, porque yo tengo Plan Trabajar, que se jodan los demás... No, no es así. Yo tengo también a mi hermano que no tiene. Cuando fue que iban los dieciocho días, yo iba todos los días; era más cerca y llevábamos la Virgen, rezábamos y le pedíamos. Una emoción muy grande, porque gente, hombres venían y se arrodillaban pidiendo a la Virgen. Rezábamos el rosario y seguíamos, porque todas esas cosas tenemos que aplicar, porque ¿dónde está Jesús? En los pobres, en los necesitados, en los que no tienen trabajo, ahí está Jesús. No está allá, en el Congreso; ojalá estuviera en el Congreso y los ilumine a éstos" (Nilda, 63 años, miembro de una Comunidad Eclesial de Base, integrante de la FTV, barrio San Alfonso).

En primer lugar, las comunidades no participaron como tales en los piquetes porque la posición institucional de la Iglesia no acordaba con la "metodología" del corte de ruta; lo que sí hizo el Plenario del Episcopado Argentino fue redactar y divulgar un documento que condenaba la gravísima crisis social y económica, y llamaba a superarla redoblando los esfuerzos y trabajando con honestidad y creatividad, sobre todo los "que más tuvieran".²⁴ En ese marco, integrantes de las CEBs participaron de los cortes de ruta en calidad de miembros de la FTV; en términos de sus trayectorias personales, "estar" en un piquete alimentaba la expectativa de acceder a un programa de empleo o de conservar ese beneficio, y también expresaba el "apoyo" (*de hermanos*) hacia otras personas que aún no habían logrado ingresar en ese tipo de programas. En términos religiosos, en cambio, el piquete era el lugar donde estaba Jesús. Esta concepción se enmarca en los contornos doctrinales de la Teología de la Liberación, que enfatiza que Jesús se encuentra en el pueblo. De ahí que el piquete, en el contexto de disputa con la institución eclesial, se transformó en el lugar donde habitaba Jesús, junto a los humildes, necesitados y desocupados, y para los integrantes de las CEBs, "estar" en ese lugar también se convirtió en una posibilidad de ejercer sus convicciones religiosas; incluso marcaron su presencia con la imagen de la Virgen y con la organización de rezos del rosario.

En otro orden, los procesos de alineamiento y realineamiento político, y las estrategias de gestión del gobierno local, contribuyeron para que el piquete se tornara una forma de reivindicar las "necesidades" del distrito de La Matanza frente al gobierno nacional. Como mencioné anteriormente, en 1999, el gobierno nacional quedó en manos de una coalición denominada Alianza, en las elecciones municipales de La Matanza, en cambio, triunfó el Partido Justicialista, aunque la mitad del Concejo Deliberante –el órgano legislativo local– quedó integrado por representantes del Frepaso, casi todos ellos dirigentes sindicales y barriales. El intendente municipal tuvo una participación activa en los piquetes. Una semana después de concluido el primero, una sindicalista de ATE y concejala municipal por el Frepaso utilizó la entrevista que le realicé para expresar su gratitud con el intendente:

²⁴ Diario *Clarín*, 11/11/00.

“Quiero destacar que fue muy importante la colaboración y el trabajo que ha tenido el intendente de La Matanza, Alberto Balestrini, porque fue, digamos, una de las personas que ha tenido mucha injerencia en esto de poder juntar tanto a nivel nacional y provincial, para poder debatir esta propuesta y llevar adelante cada uno de los puntos que pedíamos los que estábamos en el corte de ruta” (Lara, 43 años, dirigente gremial de ATE, ex concejal municipal por el Frepaso).

El piquete, entonces, se transformó en una forma social para disputar recursos y proyectos políticos entre el gobierno local y el nacional, con una activa participación de funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, también gobernada por representantes del Partido Justicialista. En los principales periódicos de esos días se registró:

“Balestrini acusó al gobierno nacional de no haberse ocupado ‘como corresponde’ del desempleo de su partido, que estimó en un 30 por ciento”.²⁵

Mientras tanto, la respuesta de la ministra de Trabajo del gobierno nacional fue la siguiente:

“La Ministra de Trabajo prefirió pegarle al intendente de La Matanza, Alberto Balestrini, a quien le pidió ‘que levante el corte de ruta’”.²⁶

Por último, el piquete también se transformó en la forma por la cual los militantes del Frepaso de La Matanza –todos ellos, como ya ha sido señalado, dirigentes barriales y sindicales– plantearon su disconformidad con las medidas de los funcionarios del gobierno nacional, a quienes habían apoyado con su militancia para acceder a esos cargos. En ese sentido, la misma concejala que agradeció la colaboración del intendente enfatizaba:

“Independientemente de que hoy tengo, circunstancialmente, un cargo institucional, de ser Concejala, no puedo perder de vista, no puedo perder de vista todo lo que el

²⁵ Diario *Clarín*, 1/11/00; p. 11.

²⁶ Diario *Clarín*, 3/11/00; p. 22.

gobierno de la Alianza, digamos, al que yo pertenezco como partido, no le puedo dar la espalda, no le puedo dar la espalda a quienes a mí me votaron y a quienes digo que represento. Éstas son las diferencias que tenemos con muchos compañeros. A mí siempre me vas a encontrar cuando haya un tema de educación, cuando haya un tema de salud, cuando haya un tema presupuestario; a mí me vas a encontrar del lado de los trabajadores, del lado de los laburantes, del lado de los desocupados” (Lara, 43 años, dirigente gremial de ATE, ex concejal municipal por el Frepaso).

Recapitulando, el piquete se convirtió en un objeto de múltiples significados, cada uno de los cuales expresaba la trama de relaciones sociales que hizo posible su ocurrencia en La Matanza. Para la mayoría, participar en él representaba la posibilidad de lograr un *plan de empleo* o mantener el beneficio alcanzado; para algunos, se trataba de la expresión de marcos de alianzas políticas y sindicales; para otros, una manera de acercarse a Jesús. Finalmente, en el contexto de alineamientos gubernamentales, el piquete se transformó en un espacio de disputa de recursos y proyectos políticos.

DESBLOQUEAR AL PIQUETE

En el año 1940, el antropólogo Max Gluckman efectuó una admirable descripción de la inauguración de un puente en Zululandia, con el objetivo de mostrar la potencialidad del enfoque situacional para redefinir algunos aspectos teóricos del estructural-funcionalismo. Las situaciones sociales representaban el material crudo del antropólogo; eran aquellos acontecimientos observados, a partir de los cuales se establecían interrelaciones y se lograba abstraer la estructura social. Fuera de ese debate, ya que aquí no se trata de abstraer una estructura social, me interesa recuperar la construcción metodológica de Gluckman, tal como él mismo la sostenía en una frase célebre: *“He presentado un ejemplo típico de mis datos de campo. Consiste en varios acontecimientos que estaban ligados por mi presencia como observador”* (Gluckman, 2003: 8).

Recuperando estos aportes, en este capítulo he presentado una serie de eventos ligados por mi presencia como observadora, como los cortes de ruta de noviembre de 2000 y mayo de 2001, con el propósito de mostrar que el piquete

presenta una forma. La forma-piquete se caracteriza por actos ritualizados que indican su comienzo y su final, categorías sociales para definir modos de participación, técnicas de organización del espacio y las actividades, normas y prohibiciones, y terminologías para definir la experiencia de los sujetos. El sentido de esta forma es anunciar un conflicto social para demandar la intervención del Estado en torno a programas de empleo. En el caso de La Matanza, el piquete puso en juego –y, en este sentido, reactualizó– experiencias y saberes previos ligados a las ocupaciones de tierras de la década del 80; por ello, la acción del piquete fue considerada una acción de “ocupación”. Desde otro ángulo, las diversas normas disciplinarias procuraban alejarlo de visiones que pudieran acercarlo a los “saqueos a comercios”. Aspiro a que la descripción que he presentado contribuya a matizar algunas interpretaciones académicas que agrupan bajo la categoría de repertorios de acción colectiva de las clases populares a piquetes, puebladas, estallidos y saqueos (Merklen, 2005), sin considerar las relaciones específicas que expresan estas formas, así como tampoco a los sujetos que se las apropian y las redefinen desde contextos y tramas relacionales locales.

En relación con lo anterior, una segunda cuestión abordada en este capítulo ha sido la reconstrucción del contexto de apropiación de la forma-piquete en La Matanza. Al mismo tiempo que se producían los cortes de ruta de noviembre de 2000 y mayo de 2001, ocurrían otros con características similares en diferentes provincias de Argentina (Salta, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Chaco y Jujuy) y en diversos partidos del Gran Buenos Aires (Quilmes, Almirante Brown, Lanús, Florencio Varela, Esteban Echeverría y La Plata). Un número importante de estudios académicos, siguiendo las elaboraciones de Tarrow (1997), definió ese hecho como **ciclo de protesta** (Svampa y Pereyra, 2003; Schuster, 2005; Massetti, 2004). En este marco, un ciclo de protesta se inicia cuando algún grupo lleva a cabo una acción disruptiva, logra resultados e invita a otros a promover acciones similares. Desde mi punto de vista, en esa interpretación, la acción se impone por sobre la trama de relaciones sociales que la hacen posible y se reduce la historicidad a una sucesión de ciclos u olas de protesta. A partir de mis materiales de campo, me interesó mostrar, para el caso de La Matanza, cómo la CCC se apropió de la forma del piquete desde marcos

de relaciones políticas y sindicales, y procuró adaptarla a ese distrito en varias ocasiones desde mediados de la década del 90. La generalización del uso de esta forma obedeció menos al efecto de un “ciclo” que a la suma de procesos que se expresaban de un modo particular en el distrito de La Matanza, tales como el aumento en los niveles de desocupación y subocupación, el tipo de intervención estatal centrado en programas de ocupación transitoria, el engrosamiento de los listados que registraban la cantidad de personas que aspiraban a obtener un programa de empleo a partir del vínculo con la FTV y la CCC, y la disminución de vacantes en programas de empleo evidenciada desde el año 2000.

Situadas en marcos específicos de relaciones sociales, las variadas motivaciones que llevaron a los sujetos hacia la ruta constituyen el material central de los capítulos siguientes. En ellos, el énfasis está puesto en la restitución del cuadro social del piquete mediante la reconstrucción de las experiencias históricas que definieron a la desocupación como problema; los procesos que configuraron relaciones con el Estado en torno a programas de empleo; las trayectorias y los vínculos cotidianos que transformaron la expectativa de acceder a un programa de empleo y participar en cortes de ruta en aspectos sustanciales de la vida, y las particularidades políticas e históricas del distrito de La Matanza que inscribieron al piquete como un rasgo distintivo de la “comunidad matancera”.

CAPÍTULO II

LA DESOCUPACIÓN COMO PROBLEMA: CONFIGURACIÓN DE UN ESPACIO DE DISPUTA Y NEGOCIACIÓN

La frecuencia de piquetes y manifestaciones que protagonizaron organizaciones de desocupados transformaron a *los piqueteros* en *objeto de curiosidad* para turistas internacionales, en *objeto peligroso* para sectores de la sociedad que clamaban por el "orden social" y en *objeto de estudio* para las ciencias sociales, que procuraban desentrañar las causas de la emergencia de *actores colectivos* o *sujetos colectivos*.

Recortándolos como objeto de estudio, algunas investigaciones han buscado explicar la emergencia de los desocupados como *actores colectivos* atendiendo a ciertas características "singulares" de la estructura social argentina, en contraste con las de Europa y el resto de los países de América Latina (Svampa y Pereyra, 2003 y 2005; Svampa, 2005). Este planteo supone la conformación de una sociedad salarial durante la segunda mitad del siglo XX que propició la integración de los trabajadores urbanos a partir de derechos, protecciones y estabilidad laboral. Esa *excepcionalidad* social de Argentina, como la denominan los autores, limitó tanto la extensión de redes de contención comunitaria como la expansión del trabajo informal en comparación con otros países de Latinoamérica. La hipótesis central de estos trabajos se encadena en tres premisas: las políticas neoliberales dismantelaron la estructura salarial fordista y generaron un proceso de "descolectivización" que se expresó en el empobrecimiento, la vulnerabilidad y la exclusión social; frente al dismantelamiento de la estructura salarial, a diferencia de lo ocurrido en países europeos, el Estado argentino no contaba con redes de contención del desempleo, y al mismo tiempo que los sindicatos acompañaban las reformas estructurales, el tejido social se encontraba debilitado por el peso del Partido Justicialista. La emergencia de un movimiento social de desocupados (*piqueteros*) sería, entonces, el resultado de la singularidad de la construcción y transformación de la sociedad salarial. El argumento se completa atendiendo a la productividad de la "*identidad piquetera*", que estaría dada por la resignificación de la experiencia individual del desempleo para transformarla en colectiva, así

como también por la simbología que enfatiza la lucha, la asamblea, la reapropiación del territorio, la ruptura de la dependencia respecto de los “punteros políticos” y la percepción renovada de los beneficios sociales del Estado.

El problema de la emergencia de *sujetos colectivos* también ha sido un tópico de indagación en los enfoques sobre la protesta social (Naishtat et al. 2005; Schuster, 2005). Estos estudios asumen la ausencia de sujetos predefinidos por su posición estructural; por ello procuran analizar cómo se configuran sujetos e identidades colectivas en el espacio social. El uso del concepto de protesta social reemplaza al de movimiento social para poner de relieve que la acción no constituye el resultado *necesario* de un movimiento (sujeto) previamente constituido (Schuster y Pereyra, 2001; Schuster y Scribano, 2001; Schuster, 2005). En otros términos, el énfasis está puesto en señalar la *contingencia* a partir del cuestionamiento de la relación *necesaria* entre sujeto/acción. Desde esta formulación, se asevera que la protesta puede carecer de sujeto o ser ella misma el sujeto.¹ Así, el movimiento piquetero se tornó un caso probatorio en el cual la acción otorgaba la denominación al sujeto antes que la condición preexistente de desocupación. Se afirma, en este sentido, que “(...) *los desocupados construyeron la capacidad de acción a partir de su propia necesidad de supervivencia material y simbólica, con mínima o nula organización previa e historia colectiva*” (Schuster, 2005: 52).

Ambos proyectos académicos, uno centrado en el actor colectivo y el otro, en la emergencia de sujetos de protesta, presentan elementos comunes. Los dos comparten el interés por establecer las condiciones que posibilitan la emergencia de actores colectivos o sujetos colectivos; uno recurre a “factores” de la estructura

¹ La noción de sujetos configurados en la acción de protesta es tributaria de planteos más globales en las ciencias sociales contemporáneas. Por un lado, retoma las propuestas que surgieron en el seno de la tradición marxista, en el contexto de debate sobre el papel de las clases sociales y la determinación. En particular, recupera las elaboraciones de pensadores como Laclau y Mouffe (2004 [1985]; 2005), quienes sostienen que los objetos se constituyen en el interior de discursos. Ambos autores entienden el discurso como producto de una multiplicidad de prácticas articuladoras que establecen relaciones entre términos y elementos discursivos. En esta visión, las identidades son configuraciones de elementos relacionales del discurso, en continuo movimiento, sin permanencia temporal, y los sujetos ocupan diferentes posiciones discursivas sin que exista un punto que las suture; por ello resultan polisémicos e incompletos. Por otro lado, esta noción se inscribe en formulaciones recientes de los estudios estadounidenses sobre la acción colectiva. Como mostré en la introducción de esta tesis, desde mediados de los 90, diferentes investigaciones intentaron demostrar que la identidad constituía una motivación para la acción colectiva (Cerulo, 1997; Calhoun, 1999) y redefiniciones posteriores se abocaron al estudio de la identidad como resultado de la acción. Estas últimas propuestas se sintetizan en conceptos tales como “*identidades insurgentes*” (Gould, 1995) o “*identidades narrativas*” (Polleta y Jasper, 2001).

social y el otro, a las particularidades de los espacios de protesta. De esta manera, reinstalan, con términos específicos, un problema tradicional en las ciencias sociales: la relación entre el sujeto y la estructura. Esta polaridad se traduce, entre otras cosas, en el límite para el desarrollo de una mirada holística y relacional, que estrecha el objetivo del análisis a la explicación de identidades colectivas (temporarias o permanentes) dejando fuera de consideración múltiples trayectorias sociales, históricas y cotidianas.

La propuesta de este capítulo, entonces, consiste en descentrar la preocupación mayoritaria por el *sujeto de protesta* o el *actor colectivo* para indagar sobre las tramas relacionales que configuraron un espacio social de disputa en torno a la desocupación. En otras palabras, propongo descentrar la mirada del desocupado (*piquetero*) para colocar el eje de análisis en la construcción de la desocupación como objeto de disputa, demanda y negociación. El objetivo específico consiste en mostrar cómo, desde mediados de la década del 90, la desocupación se fue definiendo como problema en un entramado relacional en el que se destacaban experiencias anteriores de ocupación de tierras, prácticas religiosas y estrategias sindicales. En definitiva, se trata de comprender cómo se generó un espacio social de disputa en torno a la desocupación en el que se configuraron modalidades de alianzas políticas y vínculos con el Estado.

CENSAR Y DEMANDAR: PRIMERAS MOVILIZACIONES EN TORNO A LA DESOCUPACIÓN

Durante los meses de diciembre de 1995 y enero de 1996, dos médicos, una enfermera y trece *agentes de salud* de la sala de primeros auxilios del barrio Santa Emilia desarrollaron un censo sobre el estado nutricional de niños de entre 0 y 6 años. En el informe del censo especificaban que el objetivo del trabajo había sido el "control no obligatorio" de niñas y niños del barrio, atendiendo a la longitud corporal, la estatura y el peso. En total controlaron a 595 niños y registraron a aquellos que fueron calificados, según el "déficit nutricional", en D1, D2 y D3. Los resultados obtenidos se graficaron de la siguiente manera:

"Manzana Nº 29

Controlados: 22

0-2 años: 7

2-6 años: 15

Bordas, Alan D2; Bordas, Anahí D1; Canteros, J. D1; Quintana, Ibagall D1; Quintana, Rebeca D3; Quintana, Camila D1; Ramírez, G. D1; Ramírez, María D1; Ramírez, Elizabeth D2".

Se estableció que el 19% de la población infantil de entre 0 y 2 años se encontraba "desnutrida", mientras que el porcentaje ascendía al 22% sobre el total de niños de entre 2 y 6 años. Esos datos se analizaron en diferentes encuentros que representantes vecinales del asentamiento Santa Emilia venían manteniendo con otros barrios en torno al problema de la "desocupación". Se decidió, entonces, instalar una "olla popular" en la plaza San Martín de la localidad de San Justo, frente a la sede del gobierno municipal de La Matanza, bajo la consigna: *"Por trabajo, contra el hambre y la desocupación"*. Uno de los argumentos centrales puestos en juego para sostener esa medida fue el problema de la "desnutrición infantil" y, en particular, los datos del censo sanitario:

"Todos los vecinos de La Matanza éramos concientes desde hace mucho tiempo de la angustiante situación que viven nuestros barrios. Luego llegaron los datos concretos, las evaluaciones de los médicos solidarios, que arrojaron cifras que no daban un minuto más de tiempo. Barrio Santa Emilia 22% de desnutrición, cifra superior a la de Irak durante la guerra del Golfo. Barrio XX: 70 por mil de mortalidad infantil, casi el doble de la provincia más pobre del país (Chaco 40 por 1000). En los países desarrollados la cifra es 5 por 1000" (Boletín informativo de los "Barrios de la Olla", mayo de 1996).

Los barrios agrupados en torno a la "Olla de San Justo" o los "Barrios de la Olla", tal como se autodesignaron, presentaron a las autoridades municipales un petitorio que contenía ocho reclamos:

"1-Alimentos para todas las familias de desocupados: entrega semanal y distribución mediante asociaciones barriales y vecinales, centros de fomento o cooperadoras. 2-Cien mil puestos de trabajo en La Matanza (ocupación en obra pública –sin costo para los vecinos–; ocupación en el plan hídrico que contemple todos los arroyos; ocupación en infraestructura en los barrios). 3-Ampliación del subsidio por desocupación, que abarque a todos los casos por desocupación. 4-Boleto gratuito para los desocupados para ir a buscar trabajo. 5-Que se exceptúe al desocupado del pago de servicios e impuestos. 6-Que se implementen los cuatro turnos de seis horas en fábricas, empresas y grandes supermercados. 7-

Por la derogación de la Ley Provincial 11.685 que faculta a los intendentes a despedir personal como en Morón, Ituzaingó, San Miguel y otros municipios. 8-Contra la persecución de los dirigentes populares, y la represión de la luchas y las manifestaciones" (Boletín informativo de los "Barrios de la Olla", mayo de 1996).

Entre el 21 y el 25 de mayo de 1996, se montó un campamento alrededor de la "olla popular" donde permanecieron representantes de diferentes barrios siguiendo las alternativas de la negociación con autoridades municipales. El "acampe" se constituyó en un espacio de confluencia de diversos sectores políticos, religiosos y sindicales. Se recibieron adhesiones de concejales de fuerzas políticas, como el Frepaso y la Unión Cívica Radical, del obispado de San Justo, de la Confederación General del Trabajo (CGT)–regional Matanza–, del Congreso de Trabajadores Argentinos (CTA), de la CCC, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, de centros de estudiantes, de la Coordinadora de Unidad Barrial y del Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Matanza².

El 22 de mayo se convocó a una sesión del Honorable Concejo Deliberante para tratar, entre otros temas, el problema de la "desnutrición", según el reporte del diario local NCO: *"En el Concejo Deliberante se arribó a conclusiones satisfactorias y consensuadas en cuanto a los paliativos urgentes para la creciente marginalidad y desnutrición infantil que avanza en distintos puntos del distrito"*³. En ese marco, el bloque del Frepaso propuso la creación de una Comisión o Comité de Emergencia Social para coordinar la ayuda dispersa en forma de planes municipales y provinciales, en tanto que el bloque del Partido Justicialista votó a favor de una reunión de carácter urgente entre los representantes de los barrios y la presidenta de la Comisión de Acción Social para analizar las prioridades de ayuda a los más "necesitados".

Como resultado de esa sesión, se pactó para el día 23 de mayo una reunión entre los representantes de los barrios y la Comisión de Acción Social del Concejo Deliberante, y se giró a la Comisión de Interpretación y Reglamento el proyecto de ordenanza del bloque del Frepaso. En definitiva, se abrió un espacio de negociación sobre el pedido de "alimentos para las familias de desocupados",

² El MTD de La Matanza es una organización que se constituyó en el año 1995 con apoyo de sectores universitarios y de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Participó de la Olla de San Justo, pero con una postura propia; por eso, en las declaraciones figura en calidad de adherente. Este movimiento fue el único que posteriormente rechazó inscribir beneficiarios en programas de empleo. Para conocer sus alternativas y características se puede consultar Flores (2002).

se reconoció como interlocutores a los representantes barriales y como dependencias estatales de incumbencia, a las áreas de Acción Social.

El 23 de mayo a las 10, tal como quedó asentado en un despacho oficial, los integrantes de la Comisión de Acción Social del Honorable Concejo Deliberante se comprometieron a *"concertar una entrevista urgente con el Sr. Secretario de Acción Social a fin de evaluar la satisfacción y solución de los reclamos"*. Como contraparte, los representantes de los "Barrios de la Olla" se comprometieron a *"confeccionar un censo priorizando las familias con necesidades básicas insatisfechas"*.

El objeto de negociación se redefinió parcialmente durante la primera entrevista con autoridades municipales de la cartera de Acción Social: el eje de la concertación pasó de los alimentos en general a la cantidad de *bolsas alimentarias* que debería otorgar el gobierno local. En un boletín informativo, los "Barrios de la Olla" sostuvieron: *"En la reunión del Ejecutivo con los representantes de los barrios, el día 23 por la mañana y por la tarde se recibió una propuesta indigna de 25 bolsas de alimentos por barrio, cuando la necesidad superaba en varios casos las 300 bolsas"*. Finalmente, tras un día de deliberaciones, el 24 de mayo en horas de la noche se firmó un *"Acta de Compromiso de Acuerdo con Trece Barrios"*, cuyo texto reproduzco a continuación:

"San Justo, Mayo 24 de 1996

En San Justo, siendo las 22.20 horas y contando con la presencia del Señor Secretario de Acción social, Don Jorge Mottard, el Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Don Francisco Di Leva, y el Señor Concejal Don Horacio Correa junto con los Señores representantes de los siguientes Barrios: [...] se acuerda la entrega de cien (100) bolsones de comestibles a cada uno de los seis (6) barrios más grandes, y de cincuenta (50) bolsones a cada uno de los (7) barrios más chicos, lo cual hace un total de nueve mil quinientos (9500) kilos de mercadería comestible.-

Los responsables de cada Barrio se comprometen a elevar un informe de rendición de las familias que han recibido los bolsones, donde deberá constar Apellido y Nombres, tipo y número de documento, dirección y localidad.

A su vez cada responsable de cada barrio hará llegar a la Secretaría de Acción Social un censo de la población indigente".

³ Diario NCO, 23/5/96; p. 3.

A cambio de 9500 kilos de alimentos, los representantes barriales asumieron la obligación de confeccionar un registro con el nombre de las familias destinatarias de las bolsas alimentarias y de elaborar un censo de la *población indigente* de sus respectivos barrios. El proceso que culminó con la firma del citado acuerdo fue valorado como *"el primer eslabón en el camino a pelear por la dignidad de los trabajadores desocupados y sus familias"* (Boletín informativo de los "Barrios de la Olla", mayo de 1996).

El 29 de mayo de 1996, representantes de los "Barrios de la Olla" elevaron a la Secretaría de Acción Social de La Matanza los resultados del censo sobre "familias desocupadas". En el informe se destacaba: *"Son más de 3300 familias, a un promedio mínimo de 6 integrantes suman más de 20.000 vecinos en la más absoluta indigencia. Este censo se realizó solamente en un 70% de total por falta de tiempo y medios"*. Pocos días después, se inició un reclamo a las autoridades municipales en relación con la entrega regular y periódica de los *alimentos* acordados. El 5 de junio⁴ partió una manifestación desde la Rotonda de San Justo que arribó a la sede del gobierno municipal con el objetivo de entregar un petitorio a las autoridades locales por medio del cual se solicitaba la puesta en funcionamiento del Consejo de Emergencia Social y se afirmaba lo siguiente:

"(...) el 29 de mayo de 1996 entregamos un censo de más de 3000 familias de desocupados en la Secretaría de Acción Social y se nos volvió a meter en el perverso mecanismo de las promesas. Los niños desnutridos de nuestros barrios están muriendo, o son internados día a día. No escondan los alimentos (...). Que se llame a una sesión extraordinaria del H.C.D. ya!!!" (Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Matanza, Expediente 17728/96).

Una nueva manifestación tuvo lugar el 19 de junio, pero en esa oportunidad, agentes de la policía bonaerense bloquearon el acceso de los manifestantes al interior del edificio municipal.⁵ Una representante barrial declaró al diario *Crónica*: *"No se nos volvió a distribuir mercadería después de la entrega de los censos que nos reclamaron"*.⁶ En tanto, en una carta abierta a los *vecinos* se denunciaba:

⁴ Diarios *NCO*, 6/6/96 y *Página 12*, 6/6/96.

⁵ Diarios *Clarín*, 20/6/96; *Página 12*, 20/6/96, y *Crónica*, 19/6/96.

⁶ Diario *Crónica*, 20/6/96.

“Los censos que tuvimos que realizar los vecinos a fin de mayo con la promesa del gobierno de entregar mercadería, según los mismos, no son perfectos porque no somos censistas y no tenemos medios ni tiempo, es inmoral que nos ataquen por las fallas en los censo cuando el gobierno y la Secretaría de Acción Social tienen la obligación de hacerlos con el personal supuestamente idóneo que abunda en las oficinas municipales” (“Carta Abierta a los Vecinos de Nuestros Barrios”. Delegados de los 22 barrios de la Olla Popular, 6/7/96).

La disputa, entonces, se reorientó desde el reclamo inicial de alimentos hacia la demanda de la distribución regular de mercaderías, que había quedado suspendida a causa de que las autoridades municipales habían aducido fallas técnicas en el censo elaborado por los representantes barriales.

Legisladores nacionales del Frepaso y de la Unión Cívica Radical elegidos por el distrito de La Matanza procuraron poner en contacto a los representantes barriales con el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Así, el mismo 19 de junio por la tarde se produjo el encuentro entre Alberto Pierri, titular de la Cámara de Diputados, cuyas bases de poder se encontraban en el propio partido de La Matanza, y los representantes de los barrios.⁷ En esa instancia, el titular de la Cámara de Diputados se comprometió a resolver el *problema de la ayuda alimentaria* y a garantizar la distribución de mercaderías en forma quincenal entre quienes se empadronaran en registros habilitados a tal fin (Alderete y Gómez, 1999). De ese modo, las familias desocupadas empadronadas por los “Barrios de la Olla” recibieron una bolsa de alimentos cada quince días y 1 kilo de leche en polvo por semana por cada “niño desnutrido”.

Una vez alcanzado el acuerdo sobre la entrega periódica y regular de alimentos, el vínculo entre los “Barrios de la Olla” fue debilitándose progresivamente.⁸ De todas maneras, el presidente de la Junta Vecinal “7 de Mayo” del barrio Santa Emilia y actual coordinador nacional de la vertiente de “desocupados” de la CCC, en una extensa entrevista que mantuvimos en el año 2003, se refirió a ese proceso del siguiente modo:

“Fue la primera experiencia que hubo de los desocupados. El barrio nuestro empieza a organizar a los desocupados y ahí nos juntamos veintipico de barrios. Fue la primera movilización en la provincia de Buenos Aires de mil y pico de

⁷ *Idem*, 20/6/96.

⁸ No obstante, hacia 1997, el asentamiento Santa Emilia se convirtió nuevamente en el centro que aglutinó a diferentes barrios en torno a la disputa por *planes* o programas de empleo directo y transitorio; este tema se encuentra tratado pormenorizadamente en el siguiente capítulo.

desocupados, la primera movilización grande" (Juan Carlos, 54 años, dirigente de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia y actual coordinador nacional de los desocupados de la CCC).

Es verdad que la movilización protagonizada por los "Barrios de la Olla" ha sido una de las primeras que presentó públicamente el problema de la desocupación, pero, por cierto, no la única. Por esa misma época, el barrio El Campo impulsó la conformación de una "Red de Barrios" junto con sacerdotes, militantes de CEBs y dirigentes gremiales de SUTEBA y ATE. La acción inaugural de la mencionada "Red" consistió en la organización de un censo en 1995 con el propósito de conocer los *problemas de trabajo, alimentarios y sanitarios* que aquejaban a los barrios agrupados:

"Nosotros armamos la Red de Barrios en el 95. Nos habíamos juntado Luis, yo y había gente que militaba en el Frepaso, y también en algunos gremios, sobre todo ATE y SUTEBA. Éramos cinco o seis en la primera reunión y veíamos tres problemas: el tema del trabajo, de la alimentación y de la salud, medicamentos, sobre todo, porque la gente no tenía laburo. Dijimos: 'Hagamos una asamblea invitando a los barrios que conocemos'. No se trabajaba todavía unidos, pero a los que conocemos es porque están en las comunidades... 'Bueno, a los que conocemos invitémoslos a la asamblea en el Patronato'. Se hizo la primera asamblea. Ahí un muchacho que es maestro, que en esa época era concejal del Frepaso y de SUTEBA, dijo: 'Yo llevo una fichita que sea muy sencilla y armamos la discusión, y planteamos hacer un censo'. Entonces hicimos una encuesta muy chiquita, de media hojita: nombre y apellido, la dirección, cuántos son de familia y si trabajaba alguno de la familia, porque a veces se da que están los padres, los abuelos y los nietos. Eran más o menos dieciséis barrios; dijimos de hacer la encuesta y la gente se prendió" (José, 46 años, ex seminarista salesiano, miembro de la FTV).

Con el desarrollo del censo se obtuvieron los siguientes resultados:

"De 5000 encuestas que se habían logrado —que no era todo el barrio, era a lo que se podía llegar con el grupo al que se pertenecía; por ejemplo, yo pertenecía a una comunidad que éramos quince, veinte, y llegamos a cubrir cien familias; no cubrimos todo el barrio-, de 5000 familias de esos dieciséis barrios, 3500 no tenían trabajo, de los grupos familiares, porque por ahí viven cuatro familias y no había ninguno" (José, 46 años, ex seminarista salesiano, miembro de la FTV).

Los resultados se tabularon, se ordenaron en carpetas y se trataron en una asamblea en la cual se decidió organizar una movilización a la Secretaría de

Desarrollo Social de la Nación para reclamar alimentos para las "familias desocupadas":

"A través de los salesianos, a través de José, nos llegó la información que se iba a censar por el tema de que se quería pedir alimento... bah, en realidad se pedía trabajo. Queríamos saber más o menos cuánta población había desocupada para pedir trabajo; y bueno, hasta que apareciera el trabajo se pedía alimento, porque lo que se veía en la gente que cada vez el deterioro era más grande y la gente ya ni tenía para comer. Te estoy hablando del 95" (Selva, 36 años, ex integrante de una comunidad religiosa de inserción, miembro actual de la FTV).

"Después de esa encuesta el 5 ó 6 de septiembre del 95 vinimos cerca de 1000 personas y pedimos una entrevista con Amadeo. Subimos catorce. Nos dicen que estaba reunido y nosotros dijimos: 'No se hagan problema que lo esperamos abajo'. Ese día me acuerdo que había una reunión de todos los ministros y secretarios de Estado en Olivos. Nos quedamos todos en planta baja y a las dos horas nos vienen a buscar para decimos que nos recibía. Él nos dijo: 'Miren, no se hagan problema que yo les voy a mandar un camión de no sé cuántas toneladas de alimentos, pero hay un trato entre la Nación y la provincia de Buenos Aires: Acción Social de la Nación atiende todo el país menos la provincia de Buenos Aires. Así que los vamos a poner en contacto con la Sra. de Duhalde'. Y bueno, nos puso en contacto" (José, 46 años, ex seminarista salesiano, miembro de la FTV).

La manifestación en la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación, en septiembre de 1995, incluyó la ocupación de la planta baja del edificio en espera de una entrevista con el titular de esa dependencia. Una comitiva fue atendida por el secretario de Desarrollo Social, quien se comprometió a enviar un camión con mercaderías y desplazó el ámbito de futuras negociaciones desde la órbita del gobierno nacional hacia la del provincial. Semanas después, el reclamo de la "Red de Barrios" fue atendido por la Sra. Hilda González de Duhalde, en aquel año, titular del Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano, y esposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires. En esa instancia se acordó la entrega periódica de mercaderías y se reconoció como interlocutores válidos de la "Red de Barrios" al grupo de sacerdotes que la integraban:

"Tuvimos una reunión con la Chiche Duhalde en una Fundación que tiene en Lomas de Zamora. Ahí fuimos los tres curas y le llevamos las encuestas, todo, y ella se comprometió, hasta que terminara su marido la gobernación, a mandarnos 10.000 kilos de comida todos los meses. Cumplió. Es más, le dijimos: 'Hay que firmar', y dijo: 'Mi palabra basta'. Bueno, con eso que llegaba al Patronato lo que

nosotros logramos fue ampliar la Red: de dieciséis barrios pasamos... hoy ya son más de setenta... pero de dieciséis ahí, en ese momento, pasamos a cerca de cuarenta. Fuimos ampliando porque la gente preguntaba, venía, y nosotros decíamos: 'Bueno, la idea que esto sirva para organizarnos' (José, ex sacerdote, miembro actual de la FTV).

En definitiva, la "Red de Barrios" impulsó iniciativas en torno al problema cuyo eje era la demanda de alimentos. Se logró el reconocimiento estatal del reclamo, que se tradujo en el envío mensual de 10.000 kilos de mercadería por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. A diferencia de los Barrios de la Olla, esta "Red" ejerció la gestión colectiva de la distribución mensual de los alimentos.⁹

La descripción de ambos procesos de movilización pone de relieve una serie de aspectos comunes que serán analizados en el resto del capítulo. Desde una mirada global, cabe preguntarse por qué los barrios que impulsaron ambas iniciativas, como Santa Emilia y El Campo, fueron aquellos conformados en el marco de ocupaciones de tierras durante la década del 80; qué particularidades presentaban las experiencias sindicales y religiosas que confluyeron en ambos reclamos, y por qué se encuadró la disputa por la desocupación en el problema de la desnutrición infantil y el hambre. La respuesta a cada una de estas preguntas ayudará a comprender cómo se configuró un espacio social de disputa, demanda y negociación en torno a la desocupación descentrado del espacio laboral y constituido desde la relación con el Estado, especialmente desde las áreas de Desarrollo Social o Acción Social.

RESTITUIR LA HISTORIA, ACTUAR DESDE EXPERIENCIAS

Tierra y trabajo: las ocupaciones de tierras en la década del 80

Los barrios Santa Emilia, Tierra Nuestra, 24 de Enero, 17 de Noviembre y El Futuro se formaron en el marco de un proceso de ocupación de tierras que se inició en 1983 sobre una de las márgenes de la ruta nacional 3, a 27 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en una zona en la que convergen las localidades de

Gregorio de Laferrere, Rafael Castillo y González Catán. En esas tierras habían funcionado hornos de fabricación de ladrillos, estancias y quintas, y fueron funcionarios municipales quienes propiciaron inicialmente esas ocupaciones:

"Yo vine a ocupar el barrio Santa Emilia en el 83... Comentaban que estaban ocupando. Yo vivía en San Justo, sobre la calle Arieta, y una tarde me fui a ver a María Eva y ella me dijo la verdad, me contó que era una ocupación. Ella mandaba para acá y todos los que ocupamos nos conocimos acá. Acá se había hecho un núcleo de atorrantes, que me peleaba todos los días con esos atorrantes, porque tenías que pagar, pagar y pagar para todo. Como yo me hice respetar de entrada, a mí no me jodieron más, pero jodieron a otros" (Juan Carlos, 54 años, presidente de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia y actual coordinador nacional de los desocupados de la CCC).

"Yo estaba trabajando, estaba en un trabajo de albañilería y me dicen: 'Ahí en el 25 están dando terrenos'. Me dicen que vaya a la Municipalidad, que estaban entregando terrenos. Entonces me voy a la Secretaría, y estaba la gorda María Eva y dice: 'Andá, allá está una comisión, andá y pedí allá'. Eran parientes de María Eva, estaban cargados de terrenos. Bueno, vengo acá y me dan. Yo vengo como agarraban todos, ponían una estaquita y ya estaba el terreno. Me dieron otro lado, más para allá... Al otro día vengo y también estaba todo ocupado. Entonces quedaba esta parte, y había un pariente de María Eva que también lucraba, vendía casillas con paneles de camiones y de coches —el tipo vendía casillas para ocupar el terreno y lucraba con eso—, entonces me dice: 'Venite tal día que vamos a tomar allá'. Fuimos una banda. Decía: 'De acá para acá, vos', y así. Claro, agarrando los terrenos... Y así fue. Y digo: 'De acá no me mueve nadie, acá me quedo, con cuatro chapas, pero me quedo'" (Ramón, 58 años, dirigente de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia, actual integrante de la CCC).

Se ocuparon las tierras desde marcos de relaciones familiares, laborales y vecinales, y a partir de la mediación de autoridades municipales. En este sentido, funcionarios estatales del gobierno local controlaron los alcances del sistema de acceso a la tierra, asignando y delimitando predios.

La principal reivindicación impulsada por las organizaciones conformadas en esos barrios fue el acceso a la titularidad de la tierra. Desde la relación con el Estado, se elaboraron proyectos para la sanción de una ley de expropiación:

"Nosotros nos metimos adentro de una comisión que había en el barrio, nos metimos adentro nomás para desarticular. Entramos en una comisión que era de obras: estaba a cargo de organizar los terrenos, medir, qué sé yo... Porque ellos

⁹ Las particularidades de cada agrupamiento de barrios respecto de este tema son analizadas en el capítulo III.

querían armar una cooperativa, mutual, y nosotros sabíamos que el tema de las cooperativas ya había experiencias de que habían fracasado. Ahí arrancamos con la ley de expropiación, o sea que el Estado compre a los dueños y nos venda a nosotros. Por suerte ganamos esa postura en la asamblea. Elegimos delegado por manzana, y ya en el 87 ellos desaparecieron del barrio. A nosotros nos avivó el gordo Juan Carlos, y ahí ya armamos una comisión paralela y de ahí salió la junta vecinal. Consultamos a un abogado y él nos asesoró que hiciéramos un proyecto de expropiación. Nos aviva bien, digamos, nos asesoraba bien el abogado” (Ramón, 58 años, dirigente de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia, actual integrante de la CCC).

Con el proyecto de ley de expropiación no sólo se intentaba acceder a la titularidad de la tierra sino también desplazar a aquellos sectores políticos que proponían la formación de cooperativas y mutuales para la compra de los terrenos. En el barrio Santa Emilia, la propuesta de expropiación se formuló con el asesoramiento jurídico de abogados ligados por afinidad política con los representantes de la Junta Vecinal, mientras que en otros, como Tierra Nuestra, fueron funcionarios del Ente del Conurbano Bonaerense quienes presentaron la iniciativa ante un grupo de personas que venía participando en la implementación local de un programa estatal de asistencia alimentaria.

La reivindicación de la titularidad de los terrenos generó conexiones cotidianas entre los representantes de las organizaciones barriales y funcionarios estatales, que incluyeron el recorrido, casi diario, por dependencias gubernamentales:

“Fuimos tantas veces a La Plata, nos hemos peleado con tantos, pero también hemos encontrado funcionarios que realmente nos han dado una buena mano. En la Legislatura recorríamos todos los espacios, todos los legisladores... Nos íbamos en colectivo, nos tomábamos La Costera Criolla en la rotonda de San Justo, con todas las carpetas. Salíamos a eso de las seis o las siete de la mañana y volvíamos a eso de las once de la noche. Continuamente era eso así” (Ramón, 58 años, dirigente de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia, actual integrante de la CCC).

“Yo era delegada de mi manzana y lo que más me gustaba era la lucha por la tierra. Entré más por eso, por la lucha por las tierras, eso me interesaba un montón. Fue largo, muy sacrificado, pero a su vez dio frutos viajar a La Plata: tenías que estar, golpear puertas, ir de la puerta de los peronistas, los justicialistas, los radicales, y golpear y golpear y esperar, y que te tenían que atender... Pero dio resultados, fue muy bueno” (Dora, 54 años, integrante de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia y miembro de la CCC).

"El tema de las tierras costó sacrificio porque acá ella (se refiere a Violeta) ponía el salario del marido para el viaje a La Plata; y no es que viajábamos a La Plata una vez por semana o una vez por mes, viajábamos dos o tres veces por semana, y es un costo económico. Ir a La Plata implicaba –disculpame la palabra– cagarte de hambre, cagarte de frío, cagarte de sed en verano; ir con el boleto justo porque no se podía gastar una moneda de más, ni para el agua con esos calores... Vos debés conocer La Plata y sabés lo que es en el invierno ni siquiera tener para comprarte un pocillo de café. Y volver a la noche, a veces con frustraciones, porque ibas y no obtenías nada... Y eso, ¿viste?, te lleva a valorar el trabajo que hiciste porque fue un sacrificio enorme (...)" (Mauricio, 46 años, dirigente de la sociedad de fomento del barrio Tierra Nuestra, integrante de la FTV).

Un grupo reducido de pobladores asumió la tarea cotidiana de seguir el proceso global que condujo a la sanción de la ley de expropiación. De acuerdo con los testimonios citados, esa tarea se definía como *sacrificada y costosa*. Implicaba viajar dos o tres veces por semana a la ciudad de La Plata y permanecer allí durante todo el día, comiendo y bebiendo muy poco. Como los viajes eran costosos, en el barrio Santa Emilia se formó una "Subcomisión de Damas" que se dedicaba, entre otras cosas, a recaudar fondos (rifas, bailes, bingos, etc.) para costear los gastos de la tramitación vinculada con la "tierra", la cual estaba, sobre todo, en manos de los varones. En el transcurso de esos años se generó un vínculo cotidiano entre los representantes barriales y los agentes estatales. En otros términos, quienes viajaban a La Plata desarrollaron habilidades para manejar relaciones con el Estado, como ordenar y encarpetar la documentación, solicitar audiencias con autoridades gubernamentales y legisladores, participar en reuniones con personas de diferente rango y establecer lazos de proximidad con algunos funcionarios públicos.

Además de esas acciones cotidianas, se organizaron movilizaciones colectivas a dependencias gubernamentales para "forzar", por medio de la acción directa, el compromiso legislativo para la sanción de la ley de expropiación:

"Tomamos el Parlamento. Fuimos todos los barrios. Salimos de madrugada y estuvimos allá a las nueve de la mañana. Y de a poquito, de a poquito, fuimos entrando donde estaban todos los senadores y diputados: 'Acá aprueban o revientan'..." (Juan Carlos, 54 años, dirigente de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia y actual coordinador nacional de los desocupados de la CCC).

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó la mencionada ley en 1992. El Estado provincial compró las tierras con una partida presupuestaria del Ente del Conurbano Bonaerense¹⁰ y en un acto celebrado en septiembre de 1995, en el barrio Santa Emilia, el Presidente de la Nación entregó los títulos de propiedad a los "ocupantes". Después de una serie de negociaciones e intercambios sobre el valor de la tierra ocupada, finalmente el gobierno provincial vendió a 1 peso el metro cuadrado de terreno, con la posibilidad de pagar el precio total en cuotas extensibles a veinte años.

Junto con la reivindicación de la titularidad de la tierra, se generaron distintas acciones para transformar las *ocupaciones* en *barrios*; las principales giraron en torno a la extensión del tendido eléctrico, la perforación del suelo para la obtención de agua, la apertura de calles, el pedido de circulación de transporte público de pasajeros, la limpieza de arroyos, la recolección de residuos, y la construcción y equipamiento de escuelas y centros sanitarios. En muchos casos se trató de acciones basadas en el trabajo comunitario y la reciprocidad vecinal, mientras que en otros se iniciaron procesos de demanda al Estado y a empresas de servicios (transporte público o suministro eléctrico), que incluyeron tramitaciones (petitorios, cartas, censos, encuestas, etc.) y medidas de fuerza directa (manifestaciones a empresas de servicios públicos y a dependencias gubernamentales, cortes de la ruta nacional 3, etc.).

El Campo, 22 de Febrero y 17 de Abril fueron otros de los barrios que se conformaron en un proceso de ocupación de tierras a mediados de la década del 80, en una zona de La Matanza en la que confluían las localidades de Isidro Casanova, Ciudad Evita y Gregorio de Laferrere.¹¹ Esas ocupaciones fueron motorizadas por integrantes de las CEBs que mantenían vínculos con los protagonistas de las primeras *tomas de tierra* en la zona sur del Gran Buenos Aires en 1981¹² y con militantes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj). Durante la

¹⁰ El Ente del Conurbano Bonaerense recibía su presupuesto del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense. Este fondo destinado prioritariamente a programas sociales, fue creado en 1992 por la Ley nacional 24.073/92 de Reforma Impositiva. Se formó con el 10% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, girado directa y automáticamente para ser ejecutado y administrado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires (Grassi, 2003).

¹¹ Para esta descripción me baso en testimonios recogidos en mi trabajo de campo, el estudio de Merklen (1991) y el diario *Clarín*, 14/2/86.

¹² Diversas investigaciones señalan que integrantes de Comunidades Eclesiales de Base impulsaron las primeras "tomas de tierra" entre los años 1981 y 1982 en la zona sur del Gran Buenos Aires, específicamente en una franja fronteriza entre los partidos de Quilmes y Almirante Brown, que comprende las localidades de San Francisco Solano y Rafael Calzada (Aristizábal e

madrugada del 6 de enero de 1986, ciento ochenta familias ocuparon un predio de propiedad estatal y, con la ayuda técnica del Serpaj, asignaron y delimitaron las extensiones de los terrenos. Integrantes de las CEBs se habían contactado con ellas cuando desarrollaron tareas de asistencia a causa de dos inundaciones sufridas por el barrio La Primera en mayo y noviembre de 1985. Varias personas fueron reubicadas en predios cercanos pertenecientes a la Comisión Municipal de la Vivienda, y esto dio origen a los barrios 22 de Febrero y 17 de Abril. La organización de esos tres asentamientos se basaba en delegados por manzana, articulados en un cuerpo de delegados que representaba a todo el barrio. Además, se formaron comisiones especiales que se encargaron de las tramitaciones para la obtención de la titularidad de la tierra y de otras demandas, como la construcción de una escuela primaria, un jardín maternal y un centro de salud.

En líneas generales, este proceso de ocupación difería del que describí previamente en cuanto a la modalidad de acceso a la tierra, puesto que en él se distinguía un proyecto de planificación colectiva anterior, producto de iniciativas de miembros de las CEBs que contaban con el asesoramiento de personas y organizaciones experimentadas en el tema. Por otra parte, si bien la reivindicación central era la titularidad de la tierra, en el caso del barrio El Campo, se formó una cooperativa que ofició de mediadora entre el Estado y los "ocupantes".

Más allá de las diferencias en el origen de una y otra ocupación, me interesa detenerme sobre el hecho de que tanto el barrio Santa Emilia como El Campo impulsaron, prácticamente al mismo tiempo, diversas acciones cuyo eje fue el problema de la desocupación. ¿Se trató simplemente del reemplazo de la reivindicación de la tierra por la del trabajo? Considero que el proceso es más complejo y que la reflexión se torna infructuosa si se procura establecer cómo se reemplazó una demanda por otra. Desde mi punto de vista, lo interesante aquí es cómo se utilizó una modalidad asociada a la demanda de la tierra para incorporar en ella la demanda por *trabajo*. Esta modalidad se distingue por:

Izaguirre, 1988; Merklen, 1991; Cravino, 1998). Es interesante subrayar que el Movimiento de Trabajadores de Desocupados de Solano incluye familias de los barrios que surgieron tras esas ocupaciones. Específicamente, en agosto de 1997 se constituyó el MTD en la parroquia del barrio San Martín (MTD de Solano y Colectivo Situaciones, 2002).

- La capacidad de generar iniciativas en torno a la provisión de diversos bienes (tierra, luz eléctrica, agua, escuelas, centros sanitarios, etc.), que requieren la intervención del Estado.
- La ocupación de tierras o espacios públicos en general (dependencias gubernamentales, plazas, rutas, etc.) como una forma de presentar públicamente demandas y forzar el compromiso de funcionarios gubernamentales.
- Habilidades aprendidas respecto de los mecanismos de funcionamiento cotidiano de las dependencias estatales: tecnologías de presentación de demandas (encuestas, censos, cartas, petitorios, etc.), modos de circulación de expedientes, tipos de trámites, y convenciones para tratar con legisladores o autoridades gubernamentales.
- La trama organizativa basadas en juntas vecinales, cooperativas, delegados por manzana y cuerpos de delegados por barrio.
- El entrenamiento para articular a diferentes sectores sociales alrededor de un eje de demanda.

En suma, se trata de una modalidad configurada en torno al Estado como interlocutor principal y en la cual se destacan procesos que incorporaron medidas de fuerza directa e instancias de negociación y concertación. Fue a partir de esa modalidad que la experiencia de las ocupaciones de tierras contribuyó a formar un espacio social de disputa cuyo eje fue la desocupación. Veremos entonces cómo esta modalidad se fue articulando con otras experiencias, como prácticas religiosas y estrategias sindicales.

***“Caminar por el barrio con la palabra de Dios”*: las particularidades de las CEBs**

En los estudios académicos sobre religión no existe un consenso generalizado sobre las características distintivas de las CEBs. Entre los pocos acuerdos, se sostiene que se trata de grupos pequeños, de entre diez y treinta personas, cuyos miembros se reúnen periódicamente para leer y comentar la Biblia. Se definen como “base” en referencia a la estructura jerárquica de la institución eclesial, así como también a la “pirámide social”, puesto que mayoritariamente están compuestas por personas pobres de barrios, pueblos o aldeas (Levine y Mainwaring, 2001).

En el caso de La Matanza, hacia fines de la década del 70 se formaron doce CEBs en barrios obreros poblados desde mediados de los años 50 y situados dentro de una franja fronteriza entre las localidades de Isidro Casanova y Gregorio de Laferrere. La organización de esas comunidades fue el resultado de iniciativas de sacerdotes y grupos juveniles salesianos¹³ congregados en el Patronato, un edificio fundado como Patronato español en 1911:

"Luis estaba en los grupos juveniles del Patronato con otra gente; Lolo también estaba. Había un grupo de gente grande, de jóvenes, que eran jóvenes de grupos juveniles, y a él lo invitan también a ayudar, a coordinar las comunidades de base, porque se trabajaba mucho con la gente de Quilmes. La gente de Quilmes era quizás la que hacía punta o la que tenía mayor experiencia, sobre todo porque era muy acompañada por el Obispo, que era Novak en ese momento, y él avalaba mucho eso. Acá, como no se sabía bien qué iba a hacer Buffano, ellos armaban y no decían nada, aunque Buffano después acompañó e hizo un proceso muy interesante; pero no había tal vez oficializado la cosa" (José, 46 años, ex seminarista salesiano, coordinador de la escuela de formación política de la FTV).

La formación de las doce comunidades se relaciona con la influencia que recibieron los jóvenes salesianos de integrantes de las CEBs ya consolidadas en el distrito de Quilmes y, en cierto modo, con una política permisiva hacia esa iniciativa de Monseñor Rodolfo Buffano, quien se desempeñaba como Obispo de La Matanza. No obstante, la formación de CEBs se remonta a las orientaciones emanadas del Segundo Concilio Vaticano (1962-1965) y de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano celebrada en Medellín (Colombia) en 1968. Dichas orientaciones pueden sintetizarse en tres puntos: incentivar la participación de los laicos, promover la justicia (y denunciar la injusticia) y lograr una evangelización más eficaz entre las clases populares (Levine y Mainwaring, 2001).

¹³ La figura emblemática de los salesianos es Juan Bosco, nacido el 16 de agosto de 1815 en una familia campesina italiana y fallecido el 31 de enero de 1888. Su labor se desarrolló en la ciudad de Turín, con jóvenes huérfanos o desempleados a los que procuraba colocar como aprendices de algún maestro. Con el correr del tiempo, creó el "oratorio", dedicado a actividades religiosas y recreativas, y organizó talleres de oficios (zapatería, sastrería, encuadernación de libros, carpintería, imprenta y cerrajería). El 26 de enero de 1854, estos jóvenes comenzaron a ser denominados salesianos por Juan Bosco, en homenaje a San Francisco de Sales. Una historia de los salesianos reconstruida por seguidores de la orden puede consultarse en Bosco, Teresio (1986). En el ámbito académico, se puede consultar el trabajo de Delrio (2001) sobre las misiones salesianas en la Patagonia y las tensiones en la construcción del Estado-nación argentino.

Si bien el lema "opción preferencial por los pobres" se difundió a partir de la reunión de obispos que tuvo lugar en la ciudad de Puebla en 1979, las prácticas de "inserción" comenzaron a registrarse al menos desde la década del 60. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, en 1965 se iniciaron experiencias de "inserción" en villas de emergencia (Carlos Mugica en Retiro y otros tantos en Lugano, Bajo Flores, Chacarita y Villa Soldati), que desembocaron en la fundación de un "equipo pastoral" conocido, con el correr del tiempo, como movimiento de "curas villeros". Un documento oficial de la Iglesia de Buenos Aires, que data del año 1969, autorizó un trabajo pastoral especialmente adaptado a los "pobres" y a los "débiles", orientado a la promoción de una actitud de servicio y pobreza compartida, y a la formación de equipos pastorales que vivieran del trabajo de sus manos y en espacios humildes pero decorosos (Vernazza, 1989). Por esa época también se conformó el "Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo", cuyo eje fue la denuncia de las "causas estructurales de la injusticia", mientras en el orden teológico se divulgaron las premisas de la "Teología de la Liberación". En definitiva, la política de formación de CEBs en La Matanza recuperó retazos de diversas corrientes configuradas en el interior de la Iglesia Católica desde los años 60 y, al mismo tiempo, fue modelada por principios particulares de la orden salesiana.¹⁴

A partir de mis registros de campo en la *Comunidad San Juan Bosco* del barrio San Alfonso, resulta posible puntualizar una serie de prácticas que identificaban a esta experiencia.

¹⁴ Las particularidades de estos lineamientos político-religiosos son sumamente complejas y exceden los propósitos de esta tesis, así como también las capacidades explicativas de quien la escribe. Se pueden consultar escritos de los propios actores, como el trabajo de Vernazza (1989), sobre las características del movimiento de "curas villeros" desde su constitución en la década del 60 hasta el año 1987, y sobre los efectos de las posiciones asumidas por los "Sacerdotes del Tercer Mundo" en torno a la denuncia de las condiciones estructurales de injusticia y la relación entre la *fuera moral de la verdad* y la legitimación de la violencia. Se puede consultar también la recopilación de documentos publicada con el título *Los sacerdotes para el Tercer Mundo y la Actualidad Nacional* (1973), que incluye cartas, informes y documentos que versan sobre temas tales como "las causas estructurales de la injusticia y la definición de un nuevo proyecto social"; "los síntomas políticos, económicos, sociales y culturales de la dependencia y los alcances de un proyecto de liberación sostenido en la ética del hombre"; "el socialismo nacional y latinoamericano y la participación de los cristianos en ese proyecto"; o la posición de los sacerdotes frente al "retorno del Graí. Perón en 1973". Entre los trabajos de corte académico se encuentra el de Anderlini (2004), que analiza la "teología de la liberación" como alternativa crítica a la modernidad, o el de Woods (2005), que se centra en la relación entre la Iglesia, las organizaciones de tierra y vivienda, y el gobierno local del distrito de Quilmes, con el objetivo de mostrar efectos de "despolitización" de las intervenciones sociales de la institución religiosa.

El conjunto de los testimonios rememoraba las acciones de sacerdotes e integrantes de los grupos juveniles salesianos en la organización de las comunidades:

"Mi hijo, que ya era grande, doce años, tenía que prepararse para la comunión. Entonces vinieron las legionarias; en ese tiempo andaban mucho las legionarias por el barrio, ¿sabés lo que son las legionarias? Son las mujeres que llevan la Virgen a cada casa, a visitar cada casa del barrio; tres días la dejaban... Y me preguntaron si quería dejar a la Virgen en mi casa y les dije que sí... Después que dejaron la Virgen, me invitaron a la iglesia del Patronato... Mirá que queda a ocho cuadras y yo no la conocía... Y ahí empecé. Me gustaron mucho los sacerdotes, porque los sacerdotes venían a visitarte. Era otra cosa estar con ellos, conversabas como con cualquier persona; en cambio, vas a la parroquia de Casanova y el sacerdote está allá, y te está hablando de arriba. Y bueno, ahí empecé en la comunidad... Y ahí empezamos las comunidades. Me habló Luis y el sacerdote, el padre Fernando, si podíamos hacer la reunión en casa para invitar a los vecinos, porque no teníamos iglesia. Entonces le hablé a mi marido y 'no, no'... Después vino Luis, Luis D'Elía, y habló con mi marido: '¿Qué le parece, Don X, para hacer una reunión acá, de la iglesia, de las comunidades?'. Y mi marido le dijo: 'Pero mucho tiempo no'. 'No, una hora', le dijo Luis. No se olvida nunca mi marido porque ahora no es una hora. Y así fue que se vino el padre, nos juntamos con los vecinos, leíamos la palabra de Dios... Una vez por semana, todos los viernes; era sagrado el día. Todos los viernes nos juntábamos a las siete, ocho de la noche en casa. Después ya dijimos que no, 'sólo en casa no, vamos casa por casa'. Y así empezamos. Íbamos a una casa, íbamos a otra... Y así empezamos a caminar por el barrio con la palabra de Dios" (Nilda, 63 años, miembro de una Comunidad Eclesial de Base, integrante de la FTV, barrio San Alfonso).

"Con mi tía iba a la iglesia de Casanova, los días domingo. Después, con los años, no sé quién... no sé quién me dijo del Patronato. Entonces ya ahí empecé a ir al Patronato. Se anotaron los dos chicos más grandes en exploradores, estuvieron en exploradores. Después me enteré de San Juan Bosco... Y bueno, ya Cristian tomó acá la confirmación, y Florencia ya hizo la catequesis acá, y yo empecé a trabajar en la comunidad... Lo que más me llamaba la atención era la manera en que trabajaban, porque yo conocía la catequesis y todo, pero de muy diferente manera, de la gente que tiene poder y plata, y acá no" (Nora, 55 años, integrante de una Comunidad Eclesial de Base, integrante de la FTV, barrio San Alfonso).

Misas, procesiones y cursos de catequesis se convirtieron en espacios de convocatoria para la conformación de CEBs. Fundamentalmente, se propició un proceso de descentralización de actividades desde la parroquia (el Patronato) hacia el barrio, a partir de la organización de grupos de vecinos, sobre todo

mujeres, que funcionaban en viviendas particulares con el objetivo inicial de leer y comentar la Biblia:

"Empezamos con Luis. Él dirigía el grupo de jóvenes de las comunidades. Nos daban las hojitas, era una hojita con la palabra de Dios. Todos los meses nos traían esa hojita, era la parte del Evangelio y estaba todo así explicado. Era para el pueblo. Eso me interesaba a mí, que era para el pueblo" (Nilda, 63 años, miembro de una Comunidad Eclesial de Base, integrante de la FTV, barrio San Alfonso).

Los coordinadores dirigían la lectura de la Biblia a partir de materiales de divulgación elaborados por grupos juveniles, los cuales, desde la óptica de algunos entrevistados, explicaban el "Evangelio al pueblo".

En los intercambios grupales también se trataban experiencias de vida más amplias:

"Las primeras tareas que tuve en la comunidad fue... me anoté en el grupo bíblico, el tema de leer la Biblia. Veníamos un día a la semana, un día jueves creo que era. Bueno, veníamos todos, se leía la Biblia, se discernía, cada una ponía lo suyo" (Nora, 55 años, miembro de una Comunidad Eclesial de Base, integrante de la FTV, barrio San Alfonso).

"Cada casa es un mundo: yo tengo mi realidad, vos tenés tu realidad, otro tiene su realidad... Entonces Jesús te está hablando a vos y a mí también, de otra forma, y al otro de otra forma, a través de un hijo, de la madre, del padre, de un hermano, de un vecino... Porque cuántas veces tenemos un roce con un vecino y por ahí Jesús te está hablando por este vecino, por ese hermano" (Nilda, 63 años, miembro de una Comunidad Eclesial de Base, integrante de la FTV, barrio San Alfonso).

Desde el texto bíblico, entonces, se recuperaban y sometían a reflexión situaciones personales, familiares y barriales. En ese movimiento, se resignificaban tanto el mensaje del "Evangelio" como las propias experiencias de vida.

Uno de los propósitos explícitos de aquellos que promocionaban la formación de CEBs era la limitación de la estructura de organización jerárquica de la Iglesia:

"Los curas que estaban son una tendencia de la Teología de la Liberación. Ellos impulsaban mucho las Comunidades Eclesiales de Base. ¿Cuál era la novedad?"

Que en vez de centrarse en lo piramidal de la Iglesia, en los curas, qué sé yo... Era en los laicos y en la palabra de Dios. Lo central eran los laicos, el protagonismo de los laicos, y la palabra de Dios y los sacerdotes o los religiosos hacían un proceso de acompañamiento de ese caminar” (José, 46 años, ex seminarista salesiano, coordinador de la escuela de formación política de la FTV).

Se ponían en tensión las posiciones jerárquicas subrayando que la función de los sacerdotes era “acompañar” o “testificar” el acercamiento de la *palabra de Dios al pueblo* a partir del vínculo directo y próximo con los “pobres”.

En el caso de La Matanza, los sacerdotes que impulsaron las CEBs ejercían la práctica de “inserción”, es decir, la mayoría de ellos provenían de familias de mayores recursos de Capital Federal, habían estudiado en el seminario salesiano del barrio de Almagro y habían “optado por los pobres”. Algunos habían participado, a fines de la década del 60, en experiencias similares en otras zonas del Gran Buenos Aires, como Wilde. Otros, los más jóvenes, habían desarrollado acciones con “chicos y jóvenes en situación de calle” en Plaza Miserere, en articulación con el Serpaj. Todos residían en una pequeña casilla en una villa de emergencia frente al edificio del Patronato, recorrían los barrios en bicicleta, se sentaban en las esquinas con grupos de jóvenes y tocaban la guitarra.

Esas prácticas de los sacerdotes eran interpretadas por las mujeres de la *comunidad* como un signo de “humildad”:

“Los invitabas para que vengan a tu casa y ellos venían, tomaban mate... Tenías un guiso para comer, lo comían” (Nilda, 63 años, miembro de una Comunidad Eclesial de Base, integrante de la FTV, barrio San Alfonso).

“Todos los curas han venido a mi casa, y si había para comer, ahí nomás se sentaban y comían. ‘No tenés vergüenza, uh... Es un cura, ¿qué le sirvo?’... Si hay sólo para comer pan, ellos comen eso” (Nora, 55 años, miembro de una Comunidad Eclesial de Base, integrante de la FTV, barrio San Alfonso).

Se acentuaban las interacciones domésticas y cotidianas, las palabras sencillas y la visita de los sacerdotes a todas las casas del barrio.

Las particularidades de los procesos de toma de decisión también contribuían a poner en cuestión la organización jerárquica:

"Lo bueno de las comunidades es que el sacerdote no manda, manda la comunidad. Porque vos viste que en las parroquias el sacerdote es el que manda y da órdenes; en cambio, en la comunidad no, el sacerdote es uno más de nosotros, porque a nosotros nos enseñaron desde el principio así" (Nilda, 63 años, miembro de una Comunidad Eclesial de Base, integrante de la FTV, barrio San Alfonso).

La forma organizativa de las CEBs procuraba revertir la posición de "obediencia" de los feligreses y de "mando" de los sacerdotes, incentivando la participación de los laicos en la toma de decisiones. En este sentido, se elegía un coordinador por cada comunidad, y éste se integraba en un Consejo Pastoral que reunía a los representantes de las doce CEBs de la zona y contaba también con la presencia de uno de los sacerdotes del Patronato.

Un número importante de actividades diarias de las CEBs, al menos en el caso de San Alfonso, estaban pautadas por el dictado de catequesis y la preparación de celebraciones religiosas: la representación del pesebre en Navidad, los viajes al interior del país para conocer santuarios, las procesiones, y los rezos, las oraciones y los cánticos insumían gran parte de las energías de las mujeres de la *comunidad*.

Otra actividad frecuente era la "visita" a las familias del barrio:

"Cuando entrás en una comunidad, que ya vas a visitar a uno, que lo vas a ver al otro, que el otro ya te llama, y vas conociendo a los vecinos y sabes cómo se llaman y qué problemas tienen. Eso es algo muy lindo. Porque nosotros queríamos llevar la palabra de Dios a visitar, a ver a los enfermos, a los necesitados, a ver si está feliz. Pero nos pasó que toda la gente está dolida, está enferma, está pobre, no tienen trabajo, no tienen para comer, abuelos que están solos... Y esas cosas nos duelen porque no podemos hacer nada por esa gente. Y nos sentíamos mal nosotros, como comprometidos a hacer algo por el bautismo. Nosotros estamos comprometidos por el bautismo; al ser bautizados, ya nos comprometemos. También nosotros tenemos acá, en esta comunidad, gente que no puede pagar un sepelio, no puede pagar un velatorio, y se hace el velatorio acá, en la capillita. Y muchos casos que no se pudo pagar, entonces tuvimos que andar... Y ya formamos enseguida la colecta, o para un enfermo o por un velatorio... Eso fue lindo también en esta comunidad: prestar un servicio, se presta el lugar" (Nilda, 63 años, miembro de una Comunidad Eclesial de Base, integrante de la FTV, barrio San Alfonso).

"Con un grupo de jóvenes juntábamos ropa. Después íbamos tipo trabajadora social; íbamos a todas las casas. Nosotros no nos íbamos a fijar si la casa era linda o era fea, no, íbamos para ver a la familia. Y veíamos cuántos chicos tenían y después íbamos con lo que podíamos ayudar, íbamos y le dábamos ropa a la gente. Me acuerdo uno de los años que habíamos empezado a buscar, ¿viste

para la fecha que estaba el Día del Niño, que se colaboraba con el grupo de jóvenes con animación? Seguidito estaba el Día de los Abuelos. Entonces se invitó a todos los abuelitos del barrio y se hizo una misa. Se les entregó souvenir. Cosas así, festivales para ayudar...” (Sandra, 30 años, referente de la FTV).

La visita¹⁵ condensaba diversos sentidos; principalmente activaba convicciones religiosas, como *acercar el “alivio” de “la palabra de Dios” a enfermos, “dolidos”, “necesitados” o pobres.* Representaba también un procedimiento “técnico” para producir un registro sobre las situaciones familiares e intervenir sobre ellas a partir de prácticas de ayuda recíproca tendientes a enfrentar la enfermedad y la muerte (colectas, donaciones) o para evaluar y precisar la entrega de bienes (ropa, alimentos, etc.). El conjunto de esas prácticas se interpretaba como parte del “compromiso cristiano” asumido en el sacramento del bautismo. En determinados contextos también se organizaron comedores comunitarios o copas de leche:

“Acá empezamos también con Margarita, porque veíamos la necesidad, y empezamos con la leche y espero que sigamos con la leche nada más. Siempre estamos con los chicos del oratorio, pero vinieron más chicos y llegamos a ciento veinte que toman la leche acá. La comunidad aportaba primero, después ya nos quedamos sin fondos, porque no hay misa, no hay cosas; nos quedamos sin fondos. Empezamos a buscar. Siempre buscamos por algún lado para el pan y el padre Carlitos me conseguía leche; con eso manteníamos... También a las manzaneras del Plan Vida que les sobraba también les pedíamos, pero ahora no les sobra nada Después ya no alcanzaba la comunidad. Empecé, fui a Acción Social. Me decía: ‘Sí, mañana’. Pero nunca llegaron” (Nilda, 63 años, miembro de una Comunidad Eclesial de Base, integrante de la FTV, barrio San Alfonso).

La copa de leche como respuesta a problemas *de trabajo, pobreza y necesidad* tenía su antecedente en un comedor que funcionó en el año 1989, en el contexto de la hiperinflación. Orgullosa y emocionada, Nilda me mostró fotos y maquetas de esa época, cuando el comedor atendía a ciento cuarenta chicos del barrio y recibían donaciones de una iglesia de Belgrano y de algunos “*políticos*”. En 1995, los integrantes de la Comunidad San Juan se incorporaron a la “Red de

¹⁵ Para Foucault (1996), la visita constituía una práctica de indagación, más precisamente, se trataba de uno de los orígenes de las prácticas de indagación jurídica. Representaba un procedimiento utilizado por la Iglesia desde el siglo X para la gestión de sus bienes, en particular por la Iglesia Carolingia y Merovingia en la Alta Edad Media. El trabajo de Zapata (2005) analiza la incorporación de esta práctica en las sociedades benéficas de Argentina durante el siglo XIX, en el trabajo social y en las acciones actuales del voluntariado de Cáritas.

Barrios" y participaron en la movilización a la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación para solicitar alimentos.

Más allá de las discrepancias acerca de la relación entre el *trabajo religioso* y el *político*, señaladas en el capítulo I, siete de las doce comunidades se incorporaron como tales a la "Red de Barrios" y participaron en diversos procesos de movilización. Esta confluencia se explica atendiendo a una serie de particularidades de esta práctica religiosa:

-La lectura y el comentario grupal del texto bíblico, que generan contextos reflexivos tendientes a la resignificación del "Evangelio" y de aquellos problemas que afectan las vidas particulares y la del "pueblo"; entre otros, la falta de trabajo, la pobreza y las enfermedades.

-Las actividades emprendidas en distintos puntos del barrio, que posibilitan una mayor inserción en los espacios domésticos y producen, de este modo, el registro y el control sobre las situaciones de vida de las familias.

-La elaboración de respuestas colectivas frente a la muerte, la pobreza y la enfermedad, como colectas y donaciones, y la puesta en funcionamiento de comedores y "copas de leche".

-Una organización que limita la estructura piramidal de la Iglesia, permite escapar a ciertas normativas y orientaciones institucionales, y establecer un marco de alianza variable con otras fuerzas sociales y políticas.

De la fábrica al barrio: proyectos y estrategias sindicales

La desocupación fue uno de los temas tratados durante un encuentro sindical celebrado el 17 de diciembre de 1991 en la localidad bonaerense de Burzaco, que contó con una presencia mayoritaria de dirigentes gremiales de SUTEBA y ATE. En esa oportunidad se definió al desempleo como una de las consecuencias de *"la ofensiva neoliberal sobre el conjunto de los trabajadores y el pueblo"*. Al mismo tiempo, se fijó como meta la construcción de un "nuevo modelo sindical", inserto dentro de un movimiento político y social abierto a otras organizaciones sociales que expresaran las múltiples demandas de los "sectores populares" y que reflejaran la realidad de "cinco millones de argentinos con problemas de empleo" (Debate para la organización de los Trabajadores, 1991).

En 1992, el núcleo de gremialistas reunidos en Burzaco fundó el Congreso de los Trabajadores Argentinos, y en 1996 se organizó como CTA. Con la constitución de la nueva entidad sindical, la *desocupación* se transformó en "*una prioridad para la lucha*", a partir de una lectura que caracterizaba al desempleo como la consecuencia de un proyecto de acumulación propiciado por grandes grupos económicos antes que como resultado de cambios tecnológicos en los procesos de trabajo.

Los lineamientos de esta política sindical se tradujeron en una reelaboración de la figura del trabajador orientada a incorporar a *los activos, los jubilados y los desocupados*, y, fundamentalmente, en la extensión de la acción gremial al espacio barrial/territorial, a fin de incluir temas no sólo relacionados con el mundo laboral sino también con otros "*derechos elementales*", como la salud, la educación, la tierra y la vivienda:

"(...) La unidad y la solidaridad también hay que encontrarlas en la pelea que como trabajadores tenemos en el barrio: por la salud, por la educación, por nuestra tierra, por la vivienda, por los más elementales derechos. En nuestros barrios, en nuestras ciudades, territorialmente necesitamos organizarnos los trabajadores" (Documentos del Primer Congreso Nacional de Delegados de la CTA, 1996: 15-16).

Una de las once comisiones¹⁶ que sesionaron en el Primer Congreso de Delegados de la CTA se abocó al problema del trabajo y la desocupación. Reafirmó el problema de la desocupación como eje para la construcción de alianzas políticas, proclamó la intención de extender la acción de la central sindical hacia el "territorio", incorporando organizaciones comunitarias de diversa índole (escuelas públicas, radios comunitarias, asociaciones vecinales, etc.), y propuso las siguientes medidas: declarar la emergencia ocupacional, social, previsional, sanitaria y educativa, y prohibir los despidos, la jubilación anticipada y la disponibilidad tanto en el sector privado como en el público; reducción generalizada de la jornada de trabajo sin la disminución del salario con el objetivo de repartir el trabajo socialmente existente entre todos los trabajadores (en el caso de las pequeñas y medianas empresas, impulsar el otorgamiento de créditos

¹⁶ El resto de las comisiones se abocaron a los siguientes temas: comunicación y cultura, industria, educación, ciencia y técnica, energía, relaciones internacionales, jubilación y previsión social, salud y obras sociales, derechos humanos, y justicia.

blandos para que pudieran sostener la medida); elevar el seguro de desempleo a cuatrocientos pesos y el haber jubilatorio a cuatrocientos cincuenta, y organizar un encuentro nacional de trabajadores desocupados de la CTA.

Las elaboraciones de esta comisión tuvieron efectos preformativos en la acción de la CTA; por ejemplo, se expresaron en la constitución del Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO) en el año 2001¹⁷. Sin embargo, quienes participaron en la comisión de Tierra, Vivienda y Hábitat, que sesionó en ese mismo Congreso, perfilaron una serie de propuestas que gravitaron de manera decisiva sobre la conversión de la desocupación en un eje de movilización social y alianza política.

Miembros de la cooperativa del barrio El Campo y otros integrantes de la Red de Barrios de La Matanza participaron en los debates de la comisión de Tierra, Vivienda y Hábitat. El vínculo originario entre los integrantes de esa Red y la CTA estuvo mediado por gremialistas de SUTEBA:

“Luis era maestro de una escuela de Laferrere; después fue consejero provincial de educación, cuando estaba en la Democracia Cristiana, el gordo, con toda una historia, y nosotros lo ayudamos... Lo ayudamos. En realidad, algunos maestros que éramos de Laferrere vimos un grupo que estaba en el Serpaj cuando fue la ocupación de El Campo. En concreto, una tarde, cuando llegaba a la escuela, vi un montón de gente con bártulos; algunos eran alumnos míos. Y yo les digo: ‘¿Dónde van con eso?’. Y me dicen: ‘Al campo de allá’. Y ahí nació El Campo. Ese fue el primer contacto con Luis” (Eduardo, 55 años, sindicalista del gremio docente, ex concejal de La Matanza por el Frente Grande).

Eduardo y otros gremialistas docentes crearon un lazo social y político con los líderes de la ocupación de tierras que dio origen al barrio El Campo en la década del 80. Tras el encuentro gremial de Burzaco, se intensificaron los contactos con los representantes de los asentamientos para lograr que se incorporaran a la propuesta de la incipiente CTA:

“Yo hablé mucho con el gordo para que se incorpore a la CTA, que planteaba no una cosa pura sindical, sino una organización sindical y social, que tenía que ver con desocupados, subocupados... Después lo invité a un congreso nacional y en todo ese proceso comenzamos a caminar. ATE por su lado, SUTEBA, y el gordo.

¹⁷ Ese Frente demandaba un seguro de empleo y formación de trescientos ochenta pesos para cada jefe o jefa de hogar desocupados y una asignación de sesenta pesos por cada hijo menor de 18 años, e impulsaba el llamado a una consulta popular. Un análisis de las estrategias del FRENAPO puede consultarse en Armelino (2004).

Y una vez que estaba Amadeo de secretario de Acción Social, que ya estaba muy mal la cosa, en los barrios ya estaba muy mal la cosa, una vez charlando con Luis y con otros compañeros ahí, en el Patronato, con gente del barrio decidimos hacer la primera marcha. Una marcha para pedir morfi. Fue la primera presión de una cosa así. Éramos como quince micros; la mayoría, gente de los barrios de esta zona. Un kilombo terrible: nos llevamos algunos bombos” (Eduardo, 55 años, sindicalista del gremio docente, ex concejal de La Matanza por el Frente Grande).

La conformación de la Red de Barrios, como puso de relieve el testimonio de Eduardo, formó parte de la estrategia sindical de la CTA orientada a la creación de una organización gremial que incorporara a trabajadores desocupados y subocupados y que se extendiera hacia el ámbito territorial/barrial. Fue por ello que contó con la colaboración activa de sindicalistas de SUTEBA y ATE.

Retomando las propuestas elaboradas en la Comisión de Tierra, Vivienda y Hábitat, en 1997 se realizó un encuentro en el distrito de La Matanza en el que se formó una Junta Promotora cuya misión fue articular una entidad de alcance nacional para reunir organizaciones dedicadas al tema tierra y vivienda. Participaron activamente en ella integrantes de la Red de Barrios, en especial los dirigentes de la cooperativa del barrio El Campo. El resultado del trabajo de esa Junta fue la convocatoria del 18 de julio de 1998 al Congreso Fundacional de FTV, en el cual participaron 1650 delegados que representaban a 17 provincias argentinas. La Federación se propuso articular organizaciones que trabajaran sobre los siguientes temas: asentamientos; casas tomadas, falsos inquilinatos y pensiones; villas y barrios urbanos; pueblos originarios; campesinos y trabajadores rurales; adjudicatarios de viviendas sociales (Banco Hipotecario o FONAVI); trabajadores de áreas públicas de Tierra y Vivienda; trabajadores y usuarios de servicios públicos; ecología y medio ambiente, e inundaciones. Asimismo, se procuró desarrollar una trama organizativa a partir de las siguientes iniciativas: apoyo a los conflictos, mediante cobertura jurídica y legal a desalojos/ tomas de tierras/ luchas reivindicativas; intensificación del contacto con los medios de comunicación y formación de delegados; gestión de planes y proyectos: reclamo de políticas públicas y creación de proyectos autogestivos; desarrollo territorial: estructuración en el territorio a partir de colectivos de trabajo; capacitación: cursos de formación de dirigentes en lo que hace a problemática

legal, a cuestiones técnicas vinculadas con la gestión de los proyectos y a las herramientas para la autonomía de la organización.

Si bien la FTV formaba parte de la CTA, en el plano jurídico se constituyó como asociación civil, ya que la ley de sindicatos no reconocía entidades sin la figura del patrón y sin aporte sindical. En el caso puntual de La Matanza, la Red de Barrios se incorporó a la FTV y Luis D'Elía, el presidente de la cooperativa del barrio El Campo, fue elegido presidente de la Mesa Nacional de la nueva Federación. En sus inicios, este agrupamiento se dedicó exclusivamente a temas vinculados con la tierra y la vivienda, pero progresivamente fue impulsando acciones de alcance nacional en torno al problema del desempleo:

"Recién va a ser en el 99 que el desocupado va a ocupar ese sector. Digamos, se tenía una serie de discusiones internas en la Federación, donde uno veía que al legalizarse la cuestión de la tierra, al legalizarse los servicios públicos, en realidad, si antes eras ilegal por la ocupación, ahora ibas a ser ilegal porque eras un cliente moroso de algunas de estas empresas. Si no se tomaba el tema de la desocupación, el resto aparecía subordinado a la imposibilidad del recurso cotidiano. Y empieza a aparecer la organización de desocupados, no sólo en la Federación, por la apertura de la importación y la desarticulación de la producción interna, el tema de la desocupación se empieza a poner sobre el tapete, a ser un problema nacional como no había sido antes" (Sonia, 34 años, trabajadora social, integrante del Equipo Técnico de la FTV).

En síntesis, en el caso de la CTA, fue esta Federación la que en términos de prácticas contribuyó a generar un proceso de movilización social y de alianzas políticas en torno al problema de la desocupación, y de ese modo se articuló con la estrategia más general de esa entidad sindical en cuanto a la construcción de un modelo sindical inserto en un movimiento social y político de alcance "territorial".

A la par de la CTA, la CCC resultó otra experiencia que definió progresivamente a la desocupación como eje de organización y acción sindical. Esta organización se concebía como una corriente político-gremial cuyo objetivo era el trabajo dentro de todos los sindicatos y las centrales sindicales para lograr la adhesión de delegados y "agrupaciones de base". A nivel político, se hallaba vinculada al Partido Comunista Revolucionario, de orientación maoísta.

Si bien la autodefinition "corriente clasista" intentaba enfatizar la continuidad con tendencias históricas de organización del movimiento obrero

argentino, la CCC se constituyó en el año 1994 en un acto celebrado en el salón Verdi del barrio de La Boca. En ese evento confluyeron, entre otros, integrantes de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia, trabajadores municipales de Jujuy y Tucumán, delegados gremiales del Astillero Río Santiago y de Siderca, y agrupamientos de médicos y docentes de diferentes distritos del país. La conformación de la CCC estuvo enmarcada en el “análisis de la realidad política” del Partido Comunista Revolucionario, el cual definió una triple crisis –económica, social y política–, cuya causa era la sobreproducción del sistema capitalista a nivel mundial, y diagnosticó el “auge de masas”, sobre todo luego de los hechos ocurridos en la provincia de Santiago del Estero en diciembre de 1993, conocidos como “Santiagueñazo”. En virtud de estas caracterizaciones, su propuesta se concentró en abandonar la participación en elecciones con listas de candidatos, llamar al voto nulo o blanco, e impulsar “puebladas”. Esto último se bautizó como la “lucha por el Argentinazo”, entendida como una “pueblada nacional” que retomaba el modelo del “Cordobazo” de 1969.

La desocupación comenzó a formar parte de las acciones de la CCC a partir de la movilización de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia:

“En el 96 se acuerda formar los desocupados de la Corriente, pero se da el salto cuando conseguimos acá los primeros planes, que son los primeros del país. Los desocupados de la Corriente nacen acá, en Matanza” (Juan Carlos, 54 años, presidente de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia y actual coordinador nacional de los desocupados de la CCC).

“La CCC empezó, digamos, gracias a la Junta Vecinal, porque los que empezamos con los primeros setenta puestos, los que empezamos a trabajar, empezamos a armar la CCC, somos la Junta Vecinal. Y desde ahí empezaron los barrios vecinos a pedir trabajo a la Junta y se empezó a pedir un representante de cada barrio, y ahí se fue armando la CCC. Pero el puntapié lo dio María Eva” (Dora, 54 años, integrante de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia y miembro de la CCC).

A través de estos relatos, se puede sugerir que la conformación de la organización de los “desocupados” dentro de la CCC estuvo relacionada con un modelo de política estatal centrado en programas de ocupación transitoria. Este tema se analiza en el próximo capítulo, aquí me interesa marcar algunas particularidades de la Junta Vecinal para comprender su vínculo con la CCC.

En el año 2003, el presidente de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia y actual coordinador de los desocupados de la CCC tenía 54 años de edad. Nacido en Salta, migró a Buenos Aires a fines de la década del 60 y se instaló en una villa de emergencia en el barrio de Colegiales. Durante los años 70, se integró a "círculos de lectura" sobre la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, la Revolución Cultural de China, el marxismo, el maoísmo, el peronismo y la historia del sindicalismo argentino. Por esa época, se empleó en una fábrica de productos lácteos; allí fue elegido delegado y, más tarde, miembro del respectivo sindicato. Por su actividad gremial viajó a un encuentro sindical en la provincia de Córdoba donde conoció a René Salamanca y a otros dirigentes de la "Agrupación Clasista 1 de Mayo". Luego de ese encuentro se incorporó a la mencionada agrupación y un año después inició su militancia política en el Partido Comunista Revolucionario. En el período de la última dictadura militar de la Argentina (1976-1983) fue encarcelado y estuvo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. En la década del 80, cuando salió de prisión, tuvo empleos inestables y participó de la ocupación de terrenos a partir de la cual se formó el barrio Santa Emilia.

Una vez en Santa Emilia, junto con otros pobladores –que también tenían una trayectoria como delegados sindicales y muchos habían sido militantes en los partidos comunistas de sus países de origen: Uruguay, Chile y Paraguay– fundó la Junta Vecinal en 1987. Ese barrio, entonces, se erigió como ícono del trabajo de "base" del Partido Comunista Revolucionario, y en él confluyeron diversos "profesionales" vinculados a esa fuerza partidaria (médicos, maestros, psicólogos, abogados, trabajadores sociales y estudiantes universitarios) con el propósito de impulsar diferentes acciones en torno a la salud, el cuidado y la protección de las mujeres, la alfabetización y la atención de niños y jóvenes.

En 1999 se difundió un documento en el que se definió a la desocupación como una situación "(...) *impuesta al conjunto de la clase obrera, producto de una 'modernización' reaccionaria basada en el atraso y la dependencia*" (Alderete y Gómez, 1999: 3). Asumir el problema de la desocupación como un eje para el desarrollo de estrategias políticas implicó precisar la definición de la "clase obrera". En este sentido, en el mencionado documento se especificaba:

"(...) La clase obrera se desconcentró, se descalificó y perdió peso salarial pero creció numéricamente, al menos en Capital Federal y el Gran Buenos Aires (...).

Si sumamos el total de asalariados y desocupados, pasaron de 2.603.000 en 1987 a 4.028.000 en 1997. En esta década se proletarizaron 1.400.000 personas en el Gran Buenos Aires. Proletarización impuesta en las condiciones del atraso, producto del fortalecimiento brutal de la propiedad terrateniente en el campo y de esta 'modernización' reaccionaria al servicio de los imperialismos y los monopolios" (Alderete y Gómez, 1999: 10-11).

En la visión de la CCC, los desocupados eran definidos como una "fracción de la clase obrera" y, en términos gremiales, como un "afluente" del movimiento obrero junto con los jubilados y *los ocupados*. El 11 de abril de 1998, en un acto celebrado en el distrito de La Matanza, se constituyó formalmente la vertiente de los desocupados de la CCC.

Recapitulando, a lo largo de la década del 90, tanto la CTA como la CCC incorporaron la desocupación dentro de sus agendas, contribuyendo a transformar ese problema en un eje de organización gremial y política. En ese sentido, redefinieron la *figura del trabajador, la clase obrera o el movimiento obrero* para incorporar a los desocupados y subocupados en los marcos de representación sindical.¹⁸

Alimentos, hambre y desnutrición: la movilización de nociones legitimadoras

Las experiencias de "toma" de tierras, las prácticas de las CEBs y las estrategias político-sindicales conformaron un escenario de disputa en torno a la desocupación que se expresó en las movilizaciones y las ocupaciones de plazas y

¹⁸ La historia del sindicalismo argentino es sumamente compleja y no es mi intención detallar sus principales rasgos; no obstante, puntualizaré una serie de elementos que permiten entrever en qué medida las estrategias de la CTA y la CCC son desafiantes en relación con las líneas gremiales hegemónicas. Entre las décadas del 20 y del 30, en el marco de un contexto de crisis de la influencia de las tendencias anarquistas, de consolidación de los socialistas y sindicalistas, y de transformación socioeconómica de Argentina, se produjo un proceso de centralización y unificación del movimiento obrero, y un pasaje paulatino de los sindicatos de oficio a los sindicatos de tipo industrial, que se organizaron sobre la base de la rama de actividad (Doyon, 1988). Durante los primeros gobiernos de Juan D. Perón (1946-1955) se acentuó esta tendencia a la centralización y unificación del movimiento obrero; así, un conjunto de normativas estatales, como el Decreto de Asociaciones Profesionales, se dirigieron a regular el mundo sindical y propiciaron, entre otras cosas, la formación de uniones o federaciones obreras cuyo poder se asentaba en el control financiero de los aportes de los trabajadores de las ramas respectivas y en la capacidad legal de intervenir sobre los niveles más bajos de la jerarquía gremial. Esta modalidad de organización sindical no ha estado ajena a intensas disputas a lo largo del siglo XX; sin embargo, las transformaciones sociales de la década del 90 incidieron en la fragmentación del espacio sindical y en la expresión sostenida en el tiempo de distintas propuestas. Una de ellas es la contenida en la CTA, opuesta al proyecto político-gremial de la CGT.

ministerios entre los años 1995 y 1996. Esos procesos se fundamentaron en los resultados de censos que se habían ejecutado en distintos barrios para medir los niveles de “desnutrición”, la “desocupación” y las dificultades “sanitarias”.

Las tareas censales representaban una actividad conocida para los pobladores y dirigentes de los asentamientos. Durante mi trabajo de campo en el barrio Tierra Nuestra, cuyos *referentes* se incorporaron a la “Red de Barrios” en 1995, escuché en varias ocasiones el relato sobre las energías dispensadas para censar setenta y ocho manzanas en pocos días. Veamos cómo contaban esas experiencias:

“Mauricio: Cuando cortaron los cables, salió toda la gente a la ruta, a la ruta 3. Agarramos un camión de EDENOR y se lo volcamos, se hizo un poco de apriete, y eso ayudó; todo ayudó. El conflicto ayudó para que esto se hiciera y saliera más rápido. El sábado se deliberó desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, pero fue un tire y afloje. Nosotros peleábamos por tres transformadores, ellos nos querían dar dos. Y bueno, nosotros no aflojamos hasta que no nos dieran lo que creíamos que era necesario. Se firmó el convenio con EDENOR (...). A nosotros nos ponen como uno de los puntos, como condición, que en quince días presentáramos un censo del barrio. ¿Sabés lo que es censar sesenta y ocho manzanas? 1568 familias. Y había que hacerlo en quince días.

Pauli: Algunos que no se querían censar y te sacaban...

Mauricio: Por eso te digo, te tenías que encontrar con todos estos tipos de problemas, pequeños, pero que tenías que resolver. Nosotros, desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche, hasta la una de la mañana a veces, andábamos haciendo reuniones manzana por manzana para concientizar al vecino que había que hacer una electrificación precaria, provisional, hasta tanto EDENOR electrificara definitivamente.”

El censo formaba parte de los compromisos asumidos en instancias de concertación con ejecutivos de empresas de servicios o con funcionarios estatales. El relato citado refiere a una instancia de negociación con ejecutivos de una empresa de suministro eléctrico en mayo de 1993; a cambio de la instalación de tres transformadores, EDENOR solicitó un censo para estimar la cantidad de usuarios. El censo implicaba diversas actividades que excedían la simple recolección de datos. Se debía convocar a reuniones con los habitantes de cada manzana y convencer a los “vecinos” sobre el beneficio que reportaría censarse.

También se organizaron censos a instancias de interacciones vinculadas con el acceso a la titularidad de la tierra:

"Mauricio: El gobierno de Buenos Aires, a través del Ministerio de Obras Públicas, hace un censo en el barrio, previo al que nosotros habíamos entregado. Nosotros habíamos entregado otro censo del barrio.

Virginia: ¿Ustedes habían entregado a EDENOR?

Mauricio: A EDENOR, uno, y a provincia, otro. Pero igual se necesitaba hacer un censo nuevamente por si había habido algún cambio, por si alguien había vendido y se había ido. Nosotros cubrimos cada manzana con su coordinador y dos censistas. Estipulaban hacer el censo dos sábados y dos domingos. Nosotros lo hicimos en un domingo solo y eso fue un asombro para la provincia. Y nos dijeron: 'Muchachos, nos ahorraron mucho movimiento de gente'. A nosotros nos prestó colaboración una escuela de asistentes sociales que hay en Morón: el CEN N° 9 de Morón...

Virginia: ¿Y cómo se habían conectado con ellos?

Mauricio: A través del asistente social del Plan PAIS, él nos conectó. Me dio un número de teléfono y tuvimos que ir con Violeta, y nos consiguieron doce censistas, aparte que provincia traía sus censistas. Te digo, estaba diagramado hacerlo en dos fines de semana y nosotros lo hicimos en un día. Fue un asombro total. Y los otros barrios –Santa Emilia, El 17, El 24, El Futuro– que son más chicos –éste es el más grande– tardaron más tiempo."

En este marco de relación con el Estado, uno de los sentidos que asumía el censo era el registro del movimiento de la población y de las transacciones de tierra para precisar la política de venta de terrenos luego de la sanción de la ley de expropiación. Participar en el censo reportaba también cierto orgullo: representaba una posibilidad de acercamiento a profesionales, una oportunidad para mostrar pericias en el trabajo ante los funcionarios estatales y una medida de mérito en comparación con la labor de los dirigentes de otros barrios.

En otros casos, los censos se orientaban a producir información sobre ciertas categorías de la población con el objetivo de definir y atender problemas sanitarios y nutricionales. En los cursos de agentes sanitarios dictados por los médicos¹⁹ de la sala de salud de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia, el censo constituía una parte de la formación práctica²⁰. Los estudiantes y egresados de

¹⁹ Se trataba de un grupo de médicos cuyas edades oscilaban entre los cincuenta y los sesenta años, que habían iniciado su militancia política en el Partido Comunista Revolucionario siendo estudiantes de medicina en la Universidad de La Plata. Este grupo se identificaba con una "línea de medicina social" que recuperaba las figuras de Virchow, Norman Bethune, Ramón Carrillo y Salvador Maza, así como también la experiencia de las comunas populares y los *médicos descalzos* de la República Popular China.

²⁰ Este tipo de formación se enmarca en propuestas más amplias de atención primaria de la salud en la que confluyen visiones diferenciales, como la de los Organismos Internacionales de Crédito y la de movimientos populares "autogestionarios" (Menéndez, 1998). Desde la declaración de Alma Ata en 1978, la participación comunitaria aparece como meta de los programas de salud; pero, como sostuvieron investigadores dedicados a la temática (Morgan, 1993), las agencias internacionales formularon criterios para "estandarizar" las formas de participación en términos de procedimientos y recursos para la atención, promoción y prevención.

esos cursos, en su mayoría mujeres, se dedicaban a controlar el calendario de vacunas y la medición de la talla y el peso de los niños del barrio. Además, emprendían campañas de prevención de enfermedades y organizaban, junto con la Junta Vecinal, jornadas de limpieza de arroyos y zanjas. Desde el punto de vista del personal de esa sala, el censo realizado entre los meses de diciembre de 1995 y enero de 1996, cuyos resultados se utilizaron para fundamentar las demandas de los "Barrios de la Olla", representaba la actividad más importante desarrollada por los agentes de salud.

En suma, los censos se transformaron en recursos clave para extender la intervención del Estado y de empresas privadas (suministro eléctrico o transporte público) en la provisión de bienes. Se tornaron procedimientos rutinizados en el marco de relación con el Estado para volver visibles problemas, demandas y poblaciones, y para acomodar las regulaciones estatales sobre diversas cuestiones. También representaban una oportunidad para demostrar capacidad de trabajo, aprendizajes y aprobación de los pobladores.

En las primeras movilizaciones también se encuadró la desocupación en otros problemas, como el *hambre y la desnutrición*. El historiador E. P. Thompson, en su análisis sobre los motines de subsistencia en Inglaterra en el siglo XVIII, discutió con la *visión espasmódica* de la historia popular. Esta visión le negaba al pueblo el carácter de agente histórico en épocas anteriores a la Revolución Francesa, y consideraba que en ellas la "chusma" se introducía de manera ocasional en la trama histórica a partir de disturbios sociales repentinos, entendidos como respuestas a estímulos económicos tales como la subida de los precios o la escasez del grano. Thompson invirtió el enfoque para preguntarse por las *nociones legitimadoras* en las que enraizaban los motines de subsistencia. Así, enfatizó que esas nociones anclaban en la defensa de derechos y costumbres tradicionales, y apelaban a normas y expectativas sociales.

Recuperando el aporte de Thompson, es posible sostener que el *hambre, la desnutrición y la demanda* de alimentos apelaban a normas y costumbres inscriptas en la relación con el Estado. En particular, remitían a un modo de relación configurado a partir de la implementación, durante la década del 80, de políticas de asistencia alimentaria destinadas a familias con jefes de hogar desocupados o de bajos ingresos. El Plan Alimentario Nacional (PAN), lanzado en 1984 por el Ministerio de Salud y Acción Social, repartió durante el año 1987

1.370.000 cajas mensuales de alimentos que cubrían a 1.340.000 familias (Grassi, Hintze y Neufeld, 1996). Esas cajas incluían aceite o grasa, arroz, fideos, azúcar, leche en polvo, porotos, corned-beef o merluza, harina de trigo o de maíz.

Las referencias a la "Caja PAN" eran recurrentes en comentarios, anécdotas, conversaciones informales y entrevistas:

"Yo tuve la Caja PAN. Eso me parece que lo hacían las unidades básicas. Para recibir esa mercadería, la caja PAN, me anoté en una unidad básica y me salió" (Zulema, 53 años, integrante de la FTV, barrio Tierra Nueva).

"Antes nunca habíamos tenido planes; la Caja PAN sí la teníamos, pero planes recién en el 97" (Juan Carlos, 54 años, presidente de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia y actual coordinador nacional de los desocupados de la CCC).

"Con el plan me voy arreglando porque mi mamá tiene una pensión, que esa pensión la conseguí, no sé si te vas a acordar, cuando te daban la Caja PAN. Bueno, ahí la anoté también a mi mamá y le salió la pensión" (Registro de Campo/agosto 2002).

[Unas mujeres de la CCC conversaban antes de empezar una reunión y, muy enojadas, se quejaban de la calidad de la comida del comedor de la sala de salud del barrio Santa Emilia] *"Yo veo que bajan cuatro cajones: son treinta pollos, son ciento veinte al mes, pero la comida es horrible. Yo antes iba a retirar y ahora no voy más. El primer día sí que estuvo bueno: era un pastel de papa con mucha carne, cebolla y huevo; pero ahora es horrible. Hacen un pastel de carne que vos lo ves y pensás que vas a morder carne picada. ¿Y a que no adivina qué era? Corned-beef. ¿Se acuerda que eso comíamos siempre antes, que venía en la Caja PAN?"* (Registro de Campo/diciembre 2005).

Del mismo modo que la categoría *planes* –como se verá en el capítulo III–, la *Caja PAN* expresaba un vocabulario compartido, una experiencia de vida y una forma de vincularse con el Estado a partir de la asistencia alimentaria. Algunos testimonios también sugirieron que ese programa había representado una oportunidad para obtener otros beneficios (pensiones) y bienes (colchones, chapas, etc.).

Otra política alimentaria que perfiló acciones en los barrios donde realicé trabajo de campo fue el Programa Alimentario Integral y Solidario (PAIS), dependiente del Ministerio de Acción Social de la provincia de Buenos Aires. Ese programa fue lanzado en 1989, en el contexto de la crisis hiperinflacionaria, y su

objetivo era atender a sectores en situación de "pobreza crítica", según criterios de NBI (Chiara, 1991). La implementación de esa política contemplaba tres instancias: organización de los grupos PAIS, abastecimiento alimentario mediante compras o comedores comunitarios, y apoyo a proyectos de generación de empleo.

De acuerdo con mis registros, integrantes de la FTV del barrio Tierra Nuestra habían participado en ese programa. Violeta había sido seleccionada como coordinadora de un grupo de cinco familias y luego había resultado elegida coordinadora de todos los grupos PAIS que funcionaban en el barrio. Mediante una carta poder, las familias delegaban en los coordinadores la percepción del importe monetario que el gobierno provincial destinaba para la compra de comestibles:

"Yo creo que empecé a crecer con lo que fue el Plan PAIS. Es como que a medida que vas teniendo experiencia, vas aprendiendo (...). Primero nos reuníamos y hacíamos un listado en el que anotábamos las cosas que se iban a comprar; ahí organizábamos, porque te imaginás que si hacíamos eso en el mayorista, era un despiote. Eran cinco familias las del grupo. Empecé con cinco familias. Se compraba en un mayorista sobre la ruta 3. Yo lo que hacía era llevarlas a todas, a las cinco mujeres, y que ellas eligieran entre las cinco cuánto azúcar iban a llevar. Completábamos bultos, para que de esa manera saliera más barato" (Violeta, 46 años, referente de la FTV).

Tal como puso de relieve el testimonio, los grupos se reunían, organizaban compras comunitarias, recorrían negocios mayoristas buscando precios accesibles y repartían la mercadería adquirida por "bultos" de acuerdo con la cantidad de integrantes del grupo familiar. Con el asesoramiento de trabajadores sociales que participaban en la implementación del programa, también intentaron poner en funcionamiento un emprendimiento de fábrica de pastas y otro de marroquinería. Para Violeta, la participación en ese programa había representado también una inflexión en su trayectoria, un punto de partida en su carrera de *militancia política y social*.

Por esa misma época, diversas organizaciones barriales, así como también las CEBs, respondieron a la crisis hiperinflacionaria y a los saqueos con la puesta en funcionamiento de comedores comunitarios.

"La pasamos muy mal en el 89. Yo igual era feliz porque con los compañeros de la Junta Vecinal nos juntábamos los sábados a bailar y a tocar la guitarra; pero

fue muy fea la situación. Todas las mujeres empezamos a cocinar para los chiquitos. Nos llegaba la mercadería de la Municipalidad, la iban a buscar los muchachos. Todos los días igual: fideos coditos, fideos coditos, fideos coditos... con aceite, con salsa, pero fideos coditos” (Gladis, 43 años, integrante de la CCC, barrio Santa Emilia).

La reconstrucción de las relaciones entre el Estado y la población a partir de políticas de asistencia alimentaria permite sostener que las demandas que impulsaron las primeras movilizaciones en torno al problema de la desocupación apelaban a una norma estandarizada de intervención estatal basada en el reparto de alimentos. Ese modo de relación con el Estado, configurado durante la década del 80, permeaba experiencias de vida y de organización colectiva. A la vez, activaba expectativas sociales sobre las posibilidades de demanda y sobre las respuestas esperadas de parte de funcionarios gubernamentales.

El modo de formular el problema del desempleo también se relacionaba con el creciente papel de la *desnutrición* como indicador de desarrollo para la obtención de préstamos y subsidios de Organismos Internacionales de Crédito. En este sentido, durante la década del 90, el reparto de alimentos también resultó un componente de políticas de salud. A nivel nacional, el Programa Materno-Infantil y Nutrición (PROMIN), subsidiado con préstamos del Banco Mundial, promovía una estrategia de “focalización” del gasto social sobre zonas con un 40% de población con NBI, así como también sobre mujeres en edad fértil y niños menores de 6 años. Entre sus objetivos figuraban reforzar el nivel primario de atención, apuntalar el desarrollo infantil y aportar un complemento nutricional a mujeres embarazadas y a niños “desnutridos” o “mal nutridos” (Andrenacci, Neufeld y Raggio, 2000).

En 1995, como se verá en detalle en el próximo capítulo, la provincia de Buenos Aires lanzó el Plan Vida, cuyo eje era el apoyo nutricional a embarazadas y niños de entre 0 y 5 años. En ese mismo año, el Programa Materno-Infantil dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires había implementado una encuesta para conocer el estado nutricional de los niños menores de 6 años y embarazadas, como parte de los compromisos contraídos en la firma del Pacto Federal en 1994, que remitían, a su vez, a los compromisos asumidos entre los gobiernos y los Organismos Internacionales de Crédito. Las autoridades estatales se comprometían a desarrollar actividades en favor de “la

madre y el niño”, como disminuir el bajo peso al nacer, eliminar la malnutrición infantil, controlar las deficiencias de hierro, seguir el crecimiento y desarrollo de la población infantil, y asegurar la lactación materna hasta el cuarto mes.²¹

Desde estos marcos relacionales, los fundamentos que invocaron las primeras manifestaciones en torno al problema de la desocupación tuvieron receptividad en dependencias gubernamentales. La Cámara de Diputados de la Nación solicitó un informe al Poder Ejecutivo Nacional sobre la situación nutricional de los niños del barrio Santa Emilia²² y, por su parte, el presidente del bloque del Partido Justicialista del Concejo Deliberante de La Matanza declaró:

*“Lo inmediato no es la creación de comisiones, sino una acción rápida para proveer de alimentos a esos sectores porque las consecuencias de la desnutrición son permanentes”*²³

EL ESPACIO SOCIAL DE LA DISPUTA

En 1995, el desempleo en Argentina alcanzó al 18% de la población económicamente activa; a fines de ese año y comienzos del siguiente se produjeron los dos procesos de movilización en el distrito de La Matanza descritos en este capítulo. Una primera cuestión a remarcar es que en ambas movilizaciones se ocuparon espacios públicos (plazas y ministerios) con el objetivo de establecer vínculos con funcionarios estatales; se presentó el problema de la desocupación con pruebas “técnicas”, como censos y encuestas, y se configuraron relaciones con “áreas sociales” del Estado a partir de negociaciones y acuerdos centrados en la entrega de mercaderías o bolsones alimentarios.

Esos procesos de movilización se inscribieron en un marco más amplio de relaciones sociales y políticas, que se fue articulando a partir de experiencias de ocupación de tierras, prácticas religiosas enmarcadas en CEBs y estrategias sindicales encarnadas en la CTA y la CCC. De un modo general, se puede afirmar que estas experiencias contribuyeron a generar un espacio social de disputa y

²¹ Encuesta provincial nutricional de niños y embarazadas realizada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, 1994.

²² Diario *Página 12*, 4/7/96.

negociación en torno al problema de la desocupación descentrado del espacio laboral, de carácter barrial y referenciado en el Estado.

Las nociones que se pusieron en juego para legitimar los procesos de movilización, como el hambre y la desnutrición, apelaban a normas configuradas en una tradición de intervención estatal basada en el reparto de alimentos. Estas nociones movilizaban un lenguaje aprendido y comprendido desde las experiencias de vida de poblaciones permeadas por esas políticas estatales.

En términos conceptuales, estas políticas formaban parte de lo que Foucault (1977) denominó "biopoder". Ese poder sobre la vida, desarrollado desde el siglo XVII, cobra dos formas: una de ellas, denominada *anatomopolítica*, referida al cuerpo-máquina e inscrita en los procedimientos disciplinarios; la otra, denominada *biopolítica de la población*, se manifiesta como la regulación del cuerpo-especie e interviene en fenómenos tales como los nacimientos, la mortalidad, la duración de la vida y la longevidad. Para Foucault, las fuerzas que resisten esta organización del poder se apoyan en lo mismo que aquél invade; es decir, en la vida del hombre en tanto ser viviente:

"(...) La vida, pues, mucho más que el derecho, se volvió entonces la apuesta de las luchas políticas, incluso si éstas se formularon a través de afirmaciones de derecho (...)" (Foucault, 1977: 175).

Con estos puntos de partida, en lo que sigue recorro otras alternativas de relación social y cotidiana vinculadas con una modalidad de política estatal representada en los programas de empleo transitorio.

²³ Diario NCO, 23/5/96; p. 3.

CAPÍTULO III

LOS PLANES COMO OBJETO DE DEMANDA

Anotarse en el plan, salir en el plan, cobrar el plan, trabajar con el plan: cada una de estas frases me acercó a un lenguaje que comencé a comprender y a compartir a lo largo de mi trabajo de campo. Todas ellas indicaban relaciones y modalidades de práctica que tenían en común el hecho de estar tejidas en torno a un objeto: *el plan*. Con esta categoría se aludía a diferentes programas gubernamentales de la órbita provincial o nacional, que frente a otras modalidades de intervención estatal (mercaderías o medicinas) se caracterizaban por un rasgo común: otorgaban una “ayuda” monetaria a cambio de la *contraprestación* del *beneficiario*. Para las normativas oficiales, la *contraprestación* implicaba trabajar durante cuatro horas diarias en proyectos de *utilidad social o comunitaria*, pero, como se verá a lo largo de esta tesis, en un marco más amplio de relaciones de poder, *marchar o participar en cortes de ruta* también se convirtió en parte de la “*contraprestación*”.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación empleaba otra terminología para referirse a las acciones que requerían de la *contraprestación* del *beneficiario* a cambio de una “ayuda económica no remunerativa”. Diferentes programas se definían como ***políticas activas de empleo***. Según fuentes oficiales, estas políticas demandaban “(...) *algún tipo de capacitación y/o trabajo por parte del beneficiario, mejorando de esta manera su acceso al mercado laboral*” (Ministerio de Trabajo, 1999: 177), y se distinguían de las ***políticas pasivas***, que no exigían *contraprestación*; tal es el caso del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo o Seguro por Desempleo. Bajo la categorización de políticas activas de empleo se desarrollaron diferentes intervenciones, agrupadas, de acuerdo con sus características, en programas de empleo, capacitación o fortalecimiento institucional. Dentro de la variada gama de programas de empleo sobresalió uno: el **Programa Trabajar**. En enero de 2002, todos los planes de empleo se unificaron en el **Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados**, lanzado en el marco de la

declaración de "Emergencia en Materia Social, Económica, Administrativa y Cambiaria" de la Argentina.

La centralidad que asumieron los programas estatales de empleo en la relación entre las organizaciones de desocupados y el Estado ha sido un tema que mereció la reflexión en la mayoría de los trabajos académicos. Estos programas fueron vistos como respuestas no represivas del Estado al reclamo de puestos de trabajo; es decir, como una estrategia estatal tendiente a institucionalizar un movimiento social disruptivo a partir de mecanismos de negociación en torno a la distribución de planes de empleo y ayuda alimentaria (Delamata, 2004; Svampa y Pereyra, 2003, 2005). De modo complementario, se hizo énfasis en que la "lucha" por planes de empleo protagonizada por las organizaciones de desocupados desafiaba el modo operatorio de gobiernos municipales y "punteros políticos", basado en la manipulación y la extorsión (Delamata, 2004; Svampa y Pereyra, 2003; Merklen, 2005). En esta lectura, las organizaciones de desocupados habrían venido a quebrar la dependencia de los sectores populares respecto de los "punteros" del Partido Justicialista a partir de la definición de los planes de empleo como producto de la lucha y la acción colectiva, así como también a través de un nuevo uso de estos programas orientado a cubrir necesidades básicas insatisfechas por medio de emprendimientos laborales y productivos. Sin desconocer los aportes de estas interpretaciones, creo que uno de sus problemas centrales radica en la reproducción como variable explicativa de los argumentos que los propios dirigentes de las organizaciones de desocupados movilizan para fundamentar su relación con el Estado en torno a los programas de empleo.

Otros trabajos consideran que los programas de empleo representan una "presa" para antiguos trabajadores que, convertidos en pobres, actúan con la "lógica del cazador" (Merklen, 2005). Esta interpretación enfatiza que el proceso de desestructuración social transformó al trabajador en pobre e impactó sobre las formas de "politicidad popular". Recuperando las propuestas teóricas de los estudios sobre la "nueva cuestión social", sobre todo la versión de Robert Castel,¹ se

¹ Con el término *cuestión social* se procura llamar la atención sobre los procesos que la sociedad pone en marcha para interrogarse sobre sí misma y conjurar el enigma de la fractura social (Castel, 1997).

interpreta que la desintegración de los lazos sociales en torno a la sociedad salarial dio lugar a un proceso de desafiliación e inscripción territorial de las "clases populares" en vínculos de proximidad local. Se afirma que a través de esos lazos locales circulan bienes que se capturan "afuera", en pasos obligados por el "sistema político"; es decir, el debilitamiento del vínculo salarial habría obligado a las "clases populares" y a las organizaciones colectivas que las representan a actuar según la "lógica del cazador", persiguiendo y capturando recursos que dispensan ONGs o diversas instancias gubernamentales. Desde mi punto de vista, la debilidad fundamental de esta interpretación es la imputación de una "lógica racional" (cazadora) a una entidad abstracta, como son las "clases populares", fuera de todo marco contextual y procesual. Frente a esto, procuro mostrar que la "apropiación" de los programas de empleo se produce en un marco de relaciones sociales entre la población y el Estado históricamente configurado.

Etnografías recientes, en especial el trabajo de Quirós (2006),² han aportado copiosos datos tendientes a revertir imágenes dicotómicas que separan las acciones de las organizaciones de desocupados de aquellas que, a nivel local, ejercen el Partido Justicialista o, en términos más generales, "los políticos". Al mismo tiempo, resulta relevante la reconstrucción de múltiples prácticas situadas en contexto para deconstruir la visión de una *clase popular* homogénea que actúa guiada por la "lógica del cazador". La mirada de estos trabajos estuvo puesta en los sujetos (personas) que participaban en movimientos piqueteros y procuró inscribir esa participación en otras dimensiones de la vida. Así, se apuntó que los planes de empleo conformaban un lenguaje compartido y anudaban una trama de relaciones interpersonales (Quirós, 2006). En virtud de estos aportes, propongo restituir una mirada que recupere la historicidad de la relación entre las organizaciones de desocupados y el Estado en función de los programas de empleo, de manera de evitar convertir a la trama de relaciones generada alrededor de los *planes* en una totalidad funcional por fuera de las relaciones de fuerza que marcaron su origen.

Desde esta visión, el desempleo constituye un peligro de fractura social porque representa el debilitamiento del lazo de inclusión social generado por la sociedad salarial durante el siglo XX.

² También me refiero al trabajo etnográfico de Ferraudi Curto (2005) sobre el Movimiento Teresa Rodríguez en el distrito bonaerense de Florencio Varela.

El objetivo de este capítulo, entonces, consiste en recuperar el proceso por el cual los programas de empleo se convirtieron en objeto de demanda para aquellas organizaciones que, como mostré en el capítulo II, habían iniciado diversas acciones en torno al problema de la desocupación. En otros términos, analizo cómo se configuró un modo de relación con el Estado en torno a los programas de ocupación transitoria. Para ello, en primer lugar describo los componentes de los dos programas de mayor alcance (Trabajar y Jefes y Jefas de Hogar Desocupados) con el propósito de reconstruir una modalidad de asistencia social inscripta en orientaciones más globales propiciadas por Organismos Internacionales de Crédito; en segundo lugar, integro esas descripciones en un punto de vista relacional para examinar cómo esa modalidad de política social perfiló propuestas que fueron apropiadas, reelaboradas y resignificadas dando lugar a un campo transaccional alrededor de los programas de empleo.

PROYECTOS Y BENEFICIARIOS: CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS DE EMPLEO

Entre los múltiples programas de empleo directo y transitorio encuadrados en la Ley Nacional de Empleo 24.013/91³ se distinguió el **Programa Trabajar**, creado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación en 1995 (Resolución 576/95) y reglamentado por la Secretaría de Empleo y Formación Profesional en enero de 1996 (Resolución 3/96). *Los proyectos*, que constituyeron el eje de la reglamentación, se definían como actividades tendientes a facilitar la demanda de empleo a partir de obras que contribuyeran al mejoramiento de la infraestructura económica y social de diferentes regiones. En su mayoría se concentraron en tareas

³ Estos programas se sucedieron desde el año 1993, financiados con el Fondo Nacional de Empleo y, en algunos casos, con préstamos de Organismos Internacionales de Crédito, tales como Programa Intensivo de Trabajo –PIT– (1993-1994), Programa de Asistencia Solidaria –PROAS– (1994-1995), Programa de Entrenamiento Ocupacional –PRENO–, Programa de Empleo de Interés Social –PROEDIS–, Programa Asistir, Programa de Empleo Coparticipado –PROCOPA–, Programa de Servicios Comunitarios, y Programa Trabajar en sus versiones I, II y III. Todos ellos compartían como objetivo manifiesto la inserción laboral de los trabajadores desocupados en obras y tareas de utilidad pública, a partir de convenios entre el gobierno nacional, las administraciones provinciales y organismos no gubernamentales. Además, todos proponían una ayuda económica no remunerativa de carácter transitoria durante un período mayor de tres meses y menor de doce.

de construcción, ampliación y remodelación de centros turísticos, establecimientos escolares, instalaciones de atención sanitaria o centros comunitarios de uso múltiples (comedores, hogares, instalaciones deportivas, culturales, etc.); en la extensión del tendido eléctrico y la red de agua potable; y, en menor medida, en la “producción para el mercado” (micro empresas, huertas, cría de conejos, etc.). En esos proyectos se empleaba “mano de obra” durante períodos mayores de tres meses y menores de doce a cambio de una “ayuda económica no remunerativa” -que variaba de acuerdo a las funciones pero que osciló entre las sumas de 150 y 300 pesos-. Estos proyectos debían ser elaborados por “organismos responsables”-gobiernos municipales, provinciales u organizaciones no gubernamentales- y presentados ante Gerencias Regionales de Promoción del Empleo o en su defecto frente a Agencias Territoriales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que fueran sometidos a evaluación y aprobación.

El artículo 7 de la resolución de reglamentación definía la tipología de los proyectos y recomendaba: *“Las actividades elegidas deberán contemplar que la ejecución del proyecto no desplace mano de obra de la actividad privada y que no distorsione el mercado de contratación estacional propio de cada región”*.

Una vez aprobados los proyectos, se confeccionaba un orden de méritos para el otorgamiento definitivo de puntaje. Los que obtenían un mayor puntaje eran aquellos que contemplaban “control social de la ejecución”, cofinanciamiento de las actividades, localización en los departamentos o partidos más pobres –según el mapa de pobreza elaborado con indicadores del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)–, capacitación y aval técnico. Luego se establecía un plazo de quince días para que los organismos responsables elevaran la *nómina de beneficiarios*. En cuanto a los requisitos que debían reunir los beneficiarios, el artículo 12 de la resolución de reglamentación estipulaba:

“Los/as beneficiarios/as de cada proyecto serán seleccionados/as entre aquellos/as trabajadores/as desocupados/as que no se encuentren percibiendo prestaciones por seguro de desempleo ni estén participando de ningún Programa de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose incluir al menos un CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de beneficiarios/as que sean único sostén familiar con, al menos, DOS (2) personas a cargo dentro de su grupo familiar”.

Como se desprende del citado texto, se orientaba la selección hacia personas desocupadas que no percibieran otro tipo de prestación estatal y, sobre todo, se recomendaba focalizar el beneficio en "únicos sostenes de familia", es decir, en aquellos que tuviesen al menos dos personas a cargo: menores de 14 años, mayores de 60 o discapacitados de cualquier edad. Asimismo, el artículo 17 de la misma resolución especificaba que los beneficiarios podían ser dados de "baja" por renunciadas, faltas injustificadas o rendimiento insuficiente.

El Programa Trabajar fue reemplazado por el **Trabajar II** en el año 1997.⁴ A mi modo de ver, el cambio más significativo entre uno y otro fue la mayor injerencia del Banco Mundial en términos de "apoyo técnico"⁵. Las misiones del Banco Mundial recomendaban focalizar el programa en las áreas "más pobres", para ello asesoraron sobre el uso de técnicas para una mejor medición de la pobreza con el objetivo de corregir desvíos en la asignación presupuestaria (Ravallion, 1999). Las propuestas de este organismo también tendieron a descentralizar aún más la implementación del programa, creando para ello Unidades Ejecutoras del Programa Trabajar.

Los proyectos continuaron siendo el eje de las reglamentaciones, pero se hizo mayor hincapié en su vinculación con el uso de mano de obra intensiva en actividades de utilidad social. El artículo 2 de la resolución de reglamentación establecía:

"Los proyectos del Programa TRABAJAR II tendrán los siguientes objetivos: a) incorporar trabajadores/as desocupados/as con baja calificación, promoviendo la realización de actividades de mano de obra intensiva; b) responder a las demandas prioritarias de la población en situación de pobreza, mejorando sus condiciones de vida; c) promover la articulación con otros Programas Sociales de superación de la pobreza; d) apoyar iniciativas comunitarias para la realización de obras de utilidad social".

⁴ Este programa fue creado mediante la Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 240, dictada el 16 de abril de 1997, y reglamentado a partir de la Resolución 202, dictada el 8 de mayo de 1997 por la Secretaría de Empleo y Capacitación Laboral del mencionado ministerio.

⁵ Hasta ese momento, los distintos programas de empleo directo y transitorio se habían sostenido fundamentalmente con presupuesto del Fondo Nacional de Empleo, creado por la Ley Nacional de Empleo 24013/9. De todas maneras, ese Fondo se componía de los aportes de un porcentaje de las remuneraciones sujetas a contribución provisional como así también de donaciones y de la "Cooperación Internacional". Por su parte, los programas de capacitación, sobre todo aquellos

De esa manera, los proyectos se sometían a una doble focalización: por un lado, debían incorporar trabajadores desocupados con “baja calificación”; por otro, tenían la misión de satisfacer la demanda de mejora de las condiciones de vida de la “población en situación de pobreza”. Varios documentos del Banco Mundial procuraban especificar con mayor detalle los criterios de viabilidad de los proyectos atendiendo a la manera en que se delimitaban la “población objetivo” y las zonas en situación de emergencia laboral y con altos índices de pobreza. Para la aprobación definitiva de los proyectos se otorgó un peso mayor a las Unidades Regionales del Programa Trabajar y a los informes sobre “situaciones de emergencia laboral” surgidos de los indicadores de los mercados de trabajo locales, aportados por autoridades de los gobiernos provinciales y por miembros de la CGT y de cámaras empresarias.

Al igual que en la primera versión del Programa Trabajar, los organismos responsables eran los encargados de seleccionar a los beneficiarios de los proyectos. En ese sentido, en la resolución reglamentaria se establecía:

“Podrán ser beneficiarios del Programa, trabajadores/as desocupados/as, de baja calificación laboral, mayores de DIECISÉIS (16) años, que no se encuentren percibiendo prestaciones previsionales, o por Seguro por Desempleo, ni estén participando de otro Programa de Empleo y/o Capacitación Laboral del M.T. y S.S, u otros Programas de Empleo provinciales o municipales”.

A diferencia de la primera versión del programa, que enfatizaba la selección de beneficiarios entre aquellos que fueran “único sostén de hogar”, en este caso el eje pasaba por limitar “filtraciones”; es decir, se acentuaba la incompatibilidad de este beneficio con la percepción de otros programas del orden nacional, provincial o municipal. No obstante, en mayo de 1998, cuando la segunda versión del programa fue remplazada por el **Programa Trabajar IIII**⁶, también financiado con un préstamo del Banco Mundial, se redefinió el criterio para la selección de beneficiarios. En virtud de esto, el artículo 3 de la resolución de creación indicaba:

destinados a jóvenes y mujeres, contaron con apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (Ministerio de Trabajo, 1999).

⁶ Este programa fue creado mediante la Resolución 327 dictada el 8 de mayo de 1998 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“El programa orienta sus acciones a brindar ocupación transitoria a los trabajadores desocupados en situaciones de pobreza y vulnerabilidad social, con el objeto de realizar proyectos de infraestructura económica y social que den respuesta a demandas y necesidades prioritarias de las distintas comunidades”.

Nuevamente el acento se puso sobre la condición de desocupación agravada por “situaciones de pobreza” y “vulnerabilidad social”.

Como sostuve en la introducción, todos los programas de empleo directo o transitorio dependientes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se unificaron en enero de 2002 en el **Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados**, que alcanzó la cantidad de 2.000.000 de beneficiarios durante su primer año de funcionamiento. Este programa se creó en el marco de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional (165/02) que también declaró la “Emergencia Ocupacional Nacional”. Dicho decreto se fundamentaba en la Ley 25.561, por la cual se había declarado la “Emergencia en Materia Social, Económica, Administrativa y Cambiaria”, de conformidad con el artículo 76 de la Constitución Nacional. Estas “declaraciones” y “creaciones” se produjeron en diciembre de 2001, en un contexto de intensa movilización social en Argentina, que tuvo como uno de sus correlatos el desplazamiento de cinco presidentes en siete días.⁷

Este programa, entonces, fue concebido como una medida tendiente a paliar la situación generada por la “*gravísima crisis*”, en un marco de “*niveles extremos de pobreza agravados por la parálisis productiva*”. En ese sentido, se definió como su principal objetivo:

“Propender a la protección integral de la familia y asegurar la concurrencia escolar de los hijos que se encuentren en las condiciones previstas en el presente y propiciar, en su caso, la incorporación de los jefes y jefas de hogar desocupados a la educación formal o su participación en cursos de capacitación que coadyuven a su futura reinserción laboral”.

A diferencia de las tres versiones del Programa Trabajar, en las que el eje de la reglamentación pasaba por las características de los proyectos, en este caso el

⁷ Un trabajo interesante que reconstruye los hechos de diciembre de 2001 y, a la vez, trasmite con la propia escritura las emociones y tensiones de esa época es el de Cafassi (2002).

núcleo del programa consistía en abarcar el mayor número de beneficiarios. En relación con esto último, en los considerandos del decreto de creación se afirmaba:

“La presente medida pone en funcionamiento un mecanismo que, en términos de la Emergencia del Estado, tiene por fin superar la situación de desprotección de hogares cuyos jefes se encuentren desocupados”.

La definición de los beneficiarios como eje de intervención se subsumía en el objetivo manifiesto de asegurar la “protección integral de la familia” en los casos en que los jefes o jefas de hogar se encontrasen desocupados.

A diferencia de los programas anteriores, su esquema organizativo estableció como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, mientras que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resultó encargado de la instrumentación. Además, los gastos de implementación se financiaron con aportes del Tesoro Nacional y, en menor medida, con préstamos del BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento –Grupo Banco Mundial–). El presupuesto total destinado al programa se reasignó entre las provincias de Argentina de acuerdo con los fondos coparticipables, así como también en función del nivel de pobreza de cada una de éstas, elaborado por el INDEC. También se crearon Consejos Consultivos, provinciales y municipales, integrados por representantes sindicales, empresariales y miembros de organizaciones sociales y confesionales, que tuvieron injerencia en el monitoreo del programa.

Como ya ha sido señalado, el eje argumental de este programa se concentraba en la figura del beneficiario antes que en los alcances y las características de los proyectos. Así, en el decreto de su creación se definió como destinatarios a:

“Jefes o jefas de hogar, con hijos de hasta DIECIOCHO (18) años de edad o discapacitados de cualquier edad, o a hogares donde la jefa de hogar o la cónyuge, concubina o cohabitante del jefe de hogar, se hallare en estado de gravidez, todos ellos desocupados y que residan en forma permanente en el país”.

De esta manera, el beneficiario se definía no sólo por su condición de desocupado sino también por el hecho de ser jefe o jefa de un hogar integrado por

menores de dieciocho años, discapacitados o enfermos de cualquier edad; y a cambio de una "ayuda económica", se comprometía a "contraprestar" la concurrencia escolar y los controles de salud de los menores que tuviera a cargo, así como su propia incorporación en el circuito de educación formal o en cursos de capacitación para lograr una futura reinserción laboral.

Quienes aspiraban a encuadrarse dentro de este programa debían acreditar su condición mediante un cúmulo de documentación probatoria. En este sentido, el artículo 10 del mencionado decreto indicaba:

"-Acreditar la condición de jefe o jefa de hogar en situación de desocupado, mediante simple declaración jurada.

-Acreditación de hijos a cargo mediante la presentación de la correspondiente Partida de Nacimiento del o los menores, o certificación del estado de gravidez, expedido por un centro de salud municipal, provincial o nacional.

-Acreditación de escolaridad en condición de alumno regular del o de los hijos a cargo, menores de DIECIOCHO (18) años mediante certificación expedida por el establecimiento educativo.

-Acreditación del control sanitario y cumplimiento de los planes nacionales de vacunación del o de los hijos a cargo, menores de DIECIOCHO (18) años, mediante libreta sanitaria o certificación expedida por un centro de salud municipal, provincial o nacional.

-Acreditación de la condición de discapacitado del o de los hijos a cargo, mediante certificación expedida por un centro de salud municipal, provincial o nacional.

-En los casos de ciudadanos extranjeros residentes en forma permanente en el país, dicha residencia deberá ser acreditada mediante Documento Nacional de Identidad argentino".

Para ingresar en el programa era preciso acreditar la condición de desocupado/a y de jefe/a de hogar movilizando documentación testificatoria. En el capítulo IV muestro cómo recolectar esa documentación se constituyó en una tarea cotidiana para *dirigentes* y *referentes* de la CCC y la FTV.

A los tres meses de creado el programa, otro decreto del Poder Ejecutivo Nacional (565/02) estableció como prioridad el "*Derecho Familiar a la Inclusión Social*". Esta redefinición fue producto de las recomendaciones de instituciones y organizaciones políticas, empresariales, sindicales y gubernamentales que participaron en la "Mesa de Diálogo Argentino", y se amparó en la letra del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones

Unidas. Entre las modificaciones más sobresalientes que proponía el mencionado decreto, figuraba la “*universalización del programa*”:

“De las conclusiones desarrolladas por el Diálogo Argentino, surge la necesidad de universalizar urgentemente el plan Jefes y Jefas de Hogar, con el fin de asegurar un mínimo de ingreso mensual a todas las familias argentinas”.

A partir de esa modificación se propuso extender el alcance del programa a desocupados jóvenes y a mayores de setenta años que no hubieran accedido a la prestación previsional. A pesar de las intenciones manifiestas, las condiciones para acceder al beneficio del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados permanecieron sin alteración. Sin embargo, durante los primeros meses del año 2003 se crearon dos programas complementarios: el *Plan Mayores*,⁸ dirigido a “mayores de setenta años de edad sin ingresos fijos suficientes para su sustento”, y el Programa de Empleo Comunitario,⁹ cuyo objetivo era incorporar beneficiarios pertenecientes a zonas geográficas o sectores de actividad especialmente afectados por la *desocupación y la vulnerabilidad*, que no reunieran las condiciones requeridas por el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.

En resoluciones complementarias se establecieron las modalidades de incorporación de los beneficiarios en actividades **comunitarias o productivas**, con el objetivo de cumplimentar la “contraprestación” durante cuatro horas diarias a cambio de una “ayuda económica no remunerativa” cuyo valor ascendía a ciento cincuenta pesos. Además, se estipularon como causales de “baja” del beneficio el incumplimiento de la “contraprestación”, el fallecimiento o la privación de la libertad del beneficiario, y la obtención de un empleo.

En términos generales, ambos programas concentraron la mayor parte de la intervención del Estado argentino sobre el problema de la desocupación y superaron en impacto a las acciones definidas como políticas pasivas de empleo, tales como el

⁸ Este programa fue creado mediante la Resolución 155, dictada el 21 de marzo de 2003 por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

⁹ El 3 de enero de 2003, la Resolución 3 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social creó este programa, que retomó las características de uno anterior: el Programa de Emergencia Laboral (PEL), el cual había sido creado mediante la Resolución 23 del año 1999, dictada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Seguro por Desempleo, destinadas a quienes, estando aptos para el trabajo, se encontraban desempleados por causas involuntarias (Ministerio de Trabajo, 1999). La prestación por desempleo, al igual que el Programa Trabajar, se encuadró dentro de la Ley Nacional de Empleo 24.013, sancionada en 1991, en el marco de una de las reformas más radicales de la legislación laboral en Argentina.¹⁰ Las reglamentaciones establecían que los beneficiarios serían aquellos que pudieran demostrar que habían tenido una relación laboral con cierta permanencia en el tiempo y que pudieran acreditar, mediante un documento legal, su situación de desempleo (despido sin justa causa, despido por quiebra, o concurso preventivo del empleador).¹¹ Esta medida tuvo un carácter performativo de la categorización del desempleo, ya que delimitó un tipo particular de ruptura de la relación laboral estable y supuso, por el tiempo de duración del beneficio, que la persona estaría capacitada para reubicarse en otro trabajo. De este modo, quedaron excluidas de este beneficio todas aquellas personas envueltas en relaciones laborales temporales, así como los ocupados en trabajos eventuales (Grassi, 2003; Fernández Alvarez y Manzano, 2005).

Los programas Trabajar y Jefes y Jefas de Hogar Desocupados tienen en común la introducción de un vocabulario relacionado con sus componentes: *beneficiarios, proyectos, unidades ejecutoras y organismos responsables*. Ambos se encuentran centrados en la transitoriedad de los beneficios y de los proyectos, así como también en propuestas de descentralización, y les otorgan un papel preponderante a los organismos responsables (ONGs o gobiernos municipales) en la elaboración y ejecución de actividades, y en la selección de beneficiarios.

¹⁰En líneas generales, como planteamos en otro trabajo (Fernández Alvarez y Manzano, 2005), esta reforma implicó esencialmente un pasaje de una legislación protectora a otra centrada en la flexibilidad y la desprotección del trabajador. Los defensores de estas modificaciones argumentaban que la limitación de derechos legales redundaría en el aumento de la demanda de empleo, ya que la disminución de los costos laborales atraería inversiones. En la práctica, esa reforma precarizó aún más los contratos de trabajo e impuso condiciones para la negociación colectiva, como toques a las indemnizaciones por despido, acuerdos sobre polivalencia y movilidad funcional, y mejoras salariales de acuerdo con la productividad (Schick, 1999). Para un análisis de estas transformaciones pueden consultarse Zeller (1991) y Marshall (1994, 1996).

¹¹Este seguro estipulaba una prestación básica que se calculaba tomando el 41,5% de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual de los últimos seis meses trabajados, y cuyo importe no podía superar los trescientos pesos ni ser inferior a ciento cincuenta pesos. La duración de la

Finalmente, y esto es fundamental, en los dos casos se propicia la focalización del gasto o de la asignación presupuestaria; es decir, se motorizan estrategias para focalizar sobre el “desocupado pobre” y sobre regiones marcadas por elevados índices de pobreza. En síntesis, estos programas performaron las intervenciones del Estado en materia de desempleo en Argentina poniendo en conexión dos condiciones: la situación de desempleo y la *situación de pobreza*. Esta categorización estatal del desempleo propone una “ayuda económica” frente a la desocupación que no se encuentra ligada exclusivamente a la falta de empleo, ya que se torna necesario acreditar públicamente marcadores que testifiquen condiciones de vida ligadas a la pobreza.

ORIENTACIONES INTERNACIONALES SOBRE POLÍTICA SOCIAL: LAS PROPUESTAS DEL BANCO MUNDIAL

En diferentes momentos de la historia argentina, los problemas de ocupación o la desocupación se transformaron en puntos álgidos de conflicto social.¹² En el marco de la crisis mundial de la década del 30 y en un contexto local signado por el agotamiento de un modelo social y productivo centrado en la agroexportación,¹³ la

cobertura se relacionaba con el tiempo efectivamente trabajado y cotizado a la Seguridad Social; por ello, contemplaba un mínimo de cuatro meses y un máximo de doce.

¹²Diversos estudios historiográficos mostraron la presencia de problemas de desocupación en períodos relativamente tempranos de la historia argentina, como en el año 1885, que se agravaron con la crisis de 1890 y 1891. Durante esos años, los rubros más afectados por el “paro” fueron la construcción, la administración pública y los tranvías. En 1900 y 1901 se registró otro pico de desocupación y la tasa de desempleo creció definitivamente entre 1913 y 1917 hasta alcanzar el 19% (Gutiérrez, 2000). Estos estudios también demuestran que los trabajadores sometidos al desempleo eran en su mayoría extranjeros y que la desocupación aparecía como un problema más en el marco de pésimas condiciones de vida, como la precaria situación habitacional y los magros salarios. En 1913 hubo un intento de intervención del Estado sobre la desocupación a partir de la creación de agencias de colocación estatal (Girbal-Blacha, 2003); sin embargo, la manera más frecuente de enfrentar este problema fue a través de instituciones vertebradas en torno a la ayuda mutua, que actuaban como socorro ante el desempleo, la enfermedad y la muerte (Gutiérrez, 2000). En relación con esto último, se puede consultar el estudio de Grimberg (1997) sobre los trabajadores gráficos. En él, la autora reconstruye los orígenes y el funcionamiento de la primera sociedad de socorros mutuos: la Sociedad Tipográfica Bonaerense, creada en 1857. También resulta pertinente el libro de Troncoso (1983), que recupera los orígenes del gremialismo obrero centrándose en figuras vinculadas al anarquismo y el socialismo, como Diego Abad de Santillán, Andrés Cabona, Francisco García, Sebastián Marotta, José Negri, Ruggiero Rúgilo y Alejandro Silvetti.

¹³La pérdida de hegemonía de Inglaterra a nivel internacional aceleró en Argentina la crisis del modelo de acumulación de capital centrado en la agroexportación y el desarrollo de ramas industriales

desocupación se convirtió en un eje de intervención del Estado. En 1932, la Cámara de Diputados de la Nación organizó el Primer Censo Nacional de Desocupados con el fin de medir y categorizar este fenómeno. Dicho censo arrojó como resultado una cifra de 333.997 personas desocupadas sobre una población de 11.658.214 habitantes (Girbal-Blacha, 2003). En 1934 se conformó la "Junta Nacional para Combatir la Desocupación", la cual delimitó como áreas de acción la ayuda social y la reorganización del trabajo a fin de equilibrar la oferta y la demanda de empleo; ambas iniciativas intentaron controlar social y moralmente a una población que se consideraba en riesgo de "vagancia" y "mendicidad". La aplicación de las medidas emanadas de la mencionada Junta estuvo a cargo de los Ministerios de Agricultura, Guerra y Marina. Como parte de la ayuda social, se construyó un albergue en la Dársena C del Puerto de Buenos Aires con el propósito de alojar a desocupados y proporcionarles asistencia médica y alimentaria. A cambio, los beneficiarios debían "contraprestar" horas de trabajo contribuyendo con el mantenimiento del propio albergue o realizando mejoras comunitarias (limpieza, desmalezamiento o cultivo en chacras para abastecer el centro de alojamiento y algunos hospitales públicos). En cuanto a la reorganización del trabajo, se procedió al traslado de desocupados a diferentes regiones del país con el objetivo de proporcionar mano de obra en tareas agrícolas, como las cosechas de algodón o de maíz. En otro orden, se crearon "escuelas talleres" en la zona de Puerto Nuevo destinadas a "reeducar" al desocupado mediante la enseñanza de oficios, como ebanistería, carpintería, herrería artística y encuadernación, así como también tareas de horticultura, jardinería y panadería (Girbal-Blacha, 2003).

En el año 1944, la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación, bajo la autoridad de Juan D. Perón, promovió un decreto que anuló los alcances de la ley que había dado origen a la "Junta Nacional para Combatir la Desocupación" e implementó medidas cuyo horizonte fue el pleno empleo en el marco de procesos de industrialización por sustitución de importaciones. De todas maneras, la

vinculadas con éste, tales como las plantas frigoríficas, la elaboración de productos lácteos, los molinos harineros y la construcción de la red ferroviaria (Díaz Alejandro, 1983). Este modelo se basaba en la exportación de materias primas a Europa, cereales y carnes principalmente, y en la importación de productos manufacturados.

conformación de un modelo de sustitución de importaciones fue objeto de debates y de enfrentamientos políticos, sociales y militares. El golpe de Estado de 1976 emprendió acciones tendientes a la liberalización y concentración de la economía, articulando iniciativas políticas dirigidas a reducir las bases sociales que conferían poder político a los sectores subalternos en el marco de una alianza obrero-industrial (Villareal, 1985). Estas orientaciones se profundizaron con un ritmo inusitado a comienzos de 1990, en un contexto de recomendaciones globales para América Latina expresadas en el "Consenso de Washington".¹⁴ Se puso en marcha, entonces, un régimen de convertibilidad, que tuvo su correlato en las privatizaciones de áreas del Estado y en un programa de ajuste estructural y disciplinamiento fiscal. Dos consecuencias centrales de estas transformaciones han sido la desindustrialización y la concentración industrial, que dejaron como saldo un significativo aumento en los niveles de desempleo y subempleo en comparación con la década del 70. En los conglomerados urbanos, la tasa de desocupación aumentó de 2,4 % en abril de 1975 a 20,2 en mayo de 1995, mientras que la tasa de subocupación pasó de 4,7 en abril de 1975 a 12,6 en mayo de 1995¹⁵. Fue en este marco también que Organismos Internacionales de Crédito (Grupo Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) comenzaron a tener un mayor peso en la definición de políticas públicas¹⁶.

De modo que las características de los programas de empleo, como el Trabajar o el Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, remiten, no sin matices, a las recomendaciones generales propiciadas por esos organismos. Como se puso de relieve en la primera parte de este capítulo, uno de ellos en particular, el Banco

¹⁴ El Consenso de Washington, sintetizado en un texto escrito por el economista John Williamson en 1990, expresaba las orientaciones en política económica del establishment mundial y recomendaba las siguientes medidas a los gobiernos de América Latina: disciplina fiscal, reforma de impuestos, liberalización financiera y del comercio, reforma en los tipos de cambio, inversión extranjera directa, privatización y desregulación. Un estudio pormenorizado de estas medidas se encuentra en el trabajo de Llistar (2003).

¹⁵ Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.

¹⁶ Baste como ejemplo que Argentina se incorporó al Banco Mundial en 1946, que el primer crédito fue otorgado en 1961 –en época del gobierno de Frondizi– para un programa de mejoramiento de carreteras dependiente de la Dirección Nacional de Viabilidad. Después de eso y a lo largo de dos décadas los créditos fueron esporádicos pero se reactivaron con fuerza desde 1986-1988 a cambio de compromisos de reformas estructurales.

Mundial, creció en injerencia sobre este tipo de políticas a partir de la puesta en marcha de la segunda versión del Programa Trabajar.

El Banco Mundial denomina *workfare* a lo que en contextos cotidianos se conoce como *planes* y en el Estado se define como *políticas activas de empleo*. La característica distintiva del *workfare* es el requerimiento de trabajo a cambio de beneficios monetarios. Los dictámenes de los técnicos del Banco Mundial aconsejaban aplicar este tipo de programas en aquellas zonas donde crisis macroeconómicas o desastres agroalimentarios habían convertido a una porción significativa de **pobres en desempleados** (Jalan y Ravallion, 1999). Desde esta óptica, el problema principal radicaba en la situación de pobreza, que preexistía al desempleo. Así, la orientación general de estos programas apuntaba, por un lado, a “auto-seleccionar” trabajadores desempleados de familias pobres, y por otro, a localizar los proyectos de utilidad social en las áreas más afectadas por la pobreza. En el caso argentino, estas orientaciones se tradujeron en una serie de recomendaciones que promovían la selección de beneficiarios entre familias pobres, por ello se sugería proporcionar una ayuda monetaria escasa, por debajo de los salarios mínimos, para desalentar a desocupados no pobres. También se elaboraron propuestas de capacitación destinadas a funcionarios provinciales con el objetivo de que éstos asesorasen en el armado de proyectos localizados en los departamentos más pobres del país (Jalan y Ravallion, 1999; Ravallion, 1999). Para acrecentar el impacto de los programas y volver más “eficiente” la distribución presupuestaria, se propuso el uso de técnicas de medición de la pobreza combinadas con los indicadores de “necesidades básicas insatisfechas” que utilizaba el INDEC (Ravallion, 1999a). En definitiva, el *workfare* se focalizó sobre familias y regiones “pobres”, y fue dentro de ese marco que se trataron problemas considerados *aleatorios y agravantes de la pobreza*, como el desempleo.

Desde otro ángulo, las estrategias de *workfare*, al menos en el caso argentino, se insertaron en propuestas más amplias del Banco Mundial expresadas en políticas de estabilización macroeconómica, reformas sectoriales de los servicios sociales y redefiniciones del rol del Estado en el tratamiento de la pobreza. En este sentido, en 1988 se conocieron los resultados de una misión de monitoreo sobre lo que el propio

Banco Mundial definió como “sector social”: vivienda, educación y salud. Ese documento concebía como problemas fundamentales de los servicios sociales la centralización, la falta de coordinación entre los sectores público y privado, y la universalización de servicios que brindaban asistencia a personas no pobres descuidando la atención sobre los grupos pobres. Sobre la base de ese diagnóstico se propusieron una serie de reformas fundamentadas en el propósito de mejorar la “eficiencia” y la “equidad” de las políticas sociales, tales como la planificación descentralizada, la reestructuración fiscal y administrativa de los servicios sociales, y la focalización del gasto social para reducir la pobreza de manera más eficaz y a menor costo. A fin de obtener el apoyo popular necesario para sostener estas reformas en el tiempo, también se sugería la participación de los beneficiarios directos a partir de la incorporación de organizaciones de base y comunitarias (The World Bank, 1988). A lo largo de los años 90, los informes de este organismo celebraban los programas de estabilización económica aplicados en Argentina desde los inicios de la década, puesto que consideraban que habían logrado la reducción de la pobreza. En su mayoría, los documentos recomendaban técnicas para ampliar el conocimiento sobre los grupos que aún se encontraban en situación de pobreza, con el objetivo de generar abordajes más precisos en la elaboración de estrategias de focalización, tales como sistemas estadísticos, encuestas de hogares en períodos breves, programas informáticos para agilizar la circulación de datos en dependencias gubernamentales, y metodologías participativas que incorporaran a los beneficiarios en el diagnóstico y el monitoreo de políticas sociales (The World Bank, 1996).

Durante la década del 90, la mayor parte de los documentos, informes y publicaciones de los Organismos Internacionales de Crédito se concentró en el problema de la focalización atendiendo a la relación entre el equilibrio macroeconómico y el gasto social. El grueso de las intervenciones proponía alternativas para alcanzar una mejor “selectividad” de los beneficiarios optimizando recursos y partidas presupuestarias. Algunos sugerían emplear instrumentos de medición más precisos para delimitar grupos de pobreza y evitar “filtraciones”, o sea, para impedir que los beneficios fueran apropiados por personas “no pobres”. Otros llamaban la atención sobre la conveniencia de estudiar tipos de pobreza de modo de

limitar errores de "exclusión"; es decir, proponían ampliar el rango para incluir grupos que se definían como pobres no en términos de NBI, sino en relación con el ingreso y el empleo (Chiara, 1996). En el marco de estos intercambios, asesores vinculados a organismos como CEPAL o el Banco Interamericano de Desarrollo cuestionaron la "focalización restrictiva" del Banco Mundial y propusieron mejorar este criterio a partir de modificaciones en la "gerencia de las políticas sociales"; en este sentido, algunos recomendaron practicar reformas en el proceso de prestación de servicios para lograr el compromiso de los funcionarios públicos (Sojo, 1999) y otros señalaron la participación comunitaria como una variable de aporte en términos de saberes, control, evaluación y focalización de las necesidades (Kliksberg, 1998). De una manera u otra, estas recomendaciones y debates se expresaron en la reestructuración de aquellas instituciones estatales destinadas a servicios sociales, y tal como fue señalado en trabajos anteriores (Grassi, 2003), se crearon dispositivos específicos. Un ejemplo es la Secretaría de Desarrollo Social, creada bajo la órbita de la Presidencia de la Nación en 1994, cuya misión fue unificar programas de distintos ministerios y gestionar créditos del BID y el Banco Mundial. También se crearon, en 1995, el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO), y el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC). Estas orientaciones se plasmaron en circuitos universitarios y cátedras de formación específicos; en este sentido, en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria se registran resoluciones de acreditación de carreras de especialización y maestrías con los siguientes títulos: "Gerencia y administración de programas sociales", "Especialización en planificación y gestión de políticas sociales", "Especialización en planificación, gestión social y comunitaria", y "Especialización en política, evaluación y gerencia social".

Recapitulando, los diferentes programas de empleo se inscribieron en una modalidad de política social orientada por principios neoliberales que propagaron los Organismos Internacionales de Crédito, sobre todo desde los inicios de la década del 90. Estas propuestas trataron el problema de la desocupación como un agravante de condiciones de pobreza preexistentes. En un contexto signado por la liberalización y concentración de la economía, y por el ajuste estructural y el disciplinamiento fiscal,

las alternativas giraron alrededor de la focalización del gasto social sobre aquellos grupos sociales y aquellas regiones delimitadas previamente como pobres. En su conjunto, estas medidas redefinieron modos de funcionamiento del Estado, profundizando la descentralización presupuestaria e institucional, y generando instancias de gestión conjunta entre los sectores “públicos” y “privados” sobre la base de nuevas técnicas de “gerencia social”. Desde un punto de vista relacional, en el próximo apartado procuro mostrar cómo estas propuestas definieron prácticas y sentidos, al mismo tiempo que fueron redefinidas con la conversión de los programas de empleo en objeto de demanda.

ENTRE LA CONQUISTA, EL MÉRITO Y LA ORGANIZACIÓN: PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE DEMANDAS

Integrantes de la FTV reconocían varias virtudes en los “*muchachos*” de la CCC (respeto, seriedad, lealtad, amplitud, inteligencia, etc.) y dos aciertos fundamentales: haber sido la primera organización que ensayó cortes de ruta prolongados en La Matanza y haber sido también la primera que logró *planes* de empleo: “*Con los planes, el primero que empieza es Alderete; él empezó con eso mucho antes que nosotros*”, sostuvieron en varias oportunidades algunos miembros de la FTV.

A partir de mis registros de campo pude establecer que desde 1997 se fue configurando una relación con el Estado en torno a programas de ocupación transitoria, cuando aún no se había conformado la vertiente de desocupados dentro de la CCC. Entonces, fueron los integrantes de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia quienes impulsaron diferentes alternativas de movilización y negociación para acceder a un programa de empleo implementado por la provincia de Buenos Aires, denominado “Barrios Bonaerenses”. Durante el año 1996, la “Subcomisión de Damas” había procurado extender el alcance del *Plan Vida* al mencionado barrio; se trataba de un programa materno-infantil dependiente del gobierno provincial, que a

nivel barrial descansaba en el trabajo voluntario de mujeres reconocidas como "manzaneras".¹⁷

"La comisión directiva de la Junta nos dijo: 'Hay que pelear por el Plan Vida'. La comisión directiva baja instrucciones de que la subcomisión tiene que pelear por el Plan Vida para el barrio, entonces, nosotras, como madres y como mujeres, teníamos que encarar el tema del Plan Vida y hacer que bajen el Plan Vida, porque éramos un barrio muy marginado por la ideología que tiene Juan Carlos. Nos tenían en segundo lugar y si presionamos únicamente conseguíamos; si no, no. Bueno, empezamos a pelear el Plan Vida hasta que lo conseguimos. Cuando lo conseguimos, elegida por la subcomisión, una de las manzaneras era yo para entregar las raciones que correspondían a los beneficiarios. Yo tenía cuatro manzanas a cargo para entregar alimentos" (Adelina, 45 años, integrante de la Mesa Ejecutiva de la CCC).

Las integrantes de la "Subcomisión de Damas", debido a su condición de *mujeres y madres*, fueron las encargadas de lograr que el Plan Vida "*bajara*" al barrio. Varias de ellas se integraron a ese programa en calidad de *manzaneras*, cuyas tareas consistían en aguardar todas las mañanas un camión de la provincia de Buenos Aires que descargaba diariamente leche y huevos, y semanalmente polenta, harina y arroz; repartir esas raciones alimentarias entre menores de seis años y embarazadas, y mantener el registro sobre la población materno-infantil de la manzana de referencia. Sin embargo, los relatos que escuché en el barrio Santa Emilia resaltaban muy poco las funciones diarias de las manzaneras; en cambio, enfatizaban que a través de ese programa se obtuvieron los primeros *setenta cupos, setenta puestos o setenta planes de empleo*:

"Y la lucha de los planes también empezó desde la Junta, empezó con eso del Plan Vida. El Plan Vida empezamos unas cuantas de la comisión como manzaneras, y al empezar como manzaneras tuvimos más acceso a la señora de Duhalde, y como ella fue la que dio el puntapié por los planes, entonces, al estar en contacto con ella, en reuniones, fuimos de la comisión, fue también Juan Carlos, reuniones con ella... Y ahí logramos tener los setenta planes, setenta puestos primero. Éramos unas

¹⁷ Este programa fue lanzado por la esposa del gobernador, la señora Hilda González de Duhalde, en el distrito de Florencio Varela en 1994. En sus orígenes incorporó a 30.000 beneficiarios, tuvo un crecimiento sostenido durante 1996 y alcanzó a 1.000.000 de personas en 1998 (Grassi, 2003; Masson, 2004). En cuanto a las manzaneras: "(...) son mujeres que viven en barrios que los funcionarios del gobierno provincial designan como 'pobres' a través de mediciones técnico-estadísticas del Índice de NBI" (Masson, 2004: 104).

cuantas de la Junta y así logramos un montón de cosas, porque estuvo la hermana de Duhalde, Cristina Duhalde, también; y reuniones tras reuniones, se fue pidiendo, pidiendo cosas, ayuda para los vecinos... Y se logró que se diera, cosa que ahora no nos dan nada” (Dora, 54 años, integrante de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia y miembro de la CCC).

“Desde el barrio Santa Emilia decidimos con todo este panorama que teníamos de la desocupación, la desnutrición, diarrea estival y distintas cosas... enfermedades que existían en el barrio, tuberculosis... nos fuimos dando cuenta que teníamos que ver cómo lo resolvíamos al tema del trabajo. Y nosotros decíamos: ‘Trabajo no hay’, pero sí teníamos información que están saliendo algunos planes sociales que los estaba otorgando la provincia de Buenos Aires. Y entonces vimos cómo hacíamos a través del Plan Vida y todo eso, que era la Chiche Duhalde la que manejaba eso, cómo hacemos que lleguen a Matanza. Y nos dieron setenta cupos, setenta cupos y tenían que entrar los que más necesidades tenían” (Adelina, 45 años, integrante de la Mesa Ejecutiva de la CCC).

“Chiche Duhalde ‘bajó’ al barrio, a una reunión en el jardín de infantes. Chiche Duhalde planteó que ellos estaban elaborando un plan que se llamaría Barrios, con un sueldo de 250 pesos (...). Aquí se inició la segunda etapa del movimiento. Pasamos a darle mucha atención al detalle de los trámites, antes no le dábamos bolilla (...). Se cuidaba mantener la llegada de la mercadería para los planes alimentarios, pero en las reuniones se fueron armando proyectos de trabajo sobre el arroyo, desagües, veredas y refugios.” (Alderete y Gómez, 1999: 15).

Para la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia, el *Plan Vida* representó mucho más que un programa materno-infantil centrado en el reparto de alimentos. En los testimonios citados se destacaba la centralidad que asumió el vínculo entablado, a partir de la implementación de este programa, entre las *manzaneras* y la esposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires. A través de esa relación se obtuvo el compromiso del gobierno provincial de enviar 3500 kilos de mercaderías mensuales al barrio Santa Emilia para que fueran distribuidos sobre la base de un *listado de desocupados* elaborado por los delegados de la Junta Vecinal. Además, y esto es fundamental, en el marco de esa relación, la esposa del gobernador se comprometió a incorporar *beneficiarios* del barrio Santa Emilia en el Programa Barrios Bonaerenses, que estaba próximo a lanzarse.

Por cierto, no era la primera vez que los integrantes de la Junta Vecinal presentaban ante autoridades gubernamentales el *problema de la desocupación*. Como mostré en el capítulo II, el barrio Santa Emilia había sido uno de los

protagonistas del acampe montado en la plaza de San Justo en mayo de 1996, a partir del cual se estableció una relación con el gobierno municipal en torno al reclamo de alimentos para las familias de desocupados. Sin embargo, considero que a partir de la puesta en funcionamiento de programas de ocupación transitoria se redefinió la relación con las dependencias gubernamentales alrededor del problema de la desocupación; por ejemplo, uno de los testimonios citados sostiene que “se inició la segunda etapa del movimiento”, centrada en tramitaciones y en la elaboración de proyectos sobre veredas, arroyos, refugios y desagües. Esto es así debido a los propios requerimientos de esta modalidad de política social. En el caso puntual del Programa Barrios Bonaerenses –que se inspiraba en los lineamientos y componentes del Programa Trabajar– se definía como objetivo el financiamiento de la mano de obra de proyectos dedicados a la construcción de infraestructura barrial o a la formación y/o capacitación. Estos proyectos podían ser presentados de manera descentralizada por organizaciones no gubernamentales o gobiernos municipales, y debían incorporar como beneficiarios a desocupados que no percibiesen otros planes nacionales o provinciales, prioritariamente jefes de hogar con tres personas a cargo (menores de 16 años, mayores de 65, discapacitados o embarazadas).

El acceso de los primeros setenta beneficiarios del barrio Santa Emilia al Programa Barrios Bonaerenses no fue una tarea sencilla. Desde el compromiso inicial de la esposa del gobernador en las reuniones del Plan Vida hasta el ingreso de las primeras setenta personas, medió un proceso de movilización y negociación que se prolongó durante todo el año 1997. En el marco de este proceso, los *planes* se constituyeron en objeto de demanda, pero en lugar de ser objetos inscriptos en la dinámica del toma y daca, se transformaron en objetos por los cuales se *lucha* y se *pelea* hasta que se *arrancan* y se *conquistan*. Al mismo tiempo que los *planes* se transformaban en objeto de demanda frente al Estado, los integrantes de la Junta Vecinal procuraban convertirlos en una demanda para los pobladores de Santa Emilia.

Diversas acciones y focos de disputa caracterizaron el proceso que condujo a la “conquista” de los primeros setenta *planes* de empleo. En febrero de 1997 se realizó una primera movilización hacia la ciudad de La Plata, con el objetivo de

presionar a las autoridades provinciales para que iniciaran la etapa formal de inscripción de “beneficiarios”:

“Nos movilizamos a la provincia y le sacamos al gobierno provincial el compromiso de ‘bajar’ a los barrios. Vinieron a reuniones en cada barrio. ¿Qué dirían los funcionarios? Esto alimentaba el tema y las expectativas en las barriadas; y en las reuniones, los desocupados iban embretando a los funcionarios. Ellos empezaron diciendo que podría haber sesenta cupos por barrio. En febrero del 97 hicimos una movilización, que fue grande, a La Plata, sede del gobierno provincial, basada en los barrios X y Santa Emilia. Ya estábamos en carpeta de la Municipalidad y la provincia” (Alderete y Gómez, 1999: 16).

Con esa movilización se logró que funcionarios del gobierno provincial “bajaran” al barrio. La presencia de los funcionarios no sólo constituía un indicio de la capacidad de presión de los integrantes de la Junta Vecinal, era también una manera de difundir entre los pobladores la existencia de *planes* para los “desocupados” y una señal de que era posible acceder a ellos:

“En realidad había como una desconfianza de la gente, porque nosotros juntábamos una cantidad de desocupados y por ahí los de provincia nos venían a anotar para el plan. Al otro día convocábamos y eran cuatro, cinco o diez. Como tres o cuatro veces nos sucedió eso, que venían de provincia y no venía la gente. Después se enteraban ahí, en el momento, y venían porque se enteraban por nosotros o porque les comentó fulano” (Ramón, 58 años, miembro de la Junta Vecinal 7 de Mayo del barrio Santa Emilia, integrante de la CCC).

La promesa del arribo de los funcionarios públicos al barrio implicaba un trabajo previo de convocatoria y de espera. Como puso de relieve el testimonio de Ramón, la Junta Vecinal procuraba reunir vecinos para presionar al gobierno a través de los funcionarios, mostrando los rostros y las demandas de los potenciales beneficiarios que aguardaban el ingreso al Programa Barrios Bonaerenses. Al mismo tiempo, convocar a una reunión con *funcionarios* provinciales que divulgarían los alcances del programa y anotarían a los interesados también resultaba una manera directa y eficaz de instalar entre los pobladores la demanda por *planes* de empleo.

Las expectativas de ingresar en este programa se intensificaron cuando en barrios aledaños a Santa Emilia comenzaron a trabajar cuadrillas inscriptas en el Programa Barrios Bonaerenses, que se distinguían por el uso de "chalecos amarillos":

"Cuando se lanzó el plan Barrios Bonaerenses y comenzaron a verse los 'chalecos amarillos' en otros barrios de La Matanza, crecieron la inquietud, el reclamo y la bronca: '¡¡Nosotros teníamos promesas de planes y no salen!!'... La provincia, en definitiva, se comprometió con los sesenta planes para el barrio Santa Emilia (...). Allí comenzó el tironeo: ellos decían 60, nosotros planteábamos un mínimo de 120, a partir de las listas elaboradas. Con el argumento del metraje del arroyo, que era la obra a encarar, logramos 10 planes más. En agosto de 1997, se afirmó la fórmula 60 más 10: 70 planes para el barrio Santa Emilia" (Alderete y Gómez, 1999: 16-17).

Se agudizó, entonces, un proceso de movilización que incluyó, como se señaló en el capítulo I, el corte de la ruta nacional 3 durante cuarenta y ocho horas, y manifestaciones hacia las dependencias de los gobiernos provincial y municipal. A fines de 1997 se iniciaron las negociaciones sobre la cantidad de beneficiarios del barrio Santa Emilia que ingresarían al Programa Barrios Bonaerenses. Las autoridades gubernamentales proponían el ingreso de sesenta personas, mientras que los representantes de la Junta Vecinal *presionaban* por ciento veinte, aduciendo un listado de aspirantes que se había confeccionado en el barrio. Finalmente, la Junta Vecinal logró aumentar en diez la cantidad de beneficiarios de la propuesta oficial, haciendo hincapié en aspectos técnicos de los proyectos de infraestructura a encarar.

Un último eje de movilización se concentró sobre la definición de la fecha en la cual los setenta beneficiarios comenzarían a *trabajar en el plan* y, como correlato, a percibir el correspondiente beneficio monetario:

"(...) Hicimos una movilización a la Municipalidad. En esa situación se vieron obligados a responder y dieron como fecha la primera quincena de noviembre. Luego intentaron esquivar el acuerdo, pero logramos las declaraciones juradas vía provincia el 16 de noviembre de 1997. Así fue como se consiguieron los primeros 70 cupos en el plan Barrios Bonaerenses. Recién en noviembre se empezaba a cobrar, pero la Municipalidad no nos quería reconocer, pedíamos herramientas y uniformes, y no

nos mandaban. Recién en marzo del 98 tuvimos listado de asistencia, pañol y herramientas” (Alderete y Gómez, 1999: 15-16-17).

En noviembre de 1997, los primeros setenta beneficiarios comenzaron a percibir la suma pecuniaria correspondiente al Programa Barrios Bonaerenses, y en marzo de 1998 fueron reconocidos por el gobierno municipal mediante la entrega de herramientas, del listado oficial de asistencia y del uniforme característico: los “chalequitos” de color amarillo.

Con la incorporación de los primeros setenta beneficiarios en el Programa Barrios Bonaerenses aumentaron las expectativas de acceder a un *plan* entre los pobladores de Santa Emilia, en la misma proporción que aumentó la demanda de *trabajo y planes* a la Junta Vecinal. En relación con esto, me interesa traer a consideración una escena de mi registro de campo. Una mañana del año 2004, como otras tantas, arribé al local de la CCC en el barrio Santa Emilia con el objetivo de entrevistar a la maestra del jardín comunitario que funcionaba allí. En el inmenso patio, un grupo de mujeres y varones, sentados en círculo, tomaban mate y conversaban animadamente; en algunos salones repicaba el sonido de las máquinas de coser de un emprendimiento textil; en otro extremo, una hilera de hombres aguardaba para entregar al pañolero carretillas, picos y palas que habían utilizado para limpiar las calles de tierra de la zona. El grupo que permanecía sentado formando un círculo había concluido la limpieza del local –el olor a desinfectante y lavandina impregnaba todavía el ambiente– y esperaba la autorización de “su dirigente” para retirarse. Como ellos estaban a la espera y yo también, iniciamos una charla amena e informal. Al cabo de un rato, me había interiorizado de cada una de sus dolencias: diabetes, reuma, hipertensión, asma y alergia, entre las más mencionadas. Interrumpió la charla un hombre, prolijamente vestido y peinado, con una carpetita de cartón entre sus manos, de la que sobresalían algunos papeles: *“Vengo de la calle Pampa –enfaticó– porque Don Valdez, el viejito de la otra esquina, no cobró, lo bajaron del plan, por eso fui a averiguar qué pasó”*. *“¡Qué barbaridad!”*, coreaban indignadas las voces en círculo. *“¡Es terrible! –sentenció el hombre de la carpeta–. Don Valdez vive del plan. Nosotros sobrevivimos con el plan porque, mal que mal, alguna changa siempre nos sale, pero él vive”*. Una pareja entrada en años

me miró y, con tono de resignación, el hombre comentó: *“Esto es así siempre, uno trabaja y no sabe si cobra, por eso yo no quería entrar acá, yo quería una pensión porque yo soy enfermo. Acá vinimos por mi hija, la mayor. Ella fue una de las primeras que entró; ella vino a pedir trabajo acá, porque todo esto nació con los chalequitos amarillos”*.

Es indudable que *vivir del plan, sobrevivir con el plan, trabajar con el plan, cobrar el plan y mantener el plan* es una parte sustancial de la vida de las personas con las que tuve la posibilidad de relacionarme a lo largo de mi trabajo de campo. Para algunos autores, este hecho define a un mundo, el *mundo de los planes* (Quirós, 2006); sin embargo, ese mundo no siempre existió. Como los propios testimonios destacaron, los *planes* en Santa Emilia tuvieron un “origen”, un “nacimiento”, es decir, una historicidad que se encuentra marcada por la visibilidad de los “chalequitos amarillos”.

Los primeros setenta beneficiarios del Programa Barrios Bonaerenses, los que vestían “chalecos amarillos”, se tornaron sumamente visibles porque sus tareas estaban esparcidas por toda la geografía del barrio: pintaban troncos de árboles, limpiaban el arroyo, desmalezaban zanjas, construían refugios en paradas de autobuses y recolectaban residuos de las calles de tierra. Para los dirigentes de la Junta Vecinal, esas actividades fueron clave para generar la demanda de *planes* de empleo entre los pobladores del barrio:

“El 16 de febrero nos entregaron uniformes y planillas, y salimos con los ‘chalecos amarillos’ a trabajar. A partir de ahí se pegó un vuelco, y arrancamos con asambleas de 500 personas los sábados” (Alderete y Gómez, 1999: 18-20).

“Ese período nos llevó a pegar un gran salto. Esas cuadrillas trabajaban en el barrio, yo qué sé... en desmalezamiento, en abrir zanjas de desagüe... Teniendo en cuenta que por lo menos en nuestro barrio, barrio Emilia, y en otros de alrededor, la mayoría son asentamientos con calles de tierra, sin las obras de infraestructura básica como cloacas, agua potable... En eso se están dando algunos pasos hoy con los nuevos programas que hay, pero en aquellos momentos, no. Por lo tanto, pudimos transmitir también al conjunto de los vecinos la necesidad de ir organizándose como nosotros lo hicimos para ir mejorando medianamente la calidad de vida” (Alfredo, 53 años, integrante de la Mesa Ejecutiva de la CCC).

Los *chalequitos amarillos* se convirtieron en un ícono de las posibilidades certeras de alcanzar un *plan de empleo* y la Junta Vecinal se transformó en una alternativa para potenciales “beneficiarios”. Más aún, esta Junta se fue constituyendo en un punto de referencia para representantes de otros barrios, algunos de los cuales, tal como se analizó en el capítulo II, habían compartido el acampe y la Olla Popular en la plaza de San Justo en mayo de 1996:

“Desbordados, en realidad, después de los primeros setenta ya armamos de ir incorporando a tal y tal barrio; sumando gente, reclamamos y conseguimos doscientos más. Desbordados en la demanda casi nunca estuvimos, porque siempre fuimos consiguiendo más planes. Si nosotros teníamos anotado ochenta, pedíamos trescientos o quinientos” (Ramón, 58 años, miembro de la Junta Vecinal 7 de Mayo del barrio Santa Emilia, integrante de la CCC).

A partir de la demanda y la “conquista” de *planes de empleo*, expresada en la incorporación de nuevos beneficiarios, el alcance de la Junta Vecinal se extendió sobre el barrio Santa Emilia y sobre otros aledaños. Pero esta expansión se debió también a la conformación, en abril de 1998, de la vertiente de desocupados de la CCC:

“La CCC empezó, digamos, gracias a la Junta Vecinal, porque los que empezamos con los primeros setenta puestos, los que empezamos a trabajar, empezamos a armar la CCC, somos la Junta Vecinal. Y desde ahí empezaron los barrios vecinos a pedir trabajo a la Junta y se empezó a pedir un representante de cada barrio, y ahí se fue armando la CCC. Pero el puntapié lo dio Santa Emilia” (Dora, 54 años, integrante de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia y miembro de la CCC).

“Los barrios, ante la situación que iba avanzando, se iban organizando. Aparte nosotros ya habíamos roto el cascarón en Matanza, y en muchos lugares del país, ya la CCC y su conformación de desocupados iba tomando estado público. Por lo tanto, como fue la experiencia de muchos barrios de La Matanza, dos, cinco o un vecino, preocupados por la situación, venían a hablarnos y nosotros le decíamos cuál era la línea que practicábamos: conformar comisiones de desocupados en cada barrio. Y acá estaban las puertas abiertas. ¿Qué ofrecemos? Lo único que podemos ofrecer es un puesto de lucha, un puesto de compromiso, de democracia, donde poder realmente no estar solo, porque entendimos siempre que las salidas individuales en

el marco del mundo capitalista no tienen cabida” (Alfredo, 53 años, integrante de la Mesa Ejecutiva de la CCC).

El acceso a los primeros setenta beneficiarios en el Programa Barrios Bonaerenses y los orígenes de la vertiente de desocupados de la CCC se entremezclan y superponen en un solo relato. Desde otro ángulo, se trata de un proceso de reforzamiento mutuo entre el acceso a *planes de empleo* y la redefinición de formas organizativas. La demanda de programas de empleo representó una posibilidad para reelaborar una trama organizativa en la que lograron un papel prominente delegados de barrio y, posteriormente, comisiones de barrio, que conformaron la vertiente de desocupados de la CCC. Los líderes de la Junta Vecinal articularon la “Mesa de Dirección de los Desocupados de la CCC”, que comenzó a funcionar en el antiguo edificio de una escuela del barrio Santa Emilia. Ese espacio, conocido como *Escuela Blanca*, se transformó en un centro de demandas, trámites y discusión “política” en torno a los programas de empleo; allí funcionaban las asambleas y las reuniones de las comisiones de desocupados de la CCC de La Matanza, y también se celebraban eventos que reunían a los “desocupados” de todo el país pertenecientes a esta organización.

El proceso de demanda de un mayor número de *planes* siguió alternativas similares a las que condujeron al ingreso de los primeros setenta beneficiarios en el Programa Barrios Bonaerenses: reuniones con funcionarios estatales, movilizaciones hacia dependencias gubernamentales y disputas relacionadas con la cantidad de beneficiarios y la fecha de ingreso a los programas. También se incorporaron como objeto de demanda el Programa Trabajar, el Programa de Emergencia Laboral y el Programa de Servicios Comunitarios, dependientes del Ministerio de Trabajo de la Nación:

“La gente venía suelta, ¿no?, y nosotros decíamos: ‘Tenemos que buscar a alguien que sea responsable y que pueda tomar todo esto como un delegado’. Pero ahora le decimos comisiones, pero era como un delegado; porque nosotros traíamos la experiencia de los delegados de manzana, y después lo transformamos y dijimos: ‘No, delegados no, lo vamos a llamar comisiones, dirigentes y comisiones de esos barrios’. Y así se inició. Ahí conseguimos. Nos llevó, como un parto, nueve meses... Fue toda una experiencia. Teníamos que ir a La Plata, teníamos que ir al municipio,

golpear las distintas puertas hasta que alguien te pudiera dar algún tipo de solución. Conseguimos doscientos cupos. Bueno, entonces, ya teníamos doscientos setenta planes, y después ya la Nación, cuando el gobierno nacional lanza los planes... en ese momento era Trabajar y el otro era el Programa PEL... El primero de ellos era el Trabajar y después junto con éste, al poco tiempo, largaron el otro que era el PEL, y que hoy lo cambiaron de nombre, pero es lo mismo que sería el PEL... Y ahí ya estaba el gobierno de Menem y salimos a reflejar nuestras necesidades. Y necesitamos más planes para nuestra gente. Y ahí sí ya era una cosa mucho más jodida las necesidades, porque ya se empezaba a sumar la gente, ya empezaban a decir dónde me tengo que sumar porque yo también necesito" (Adelina, 45 años, integrante de la Mesa Ejecutiva de la CCC).

"De esas asambleas arrancó el reclamo de un paquete de por los menos 400 puestos. Este reclamo se hizo en marzo del 98. La Municipalidad planteó 100 ó 150; la asamblea decidió plantarse en 200 y no bajar de esa cantidad. Se acordaron 200 puestos con la Municipalidad (...). Las asambleas posteriores giraron alrededor de la negociación por los 200 puestos y la fecha de la declaración jurada (...). Hoy están funcionando los 70 cupos del barrio Santa Emilia, que se han prorrogado por otros seis meses, más los 200 logrados en los otros barrios. Son 270 cupos del plan Barrios Bonaerenses, a los que se suman otros del Programa de Servicios Comunitarios del Ministerio de Trabajo de la Nación, con lo que se llega a unos 350 puestos de trabajo" (Alderete y Gómez, 1999: 20).

Junto con las demandas tendientes a incrementar la cantidad de beneficiarios, se formularon otras, centradas en las características de los programas de empleo; en este sentido, y refiriéndose al Programa Barrios Bonaerenses, Alfredo sostenía:

"Nosotros ahí instalamos el Día Femenino para las compañeras, planteamos que compañeras que estaban enfermas porque estaban embarazadas tuvieran una diferenciación de tareas. Inclusive llegamos a discutir, y en un momento se practicó, lo que podríamos llamar licencia por maternidad. O sea, fuimos tomando algunas medidas que entendíamos que eran necesarias en el marco de la lucha de clases o en el marco del clasismo propiamente dicho" (Alfredo, 53 años, integrante de la Mesa Ejecutiva de la CCC).

Considero significativo hacer notar que lo que se expresa en un momento como demanda es al mismo tiempo el resultado de innovaciones prácticas que fueron transformando el uso de los programas de empleo. Así, se "instalaron de hecho" una serie de prácticas como licencias por enfermedad y embarazo, y el "Día Femenino". Recuperando en líneas generales la propuesta teórica de Michel de

Certeau (1996),¹⁸ esas prácticas evidencian operaciones de uso que fueron marcando y transformando, en el propio “modo de hacer”, propuestas organizadas en otros contextos de decisión política y técnica.

Estas innovaciones cotidianas se articularon también en una lista de reclamos dirigidos al Estado. En el primer Plenario de Desocupados de la CCC, en abril de 1998, se votó un “*Programa para los beneficiarios del plan de empleo bonaerense*” que contenía los siguientes puntos:

*“Estabilidad laboral
Salario familiar
Cobertura social para toda la familia
Aumento salarial junto con el movimiento obrero
Apoyar y movilizarse por los compañeros que están fuera del Plan
Día Femenino
Una garrafa y alimentos
No permitir ni una sola baja en el plan”.*

Este “programa” expresó intentos más generales por redefinir la naturaleza de los *planes* desde un marco de garantía y protección del trabajo (estabilidad laboral, coberturas familiares, licencias, etc.) en el contexto de la relación con el Estado. Demandas similares, “agitadas” en algunas ocasiones o fechas especiales, fueron surgiendo en todo el recorrido; entre ellas, se destacaron *el pedido de aumento de los planes a trescientos cincuenta pesos, la universalización de los planes y el aguinaldo para los beneficiarios de programas sociales.*

En otro orden, la demanda y la “conquista” de programas de empleo trajo aparejado el problema de la *selección de beneficiarios*. Para las normativas oficiales, los organismos responsables debían presentar una nómina de beneficiarios una vez que los proyectos de trabajo fueran aprobados. En los términos de la CCC, esta normativa se tradujo en la elaboración de una serie de criterios para el “*reparto de los planes*”:

¹⁸ Michel de Certeau realizó un interesante aporte para comprender las operaciones de uso de los productos culturales ofrecidos en el mercado de bienes. En una discusión con posturas deterministas y reproductivistas, se centró en la práctica cotidiana de los usuarios para analizar cómo se marcaban social y culturalmente los productos de consumo y cómo era reapropiado el espacio organizado por los técnicos de la producción sociocultural.

“¿Quién tiene más necesidad que quién? O sea, ¿vos tenés más hambre que él? Bueno, entrás vos... Vos podés esperar un poquito, si no es tanta el hambre’, decíamos. ¿Cómo la podemos manejar a esta situación, que era toda una discusión entre todos? Y bueno, lo vamos a tener que hacer por participación. No es lo mismo el que fue dos veces a reclamar y exigirle al gobierno provincial que le resuelva su necesidad, al que se quedó en su casa esperando a que nosotros le traigamos el plan; no es la misma situación. Entonces, el que se preocupó mucho más, y puso más de su empeño y de su esmero para conseguirlo, ése es el que tiene que ingresar. Y así fue como ahora: ‘¿Cuánto le va a tocar al barrio fulanito? ¿Cuánto al menganito?’... Según la cantidad de necesidades que tiene. Así que bueno, así fue distribuido: treinta por acá, veinte por allá, diez por allá... Según la cantidades que teníamos, porque todos no teníamos la misma cantidad; algunos teníamos más, otros teníamos menos” (Adelina, 45 años, integrante de la Mesa Ejecutiva de la CCC).

“Se nos catalogó y criticó mucho por el tema de los puntajes, pero nosotros entendemos que un barrio que tiene grandes necesidades y mueve cien compañeros no es lo mismo, no se puede llevar lo mismo, que un barrio que tiene las mismas necesidades, o más o menos, y mueve diez compañeros. O sea, tiene organizados diez compañeros para luchar; porque nosotros planteamos, cuando ingresa alguien individualmente o un barrio, acá lo único que podemos ofrecer es un puesto de lucha para conseguir reivindicaciones. Y bueno, vos vas a conseguir reivindicaciones en el marco de lo que podés organizar y podés moverte. Nosotros decimos, en forma democrática, todos discuten. Ahora van a discutir los que necesitan, pero los que transpiraron para conseguirlo. El que quiere pescado que se moje” (Alfredo, 53 años, integrante de la Mesa Ejecutiva de la CCC).

El principal criterio para la *distribución de planes* resultó ser la *“participación en la lucha”*. En otras palabras, se generó una modalidad de ingreso a los programas de empleo que ponderó por sobre la “necesidad” (pobreza, desocupación, familia numerosa, etc.) la *participación en la lucha*. Se procuró objetivar este criterio en un *sistema de puntaje*, al que tuve muy poco acceso durante mi trabajo de campo, ya que sus alcances eran celosamente custodiados por los dirigentes barriales. De todas maneras, pude constatar que se componía del promedio mensual entre las movilizaciones (cortes de ruta o manifestaciones), la concurrencia a asambleas semanales y la asistencia a los proyectos de trabajo (esto para quienes ya eran *beneficiarios*). A fin de mes, se sumaba el puntaje alcanzado por cada persona, y se lo iba acumulando y registrando en una especie de orden de mérito, que se valorizaba en aquellos momentos en que se producían nuevos ingresos a los

programas de empleo. Esto, a su vez, implicaba un registro específico en cada una de las acciones de movilización; por ello, algunas personas se especializaban en la tarea de *"levantar listado"*; es decir, recorrían las carpas durante los cortes de ruta para tomar asistencia o, en caso de manifestaciones a la ciudad de Buenos Aires, aguardaban la caravana de micros en el parador Querandíes (localidad de Aldo Bonzi), donde confluían todos los manifestantes, para efectuar el registro de presentismo.

En este marco, *los planes* se revestían de nuevos significados: no sólo eran un objeto de lucha sino también un "premio" al empeño, al esmero, al sacrificio y a la capacidad de los dirigentes para organizar sus barrios. Obtener un plan, entonces, pasó a constituirse también en una prueba de mérito.

A la par de este criterio, funcionaba otro, denominado *"prioridades"*:

"Acá hay compañeros en distintos barrios que se llaman prioridades. Son prioridades porque son compañeros que están enfermos. Te encontrás con compañeros que a veces, públicamente, no son prioridad de nadie, porque hay realidades que las conocemos un grupo minúsculo, qué sé yo... Compañeros que son portadores de HIV. El grupo, entonces, tiene que decidir que son prioridades porque no están en condiciones de salir todos los días con nosotros. Otros son compañeros que han luchado mucho y que por alguna situación de enfermedad hoy están un poco más retraídos. Ésas son las famosas prioridades que manejamos en todos los aspectos: en la distribución de planes, en la distribución de mercaderías; en todos los aspectos se los tiene en cuenta" (Alfredo, 53 años, integrante de la Mesa Ejecutiva de la CCC).

Con el término *prioridades* se aludía a quienes tenían limitadas posibilidades de cumplir con la *"participación"*; por lo general, "enfermos", ancianos, discapacitados, mujeres embarazadas o solas con varios hijos a cargo. No obstante, no se trataba de un criterio absoluto, más bien era elástico, puesto que los grupos barriales y los dirigentes definían quién sería considerado como *prioridad*. Al respecto, en el capítulo V muestro algunas de las estrategias que los sujetos ponían en juego para ser reconocidos en esta categoría.

De un modo general, los criterios de distribución se fundamentaban en la administración de recursos escasos –planes, mercaderías, zapatillas, chapas, etc.– teniendo en cuenta la cantidad de personas con "necesidades". Sin embargo, desde

orientaciones ideológicas y políticas de la CCC se añadían otros fundamentos que recuperaban cierta historia del reconocimiento colectivo al mérito. En este sentido, en una declaración transcrita en el semanario del Partido Comunista Revolucionario, y reproducida en un “*Guión de Discusión Política*” elaborado para dirigentes de las comisiones de desocupados de la CCC, se respondía a acusaciones de “coacción” y “extorsión” vertidas por funcionarios públicos de la siguiente manera:

“Si vamos cien compañeros a reclamar a la municipalidad y nos dicen que sólo hay para 50, nosotros agarramos los 50, pero ¿quiénes son los 50 que van a entrar? Son los 100 que discuten quiénes serán los primeros 50 que van a entrar, con el compromiso previo de que esos 50 tienen que seguir luchando hasta lograr que entren los 100, porque los 100 lo lograron. Lo deciden todos, los propios compañeros, y no un puntero, no hay clientelismo político. Es el sistema que se han dado los propios desocupados, y es el mejor. Porque lo que logramos lo hemos conseguido en la lucha, y son los compañeros los que tienen que decidir cómo se distribuye lo que se consigue en la lucha, y no los punteros políticos, el cacique, el funcionario.

También son los propios compañeros en asamblea los que asignan puntos y los que controlan la asistencia y la participación.

También se tiene en cuenta la situación de aquellos que no pueden participar, por dificultades familiares, muchos chicos, enfermedades o embarazo.

No es el dirigente el que evalúa, entre todos evalúan quién tiene más derecho: el que más participa, el que esté en la lucha. Si no, el que se queda en su casa tomando mate se beneficiaría con lo que se consiguió con la lucha de otro.

No es un sistema de castigo, sino de premio al esfuerzo, y de reconocimiento al que participa. Se usó en las bolsas de trabajo de obreros rurales, y lo usó el Che Guevara en la Revolución cubana. Es un criterio justo y solidario, y lo defendemos públicamente”¹⁹

En el contexto de esa polémica pública, la declaración procuraba precisar el sentido de los criterios practicados en la CCC para la selección e incorporación de beneficiarios a los programas de empleo. De algún modo se denunciaba la estrategia de focalización del gasto social que se expresaba en una cantidad de recursos inferior a la necesaria para cubrir “necesidades”, pero el eje de la disputa no pasó por allí, sino que se concentró en la revalorización del compromiso del “individuo” con el “colectivo”. Es decir, se afirmaba que el *plan* constituía un premio al esfuerzo y un reconocimiento para aquel que participaba en el *proceso de lucha* por el que se alcanzaban nuevos ingresos en los programas de empleo, y se valorizaba a la

persona que se movilizaba frente a otras que priorizaban intereses “particulares”, como permanecer pasivas “mirando televisión” o “tomando mate”. En esta polémica también se defendía el “sistema de puntaje” como una herramienta colectiva, con un sentido político diferente al que se le atribuía al “puntero político” o al funcionario estatal.

Una mirada global sobre los puntos trabajados hasta aquí permite formular una serie de precisiones. Los planes se transformaron en un objeto de demanda y se resignificaron como productos *conquistados* o *logrados* por la lucha colectiva antes que como un beneficio otorgado por el Estado. La *conquista* de los primeros *planes* de empleo acentuó la demanda de estos bienes entre los pobladores de los barrios, hecho que repercutió en la consolidación organizativa de la vertiente de desocupados de la CCC. El uso cotidiano de estos programas generó prácticas de innovación sobre las propuestas oficiales que se tradujeron luego en demandas al Estado tendientes a redefinir el carácter transitorio de los beneficios y la ayuda no remunerativa, mediante la apelación a marcos históricos de protección del trabajo. Por último, y esto es de suma importancia, las definiciones políticas de los Organismos Internacionales de Crédito hacían hincapié en la selección de beneficiarios entre los desocupados de familias pobres con el objetivo de focalizar sobre ellos el gasto social. Estas orientaciones incidieron sobre los modos de acción de la CCC, que tuvo que seleccionar beneficiarios, pero con la diferencia de que ésta no se centró en las condiciones de pobreza sino en el mérito que los individuos mostraban en la “lucha”.

A modo de cierre de este apartado, me interesa considerar las similitudes y diferencias más notorias entre la FTV y la CCC respecto de este tema. Distinto a lo que sucedió con los barrios agrupados en torno a la “Olla de San Justo” en mayo de 1996, la “Red de Barrios”, conducida por integrantes de la cooperativa del asentamiento El Campo, pudo controlar la distribución de 10.000 kilos de alimentos que había obtenido tras una movilización a la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación y un acuerdo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tal como se mostró en el capítulo II. En este caso, las mercaderías también fueron resignificadas

¹⁹ *Semanario Del comunismo Revolucionario de Argentina. Hoy. Servir Al Pueblo. N° 875, 22/08/01.*

como un logro de la movilización colectiva antes que como un beneficio otorgado por el Estado:

“Nosotros, los bolsones los ganamos con la Red. Nosotros fuimos en una oportunidad, casi ochocientos vecinos, y tomamos el Ministerio de Desarrollo Social, allá en la 9 de julio. Nos metimos y dijimos: ‘No podemos seguir viviendo en este cuadro de situación, necesitamos trabajo, necesitamos alimentos, necesitamos medicamentos’. Sabemos que los que hay son presa, que son solamente para los vecinos que acompañan el partido político de turno, que si no, no te dan el bolsón alimentario. Lo mismo pasó con los planes de trabajo. Pero en ese momento no estaban los planes. Al poco tiempo arrancan los planes, y mirá vos lo que es, justo se da que en lo que es esta zona de Matanza, los primeros planes que armó el programa piloto fueron en este barrio particular: bajaron doscientos veinte planes con el Programa Barrios Bonaerenses” (Marcelito, 40 años, miembro de la Secretaría de Organización de la FTV).

También se elaboraron criterios para el reparto de las mercaderías haciendo hincapié en la *participación* en la lucha:

“Con eso que llegaba al Patronato, lo que nosotros logramos fue ampliar la Red: de dieciséis barrios, pasamos... hoy... ya son más de setenta; pero de dieciséis ahí en ese momento pasamos a cerca de cuarenta. Fuimos ampliando porque la gente preguntaba, venía y nosotros decíamos: ‘Bueno, la idea que esto sirva para organizarnos, porque si era buscar la comida, se la llevan y nada más’. En realidad estábamos traicionando lo que hacíamos, porque nosotros estamos muy de acuerdo con la promoción, pero la asistencia es por la urgencia de que no te mueras de hambre, si no, no sirve. Y porque yo siempre defendía esto: la comida es de los que la lucharon (...). Nosotros planteábamos: ‘Anótense, pero nosotros no le podemos decir que le vamos a dar’. Porque llegó un momento que le dábamos un paquete a cada barrio. Si nosotros el compromiso era seguir luchando y buscar soluciones a los problemas que había, lo que pasa que esto se incrementaba cada vez más porque la desocupación seguía subiendo” (José, 46 años, ex seminarista salesiano, coordinador de la escuela de formación política de la FTV).

“La comida es de los que la lucharon”, enfatizó José en el testimonio citado en el párrafo anterior. Al igual que en el caso de la CCC, se elaboraron criterios para la distribución de los bienes *conquistados* al Estado —en este caso, mercaderías— que acentuaron la capacidad de lucha y movilización.

A partir de la obtención de estos recursos aumentó la demanda hacia la Red de Barrios y se extendió el alcance de ésta hacia otras zonas de La Matanza. Sin embargo, aquí se pone de manifiesto su diferencia fundamental con la CCC, a esta

Red se incorporaron organizaciones previamente constituidas, como cooperativas, centros culturales, sociedades de fomento, jardines comunitarios o CEBs. A mi criterio, esta particularidad de su funcionamiento explica, parcialmente, por qué se desarrolló una demanda unificada en torno a los programas de empleo recién en el corte de ruta de noviembre de 2000, lo cual no quiere decir que las diversas organizaciones que conformaban la Red no tuvieran acceso a programas de empleo en los años anteriores. La diferencia reside en que, en este caso, el ingreso de beneficiarios parece haber estado centrado en vínculos con funcionarios estatales:

“Yo empecé con el Plan Joven, ese que daba Angie en la Casona de la Mujer, allá en San Justo. Después eso se terminó, y ahí me quedé hasta que volví a entrar para trabajar en el comedor” (Zulema, 53 años, integrante de la FTV, barrio Tierra Nuestra).

“Creo que con los planes empezó Hemán del barrio X, porque ellos habían tomado las tierras en el 97, entonces, cuando iba por los trámites de tierra se enteró que estaban saliendo los planes; y ahí creo que ellos consiguieron ochenta planes para ellos y para la cooperativa de El Campo” (Marcelito, 40 años, miembro de la Secretaría de Organización de la FTV).

De acuerdo con mis registros de campo, antes del año 2000, las organizaciones miembro de la Red de Barrios fueron obteniendo vacantes en programas de empleo a partir de relaciones personalizadas y de conocimiento mutuo con funcionarios estatales. En tanto, la FTV, en calidad de tal, logró un significativo aumento de beneficiarios en programas de empleo a partir del corte de ruta de noviembre de 2000:

“Yo creo que después del 2000, después de ese corte de Matanza, que empezamos a tener planes como Federación. Previo a eso, por ahí Berazategui hacía una marcha al municipio y el municipio le decía: ‘Tenés cincuenta planes’, y los presentaba como regional. Creo que después del 2000 empieza a aparecer como Federación de Tierra; el sujeto político que empieza a discutir esto va a ser la Federación y no las locales de la Federación” (Sonia, 34 años, trabajadora social, integrante del Equipo Técnico de la FTV).

“Y ahí me prendí, cuando fue en noviembre el corte, el más grande, que se consiguió los primeros cupos. Ahí ya me dijeron: ‘Vos tenés tantos cupos para la comunidad’, y como que ahí me empezaron a ver como la referente de la comunidad. De cincuenta,

agarramos y dividimos entre los tres la cantidad, y dijimos: 'Vos ocupate de fijarte de conseguir tanta gente que sepan'. Entonces ahí hicimos la reunión y aclaramos que trabajábamos con la organización de desocupados. Vinieron todos y eran todos vecinos... Que trabajábamos en la organización de desocupados, que estar en los planes también implicaba ir a las marchas, ir a los cortes... Y la gente lo aceptaba. De ahí a que... después, los papeles se pasaron todos... que el ministerio apruebe o no apruebe..." (Sandra, 30 años, referente de la FTV).

Los testimonios, en especial el de Sandra, ponían de relieve una modalidad de creación de demanda entre los pobladores de los barrios centrada en el ofrecimiento de los *planes* mediante la convocatoria a reuniones donde se exponía el requisito para ingresar en estos programas. Dicho requisito era la participación en cortes de ruta y manifestaciones, tema que retomo en el capítulo IV. En otras palabras, la FTV también ponderó como criterio para la selección de beneficiarios la participación en movilizaciones antes que las condiciones de pobreza.

A diferencia de la CCC, la FTV contaba con un equipo técnico compuesto en su mayoría por profesionales de trabajo social que difundieron una serie de reflexiones tendientes a resignificar a los *planes* de empleo –y también a otros bienes– como una posibilidad de “organización popular”:

“Hay historia de lucha previa, de resistencia, de logros paulatinos y escalonados: que se lograba la salita, que se lograba el asfalto, que se lograba la luz, que se lograba tal cosa... el alimento... Y hoy por hoy, los planes, la idea es que sean una excusa para seguir fortaleciendo esta trama. Lo que se quiere romper es la idea de puntero y el reparto como gestor individual. Lo que interesa es la posibilidad del recurso como excusa para fortalecer esa trama. Hay una historia; por ejemplo, el sector agrario campesino tiene toda una historia en lo que son las ligas agrarias previa a la dictadura, desarmadas por la dictadura. Quedaron diseminados compañeros con determinada formación política que vuelven a encontrarse posdictadura... Hay una serie de historias que permite encontrar manifestaciones públicas y colectivas que no van a depender del recurso concreto, de la bolsa de comida; en todo caso, la bolsa de comida se va a meter en una maquinaria como para solidificar un esquema organizativo diferente en esta trama que ya existe” (Sonia, 34 años, trabajadora social, integrante del Equipo Técnico de la FTV).

Los *planes* y la *mercadería* se redefinieron en términos de “excusas” para fortalecer una trama organizativa de *lucha* y *resistencia* anterior a este modo de política social. Esta valoración también debe entenderse en un contexto de disputa

política dentro del cual la FTV, así como también la CCC, procuraba desmarcarse de modos de acción atribuidos a los “punteros políticos”. De todas maneras, esta visión sobre los programas de empleo recupera debates históricos en el trabajo social como profesión y, en otro orden, planteos del movimiento de “curas villeros”. En un documento producido por integrantes del equipo técnico se afirmaba:

“La comunidad, como reproducción singular de la sociedad, está atravesada por procesos de exclusión y subsistencia y diversas situaciones de pobreza que la ubican como objeto de políticas sociales focalizadas y asistenciales. Estas políticas están marcadas, en muchos casos, por redes de clientelismo político y cooptación de sus organizaciones sociales. Esta mediación entre el recurso otorgado de forma vertical y el resto de la comunidad posiciona a algunas organizaciones sociales en un doble sentido clientelar: no sólo se vuelve imprescindible el recurso para su existencia, sino que su identidad misma se estructura cada vez más en torno a la operatividad de la entrega (...). En cambio, las organizaciones reunidas en la FTV han intentado fortalecer su estructura interna recurriendo a otros modelos organizativos, tendiente a la construcción de un polo de poder local con énfasis en la autonomía (a veces relativa) de estructuras más complejas y abarcativas en cuanto a su accionar. En estos casos, intentan instalar, en relación con el Estado, un escenario de conflicto y negociación (...). La generación del ‘conflicto’ introduce la posibilidad de convertir en agenda política la problemática que se intenta resolver. Generalmente, la atención a las problemáticas mencionadas ha sido paulatinamente abandonada en el marco del achicamiento del Estado” (Brancoli, Rosso y Giraldez, s/f: 5).

Este documento enfatizaba el problema de la aplicación de políticas de orientación neoliberal basadas en la estrategia de focalización, pero lo ubicaba en el marco de preocupaciones tradicionales del campo del trabajo social, referidas a la diferencia entre asistencia y *asistencialismo*. A partir de la década del 70, comenzó a utilizarse el término *asistencialismo* para referirse críticamente a las actividades que las clases dominantes ejercían para paliar la miseria que generaban con el propósito de perpetuar el sistema de explotación (Alayón, 2000). En ese marco, diversas propuestas tendieron a transformar prácticas del trabajo social que se creían ligadas al “asistencialismo”; una de ellas enfatizaba la asistencia al pueblo en sus necesidades a fin de transformar la misma en eje de organización de los sectores populares. Haciéndose eco de este debate, el documento citado sostenía que los recursos otorgados por el Estado, como *los planes*, debían utilizarse para potenciar a

las organizaciones comunitarias, como la FTV, y para consolidar un poder local que se relacionara con las agencias estatales en términos de conflicto, presión, gestión y negociación.

En un tono similar, aquellos dirigentes de la FTV que provenían de experiencias en CEBs subrayaban que *los planes* debían convertirse en un eje de organización popular:

“Yo pienso que la gente se tiene que ir dando cuenta que nosotros no peleamos sólo por planes. Incluso te digo más: ¿Viste cuando sonó recién el teléfono? Bueno, era un compañero de la cooperativa que me llamaba porque nosotros estamos presentando un proyecto para pedir un subsidio en Italia para un proyecto productivo; en realidad, uno para cultivar berenjenas y el otro, de imprenta; éste también es importante por la formación y la militancia política. Esto lleva trabajo porque vos tenés que producir, vender y poner los productos en el mercado. Pero bueno, ésa es la idea: que nos podamos ir organizando. Porque si es llevarse el plan o la comida para la casa, pienso que no sirve” (José, 46 años, ex seminarista salesiano, coordinador de la escuela de formación política de la FTV).

Como sostuve previamente, estas reflexiones se enmarcaban en ciertas líneas de debate que iniciaron, durante la década del 70, miembros del equipo pastoral de villas de emergencia en torno a la necesidad de complementar tareas de *asistencia* y de *promoción*. Se caracterizaban como asistencia aquellas acciones dirigidas a resolver problemas particulares (búsqueda de alguna medicina, turnos en hospitales, dinero para entierros, etc.), mientras que la promoción debía apuntar a fortalecer comisiones vecinales u otras instancias abocadas a asuntos comunes a la totalidad de la población (luz eléctrica, agua, recolección de residuos, etc.) (Vernazza, 1989).

En síntesis, la FTV comenzó a demandar programas de empleo de manera unificada más tarde que la CCC. No obstante, tanto los *planes* de empleo como otros recursos (mercaderías) se redefinieron como producto de la movilización colectiva. La “gestión” descentralizada de estos recursos, prevista por las normativas oficiales, extendió el alcance de la Red de Barrios, que en el año 1998 se incorporó a la FTV. En este caso también se reelaboraron las estrategias de focalización sobre la pobreza incorporando como criterio de distribución de los recursos “arrancados” al Estado la participación en procesos de movilización colectiva. Sin embargo, a

diferencia de la CCC, no se hizo mayor hincapié en el mérito, el sacrificio o el compromiso del individuo con el colectivo, sino que se acentuó la valoración de los *planes* de empleo como una posibilidad para el fortalecimiento organizativo de los “sectores populares”, recuperando líneas de reflexión del campo del trabajo social y de prácticas religiosas.

LA CONFIGURACIÓN DE UN CAMPO TRANSACCIONAL

Los programas de empleo se inscribieron dentro de una modalidad de política social orientada por principios neoliberales que trataron el problema de la desocupación como un agravante de condiciones de pobreza preexistentes. En un contexto signado por la liberalización y concentración de la economía, y por el ajuste estructural y el disciplinamiento fiscal, las alternativas giraron en relación con la focalización del gasto social sobre aquellos grupos sociales y aquellas regiones delimitadas previamente como pobres. En definitiva, en ese contexto, los programas de empleo representaron la propuesta fundamental del Estado argentino frente al aumento de los índices de desempleo.

Desde un punto de vista relacional, estos programas se constituyeron en demanda de grupos sociales a partir de procesos de movilización, negociación y concertación. Así, lo que inicialmente consistió en un “*acto de concesión*”, particularmente de la esposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires en el marco del Plan Vida, se transformó en un “*acto de lograr*” para quienes demandaban el ingreso a estos programas. Es preciso enfatizar que la simple existencia no constituyó a estos programas en objeto de demanda, sino que medió la acción de dirigentes locales para que se transformaran en una expectativa para los pobladores de los barrios.

La redefinición de la relación con el Estado en torno a los programas de empleo limitó los espacios de negociación y la propia formulación de demandas. En el capítulo II, hice hincapié en las características de las primeras movilizaciones que presentaron el problema de la desocupación y reclamaron al Estado compromisos sobre ese asunto. Los primeros pliegos de reivindicaciones incluían la demanda de

trabajo a partir de propuestas de reducción de la jornada laboral a seis horas o el reparto del trabajo socialmente existente. Sin embargo, las primeras intervenciones del Estado limitaron los acuerdos a la entrega de mercaderías y, posteriormente, las interacciones se ordenaron en función de los programas de empleo. Las demandas, entonces, se centraron en las características de estos programas: el ingreso de beneficiarios, la fecha de las incorporaciones, la reincorporación de beneficiarios dados de baja, el pedido de herramientas para proyectos y otras cuestiones más globales, como el pago de aguinaldo o licencias por enfermedad.

Las organizaciones de desocupados redefinieron los criterios de selección de beneficiarios centrados en la focalización sobre la pobreza, pero introdujeron otros vinculados con el mérito demostrado en la "lucha" emprendida para la "conquista de planes". En otras palabras, los programas de empleo fueron vistos como un premio al mérito, al esfuerzo y al sacrificio, así como también una *excusa* para fortalecer la organización, en el caso de la FTV. De este modo, como sostuve a lo largo del capítulo, se fue configurando un sistema de "administración" de los programas de empleo descentralizado y gestionado por las organizaciones de desocupados que sumó, a las normativas estatales, otras relacionadas con la "participación" en manifestaciones y cortes de ruta.

Desde la década de los cincuenta, diversas líneas de análisis antropológico contribuyeron a definir una lectura de los procesos sociales en términos de transacción. Barth (1959, 1959a) consideraba el sistema político como la suma de interacciones diádicas y voluntarias. En la década del 80, Menéndez (1981) redefinió ese concepto incorporando una visión sobre las relaciones de dominación/subalternidad, y Grimberg (1997), por su parte, recuperó la categoría *campo transaccional* para describir relaciones y procesos de poder que articulaban en tensión confrontación-negociación, concertación-negociación, coerción-consenso y resistencia-reproducción. Estos aportes -que serán desarrollados en profundidad en las conclusiones con el objetivo de integrar los resultados parciales de cada capítulo- permiten sostener que los procesos analizados en esta parte expresan la configuración de un *campo transaccional* en torno a los programas de empleo.

Cabe preguntarse, entonces, acerca de las modalidades cotidianas de "administración" de estos programas en el marco de la CCC y la FTV. Con este objetivo, en el siguiente capítulo analizo cómo la expectativa de acceso a programas de empleo y la participación en organizaciones de desocupados se insertaron en las trayectorias de vida de los sujetos y qué papel asumieron *referentes* o *dirigentes* barriales.

CAPÍTULO IV

TRAYECTORIAS DE VIDA Y RELACIONES BARRIALES

Eran las nueve de la mañana del 20 de noviembre de 2002. Tevez y Britos trataban de reparar la carpa del barrio, dañada a causa del viento que había soplado durante la madrugada. Arribaron Nora y Margarita, y faltaban Susana, Ramona y Celia para completar el relevo del turno noche. Nora se agachó y encendió un pequeño calentador, hirvió agua y preparó mate cocido. Margarita abrió su bolso y depositó sobre un banquito un paquete de tortas fritas que habían amasado en el comedor comunitario el día anterior. Ledesma salió de la carpa, con los ojos enrojecidos y el cabello desaliñado, saludó y, con voz entrecortada, comentó: *"Anoche casi nos quedamos sin carpa"*. El resto de las mujeres llegaron a las diez de la mañana. Celia atribuyó el retraso a un problema en la escuela de su hijo, Margarita se inquietó con ese comentario e interrogó a quienes estábamos ahí por la hora en que terminaría el corte de ruta, porque quería ir a un acto donde le entregarían un trofeo de fútbol a su hijo menor. Mientras tomaban el desayuno, Tevez relató una conversación con personas de la carpa vecina: *"Dicen que en el barrio de ellos tienen problemas, que unos cuantos no salieron para cobrar. ¿Y yo cuánto estuve sin cobrar?, ¿se acuerdan?"*, acotó Margarita. *"No, si uno hasta que no se ve en el listado no está tranquilo, trabaja y no sabe si al mes cobra"*, agregó Nora.

Sandra, la *referente* del grupo, descendió de un auto en el borde del ingreso principal al *corte de ruta*. Caminó despacio hacia la carpa, deteniéndose para saludar a otros manifestantes. Traía planillas entre las manos. Cuando se reunió con el grupo, le expusieron al detalle los avatares del viento, pero ella le dio poca importancia al asunto; estaba entusiasmada con la lectura de una de las planillas porque todos habían *"salido para cobrar"*. De su mochila, extrajo una lapicera y un cuadernito, anotó el nombre de las mujeres que estaban y de los varones que se habían quedado durante la noche. Después de eso se produjo efectivamente el relevo; los varones se despidieron y emprendieron el regreso hacia el barrio. Sandra sacó de su mochila el chaleco con las siglas de la FTV, se lo puso y salió a recorrer el corte para conversar con *referentes* de otros barrios. Nora se sentó sobre el

cordón de la vereda y comenzó a tejer. Susana, Ramona y Celia conversaban animadamente mientras leían unas revistas de promoción de cosméticos. Margarita me relató anécdotas de sus hijos. Sandra volvió una hora después y comunicó que a las cinco de la tarde se *levantaba el corte*, pero que ella junto con el resto de los *referentes* participaría en un acto en *Capital* para *apoyar* a trabajadores de una fábrica recuperada. Margarita esbozó una gran sonrisa y repetía que por suerte podría estar en el acto de su hijo.

El grupo que coordinaba Sandra pertenecía a la FTV del barrio San Alfonso. El ritmo de esa carpa era similar al de otras: los varones permanecían durante la noche y eran relevados por las mujeres durante el día. Pasaban horas conversando sobre temas diversos y siempre hacían referencia a los programas de empleo. En algunas carpas, como la del barrio Santa Emilia, había mayor movimiento a causa de las visitas: periodistas, estudiantes universitarios y representantes de otras organizaciones sociales y políticas que llevaban su adhesión al piquete.

Los grupos coordinados por *referentes* o *dirigentes* barriales también se reunían durante cuatro horas diarias en distintos proyectos que funcionaban en los barrios. Se integraban a comedores comunitarios, *copas de leche* o variados emprendimientos colectivos. En el inicio de mi trabajo de campo, me preguntaba quiénes eran estas personas, cuáles eran sus trayectorias de vida y qué características tenía el vínculo con los *referentes* o *dirigentes* barriales.

Estudios recientes sobre la acción colectiva exploraron la intersección entre las historias de vida y los episodios de protesta (Goodwin, Jasper y Polleta, 2001; Auyero, 2004). Se interesaron por la manera en que la biografía de personas comunes, no sólo la de militantes, modelaba la acción, los discursos y los significados de los "levantamientos populares". El registro de las vivencias apuntaba a producir una explicación global de la protesta capaz de contemplar "factores" subjetivos y estructurales. También procuraron poner de relieve que los incentivos materiales no eran suficientes para explicar la acción colectiva porque los manifestantes frecuentemente orientaban su conducta hacia la búsqueda de respeto

y reconocimiento.¹ En el caso argentino, se reconstruyó la historia de vida de una mujer en el sur del país para mostrar que las marcas de la violencia doméstica y la humillación la habían impulsado hacia el piquete como una búsqueda de dignidad y respeto (Auyero, 2004).

En este capítulo propongo invertir ese planteo teórico. En lugar de preguntarme cómo la vida modela la protesta, muestro cómo el piquete y los programas de empleo se insertaron en trayectorias y modos de vida. Se trata de iluminar la vida de los sujetos y las tramas de sus relaciones antes que la “acción colectiva”. Para ello, analizo de qué modo los *planes sociales* y la participación en organizaciones de desocupados se constituyeron en una expectativa para los sujetos, describo los diversos recorridos que éstos emprendieron para acceder a programas de empleo e inscribo esos recorridos en trayectorias sociales de vida y en tramas locales donde los *referentes o dirigentes barriales* asumieron un papel preponderante.

PLANES Y PIQUETES EN LOS RECORRIDOS DE LA VIDA

Don Tevez: Un hombre de trabajo

En agosto de 2002 conocí a Sandra, una de las cien *referentes* barriales de la FTV de La Matanza. Coordinaba un grupo de cuarenta personas en el barrio San Alfonso que cumplían con la contraprestación de cuatro horas diarias en programas de empleo en la capilla de la Comunidad Eclesial de Base San Juan Bosco. El barrio San Alfonso se fue poblando a partir de la década del 60 con migrantes provenientes de distintas provincias de Argentina. Se encuentra ubicado en las cercanías del predio donde funcionó la fábrica Borgward. La mayoría de sus calles son de tierra y sobre las pocas calzadas asfaltadas circulan los principales medios de transporte;

¹ Una serie de trabajos, enmarcados en la tradición estadounidense de estudios sobre la acción colectiva, se concentraron sobre las emociones para descentrar el peso otorgado a la racionalidad de los actores (Goodwin, Jasper y Polleta, 2001). Se procuró mostrar que las emociones operaban en todas las “fases de la acción colectiva”: surgimiento, auge y declive. En esta línea, uno de los primeros estudios para un caso latinoamericano ha sido el de Wood (2001), quien sostuvo que la rebelión del Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí en El Salvador tuvo que ver menos con incentivos materiales que con aspectos emocionales. Se explicaba la acción colectiva a partir del largo

algunos comunican la zona con la ciudad de Buenos Aires, y otros, con distintos puntos de La Matanza. Las viviendas son humildes, pero casi todas están construidas con ladrillos y techos de losa. También se distinguen ermitas en varias esquinas con las imágenes de las Vírgenes de Itatí o Caacupé.

Entre los años 2002 y 2005 visité ese barrio con el objetivo de avanzar con mi trabajo de campo, y fue así que conocí a varones y mujeres del grupo coordinado por Sandra. Los varones eran mayores de cincuenta años y tenían tareas asignadas en un proyecto de "infraestructura comunitaria" que consistía en la construcción de dos nuevas salas en la capilla. Como los arquitectos se demoraban en recorrer los barrios y el material era escaso (ladrillos, arena, cal o hierros), pasaban bastante tiempo charlando o se dedicaban a tareas de mantenimiento: la reparación de la bomba de agua, el cambio de focos de luz y el arreglo del césped, entre otras. Vestían camisas y pantalones de gabardina color azul, marca Ombú o Pampero, es decir, el atuendo que identifica a obreros y trabajadores manuales. A todos se les confería el trato de "don" antepuesto a sus apellidos. Mantuve conversaciones frecuentes y cotidianas con ellos, e incluso grabé cinco entrevistas en las cuales me relataron sus "historias de vida". A partir de ese material, reconstruyo aquí la trayectoria de "Don Tevez".

Don Tevez nació en un pueblo de la provincia de Santiago del Estero en 1946. Desde pequeño trabajó en *el campo* y cuando cumplió dieciséis años comenzó a viajar junto con su padre y cinco hombres más a provincias como Santa Fe y Tucumán para emplearse en tareas de cosecha. En el sur de Santa Fe *juntaban* maíz y papá, y en Tucumán *cortaban* caña de azúcar.

En 1965, a los diecinueve años de edad, viajó con un tío a Buenos Aires para trabajar en la extensión del tendido telefónico. Se instaló en la casa de sus parientes, en el barrio San Alfonso, y se integró a una cuadrilla de excavaciones viales. Desde su visión, ese trabajo era "sacrificado", pero representaba una mejora con respecto a las tareas del campo porque tenía asegurado un sueldo. Pocos años después, ingresó a una bodega del barrio de Palermo y ocupó un puesto en la línea de

resentimiento contra la autoridad y el repudio a la injusticia; en otras palabras, los campesinos se rebelaron por su dignidad.

embotellamiento. En ese empleo, según Don Tevez, estaba mejor que en las excavaciones: *“Me llevaba la misma plata, pero si llovía, no me mojaba”*. Algunos años más tarde renunció debido a cambios en el proceso de trabajo:

“Empezaron a modernizar la bodega, empezaron a sacar gente; entonces yo, antes que me digan: ‘No, no tenés más trabajo’, busqué otra cosa. Y ahí ya entré de metalúrgico”.

Tras ese recorrido inicial, obtuvo un empleo en una fábrica metalúrgica de La Matanza que producía piezas para *General Motors* y *Fiat*, donde trabajó durante veinticinco años. Don Tevez valoraba esa experiencia, no sólo por la magnitud del salario, sino también porque *aprendió un oficio*:

“En una fábrica, cuando uno tiene entusiasmo de aprender algo, se aprende. Ahí aprendí matricería. Los dueños de la fábrica me enseñaban porque ellos, cuando veían que no se llegaba con la producción, se sacaban los trajes, las corbatas, se calzaban los guantes y trabajaban”.

La empresa era pequeña, sólo ocupaba a treinta y cinco trabajadores. En su relato, Don Tevez acentuó la “armonía” de la vida en esa fábrica, y el trato personalizado y directo con los “dueños”. En el transcurso de los veinticinco años que trabajó allí, formó pareja y tuvo dos hijos varones. Un hito en su vida fue el accidente laboral en el que perdió dos de sus dedos cuando operaba un balancín: *“Por esos dedos me habían dado trescientos mil pesos”*, evocó. Con ese dinero compró un terreno en la localidad de Laferrere, que luego permutó por otro en el barrio San Alfonso, donde construyó la vivienda en la que continuaba morando.

A mediados de la década del 90, varios aspectos de su vida comenzaron a cambiar: *“Estos últimos años se empezó a venir la crisis, ya venía bajando, bajando”*, recordó apesadumbrado. La fábrica fue el primer lugar donde se empezaron a evidenciar los signos de esa “crisis”; se iniciaron los despidos de personal, se suspendió la compra de materias primas, se agotaba el stock y las quincenas dejaron de ser quincenas: *“Nosotros tratábamos de sacar de plata lo máximo que podíamos porque veíamos que ya no entraba plata”*, explicó. Por primera vez, junto con un

grupo de compañeros, se dirigió al Ministerio de Trabajo para “asentar” el pago salarial fuera de término. Procurando justificar esa actitud, Don Tevez señaló enfáticamente que los *dueños* fueron “*personas que siempre habían cumplido*”. Él fue uno de los últimos cinco despedidos, y cuando la fábrica cerró, la “crisis” se apoderó del conjunto de su vida:

“Los primeros meses fueron terribles, porque yo siempre fui un tipo que nunca estaba sin hacer nada, siempre estaba trabajando, y al no tener nada, que no te entre a tu casa plata, se te cruza cualquier cosa. Me ponía mal por los chicos; que a los chicos no les podés negar nada. Había muchos problemas que los creaba yo porque no podía darles lo que quería. Siempre se producían discusiones. Después me fui a trabajar de albañil, que es un trabajo que nunca me gustó hacer, pero con la situación no me quedó otra”.

En el breve párrafo citado, Don Tevez actualizó toda la experiencia de su vida para referirse a la vivencia de quedarse sin empleo. Experimentó *emocionalmente* esa situación por medio de “angustias”, “tensiones”, “nervios” y “discusiones”. El trabajo, tal como puso de relieve, representaba la manutención de su familia, un oficio útil y su único “saber hacer”, en una trayectoria donde vida y trabajo eran una y la misma cosa.

Las primeras respuestas frente a la situación de desempleo las encontró en el marco de su familia. Su pareja comenzó a trabajar en servicio doméstico, como lo había hecho antes de contraer matrimonio, y él aceptó trabajos eventuales en albañilería. Además, suspendió el envío mensual de dinero a su madre en Santiago del Estero, práctica que realizaba regularmente desde su llegada a Buenos Aires. A cambio, recibió la ayuda monetaria de una de sus hermanas para cubrir gastos de electricidad y gas (garrafas). En ese contexto, ingresó como beneficiario de un programa de empleo:

“Yo entré al plan por Sandra. Vinieron los de la capilla y me dijeron, como yo estaba en la fábrica, si sabía soldar, y me dijeron si podía hacer las rejas, esas que están ahí afuera. Yo dije: ‘Sí, no hay problema’, y como yo no les cobraba nada, vino Sandra, cuando salieron los planes que a ella le daban, y yo no quería saber nada. Me parecía que no estaba bien, como siempre fui un tipo de trabajar, no quería traer

algo que no era. Y así me fui acostumbrando. Porque yo ya conocía gente que estaba en los planes, y una era que no me gustaba la forma en que ellos lo hacían; no me gustaban los cortes de rutas, no me gustaba estar ahí cortando las rutas, no me gustaba ir. Ponele que iban a Plaza de Mayo: esas cosas nunca me gustaron; por eso te decía que en la fábrica nosotros nunca adherimos a un paro por más que sea de los metalúrgicos. Si había paros de colectivos y esas cosas, a nosotros siempre nos venían y nos buscaban, o llegábamos nosotros por otros medios a la fábrica. Nunca he sido partidario de eso, de los cortes de ruta y eso. Antes de Sandra ya me había venido a buscar un hombre, que es amigo de Sandra –vos por ahí lo conocés–, que se llama Ariel. Yo a él lo conocía porque estaba uno de mis primos con él, y él me dice: ‘Vení, traeme los papeles’; pero yo no quería ir por el tema que cortaban rutas, que hacían marchas... Yo no sabía que Sandra estaba con ellos. Bueno, después lo tuve que aceptar, pero digamos que con ganas no. Ojo, siempre fui, nunca dejé de ir a los cortes de ruta, pero siempre medio con rechazo. Tampoco me gusta eso que venga Sandra y diga: ‘Hay que ir a tal lado’. A mí nunca me lo hizo Sandra, pero dicen que en el grupo de Ariel él dice que hay que ir a tal lado, y si digo no, capaz que ya te mira de otro lado y capaz que a los dos meses ya no tenés más el plan; eso pasa en otros grupos. Para mí la única medida que tiene que haber acá es que no tiene que haber más planes, que tiene que haber trabajo. Porque esto de los planes, yo, viéndolo, no me conviene a mí, ni a vos, ni al país. ¿Por qué? Porque es una plata que no la utilizan para nada. Ponele: hay tres mil desocupados y por ahí que hay mil haciendo algo, otros dos mil que no hacen nada, de los que yo conozco, de los grupos que yo conozco, y eso no nos sirve, ni a mí, ni al barrio, ni tampoco al país. Si ellos verían la forma de invertir en otra cosa esa plata y que haya trabajo, que la gente trabaje...”.

En el relato de Don Tevez, el ingreso a un programa de empleo aparece como parte de un “acto generoso” de Sandra a cambio de su colaboración desinteresada en la capilla. Antes de eso, otras personas le habían ofrecido “*anotarlo en los planes*”, como Ariel, un *referente* de la FTV que coordinaba un grupo en el que participaba su primo. Pero *los planes* no formaban parte de sus expectativas; él estaba en desacuerdo con las condiciones requeridas para obtenerlos (participar en cortes de ruta y marchas) y consideraba que no se trataba de un trabajo útil. Finalmente ingresó al *plan* pensando que Sandra no estaba con “ellos”, es decir, con el grupo de Ariel y con quienes “cortaban rutas” en general. Sin embargo, remarcó su asistencia casi perfecta a los “*cortes de ruta*” con el mismo orgullo con que antes había destacado su asistencia casi perfecta a la fábrica, a la cual sólo había faltado a causa del accidente.

Don Tevez también colaboraba con la inscripción de otros vecinos. En relación con esto, reproduzco un diálogo que mantuve con Don Bena:

Bena: *Me anoté muchas veces en los planes, pero nunca me salían.*

Virginia: *¿Y dónde se anotaba?*

Bena: *¡¡Uh!!... Por un montón de lados; en las unidades básicas, con otra señora de allá [señala la dirección], y acá, con Sandra, estuve casi un año anotado y no salía nada.*

Virginia: *¿Por qué se anotó acá?*

Bena: *Lo que pasa es que yo conozco desde hace mucho a Don Tevez, porque él tiene parientes al lado de mi casa y siempre nos juntábamos a jugar al truco por lechones y esas cosas, y él un día me dijo: "Viejo, traé la fotocopia con los papeles de tus nietos, así te anoto con Sandra". Y así fue. Yo figuro como que estoy a cargo de mis nietos y mi hija mayor. Pero estuve un montón anotado y no salía, no salía. Y estaba un día en mi casa y dije: "No me va a salir nada", y me acosté con ese pensamiento a la noche. Y al otro día me levanté, y vino Sandra y me dijo: "Don Bena, salió" (Bena, 55 años, ex obrero metalúrgico).*

El beneficio de un programa de empleo (*el plan*) se constituyó en un aspecto de la vida de Don Tevez a partir de las acciones de referentes *barriales* (Sandra o Ariel). Percibir ese beneficio implicaba una modalidad de trabajo (*el trabajo con los planes*), el cumplimiento de ciertas normas (*marchar y cortar rutas*) y un modo de vinculación con los vecinos (*ofrecerles anotarse en el plan*).

En otro orden, uno de los problemas que más aquejaba a Don Tevez era la situación de Marcelo, su hijo mayor, quien en 2002 tenía veinte años de edad. Era común encontrar a Marcelo entre un grupo de jóvenes que se reunían en una de las esquinas del barrio. Algunos días de la semana, salía junto con uno de sus amigos a vender pañuelos, bolsas de residuos, trapos de piso, lapiceras y jabones por la calle Florida:

"Yo siempre ando recelando que lo puede llevar la policía, que por ahí se mandan alguna cosa rara, porque de acá sale con un chico que lo conozco, pero uno no sabe con quién más se junta; porque ellos van dos, nomás, pero después se juntan con otros que uno no conoce, y le dicen... vamos a poner la suposición... le dan una bicicleta... Por ahí se engancha y eso es en lo que más uno corre el riesgo. Porque los pibes de ahora son terribles, y nosotros siempre le decimos: 'No hagas esto, tené cuidado, fijate con quién andás, no se manden porquerías; si tu compañero quiere hacer algo, vos quedate por otro lado'..."

Como la mayoría de las personas que integraban el grupo de Sandra, Don Tevez se preocupaba por lo que consideraba las “*malas juntas*” de su hijo. Frente a esa situación, afloraban deseos que expresaban el curso de su propia trayectoria de vida. Aspiraba a que su hijo estudiase computación o idiomas para alcanzar un trabajo mejor. Esa aspiración se enraizaba en su propio pasado, ya que en el campo sólo había logrado concluir sexto grado porque “*había que trabajar*”.

Bourdieu (1999) analizó el problema de la transmisión de la herencia o el orden de las sucesiones en sociedades diferenciadas, que se expresa en la gestión de la relación entre los padres y los hijos mediada por el peso de las instituciones de enseñanza. Se trata de una relación compleja porque para continuar a quien encarna el linaje, el padre, a menudo hay que distinguirse de él, superarlo y, en un sentido, negarlo. En algunos casos, sostiene Bourdieu: “(...) *el ascenso que lleva a su hijo a superarlo es en cierto modo su propio logro, la plena realización de un proyecto quebrado que así puede alcanzar por procuración*” (Bourdieu, 1999: 444).

Retomando este aporte, la mayor expectativa de Don Tevez era que sus hijos estudiaran y que obtuvieran un mejor trabajo, que continuarán, en algún modo, ese proyecto inconcluso en su vida debido a las labores del campo. Así, el defasaje entre sus expectativas y los logros alcanzados por Marcelo se convertían en uno de los principales motivos de sufrimiento y preocupación, en otro quiebre más en su vida.

Susana: El plan, la ruta y el evangelio

Susana, al igual que Don Tevez, formaba parte del grupo de Sandra. Integraba el “sector de mujeres” que *trabajaban con el plan* distribuidas en proyectos de “*copa de leche*”, “*recreación y apoyo escolar*”, y “*roperito comunitario*”. En el relato de su vida, Susana entremezcló anécdotas de su única hija –Ari–, los sinsabores de *entrar y trabajar con el plan*, y las vivencias en la Iglesia Evangélica.

Susana nació en la provincia de Santiago del Estero, y con precisión mayúscula recordó su arribo a La Matanza el siete de enero de 1969, cuando tenía catorce años. Después que su abuelo falleció, su abuela vendió una chacra, y con ese dinero viajaron a Buenos Aires y se instalaron en el terreno de un pariente, en el barrio San Alfonso. El trabajo comenzó a formar parte de su vida desde muy

pequeña; en Santiago del Estero recolectaba leña y agua de pozo, y en Buenos Aires se empleó en servicio doméstico.

Cuando cumplió dieciocho años se propuso como meta trabajar en alguna fábrica porque *“observaba a un vecino que era obrero de Santa Rosa y tenía vacaciones y obra social”*. En 1973 ingresó a una fábrica de cables situada en el barrio de Villa Luro, y tiempo después obtuvo otro empleo en una lavandería de otro barrio, Mataderos, donde trabajó durante veinte años. El relato del trabajo en la lavandería se superpuso con el de otros acontecimientos significativos en su vida. En 1981 formó pareja con Ricardo, quien había migrado desde la provincia de Santa Fe y era “oficial soldador” en una fábrica metalúrgica:

“Nosotros juntábamos los dos sueldos. Es más, yo me acuerdo que ese tiempo lo guardaba en el banco. Y gracias a eso yo pude juntar plata en el banco, y ese tiempo te daban bastante, y pude ahorrar y comprarme el terreno este, acá, donde vivo. Ricardo me decía: ‘Vamos a tener un bebé’... ‘No –le digo–, hasta que yo no tenga un techo, no; si no, el día de mañana, ¿qué le voy a dar a mi hijo? Yo voy a tener un hijo –le digo– ¿y voy a andar de acá para allá? Hasta que yo no tenga mi casa, yo no tengo hijos’. Y bueno, por eso así pasó que a Ari yo la tuve a los treinta y siete años”.

Cuando reunieron los ahorros suficientes compraron un terreno en el barrio San Alfonso; después adquirieron una *“casilla prefabricada usada”* y fueron construyendo de a poco una casa de ladrillos:

“Nosotros estábamos en la casilla, íbamos comprando materiales y los dejábamos ahí. Después, cuando tuvimos bastante material, ladrillos, empezamos a edificar y juntábamos plata para pagarle al albañil”.

En 1992 nació su hija Ari. Susana evocó algunos paseos con ella, como la visita a Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú, y dos vacaciones de quince días en Santa Teresita.

En 1994 cerró la lavandería. Todavía con un halo de “bronca”, Susana afirmó:

"Nos dejó en la calle con veintipico de años. Yo lo único que hice en ese tiempo le mandé una carta documento, que con esa carta documento pude hacer el trámite para empezar a cobrar, eso que se cobra un año; eso fue lo único que cobré".

Susana percibió el Seguro por Desempleo, tal como lo refirió en el relato: "Eso que se cobra un año". Además, por intermedio de una amiga encontró empleo en otra lavandería, pero en 1997 renunció por problemas de salud:

"Me atacó reuma. Yo no podía caminar, me dolía mucho la rodilla. Entonces hablé con mi patrón y le dije: 'Yo voy a renunciar'. Porque yo, cuando fui, yo les dije a ellos que andaba medio enferma, entonces una vez por mes me daban permiso para faltar porque yo me hacía tratamiento, pero se ve que no andaba muy bien porque no me hacía bien el tratamiento que me hacía el doctor ese".

En el año 2000 se complicó aún más la situación en su familia porque también su esposo perdió el empleo: "La fábrica de ellos quebró en el 2000". Poco tiempo después, Ricardo consiguió "una changa" cerca del barrio:

"No le pagan mucho, está como changa, porque tampoco le pagan en blanco, así nomás le pagan. Pero por lo menos tiene trabajo, qué sé yo... Con lo que gana él ahí y con los ciento cincuenta que yo saco, más las costuras que yo hago, vamos tirando".

Lejos de la capacidad de ahorro con la que pudieron comprar un terreno y construir una casa, la familia de Susana se especializó en sumar pequeños montos de dinero provenientes de la "changa" de Ricardo, el trabajo de costura y "los ciento cincuenta del plan". El ingreso como beneficiaria a un programa de empleo no fue sencillo: *se anotó, llevó papeles, fue a cortes de ruta, marchó, se anotó nuevamente con otro grupo* y finalmente alcanzó la meta. Veamos cómo relata ese proceso:

"Resulta que andaban censando, porque mi mamá está enferma, entonces pasaban la gente de la iglesia censando y andaba una chica que vive allá a la vuelta. Yo la tenía a mi mamá ahí, estábamos sentadas ahí en el patio; y bueno, yo agarré y le dije a la chica esa porque mi mamá en ese tiempo no tenía ninguna pensión, no tenía nada. Entonces le digo a la chica: 'Mi mamá tiene demencia senil y yo no puedo dejarla a ella sola, ni con la nena tampoco, porque es un peligro'. Eran tiempos

donde mi mamá me rompía toda la casa, agarraba las cortinas... Yo me tuve que hacer cargo porque mis dos hermanos murieron. Entonces la chica me anotó y me dice: 'Pero ¿vos tampoco tenés nada?'. Entonces ella agarró y me anotó; y trabajaba acá ella. Y bueno, después me dice: 'Llevale todos los papeles a Sandra, decile que te anoté'. Yo agarré y le traje todos los papeles a Sandra, y ella me los agarró. Pero yo no la conocía, vivíamos cerca pero no la conocía. La chica que me anotó me dijo: 'No, pero vos tenés que tener un plan, no tenés que trabajar, mirá cómo la tenés a tu mamá. Tenés que quedarte con tu mamá'. Y bueno, resulta que me anotó Sandra, y después, cuando había piquetes... ¿Te acordás que había seguido piquetes?... En el mes había como tres o cuatro piquetes. Me acuerdo de uno que estuvo como dieciocho días. Y bueno, Sandra me iba a buscar, me decía que tenía que ir a los piquetes. Bueno, Ricardo en ese tiempo no trabajaba, cuando él no trabajaba y teníamos que ir así a un lugar, caminar, iba él. Estuve como dos años. Y ella me hacía que vaya a los cortes. Y un día yo agarré, no sé, ella me llamó para ir a un corte no sé dónde, y yo vine y hablé con ella; le digo: 'Sandra, yo hace dos años que estoy anotada y no sale mi cupo, ¿qué pasa? Cuando hay corte, a la primera que vas a buscar es a mí'... 'Y bueno, pero no sale, qué sé yo –me dice Sandra–, yo no tengo la culpa'. Y después me anoté con mi cuñado; él anotaba también en El Campo. Y me dice: 'Dame todos los papeles que yo te paso. Él allá está cerca de la casa de D'Elía'. Entonces me dice: 'Si puedo voy a la oficina de D'Elía o hablo con él'. Y bueno, le di todos los papeles; después de eso pasaron como cuatro meses, más o menos, y un día vine a mi casa del trueque y me dice: 'Susana, ya saliste, pero no sé con quién saliste, si con el plan mío o el plan de ellos. Ahora tenemos que ir a averiguar en dónde saliste'. Al rato llegó Sandra, a la tarde; justo estábamos tomando mate, y viene Sandra y dice: 'Ya salió. Vio que iba a salir, que no era culpa mía'. Entonces le digo: 'Sí, mi cuñado me dijo, pero no sé dónde salí, ¿en el suyo o en el de mi cuñado?'... 'No, en el mío salió', dice".

A diferencia de lo que ocurrió con Don Tevez, acceder al beneficio de un programa de empleo se tornó un proceso extenso para Susana. De acuerdo con su relato, una "censista" de la comunidad San Juan Bosco le propuso anotarla en el registro de aspirantes a *planes*. Se anotó con Sandra, a quien le llevó también "los papeles" (fotocopia de las dos primeras hojas de su documento, testificación de la situación de desempleo y toda la documentación de su hija: partida de nacimiento y certificados de vacunación y escolaridad). Susana recordaba que la censista había dicho que debido a la enfermedad de su madre "no tendría que hacer nada", pero Sandra iba a buscarla para participar en *cortes de ruta* y *marchas*. Después de dos años de *marchar* y *cortar rutas* esperando por el *plan*, decidió anotarse en el grupo de su cuñado, quien también era *referente* de la FTV. Finalmente, Sandra se

presentó una tarde en su casa y pronunció las palabras tan esperadas: *“Ya salió para cobrar, el lunes empieza a trabajar”*.

Al principio, la relación con el grupo fue difícil porque ella era “evangélica” y todas las demás, “católicas”; sin embargo, Susana consideraba que había ganado su lugar gracias al mismo “evangelio”:

“Lo que yo aprendí del evangelio es cómo tratarme sobre todo yo misma. Cuando yo voy a la iglesia me siento bien; como que yo llevé cargas en mi espalda, pero yo voy ahí y se las entrego a Dios, y que Dios se haga cargo, que me saque todo lo que yo tengo de malo. O por ahí discutí con alguna persona y a mí me quedó cargo de conciencia en mi cuerpo, en mi alma, no sé... Pero nosotros sentimos como un peso, y si vos no se lo entregás a Dios, vos seguís cargando esa mochila. En cambio, ahora yo voy, oro, me arrodillo, oro, y después me levanto bien”.

La Iglesia Pentecostal –el “evangelio”– se transformó en una dimensión fundamental de su vida. Concurría los martes, viernes, sábados y domingos. Además, se reunía con un grupo de mujeres, a quienes denominaba *hermanas*, para decorar la iglesia (fabricaban adornos, cosían cortinas o preparaban afiches) y para conversar sobre problemas familiares. Una de las actividades más emocionantes era dirigir la ceremonia previa a la prédica del pastor; para esa ocasión se preparaba con ayunos y escogía coros y pasajes del texto bíblico. Susana sentía que en “el evangelio” había aprendido a controlarse a sí misma, y oraba para que su esposo dejase de fumar y de beber cerveza. También relataba que se esmeraba diariamente para mejorar en el canto de alabanzas, poniendo el mismo empeño que antes dispensaba en los repertorios del cantante popular *Leo Dan* y el grupo musical *Pomada*.

Para el futuro, aspiraba a que su hija pudiese estudiar la carrera de abogacía. Al igual que Don Tevez, esas expectativas y aspiraciones actualizaban su propia trayectoria de vida, ya que sólo había cursado la escuela hasta primero inferior y había aprendido a leer recortando palabras de revistas y diarios.

Zulema: Las formas de “arreglárselas”

A siete kilómetros del barrio San Alfonso está Tierra Nuestra, otro barrio que se conformó como parte de las ocupaciones de tierras de la década del 80. Por las dos únicas calles asfaltadas circulaban, con poca frecuencia, tres líneas de colectivos (sólo una comunicaba con la Capital Federal), una flota de combis cuyo rasgo distintivo era una persona que sacaba medio cuerpo fuera del vehículo gritando el destino final, y autos antiguos y muy desvencijados que, como taxis colectivo, se dirigían a la estación ferroviaria de Gregorio de Laferrere. El grueso de los comercios se concentraba sobre una de las calles asfaltadas, y cuando visité por primera vez el barrio, en mayo de 2002, varios permanecían cerrados y derruidos a causa de los saqueos de diciembre de 2001.

Llegué a Tierra Nuestra a través de Violeta, quien también era *referente* barrial de la FTV y coordinaba un grupo de ciento treinta beneficiarios de programas de empleo. La vivienda de Violeta constituía el centro de reunión de los grupos; en la cocina funcionaba un comedor comunitario, en la habitación de una de sus hijas se confeccionaban prendas de vestir y en el patio delantero se fabricaban juguetes de madera. Durante dos años frecuenté semanalmente esa casa; observé actividades cotidianas, mantuve diálogos amenos con mujeres del grupo y entrevisté a diez de ellas para reconstruir sus trayectorias de vida. Una de ellas es Zulema, quien configuró el relato de su vida en torno a las maneras de “arreglárselas”. Desde ese registro se refirió a los programas de empleo, a la vida de sus cinco hijos y a sus aspiraciones para el futuro.

Zulema nació en 1950 en Capital Federal, y de niña vivió con sus padres, oriundos de la provincia de Entre Ríos, y sus doce hermanos en la Villa 15 del barrio de Mataderos. Su padre trabajaba en una fábrica de bebidas alcohólicas (la que elaboraba la sidra La Victoria). Cuando cumplió quince años, ella se empleó en un pequeño taller que producía cajas de cartón y útiles escolares. Definió a esa etapa de su vida como “*la más linda*”, porque no tenía hijos, entregaba la mitad de su salario a su madre y con el resto del dinero solía ir al cine, sobre todo cuando se estrenaban películas del actor y cantante popular Sandro.

Formó pareja y tuvo su primera hija a los diecinueve años. Se mudó a La Matanza porque su esposo obtuvo un puesto de trabajo en un frigorífico de la zona. Con orgullo, todavía recordaba las habilidades laborales de su pareja: *"Entró para limpieza y terminó matando, cortando y limpiando vacas"*. Tuvo seis hijos, pero el menor de ellos falleció cuando cumplió tres años.

Un acontecimiento que marcó un hito en la vida de Zulema fue la separación de su pareja en 1996:

"Cuando me separé no sabía para dónde arrancar; fue un desastre. 'Cómo hago, compro esto y compro lo otro'... Y estaba una señora que me dice: '¿Por qué no me viene a ayudar a casa?'. Y yo dije que sí. Empecé ahí y ya con eso me arreglaba; era poco, pero alcanzaba. Después, los chicos hacían alguna changuita. Gastón siempre hacía alguna changuita, y con eso nos arreglábamos. Después ya empecé con lo de la cocina; después, con el plan Trabajar. Y ya tengo mi sueldo todos los meses, ya con eso me arreglo".

Luego de la separación, contó con diversas opciones para procurar *"arreglárselas"*. Para Zulema, a diferencia de Don Tevez, el *plan* representaba un trabajo por el cual obtenía un ingreso mensual relativamente estable. Esa suma se integraba con pequeños montos de dinero provenientes de trabajos eventuales, tanto de ella como de sus hijos. Así relató su ingreso a los programas de empleo:

"Cuando conocí a Violeta empecé con el plan de cocina, con el Proyecto Joven; estudié cocina y también me recibí de cocinera. Estudié, y la pasantía la hice en el Hospital de Niños. Una experiencia hermosa, hermosa, muy linda. Violeta nos dijo: 'Es vigilancia o cocina', y yo elegí cocina porque a mí me gusta cocinar; entonces me puse en cocina y era lindo. Teníamos que ir a Lomas de Zamora. Nos encontrábamos en la rotonda de San Justo con otras chicas y volvíamos a las diez de la noche; eran ocho horas, de lunes a viernes. Cuatro meses duró, cuatro meses de práctica y cuatro de teoría. Angi había puesto ese plan, la de la Casona de la Mujer. Y a mí me gustaba; como los chicos ya eran más grandes, yo ya los dejaba solos. Primero no estaba ese proyecto, pero Violeta nos llevaba a la Casona para ver cómo podíamos hacer quintas, criar conejos... Los sábados nos íbamos de camping también con la Casona. Y después dijeron de este proyecto, y como a mí me gustaba estudiar, dije: 'Bueno, vamos a aprovechar'. Yo a Violeta la conocía del barrio, pero después, cuando se acabaron esos proyectos, la dejé de ver. Y me anoté en un colegio y no salió, y dije: 'Bueno, si no sale, no sale', es como que me resigné. Hasta que un día, caminando por el barrio, me la encontré a Violeta, y nos pusimos a

conversar y me dijo: 'Pasá por mi casa que tengo algo para vos'. Y así empecé en el Plan Trabajar. Sólo un tiempo la dejé de verla, pero después ya empezamos otra vez, y ya me quedé con ella. Yo a ella la conozco de hace mucho; todos la conocen en el barrio, porque ella siempre anda por el barrio. Cuando se inundaba, siempre anduvo dando colchones, mercadería...".

En la visión de Zulema, *el plan* constituía un bien otorgado por Violeta. Esa percepción remitía a una modalidad de práctica de los *referentes barriales* centrada en la entrega no sólo de *planes* sino también de otros bienes, como colchones o mercaderías. Zulema primero se incorporó a un programa de capacitación –Proyecto Joven–, y por eso valoraba esa experiencia como una instancia de aprendizaje. Cuando finalizó, se *anotó* como aspirante en un programa de empleo en una escuela de la zona, pero de allí nunca la convocaron. Más tarde, ingresó en el programa Trabajar, nuevamente a través de Violeta.

El lenguaje asociado a los programas de empleo –*trabajar con el plan, anotarse, salir, estar con*– impregnó el relato de Zulema tanto al referirse a su vida como a la de sus hijos. Gastón, su hijo menor, había entregado *los papeles* a su hermana mayor, Nancy, quien lo *anotó en los planes* porque era coordinadora de un grupo de la CCC. Nancy, sostuvo Zulema, “*se quedó sin trabajo y el marido también, con seis hijos; entonces se anotaron con Alderete y están trabajando bien*”. La pareja de Romina, su hija menor, también percibía un programa de empleo, pero Zulema aclaró: “*No está con nosotros, está con los de Alderete*”. Por último, la pareja de Sergio, otro de sus hijos, también era beneficiaria de un programa de empleo: “*La mujercita de Sergio también tiene plan; ella está con Alderete. Acá la mayoría tiene Alderete; toda esta parte, la mayoría trabaja toda con Alderete*”.

La percepción del beneficio de un programa de empleo sobresalía como criterio para definir pertenencias y obligaciones. En la visión de Zulema se anulaba la relación de *mediación*, ya que eran los líderes de las organizaciones quienes entregaban *planes* o proporcionaban trabajo. Como parte de las obligaciones, también señaló la participación en “cortes de ruta”:

“Hubo una temporada que había que salir a la ruta. ¿Te acordás de esa temporada que había que ir, que había cortes de dieciocho días? Íbamos a los cortes porque no

salían los trabajos. A mí me gustaba salir; íbamos a Plaza de Mayo, pero estaba tranquilo. Yo a la noche no me quedaba, no quería dejar mi casa sola”.

La última vez que encontré a Zulema, sus días transcurrían entre las tareas en el comedor comunitario y la venta de lavandina y detergente en el barrio. Para el futuro, soñaba con *“estar tranquila”* y montar un puesto de venta de productos de limpieza. Aspiraba a que sus dos hijos varones, Gastón y Maxi, encontrasen trabajo, y deseaba que *los planes* continuaran en el tiempo. Refiriéndose a esto último sostenía: *“Yo le digo a Violeta: ‘Sacan esto y buscamos otra cosa, qué le vamos a hacer’. Y Violeta nos dice siempre: ‘Yo les enseño a trabajar y ustedes tienen que tratar de arreglárselas solas’”.*

Dora: Ayudar y Luchar

Dora pertenecía a la CCC y coordinaba el comedor comunitario que funcionaba en la sala de primeros auxilios de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia.² Si bien cumplía esa función como parte de la contraprestación en un programa de empleo, su historia estaba íntimamente ligada a los orígenes de *la sala*, ya que había sido una de las integrantes de la Subcomisión de Damas que impulsó la creación de ese centro sanitario. En el relato de su vida, entretrejía recuerdos sobre los primeros tiempos en el asentamiento con la *“la lucha por la tierra y por los primeros planes de trabajo”*.

Nació en la provincia de Tucumán en el año 1948. Sus padres eran propietarios de unas pocas hectáreas dedicadas a la producción de caña de azúcar. Concluyó la escuela secundaria y se inscribió en cursos de dactilografía y taquigrafía que dejó inconclusos. Entre 1964 y 1965, participó junto con su madrina en actividades políticas impulsadas por el peronismo en San Miguel de Tucumán:

“Yo tenía mi madrina, era muy peronista, y al ser ella peronista me fue metiendo, inculcando el peronismo, de ayudar a la gente. Y gracias a Dios yo estuve en una

² No me detendré en la descripción de este barrio, ya que a lo largo de esta tesis, sobre todo en el capítulo II, se abordaron sus características.

buena situación con mis papás, estaban bien mis papás. Y bueno, yo empecé a ayudar a la gente, pero era muy jorobado participar en reuniones; a lo mejor vos estabas en una reunión de justicialistas y te decían: 'Viene la policía', y tenías que correr por todo Tucumán porque te tiraban los caballos encima; venía la montada, era muy jodido. Eso sería en el 64 ó 65. Éramos unos cuantos y ya ahí me empezó a gustar. Ayudábamos a la gente que le faltaba la comida, a los que trabajaban en los ingenios... Fue una gran lucha la que tuvo mi madrina, fue muy luchadora ella. Y yo por eso digo –porque a mi mamá no le gustó y a mi papá tampoco– que yo aprendí de mi madrina a ayudar a la gente”.

Dora entendía que la influencia de su madrina había sido decisiva en el gusto que ella sentía por “ayudar a la gente” y consideraba que ese sentimiento formaba parte del peronismo. En el año 1969, después que falleció su padre, decidió migrar a Buenos Aires junto con un primo para buscar trabajo. Primero vivió en el distrito de Florencio Varela. Consiguió empleo en tareas de servicio doméstico y luego ingresó como operaria en un frigorífico. Decidió retornar a Tucumán en 1971 porque los trabajos que encontraba eran “*muy sacrificados*”. Al año siguiente conoció a quien se convirtió en su pareja y juntos regresaron a Buenos Aires. En 1973 arribaron a La Matanza y se instalaron en la vivienda de unos parientes, en la localidad de Isidro Casanova.

En 1983 decidieron solicitar un terreno en Santa Emilia, porque en Isidro Casanova compartían varias personas un mismo espacio y el hermano menor de su pareja había “ocupado” tierras en el asentamiento:

“Estábamos todos alrededor de mi suegra, todos mis cuñados, ahí viviendo; y el más chico de todos se casó y se vino para estos lados porque consiguió un terreno, y al venirse él, mi marido dijo –como yo vivía con mis suegros al fondo–, dijo: ‘No, vamos, vamos a tratar de ir’. Y se nos dio un terreno a nosotros también, porque en realidad estábamos viviendo en un terreno que no era nuestro. Y así empezamos. Nos costó lágrimas llegar; a la tarde nos sentábamos, nos mirábamos con los chicos, lloraban ellos, a mí me caían las lágrimas, casi me voy”.

Se entrevistaron con una funcionaria municipal que les entregó la orden de un terreno de diez por treinta metros (10 x 30) junto al predio que había ocupado el hermano de su esposo. Dora calificaba los primeros tiempos en el asentamiento como “*muy sacrificados*”, porque era un “*campo*”; entre otras cosas, tuvieron que

prolongar el tendido eléctrico desde un barrio vecino y, como aún las calles no estaban trazadas, diariamente caminaban por estrechos senderos hasta alcanzar la ruta 3, a dos kilómetros de distancia. Sobre el terreno ocupado, construyeron una vivienda y un local en el que montaron un comercio de venta de verduras y productos comestibles. El esposo de Dora renunció a su empleo en una empresa de mantenimiento de ascensores porque debía custodiar la parcela de tierra ocupada. Tiempo después se incorporó a la Junta Vecinal para *“luchar por los terrenos”*:

“Nos empezamos a meter de a poco, de a poco; la lucha por los terrenos para que nos dieran las escrituras, para que nos dieran los papeles, los viajes a La Plata... Primero participaba mi marido, como que primero yo no quería saber nada, de verdad. Yo le decía: ‘Vos te pasás todo el tiempo ahí, estás ahí, no tenés ningún beneficio’... A mí me reventaba porque yo me tenía que quedar con los chicos, llevar al colegio a los chicos, atender el negocio; todo era cargar sobre mí. Él estaba siempre en reunión, porque después que volvían de La Plata, lo que tenían que hacer los delegados era juntar a los vecinos y hacer la reunión, y comentarles qué pasaba”.

La participación en la Junta Vecinal demandaba varias horas del día, entre viajes a la ciudad de La Plata y reuniones con los vecinos. En esa época, Dora consideraba que las tareas de su pareja en esa Junta representaban una sobrecarga para su vida porque tenía que ocuparse de la atención del comercio y de la crianza de sus hijos. Tiempo después, su esposo retomó el empleo en la empresa de mantenimientos de ascensores y se alejó de la Junta. También cerraron el comercio porque se quedaron sin fondos para reponer mercaderías: *“Nos llevaron a la quiebra los fiados”*, afirmó Dora.

Una vez que cerró el comercio, se incorporó a la Subcomisión de Damas de la Junta Vecinal. En ese espacio se dedicaban a recaudar fondos para la construcción de la sala de primeros auxilios y para cubrir los costos de los trámites vinculados con la demanda de titularidad de los terrenos. Luego comenzaron a viajar anualmente a distintas ciudades de Argentina para participar del Encuentro Nacional de Mujeres. Uno de los momentos que Dora identificó como de los más difíciles tanto en su vida como en el barrio fue el de la crisis hiperinflacionaria de 1989:

“Ahí sí que nos vinimos todos abajo. Fue bravo, fue bravo... Ahí apareció la olla popular; tuvimos que hacer olla popular, cocinar; los muchachos iban y pedían... Traían la mercadería y las mujeres a cocinar, a repartir... Repartir la comida, repartir la mercadería que nos daban, tratar de ayudar a todos los vecinos, siempre y cuando podíamos. La Municipalidad nos traía mercaderías, y era juntar la gente, tratar que hagan la fila, ordenarlos a todos y cada uno llevaba su mercadería”.

Desde esas experiencias previas, los programas de empleo se fundían en un registro que enfatizaba *la lucha*. Se trataba de la misma “*lucha*” que habían emprendido en otras oportunidades por *la tierra, la sala y el barrio*. En el año 1997, en calidad de *manzanera* del Plan Vida, participó, con la esposa y la hermana del gobernador de la provincia de Buenos Aires, en las reuniones en las que se acordó el ingreso de beneficiarios al Programa Barrios Bonaerenses. Dora formó parte de los primeros setenta ingresos del barrio Santa Emilia:

“Siempre me quedé en la sala. Después, cuando empezamos con esto del plan, que iban a venir estos cupos de trabajo, es como que ahí dejé un poco la sala y pasé al colegio. Fui de las primeras setenta que fuimos a trabajar, y estuve en el pañol, era pañolera. A la mañana tenía que correr hasta allá para entregar las herramientas. Después decidimos poner un comedor; entonces pasé a la cocina, dejé el pañol y pasé a la cocina. Después de estar en la cocina empezamos con el Jardín Caperucita Roja, y ahí ya estaba como encargada del jardín. Era demasiado y decidí dejar, dije: ‘No quiero saber más nada, me quedo en mi casa’; porque mis hijos me decían: ‘Vos estás siempre allá, no estás con nosotros’. Mi marido me tiraba la bronca y fue así que dije: ‘No quiero saber más nada’. Alderete me dijo: ‘Mire, Dora, vaya a su casa, quédese quince días, tómese quince días o tómese un mes, y después hablamos’. Y al final me convenció y volví. Vengo y estoy decidida a luchar; no soy la única, pero es la responsabilidad que tengo, la confianza que pusieron mis compañeros, porque ellos están todos en la lucha por trabajo. Entonces yo tengo que estar acá para llevar adelante esta sala, para poder agrandarla, para poder seguir haciendo cosas”.

Dora experimentó el ingreso a un programa de empleo como parte de opciones colectivas antes que personales. En su relato se pusieron de relieve los proyectos conjuntos antes que las expectativas y aspiraciones individuales. En ese sentido, interpretó como una desventaja del *plan* su traslado de la sala a la Escuela Blanca.

En su relato enfatizó que su familia miraba con recelo sus actividades; no obstante, más adelante dos de sus hijas –Andre y Silvi– comenzaron a *trabajar con el plan* en la sala de primeros auxilios en tareas de atención al público. Ante este hecho, Dora manifestó sensaciones ambivalentes: por un lado, se lamentaba de que a pesar de sus estudios tuviesen que trabajar por ciento cincuenta pesos; por otro, veía con agrado que aprendieran a velar por el “vecino”:

“Con mi marido nos sacrificamos para que estudien y me hubiese gustado que estén en una oficina, que estén trabajando bien, que tengan un sueldo con el que ellas se puedan defender, y no acá, que están con ciento cincuenta, trabajando, en la lucha, ayudando ya al vecino... No me quejo porque, por un lado, les vino bien, porque aprendieron a ser más humanas y a sacar ese egoísmo que tenían de decir: ‘Yo estoy bien, y si yo tengo, los demás no me importan nada’. Y están aprendiendo y eso es lindo también; que aprendan a mirar al vecino y dar una mano”.

Del resto de sus hijos, la menor estaba finalizando los estudios secundarios, la mayor trabajaba en un frigorífico como operaria y el único varón ayudaba a su padre cuando había exceso de pedidos en la empresa de mantenimiento de ascensores. Gaby, una cuñada de Dora, también *trabajaba con el plan* en el comedor de la sala; picaba verduras y limpiaba utensilios algunos días por la tarde, cuando el ritmo del lugar era más lento. Una vez, la encontré llorando, solitaria, porque recordaba a su hijo, “El Pola”, quien intentó asaltar a un repartidor de gaseosas en el barrio, recibió una bala y murió horas después. “*Por qué crecieron... Por qué tuvieron que crecer*”, repetía desconsolada, mientras abría un relicario con forma de corazón para mostrarme una foto de “El Pola” en la que se lo veía prolijo, con el cabello engominado y vistiendo una camisa blanca, porque era el día en que se había consagrado padrino de bautismo de su sobrina. Gaby tenía otro hijo varón que estaba preso; sentía tristeza porque no había podido reunir el dinero que en una comisaría le habían pedido a su esposo para cambiar la carátula y reducir los años de prisión. Volvía a irrumpir en llanto y se prolongaba el relato de una saga de infortunios.

El ritmo de la vida de Dora, en cambio, estaba pautado por las tareas en el comedor al que concurrían diariamente ciento cuarenta chicos. Su preocupación principal todas las mañanas era que la mercadería que recibía de un programa del Ministerio de Desarrollo Social –FOPAR– alcanzara para esa cantidad de comensales. Como alternativa se reunía algunos sábados con estudiantes universitarios, integrantes de una agrupación vinculada al Partido Comunista Revolucionario, para solicitarles ayuda: *“Por lo menos que pidan colaboración en la universidad, algo es algo”*, repetía Dora.

La última vez que me encontré con ella fue una mañana de septiembre de 2005. Entró a la sala gritando *“es una lucha, es una lucha”*. Caminaban detrás sus dos hijas llorando y la menor, a quien vi por primera vez, sostenía a Gaby. Con la respiración entrecortada, Dora contó: *“A la madrugada entraron los Ninjas. Nos rompieron todo, se llevaron todos los CDs de mi hijo, agarraron un tarrito de plata que había encima de la tele; a mi marido, que estaba durmiendo, le apuntaron en la cabeza y se llevaron a mi hijo y al hijo de Gaby”*. Ya recostada sobre la camilla de un consultorio, Gaby asentía y agregaba que en su casa también habían provocado destrozos. No logré comprender del todo la situación, sólo entendí que el hijo de Gaby –quien hacía una semana había salido de la cárcel– había trabajado con su primo durante tres días en una quinta de la zona de Moreno. El dueño de esa propiedad denunció la falta de algunos objetos y un grupo especial de la policía allanó las dos viviendas. Dora partió hacia la Escuela Blanca para entrevistarse con un abogado de una asociación denominada *Liberpueblo*. Una semana después leí la crónica de los hechos en el semanario del Partido Comunista Revolucionario.

Los marcos de las opciones

A partir de la reconstrucción de trayectorias de vida, es posible comprender cómo los sujetos tomaron opciones para responder a diversas situaciones sociales. De esta manera, resulta empobrecedor reducirlos a simples perceptores de programas de empleo o fundirlos en la imagen de un sujeto colectivo homogéneo (los piqueteros); más bien se trata de analizar el espacio de sus opciones, configurado por procesos migratorios, laborales, familiares, religiosos y barriales.

Algunos entrevistados formaron parte de los contingentes migratorios que, provenientes de distintas provincias de Argentina, cuadruplicaron la cantidad de habitantes de La Matanza durante las décadas del 60 y el 70.³ Por lo general, los varones lograron emplearse como obreros en fábricas de las ramas metalúrgica, textil, química, automotriz y gráfica. Las mujeres, por su parte, tomaron tareas en servicio doméstico o ingresaron a empresas textiles, de calzado o de confección de indumentaria; después de formar pareja, muchas de ellas se dedicaron a tareas vinculadas al "hogar", aunque en numerosos casos mantuvieron relaciones con el mercado de trabajo a través de talleres domiciliarios dedicados a la fabricación de ropa o calzado.

En la mayoría de las historias reconstruidas, la actividad laboral en una misma unidad productiva se prolongó por veinte o treinta años. Esa situación permitió materializar proyectos, como la adquisición de terrenos en loteos populares, la construcción de viviendas de paredes de ladrillo y techo de losa, la cobertura de la escolaridad de los hijos y la recreación en complejos sindicales. Desde mediados de la década del 90, el desempleo constituyó un quiebre que se experimentó poniendo en juego emociones ("nervios", "angustia", etc.), al mismo tiempo que se generaban respuestas desde las propias trayectorias, como la reconversión de oficios aprendidos en el espacio de la fábrica para adaptarlos a ocupaciones eventuales. Los programas de empleo tardaron en incorporarse como una opción viable, ya que no eran considerados trabajo útil y tampoco se acordaba con las normas requeridas para obtenerlos (*participar en cortes de ruta o marchas*). En algunos casos, como puso de manifiesto el relato de Don Tevez, el desagrado con esas normas remitía a un modelo anterior en el que los problemas laborales se trataban de manera personalizada y directa con los "patrones", sin que mediaran la huelga ni los delegados. Ese modo de referirse a la relación con los "patrones" apareció de

³ Si bien este tema se trabajará en profundidad en el capítulo VI, cabe mencionar que el censo nacional de 1947 registró 98.471 habitantes en La Matanza, mientras que el de 1960 contabilizó 401.738.

manera recurrente en varios testimonios, sobre todo en el de aquellos que fueron obreros en pequeñas empresas, como Don Bena:

"En la fábrica no había problemas. Parábamos para no tener problema con el sindicato, porque la seccional estaba a una cuadra de la fábrica, pero no había delegados porque con los dueños se podía arreglar todo lo más bien. Cuando se me quemó la heladera, una heladera vieja que tenía, le pedí plata para comprarme una nueva; me dijo: '¿Para cuándo la querés, para hoy a la tarde o para mañana? Nada más, se descuenta tanto por quincena y nada más'".

Otro ha sido el recorrido de trayectorias de vida signadas por empleos inestables, separaciones de pareja y presencia de hijos o parientes enfermos. En ellas, el espacio de opciones era diferente a la de aquellas ligadas a empleos estables, y se destacaba la acción de los sujetos para encontrar maneras de "arreglárselas". Desde este registro, el beneficio de un programa de empleo representaba la expectativa de alcanzar cierta regularidad en el ingreso económico. Significaba una ayuda, quizás la más estable, entre otras que procuraban obtenerse de parientes, vecinos y de diversas dependencias estatales. En un sentido similar a Zulema se expresó Mimí:

"Yo trabajo con Violeta desde hace dos años y medio. Cuando comenzaron las primeras tandas del plan, yo estaba en una situación económica muy mala. Había fallecido una de mis nenas; yo tengo seis hijos, tres nenes chiquitos, tengo una hija discapacitada mental, internada en una clínica neuropsiquiátrica, tengo a cargo a mi nieto. Estaba muy mal, entonces fui a la municipalidad a pedir remedios y ahí, hablando, conocí a Violeta. Ella me escuchó y me preguntó dónde vivía, y me dijo que éramos vecinas. Nos pusimos a conversar porque ella es una mujer muy solidaria y quedó en tratar de conseguirme remedios y ayudarme (...). Yo estaba separada, el problema de mi hija, que tenía un nieto a cargo, que había fallecido una hija mía de seis años... Estaba muy mal anímicamente, mentalmente. Todo estaba muy mal, económicamente, peor, tratando de sobrevivir" (Mimí, 40 años).

Para trayectorias como la de Dora, los programas de empleo se convirtieron en una reivindicación, tal como lo habían sido antes *la tierra, la sala de salud o las mejoras del barrio*. Se trataba de trayectorias de participación social y política donde la "lucha" definía una dimensión sustancial de la vida. En este sentido, el ingreso

como beneficiarios en programas de empleo formaba parte de un movimiento colectivo dentro del cual se insertaban opciones familiares y personales. Es preciso destacar, sobre todo en el caso del barrio Santa Emilia, la existencia de un modo singular de relación social y política por el que se procesan y regulan colectivamente diversos problemas que afectan la vida, desde aquellos vinculados con el *trabajo* y la *tierra* hasta otros relacionados con *causas judiciales* y “*violencia doméstica*”.

A diferencia de trayectorias como la de Dora, para algunos recibir un *plan* y participar en *cortes de ruta* formaba parte de compromisos pautados en una relación de intercambio. Más aún, las expectativas y los significados estaban modelados por otras experiencias, como la asistencia a iglesias evangélicas, en el caso de Susana. En varias ocasiones observé cómo las asambleas, los cortes de ruta o la simple contraprestación diaria en programas de empleo se convertían en espacios para la divulgación de mensajes aprendidos en esas iglesias. Una tarde, cuando estaba sentada en el patio de la Escuela Blanca de la CCC conversando con dos mujeres que aguardaban la salida de sus hijos del comedor comunitario, un hombre se paró frente a mí, posó su mano sobre mi cabeza, hizo silencio y me entregó un folleto con la leyenda: “Jesucristo es el Señor!”. Estos ejemplos permiten relativizar la imputación sociológica de un ser piquetero homogéneo, ya que las trayectorias de vida son más complejas y fragmentarias.

Más allá de las particularidades de las trayectorias de vida, todas ellas se articulaban en una trama de relaciones sociales anudada alrededor de los programas de empleo. Un procedimiento regular configuraba vínculos cotidianos: *anotarse*, presentar papeles (documentación), *participar en cortes de ruta y marchar*, esperar salir en listados, cobrar el beneficio mensualmente y trabajar cuatro horas diarias en proyectos colectivos. Por lo general, ese proceso era experimentado en el marco de grupos relativamente pequeños, coordinados por las figuras de *referentes* o *dirigentes* barriales que se integraban en el esquema organizativo de la CCC o la FTV.

REFERENTES Y DIRIGENTES: ENTRE los PLANES Y la FORMACIÓN POLÍTICA

Entre los “dirigentes” o “referentes” barriales se encontraban mujeres y varones cuyas edades oscilaban entre los 30 y 50 años. Sus trayectorias eran sumamente diversas y su tarea central consistía en coordinar grupos de personas numéricamente variables en el nivel del barrio. Algunos de ellos fueron promocionados a “*tareas generales*” en un espacio de oportunidades abierto a partir de la relevancia que adquirieron a nivel nacional e internacional las organizaciones de desocupados. Hubo quienes tuvieron la posibilidad de viajar a provincias del interior de Argentina o al exterior para conocer otras experiencias y difundir las propias; tal ha sido el caso de estadías en Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay, Sudáfrica, Kenia, Canadá y Francia. Otros se incorporaron a mesas de negociación con ministros o a reuniones cotidianas con autoridades gubernamentales.

Las tareas cotidianas de los *referentes* o *dirigentes* se vinculaban con los programas de empleo; incluían, entre otras cosas, *anotar* a pobladores en listados de espera de ingresos, completar planillas con datos de beneficiarios o manejar información sobre días y sedes del cobro del beneficio. Los espacios donde desarrollaban su tarea diaria (sus viviendas particulares u otros) se asemejaban a oficinas atiborradas de biblioratos, planillas oficiales, listados, rendiciones de cuenta, calculadoras y, en algunos casos, computadoras. Sobre las paredes de algunas viviendas se exhibían, entre fotos familiares, carteles que contenían información relativa a *los planes* o normas de uso de artefactos domésticos; por ejemplo, en la casa de Violeta había un afiche con la siguiente leyenda: “*Las mujeres de los planes no pueden usar la cocina porque no aportan para el gas. La garrafa vale 20 pesos*”.

Los *referentes* o *dirigentes* también organizaban la contraprestación de los beneficiarios; para ello ejecutaban distintos proyectos, como *copas de leche*, *roperos comunitarios*, huertas, manualidades e infraestructura (limpieza de calles, arroyos o zanjas). Además, controlaban la asistencia y vinculaban a los beneficiarios que se iban incorporando:

“Yo tenía un señor de cincuenta y pico de años, a un muchacho de treinta, treinta y cinco, y chicas; ellas estaban al cuidado de niños, que era recreación, el tema de apoyo escolar, contarles cuentos y hacerlos jugar, y los hombres no quisieron saber nada. ‘Yo no cuido a mis nietos –decía el hombre grande– y voy a venir a cuidar a ajenos’...” (Sandra, 30 años, referente de la FTV).

Otra de sus tareas era coordinar la participación en cortes de rutas y manifestaciones públicas: alquilaban micros, procuraban obtener chalecos con las siglas de la organización de pertenencia y aseguraban la provisión de alimentos y agua. Como parte de la misma tarea, velaban por el “correcto” comportamiento de los integrantes de su grupo. Al respecto, una dirigente de la CCC se excusaba en una reunión:

“En mi grupo hay un par que les gusta lo ajeno, ¿cómo quedo yo si se llevan algo? La otra también es que toman cerveza o vino. El otro día le digo a uno en la movida que hicimos a Capital: ‘¿Qué llevás en el bolso?, ¿qué es?’... ‘Jugo de manzana’, me dice. Y yo le digo: ‘No sabía que el jugo de manzana emborracha’...” (Peti, 50 años, dirigente de la CCC).

Las categorías *referente* y *dirigente* remiten a modalidades de organización y de regulación de las relaciones un tanto diferentes ente la FTV y la CCC.

La categoría *referente* aludía a personas y definía funciones en el marco de la FTV. En varias oportunidades pregunté por el origen de esa palabra y obtuve dos respuestas: algunos sostenían que se utilizaba en lugar del término “puntero”; otros consideraban, con un poco de dudas, que era una categoría utilizada en las CEBs. Más allá de esto, me interesa detenerme en las definiciones de la función del *referente*:

“El referente tiene como primera medida servir a la comunidad, no ser servido por la comunidad; ponerse a disposición del conjunto de los compañeros o del conjunto del barrio, de los que vivan en el barrio, para poder acercarles la mayor respuesta posible, ya sea la búsqueda de un medicamento, en la búsqueda de una silla de ruedas, zapato ortopédico, lentes; en acompañarlos a la comisaría; todo. El referente tiene que hacer todo. El referente es un gestor, un mediador; el referente es un amigo; el referente tiene que ser un compañero” (Marcelito, 40 años, miembro de la Secretaría de Organización de la FTV).

Se definía al *referente* como un “servidor comunitario”. Para esta interpretación, su función consistía en acercar bienes a los pobladores de los barrios, así como también contactarlos con el gobierno a partir de un doble movimiento: *acompañándolos* a dependencias estatales y, a la inversa, extendiendo al barrio, a través de la “*gestión*” y la “*mediación*”, las políticas públicas. La imagen del *referente* como “servidor comunitario” era reforzada en intervenciones del presidente nacional de la FTV, Luis D’Elía, quien se preguntaba retóricamente: “¿*Estamos dispuestos a servir a los pobres como la causa más radicalizada de nuestra vida?*”. De algún modo, se procuraba significar esa función desde las premisas de la Teología de la Liberación.

Otro punto a destacar es el modo en que se “reconocía” a un *referente*:

“Yo iba a las reuniones por la mercadería, entonces, al verme en todas las reuniones, decían: ‘Sandra de San Juan’ o ‘vos viniste por la comunidad, entonces queda representada la comunidad’; entonces, para la Secretaría de Organización, yo era la referente” (Sandra, 30 años, *referente* de la FTV).

El reconocimiento de los *referentes* se insertaba en una modalidad organizativa centrada en las decisiones de una Secretaría de Organización. La FTV, en calidad de integrante de la CTA, funcionaba con mesas regionales, pero, tal como pude observar, las decisiones centrales recaían en la mencionada Secretaría, que intervenía en la preparación de manifestaciones, la atención de los problemas en los barrios y la regulación del vínculo entre los *referentes* y sus grupos. La mayoría de sus integrantes habían participado del proceso de ocupación de tierras a mediados de la década del 80. Se reunían en las instalaciones de la cooperativa del barrio El Campo y mantenían vínculos diarios y directos con el presidente de la FTV.

Desde una posición jerárquica, la Secretaría de Organización reconocía a los *referentes* en calidad de tales. En las adyacencias del barrio El Campo se concentraban una gran cantidad de *referentes*; por ejemplo, Sandra vivía a un kilómetro de Ariel. En tanto, esa densidad disminuía en otras zonas, como era el caso de Tierra Nuestra, que se hallaba en un área de mayor influencia de la CCC, y por ello quienes integraban el grupo de Violeta sostenían “*acá es todo Alderete*”. De

esta manera, el reconocimiento de un *referente* no dependía exclusivamente del barrio, sino de la capacidad para formar grupos y articularlos con la organización.

La CCC se extendió por los barrios a partir de la figura de delegados o *referentes* que se reunían de manera semanal en una asamblea en la Escuela Blanca del barrio Santa Emilia. Tras un proceso de elecciones, desarrollado en junio de 2001, se conformaron comisiones de barrio y se reemplazó la categoría de *referente* por la de *dirigente*:

“Salimos de un proceso de elecciones en cada uno de los barrios. Primero tenemos que abrir la cabeza, necesitamos hacer un balance, no podemos hacerlos distraídos con los encontronazos que hay. Estamos obligados a dar debate para venir aquí monolíticamente y unidos. Antes, nuestra organización funcionaba con referentes; hoy dejaron de ser referentes y son dirigentes, pero todos a los que eligieron en las respectivas comisiones tienen la misma responsabilidad y obligaciones. Tendríamos que analizar, en primer lugar, este ejemplo: el primer referente tuvo menos votos y algunos compañeros, como los técnicos, sacaron más votos. Seguramente casi siempre llevó los informes buenos: cuando yo me paro en una reunión e informo que entraron en los programas y/o cobran, aplausos rabiosos... Esto tiene un peso en el momento. Ahora, cuando yo me paro y digo aquí, en esta reunión: ‘No trabajan, no cumplen con la participación, no ponen en el pozo y se van de baja’, este discurso cae muy mal para la mayoría, pero tiene futuro porque eso es la línea. Lo otro, aplausos para hoy, silbidos para mañana” (Guión de Discusión Política, junio de 2001).

La categoría *dirigente* se enmarcaba en otro modelo organizativo que funcionaba sobre la base de comisiones de barrio y el voto directo de los *beneficiarios*. En los orígenes de la vertiente de desocupados de la CCC se reconocía, desde el barrio Santa Emilia, a *referentes* de otras zonas; sin embargo, a partir de las nuevas pautas organizativas, fueron los *beneficiarios*, con su voto, quienes otorgaron ese reconocimiento. Las comisiones barriales estaban compuestas por un *dirigente*, un *técnico*, un *tesorero* y sus respectivos suplentes. A su vez, los dirigentes de los barrios se integraban en una “Mesa de Dirección” y los *beneficiarios* elegían en asamblea a tres personas para que formasen parte de la “Mesa Ejecutiva”. Las elecciones en los barrios se realizaban con cierta periodicidad y los integrantes de la Mesa Ejecutiva sometían su renuncia a la decisión de una asamblea cada tres meses.

Tal como pude observar en tres oportunidades, aquellas asambleas se transformaban en actos ritualizados. Al iniciarse el evento, se instaba a los presentes a que emitiesen opiniones sobre el obrar de los "dirigentes":

"Usted está muy gordo, se nota que ya no camina por el barrio. Lo llevan y lo traen en auto. No está nunca, viaja mucho" (Registro de campo/noviembre de 2003).

"Pido un aplauso para la compañera X que se fue a organizar nuestro movimiento en Jujuy" [exclamó alguien. Luego, la compañera X pasó al frente y, entre lágrimas, se dirigió a los presentes]. *"Yo, cuando entré, no entendía nada, vine sólo por los planes y en mi barrio siempre me preguntaban qué había conseguido; pero me fui dando cuenta que esta lucha es muy larga. Yo antes llegaba a mi barrio y no traía planes, entonces la gente me decía: '¿A qué vas a la Escuela Blanca, a besarle la panza a Alderete?'* [risas]. *Por eso les digo, compañeros, los dirigentes nos desvivimos, pero hay que luchar"* (Registro de campo/junio de 2004).

Las intervenciones se apoyaban en bromas o guiños humorísticos y, por lo general, se apuntaba a la disponibilidad de los dirigentes o a su eficacia para el logro de programas de empleo.

Sobre el cierre del evento, los integrantes de la Mesa Ejecutiva utilizaban esa instancia para proferir un agradecimiento público a los "compañeros", que también era un mensaje a los "dirigentes":

"Gracias a la lucha de todos los desocupados, muchas compañeras y compañeros nos hemos transformado en dirigentes reconocidos del movimiento. Entramos a la Casa de Gobierno, hablamos por los medios, nos entrevistamos con ministros, funcionarios, con otras fuerzas; nos invitan de otras provincias, de otros países... Lo peor que nos puede pasar es que nos olvidemos del hambre de nuestras compañeras y compañeros, que son nuestros vecinos en cada uno de los barrios pobres donde vivimos" (Registro de campo/junio de 2004).

Este esquema organizativo contemplaba la posibilidad de que todo *beneficiario* pudiese transformarse en *dirigente*. En ese sentido, varios entrevistados que habían sido promocionados a "*tareas generales*", como la coordinación de cooperativas o la distribución de mercaderías, se contaban a sí mismos del siguiente modo: "*Comencé como beneficiario, comencé cuando se formó el barrio*". Pero la postulación a ese cargo no seducía en la misma forma a todos los *beneficiarios*:

“A mí me eligieron como dirigente, pero yo no quise, es mucha responsabilidad; tenés que sí o sí estar en los cortes. Me hubiese gustado más ser técnica porque estás con los papeles y la información de los planes” (Carmen, beneficiaria de un programa de empleo en la CCC, registro de campo/abril de 2003).

“A nosotros dos nos habían votado como dirigentes, pero no quisimos, es mucha responsabilidad. En mi caso tampoco puedo mucho por mi marido, porque tenés que ir a las reuniones, estar en todos los cortes de ruta... Aparte que la gente es muy mala, entonces vos, a veces, le tenés que decir que cumplan con las horas de trabajo y capaz que te quieren pegar” (Tina y Rubén, agentes de salud del barrio Altavista, beneficiarios de un programa de empleo en la CCC, registro de campo/septiembre de 2003).

“Yo ya no quiero venir más a estas reuniones, se me arma mucho lío con mi mujer. Me dice: ‘¿Qué tenés que hacer metido ahí?’. Porque yo cobro el plan y vendo en los colectivos, y con eso me voy arreglando; pero ahora, con estas reuniones, no puedo ir mucho a vender. Entonces ya no quiero estar más como dirigente” (Enrique, dirigente de la CCC del barrio San Camilo, registro de campo/septiembre 2003).

Las motivaciones para evitar la postulación al cargo de *dirigente* se vinculaban con las características asociadas a esa función, como la responsabilidad en el cumplimiento de normas (asistencia a todos los cortes de ruta), el tiempo que requería la organización (reuniones) y los controles sobre *beneficiarios* (asistencia a movilizaciones, cortes de ruta y proyectos de trabajo). También influían aspectos familiares, como desacuerdos de las parejas, tanto para el caso de varones como de mujeres, o preferencias por el cargo “técnico” (manejo de información sobre programas de empleo).

Un aspecto de esta modalidad organizativa era la distinción, superposición y disputa entre el cargo de *dirigente* y el de *técnico*. Este último, sobre el que volveré en el capítulo V, se definía en relación con la “gestión” de programas de empleo, mientras que el “dirigente” tenía como función principal motorizar “discusiones políticas”. En términos prácticos, esas discusiones versaban sobre la recaudación del aporte monetario de los beneficiarios para cubrir costos de organización (*autosostenimiento*), el cumplimiento de la contraprestación y la asistencia a cortes de ruta o manifestaciones. De esa manera, en los procesos electorales solían ser más votados aquellos que venían cumpliendo la función de “técnicos”:

“Hubo un período que, producto de la lucha, empezaban a aparecer o, mejor dicho, a arrancar planes, planes al gobierno; por lo tanto, el técnico es el que traía la buena noticia al barrio: que todos los que no cobraban, cobran. Ahora, en las elecciones – porque en el barrio se hace lo mismo que en el movimiento, cada tres meses, cada seis, elecciones: renovación o no–, bueno, hubo un período que muchas veces los técnicos pasaron a ser los más votados en sus barrios como dirigentes, porque era el que traía la buena noticia. Por lo tanto, hubo que transitar un período de mucha discusión para entenderlo” (Alfredo, 53 años, integrante de la Mesa Ejecutiva de la CCC,).

Otro problema asociado con este esquema organizativo era la división de las comisiones de barrio y la conformación de nuevos grupos. En el verano de 2002, cuando marchaban columnas de la CCC hacia Plaza de Mayo, en mis registros apunté la presencia de banderas cuyas inscripciones señalaban el nombre de un barrio y también un número; por ejemplo, Barrio La Anita I y Barrio La Anita II, o Santa Clara I y II. Al principio supuse que un mismo barrio se había dividido atendiendo a criterios organizativos, pero a lo largo del trabajo de campo constaté que esas divisiones obedecían a disputas por el liderazgo:

“Cuando es antagónica la contradicción, que no hay forma, entonces nosotros lo que pretendemos es que todos los que quieran estar dentro de la Corriente estén dentro de la Corriente. Ahora, si yo no permito que ellos se abran como barrio, los estoy descartando, ellos van a buscar su camino, porque me están imponiendo que siga en un barrio que yo ya no puedo seguir estando. Por eso, muchas veces les digo a los compañeros: ‘No se dejen utilizar, abran bien los ojos, donde hay contradicción entre fulano y mengano, ustedes no formen parte, compañeros, porque a la larga se dan cuenta que ese fulanita se equivocó y ya es tarde” (Adelina, 45 años integrante de la Mesa Ejecutiva de la CCC).

Las comisiones barriales se fraccionaban a causa de disputas que alineaban a los integrantes del grupo a favor de uno u otro contendiente. Estos alineamientos resultaban de la afinidad y de la relación de parentesco entre los miembros del grupo. Cuando el conflicto se desataba abiertamente, se manifestaba en la Mesa de Dirección. Estuve en reuniones donde se exponía el tema del siguiente modo:

[Gabriela, del barrio X, lloraba y decía] *“Compañeros, no puedo más, voy a renunciar como dirigente. Me hacen la vida imposible, me cuestionan todo; para colmo, viven en la otra cuadra de mi casa y no puedo caminar por el barrio porque sale la madre y*

la hermana de este tipo a gritarme de todo, que yo soy no sé qué, no se cuánto... Así no puedo más, me estoy enfermado y no es justo para mi familia tampoco, porque mi marido ya quiere ir a darle una trompada” (Registro de campo/mayo de 2003).

“Uh, ahí viene Don Serruchín [comentaban irónicamente dos dirigentes a mi lado]. Es el técnico de Caballada, se quiere quedar con el barrio. No nos vamos más porque se van a agarrar de los pelos” (Registro de campo/septiembre de 2003).

La Mesa de Dirección consideraba todas las variables y votaba a favor o en contra del desdoblamiento de la comisión barrial. Una vez que la comisión de desdoblaba, los grupos funcionaban, a lo sumo, a cien metros de distancia en el espacio del barrio.

En los documentos oficiales de la CCC se definía esta modalidad organizativa como un modelo de “dirección de masas” orientado a la elevación progresiva de los “dirigentes” a “cuadros”. A diferencia de la FTV, que concebía a los *referentes* como *servidores comunitarios*, en este caso se procuraba recuperar la “tradición leninista” de formación de cuadros políticos.

Diversas actividades con formato variable estaban orientadas exclusivamente hacia *referentes* y *dirigentes* barriales, como seminarios, conferencias y reuniones donde se trataban temas vinculados con la dinámica de la política nacional e internacional. Un objetivo manifiesto de esas iniciativas era la “transformación de conductas”:

“Creo que uno de los problemas que uno tiene que atender con los compañeros en el barrio es cambiarles la lógica (...). Hay una cultura, muy en particular en Matanza, de punterismo político, donde acá era lo que nosotros llamamos ‘los muchachos del MTP’. ¿Viste el Movimiento Todos por la Patria? Bueno, por la patria no, éstos son Movimientos Todos por la Plata. Claro, acá Pierri, Cozzi o el Hugo Fernández venían y decían: ‘Es tanto, tomá’. Y hay compañeros que piensan que nosotros somos eso. Nosotros somos, viste, una organización de base que va tomando su fuerza, que va tomando su color, pero no la tenemos, y si la tuviéramos, creo que tampoco nos sirve, porque nosotros queremos recuperar la verdadera militancia, queremos que haya una opción por lo que estamos haciendo, no queremos ser mercenarios de nada. Y a los compañeros hay que hacerles entender eso primero” (Marcelito, 40 años, miembro de la Secretaría de Organización de la FTV).

“El noventa por ciento que se integra a la Corriente lo hace por necesidad, no hay convencimiento. Nosotros ponemos los ejes; después, en el proceso, uno tiene que

acompañar, ayudar, confrontar para que el compañero se transforme en dirigente. Cada tanto hay una escuelita, que le llamamos escuelita política no partidaria, donde discutimos a fondo la política internacional, estudiamos cómo integramos la línea a la realidad nuestra” (Juan Carlos, 53 años, coordinador nacional de los desocupados de la CCC).

Para la FTV, la *formación política* apuntaba a recuperar “*la verdadera militancia*”; en el caso de la CCC, se trataba de un proceso de “*reeducación*” tendiente a transformar a los *beneficiarios/compañeros* en *dirigentes/cuadros*. En ese sentido, el conjunto de iniciativas de “*formación*” o “*reeducación*” configuraba una suerte de “*arte del buen encauzamiento*”, el cual, según Foucault, “*(...) en lugar de sacar y retirar, tiene como función principal la de enderezar conductas*” (Foucault, 1976: 175).

En 2002 se constituyó la Escuela de Formación de la FTV, con la participación de profesores universitarios, periodistas y artistas de reconocimiento público. Coordinaban esta escuela dos integrantes de la FTV. Uno de ellos había sido seminarista salesiano, formado en el marco de las CEBs; el otro provenía de una militancia sindical durante los años 70 en agrupaciones opositoras a la conducción del gremio metalúrgico, ligadas a “*Montoneros*”. Los cursos de formación se desarrollaron con una frecuencia semanal durante un año y estuvieron destinados exclusivamente a *referentes* barriales. Los temas abordados fueron: *el Estado, la participación histórica de los sectores populares en el Estado, el reparto de poderes en el gobierno, el modelo neoliberal, los medios de comunicación, el imperialismo, la acción cultural y la historia de lucha del movimiento popular*.

Los coordinadores sostenían que el eje principal de los cursos apuntaba a la recuperación del “*movimiento popular*”:

“Tenemos que formarnos y manejar información para ir armando los eslabones en la cadena de los procesos populares. Recuperar las tradiciones populares argentinas durante los doscientos años, y el momento del 45 al 55, que fue el más feliz para el movimiento popular. Hay que reivindicar las mejores tradiciones para construir y dar forma al movimiento popular. El movimiento popular es distinto a un puestito político, y la FTV tiene que jugar un rol en la construcción del movimiento popular” (Eduardo, coordinador de la Escuela de Formación, Registro de campo/febrero de 2003).

Otro objetivo de la formación era la "capacitación técnica":

"La idea es formar un instituto de formación que abarque otras áreas que tienen que ver con lo que se está haciendo: todo el tema de la capacitación técnica, el tema de huertas, panadería; de poder ir armando, para que alguien enseñe técnicamente las cosas" (José, 46 años, coordinador de la Escuela de Formación, ex seminarista salesiano).

En términos generales, los cursos de formación procuraban incorporar a los referentes barriales en un proceso de identificación política con el "movimiento popular" a partir de la recuperación de tradiciones históricas. En otros espacios, como las asambleas, los discursos de los principales líderes de esta organización elaboraban "líneas de descendencia":

"Tenemos que seguir el tren de la historia que iniciaron Bolívar, San Martín, Rosas, Yrigoyen y Perón" (Registro de campo/mayo de 2002).

"Tenemos que seguir coherentes con aquellos que lucharon, somos los herederos de Tupac-Amaru, Yrigoyen, Perón y los desaparecidos" (Registro de campo/septiembre de 2002).

La evocación de personalidades históricas reforzaba la identificación política de la FTV dentro de una tradición que producía continuidades entre el pasado, el presente y el futuro. Se definía la pertenencia a un colectivo referenciado en el pueblo-nación, que se articulaba en un pasado y un origen común en torno a figuras como Tupac-Amaru, Bolívar, San Martín, Rosas, Yrigoyen y Perón. En ese sentido, se fijaba como meta de la organización la recuperación del momento histórico comprendido entre 1945 y 1955, período que abarca los dos primeros gobiernos de Juan D. Perón, calificado como *"el más feliz para el movimiento popular"*.

En el caso de la CCC, se definía como proceso de "reeducación" a un conjunto variable de actividades cuyo propósito era la difusión de "métodos de dirección". Durante un año, funcionó semanalmente una "escuelita política" centrada en grupos de lectura de escritos de Mao Tse-tung, Lenin y Trotsky, así como también de documentos sobre temas filosóficos:

"Una vez a la semana se estudian escritos de revolucionarios: Trotsky, Lenin y Mao. También cosas filosóficas. Estamos metidos con el origen de la familia, ésa es una cosa que les encanta a todos los compañeros. Vos notás que al principio es formal, pero después es parte de su vida, y solucionan los problemas con otra filosofía, otra metodología" (Juan Carlos, 53 años, coordinador nacional de los desocupados de la CCC).

Aparte de la "escuelita política", todas las semanas se reunía la "Mesa de Dirección". Esas reuniones tenían un carácter obligatorio, solían prolongarse por el espacio de ocho a diez horas y estaban pautadas de acuerdo con los temas que previamente se difundían en un documento denominado "*Guión de Discusión Política*", elaborado por los principales dirigentes de la CCC. Se trataba de dos hojas donde se reproducía, de manera sintética y con un lenguaje llano, la editorial del Semanario del Partido Comunista Revolucionario, y se agregaban informaciones sobre los programas de empleo.

En uno de los "guiones" se difundió una suerte de reglamento que se exhibía en la Escuela Blanca y en otros espacios del barrio Santa Emilia. El escrito se llamaba "*Puntos básicos: el arma con que se logra la unidad interna del movimiento de desocupados en beneficio de la lucha (cualquier similitud con la realidad, es pura casualidad)*". A continuación, reproduzco su contenido:

"No respetar los principios de la vida colectiva. Preservarse como individuo, no debatir, no hablar y ser hábil en mantenerse a cubierto y preocuparse únicamente de evitar reproches. Vengarse, pelear, amarrar líos con motivos personales en lugar de discutir y debatir puntos de vista erróneos. No divulgar y difundir las ideas del movimiento entre las masas olvidando que se es dirigente y comportándose como una persona cualquiera. Trabajar descuidadamente, sin plan ni orientación definidos, cumplir sólo con las formalidades y pasar los días vegetando. Considerar que se han rendido grandes servicios al movimiento y darse aires de veterano. Ser negligente en el trabajo y flojo en el estudio. Tener conciencia de los propios errores pero no intentar corregirlos, tomando una actitud liberal consigo mismo".

Los tipos de "conductas" que se definían como perjudiciales para el movimiento se interpretaban como efectos "corrosivos" de principios liberales que pervivían dentro de la organización de desocupados. El liberalismo, afirmaba el mismo documento, "*proviene del egoísmo de la pequeña burguesía que coloca sus intereses personales en primer plano y relega los de las masas a segundo plano*". De

ese modo, los dirigentes debían “reeducarse” para modificar esas conductas y comportarse de acuerdo con el “interés colectivo”. Mirado desde otro ángulo, ese documento indicaba las cualidades que debía reunir un *dirigente*: trabajador, estudioso, humilde y activo para discutir y difundir las ideas del movimiento, para confrontar otras ideas y para interpretar sus propios errores y modificarlos.

Con el término “reeducación” se hacía referencia a una modalidad de definición y redefinición de relaciones sociales, y de regulación de prácticas a nivel de las personas y el colectivo. Se aludía a un proceso basado en el supuesto de que aquel “individuo” que participaba en la “lucha” y asumía sus “errores” acomodaba progresivamente su conducta a principios racionales y colectivos. Así, el control colectivo sobre los “errores” o “desvíos” formaba parte del proceso de racionalización de las prácticas y de “*elevación de los compañeros a cuadros*”.

UN BARRIO, DIFERENTES GRUPOS

Desde mis primeras visitas a los barrios, me impactó el funcionamiento de pequeños grupos coordinados por *referentes* o *dirigentes*. Se reunían diariamente para *trabajar con los planes*, en los cortes de ruta compartían su vida en las carpas, y cuando *marchaban* caminaban muy juntos, cargando sillitas, banquitos, termos, mates y bolsos.

Comprendí también que las manifestaciones públicas representaban una oportunidad para que los *referentes* y los *dirigentes* exhibieran la capacidad de movilización de sus grupos, para que demostraran que los registros de inscriptos que decían tener eran confiables. Mostrar a sus grupos requería de ciertas tareas: alquilar micros, aprontar las banderas, acondicionar los chalecos con las siglas de la organización y, especialmente, controlar el buen comportamiento, sancionando el consumo de alcohol y las riñas ocasionales que pudieran suceder.

La vida de los grupos se articulaba en una trama de relaciones sociales anudada alrededor de los programas de empleo: *anotarse*, presentar papeles (documentación), *participar en cortes de ruta y marchar*, esperar salir en listados,

cobrar el beneficio mensualmente y trabajar cuatro horas diarias en proyectos colectivos.

Desde el análisis de las trayectorias de vida, el *plan* aparecía como un objeto signado por incertidumbres: *se otorga, se quita, se pierde, se termina*. El *plan* tampoco se percibía como un objeto dado por el Estado; para algunos, como Dora, se “arrancaba” al gobierno con *la* lucha; para otros, la mayoría, era algo dado pero también quitado por los *referentes* o *dirigentes* barriales o más en general por Alderete y D’Elía. En el siguiente capítulo, veremos que no sólo la percepción del *plan* se ordenaba en función de algo dado o quitado: el *plan* también podía *caerse, suspenderse o rechazarse*, pero para detectar cada una de esas posibilidades se requería de una intensa energía social y del desarrollo de habilidades técnicas. En poco tiempo, la tarea de juntar *papeles* y *anotarse* en el *plan* se había transformado en una experiencia compartida en el marco de relaciones de amistad, vecinazgo y parentesco.

En un trabajo reciente con familias que participaban en organizaciones de desocupados en el distrito de Florencio Varela, Quirós (2006) registró que la categoría *estar con los piqueteros* se imponía sobre la de *ser piquetero*. La autora analizó cuáles eran las prácticas y los sentidos que englobaba esa categoría para echar luz sobre una dinámica relacional que se perdía en los estudios sobre identidades y actores colectivos. En este caso, quizás por las particularidades que asumieron la FTV y la CCC en La Matanza –tema que abordaré en el capítulo VI- se refería a un vínculo más personalizado: *se estaba o se trabajaba* con “los de Alderete” o con “los de D’Elía”.

Los *referentes* y *dirigentes* empleaban dos formas para describir el vínculo que mantenían con las organizaciones de desocupados: *trabajar con* o *formar un barrio*. Ambas categorías remitían, de algún modo, a las diferencias entre las modalidades organizativas de la FTV y la CCC.

Era común que los *referentes* de la FTV definieran el vínculo con la organización como un *trabajo*. En su mayoría tenían una historia previa de militancia *política y social* en el ámbito del barrio. Algunas tardes en el asentamiento Tierra Nuestra, Violeta repasaba conmigo con quiénes había *trabajado*: “Trabajé para

apoyar a Duhalde como gobernador, ahí éramos varios de Matanza que estábamos con una señora que le dicen La Pocha, ella nos llamaba a reuniones y nos decía a donde teníamos que ir”.

De un modo similar a Violeta, Sandra, del barrio San Alfonso, también solía comentar su “trabajo para los peronistas”:

“Yo antes trabajaba para los peronistas, no trabajé activamente como trabajo en la FTV, porque no me gustaba. Iba y acompañaba lo que eran las elecciones, iba con una amiga. Mi amiga venía en las elecciones y me decía: ‘¿nos podés ayudar?’ La primera vez fui fiscal de mesa, la segunda vez fui presidenta de mesa en internas de ellos. Y, en una elección general nacional que fue en el ‘99, fui encargada de escuelas. Decían que si ganaba el Partido Justicialista todos los que habían trabajado en las elecciones iban a tener trabajo en la administración municipal...Yo después me encontraba con la gente y les decía que estaba con los piqueteros: ‘Ay’, me decían, ‘sabés que nosotros no podemos encontrar a tal persona, nos prometió, no nos dió nada, cuando la encontremos” (Sandra, 30 años, referente de la FTV).

Trabajar podía consistir en apoyar y acompañar. En particular, *trabajar con la FTV*, como se analizó en este capítulo, implicaba dedicar varias horas del día para seguir el funcionamiento de los *planes*, participar de reuniones y de cursos de formación política, y organizar la concurrencia a manifestaciones y cortes de ruta.

En la CCC, era común escuchar cómo los dirigentes relataban las peripecias para “*formar un barrio*”:

“Yo ya era beneficiaria de un plan, entonces ví que había otros compañeros que estaban en la misma situación que yo. Bueno, ahí formé un barrio y pasé a ser la dirigente de un barrio” (María, 55 años, dirigente de la CCC).

“Yo formé un barrio. Primero se me hizo difícil porque toda la gente venía de trabajar como yo y me decían: ‘cómo voy a cortar una ruta’. Eran vecinos que trabajaron en Santa Rosa, gente que trabajó toda su vida en fábrica, algunos metalúrgicos como yo, otros textiles, de todo. Empecé con diecinueve cupos y, bueno, desde ahí se sumaron hasta llegar a doscientos. Yo fui con veinte cupos más o menos a los vecinos que estaban desocupados, que yo los conocía, les hablaba y después de eso ya empezamos a hacer reunión.” (López, 53 años, dirigente de la CCC)

Como se expuso tanto en el tercer capítulo como en este, la CCC se extendió hacia otras zonas de La Matanza desde el barrio Santa Emilia. De esta manera, algunos beneficiarios "formaron barrios", es decir, recorrieron casas de vecinos ofreciendo *planes* o *anotarse en los planes*. *Formar un barrio* consistía en articular un grupo de personas en torno a los programas de empleo a partir de las normas y obligaciones que requería la participación en la CCC.

Observando el funcionamiento de estos grupos, volvían a mi memoria los planteos de Mayer (1980) sobre conjuntos para la acción que se definían por las interacciones con un ego y sus intermediarios. Desde ese enfoque, se investigaron procesos electorales atendiendo a los enlaces entre los candidatos y el electorado. Los candidatos (ego) creaban intencionalmente vínculos para captar el apoyo mediante transacciones públicas o privadas. Las primeras se enmarcaban en actos públicos donde se formulaban promesas a cambio de apoyos, las segundas, en cambio, se caracterizaban por enlaces entre individuos e implicaban obligaciones específicas. Se ofrecieron como ejemplos de este segundo tipo de transacción a las relaciones de patronazgo y al corretaje (enlaces a cargo de mediadores).

Desde mi punto de vista, esos estudios antropológicos iluminaron importantes aspectos de los procesos políticos, como las relaciones grupales, móviles y cambiantes. Sin embargo, presentaron como límite un análisis centrado en las interacciones individuales y manipulativas como así también el supuesto sobre la influencia limitada del Estado a nivel local en los países del Tercer Mundo. Desde esos puntos de partida, se dedicaron al estudio de las estructuras intersticiales, suplementarias y paralelas al sistema político formal, prestando especial atención a las relaciones de obligación recíproca, como la parentela, la amistad, los cuasi grupos, el liderazgo y el patronazgo (Barth, 1959; Lande, 1977; Mayer, 1980; Wolf, 1980).

De acuerdo con mis registros de campo, la formación de grupos y sus pautas de interacción requiere prestar atención a una trama de relaciones sociales más amplia en la que se entretujan trayectorias de vida, políticas estatales y tradiciones de organización política. Antes que por la influencia limitada del Estado o el retiro del Estado, estos grupos se formaron por una modalidad específica de política estatal.

Como se expuso, las relaciones que se procesaban en los grupos estaban modeladas por los programas de empleo y reguladas por tradiciones políticas y gremiales. En el próximo capítulo, entonces, seguiré indagando sobre el moldeamiento cotidiano de los programas de empleo.

CAPÍTULO V

LA GESTIÓN COTIDIANA DE PROGRAMAS DE EMPLEO

En diciembre de 2002 visité por primera vez la Escuela Blanca del barrio Santa Emilia. Apenas ingresé a ese establecimiento advertí el ordenamiento de aulas alrededor de un extenso patio central. Durante cuatro años, observé cómo los grupos que *trabajaban con el plan* reemplazaron la cerca de alambre por una pared de ladrillos, pintaron, refaccionaron aulas y extendieron una red oscura sobre espacios abiertos para protegerse del sol del verano.

En ese edificio funcionaban un comedor comunitario, una sala de reuniones de la Mesa de Dirección de la CCC, un pañol de herramientas, dos oficinas para el *trabajo técnico* vinculado con programas de empleo, un depósito de mercaderías, un emprendimiento textil, proyectos de calzado y escobillones, un jardín de infantes y un recinto de la Mesa Ejecutiva. Este último, utilizado como salón de recepción de periodistas, investigadores, delegaciones de otros movimientos sociales, funcionarios y autoridades gubernamentales, era el más prolijo y ordenado: en el centro se extendía una mesa ancha sobre la que se hallaban expuestos adornos fabricados por beneficiarios de programas de empleo, en un extremo había un escritorio y una computadora, y de la pared se suspendían banderas de Argentina, de la provincia de Buenos Aires y de la CCC.

En el patio central confluía un flujo incesante de personas, mercaderías y planillas. Los sábados por la mañana se celebraban las asambleas de todo el distrito. Una vez por semana se descargaban *alimentos frescos* para comedores comunitarios; bolsas de verduras (papas, cebollas, ajíes verdes y naranjas) se esparcían por todos los confines, mientras un grupo de hombres descendían de un camión cajones de pollos, reses vacunas y huevos de gallina. Un día al mes estacionaba otro camión que transportaba *alimentos secos* (yerba mate, fideos, arroz, lentejas, azúcar, tomate en conserva, aceite, y harinas de trigo y de maíz). Los jóvenes que repicaban bombos y redoblantes durante las manifestaciones públicas formaban una cadena humana por la que circulaban de mano en mano paquetes de

mercaderías. Los *dirigentes* barriales transitaban por la Escuela Blanca para retirar el porcentaje de alimentos que correspondía a cada uno de los barrios.

Los *técnicos* de las comisiones barriales, con carpetas y planillas entre sus manos, se apiñaban en los accesos de los salones donde funcionaban los *equipos* encargados de los programas de empleo. Diariamente, en actitud de espera, se agrupaba un gran número de personas con el objetivo de entrevistarse con los integrantes de la Mesa Ejecutiva. Durante un tiempo, sobre la puerta de uno de los salones permaneció adherido un pequeño cartel con la siguiente leyenda: “*El Señor Juan Carlos atenderá reclamos los días jueves de 14 a 20 horas*”.

Las observaciones sobre este movimiento rutinario que se repetía día a día, semana a semana y mes a mes me condujeron a la pregunta por las prácticas y las relaciones cotidianas que se entretajían en función de la gestión de programas estatales.

La preocupación por los efectos de las políticas sociales encendió debates académicos durante los últimos quince años. En el caso de Europa, los investigadores se preocuparon por el impacto del *workfare* sobre la ciudadanía social. Se puso énfasis en el pasaje desde la protección colectiva ligada al estatus de ciudadano hacia beneficios condicionados por la contraprestación y por la capacidad individual para negociar la inclusión social (Handler, 2003). En estas latitudes, la preocupación giró en torno a la privatización e individualización en el acceso a bienes y servicios, así como también alrededor de la focalización sobre poblaciones con necesidades básicas insatisfechas (Tenti Fanfani, 1991). Se difundieron nociones como la de *ciudadanía asistida* (por oposición a ciudadanía social) para referirse a efectos de políticas sociales que no incidían sobre la distribución del ingreso y que se dirigían exclusivamente a grupos vulnerables, apoyándose en un modelo de “clientelismo político” y “paternalismo social” (Bustelo, 1992; Bustelo y Minujín, 1997). Otros trabajos analizaron la manera en que las políticas sociales definían *sujetos carentes* y establecían una visión social en la que la desigualdad estructural se enmascaraba en tanto carencia particular o de un sujeto individual (Grassi, 2003). El propósito de estos trabajos era cuestionar el alcance del neoliberalismo; por eso se concentraron en la formulación de políticas sociales a fin de mostrar que las

categorizaciones oficiales de los sujetos y los problemas públicos se distanciaban de un modelo de "ciudadanía social".

En este capítulo propongo desplazar la mirada de la formulación o implementación de políticas públicas para echar luz sobre la trama de relaciones que se genera en el encuentro cotidiano entre el Estado y la población. En el capítulo III analicé cómo los *planes* se constituyeron en objeto de demanda; en éste desarrollo otra faceta de esa relación: las obligaciones y los deberes implicados en la gestión de programas de empleo. Para ello reconstruyo las prácticas de acceso a este tipo de programas, el proceso de especialización en la función técnica y las modalidades de trabajo configuradas en torno a los *planes* de empleo.

ENTRAR Y PERMANECER EN LOS PLANES: TENSIONES DEL INTERCAMBIO DIFERIDO

Como se puso de manifiesto en varios tramos de esta tesis, en el marco de la relación entre las organizaciones de desocupados y el Estado, las vacantes ("*cupos*") en programas de ocupación transitoria (*planes*) se constituyeron en el principal objeto de demanda e intercambio. En este sentido, y siguiendo los aportes antropológicos sobre las relaciones de intercambio, cabe preguntarse por el valor conferido a ese objeto en circulación, así como también por las obligaciones y dependencias que éste anuda.¹

De acuerdo con mis registros de campo, los *planes* tenían un valor de uso tanto para la FTV como para la CCC ya que, como se verá en el apartado siguiente, el aporte mensual de los beneficiarios reportaba en mejoras de equipamiento y estructura. Además, un porcentaje sobre el total del monto recaudado se utilizaba

¹ Los enfoques antropológicos sobre el intercambio discutieron fundamentalmente con estudios centrados en el actor racional, procurando mostrar que las transacciones simples formaban parte de sistemas de prestaciones totales (Mauss, 1979 [1923-1924]). El análisis de Mauss (1979 [1923-1924]) sobre los bienes puestos en circulación en la ceremonia Potlatch, la reflexión de Malinowski (1986 [1922], 1935) sobre los objetos ceremoniales del Kula o el regalo Urigubu, o la reconstrucción de Leach (1976 [1954]) de los medios de circulación HPAGA entre los Kachin de la Alta Birmania han demostrado que muchos de los objetos intercambiados carecen de valor utilitario o que, en caso de que lo posean, ése no es el único motivo que incentiva el intercambio.

para costear gastos de movilizaciones o para el ejercicio de algún tipo de práctica de ayuda mutua:

Moli: *Los de Alderete también tienen un pozo común, entonces te pagan el gas si vos necesitás, o alguna cuenta.*

Virginia: *¿Un pozo común?*

Delia: *Sí, ponen tres pesos.*

Moli: *Cinco.*

Tina: *Eso depende de cada dirigente. En realidad, ellos ponen para el gasto de los micros o las marchas, pero igual de ese pozo ellos pagan las cosas cuando le hace falta a la gente (Registro de campo, barrio Tierra Nuestra/diciembre de 2002).*

“El pozo es de todos los que cobramos el plan. Nosotros ponemos dos pesos. Todos los meses ponemos dos pesos y eso vendría a ser cuando hacemos piquete o esas cosas. Nosotros esa plata vendría a ser para llevar... Por ejemplo, ponete que compramos milanesas: compramos tres kilos de milanesas y llevamos para hacer sándwiches. Compramos gaseosas, bah, eso lo compramos en los mercados, la compramos fría... Pero es así. O por ejemplo, compramos y hacemos tortas fritas para comer en el colectivo” (Susana, 53 años, beneficiaria, perteneciente a la FTV en el barrio San Alfonso).

Los planes también poseían un valor de uso para los beneficiarios porque complementaban otras fuentes de ingresos de las economías familiares (empleos eventuales, cirujeo, trueque o la ayuda de algún familiar mejor posicionado socialmente):

“El mes que viene, con lo que cobre, voy a comprar ladrillos porque a mi nieto Ramón le dieron un tanque de agua de setecientos litros, pero tienen que hacer la columna para poner el tanque. Con el plan también compro las garrapas, cada garrafa sale dieciséis pesos, y gastamos dos en el mes. Quiero hacer un horno de barro porque si no gasto mucho de garrafa, así puedo hacer pan o biscochuelo y lo salgo a vender. Igual tratamos de que dure la garrafa. Te dura si cocinás todos los días; nosotros cocinamos a la mañana o a la noche. Y así va durando quince días o veinte días. Voy a pagar las cuentas. Cobré el lunes pasado y pagué tres cuentas, y me quedé con cincuenta pesos” (Juana, 63 años, beneficiaria, perteneciente a la FTV, barrio Tierra Nueva).

“Se espera que yo cobre para comprar las zapatillas, buscar dónde están más baratas las zapatillas... y siempre para los chicos, nomás. Nos vamos a Laferrere porque ahí las zapatillas son más baratas; nos vamos caminando todos. Un mes les compro zapatillas de diez pesos, al otro mes un pantalón, y así. Otra cosa es la luz y algún remedio para mi hija de once. La luz es lo más importante porque no te dan muchos días para pagar; entonces, si se vence, a la semana ya te quedás sin luz.

Para la comida trae mi mando. Él trabaja de noche en una gomería, arregla bicicletas, y a veces le dan propina de carne. Él se va dos o tres días, se queda ahí durmiendo en la gomería, que atiende 24 horas, cerca de Casares y ruta 3. Trae treinta pesos cada vez que viene y con eso me voy arreglando para la comida. Aparte trae leche, porque un señor que pasa por la gomería con el camión del Plan Vida le deja las leches pinchadas” (Carmen, 40 años, beneficiaria, perteneciente a la FTV, barrio Tierra Nuestra).

“Ahora voy a ayudar a mi hija menor, a Romina. Hay que acordarse un poco de cada uno. Sergio me dice: ‘Prestame plata’, pero lo que pasa es que él no devuelve, en cambio a Gastón yo le presto porque él sí que devuelve. Yo le digo a Sergio que tiene que devolver porque si no después no le van a prestar más. La otra semana cuando había problema de trabajo, ¿vio que había problema de trabajo acá, que tardamos para cobrar una semana?... Y yo digo: ‘¿Qué hago, le pido plata a mi hermana o no le pido? Después, si no cobro, ¿cómo le devuelvo?’. Eso estaba pensando, porque si te prestan algo y después no lo podés devolver...” (Zulema, 53 años, beneficiaria, integrante de la FTV, barrio Tierra Nuestra).

Las familias reunían diversos montos de dinero, que podían variar entre diez y veinticinco pesos, de acuerdo con los trabajos eventuales que surgieran a lo largo del mes. En comparación, el ingreso del *plan* era relativamente regular y, además, representaba ciento cincuenta pesos reunidos en una sola paga. En consecuencia, y así lo pusieron de relieve los testimonios, la cuantía del *plan* se utilizaba fundamentalmente para abonar gastos de servicios, como luz eléctrica y gas (garrafas); para cancelar deudas con comercios barriales y con parientes, o para adquirir bienes más costosos, como ropa, calzado o medicinas. Tal como pude observar, los días del mes en los cuales se abonaba el beneficio de los programas de empleo, alrededor de las *bocas* de expendio, como el edificio de una antigua fábrica en Isidro Casanova o las instalaciones del Club Deportivo Laferrere, se montaban ferias que ofrecían diversos productos comestibles o indumentaria. Otro aspecto a destacar, tomando como referencia el testimonio de Zulema, es el uso del *plan* para solidificar vínculos familiares a partir del préstamo y la devolución de dinero.

Más allá de la utilidad de *los planes*, el ingreso a un programa de empleo y el mantenimiento del beneficio a lo largo del tiempo no se agotaba en un trámite realizado de manera individual por alguna persona desempleada; tampoco se limitaba a un solo *corte de ruta*. Acceder a un *plan* y mantenerlo requería de una

intensa movilización de energía social: piquetes, manifestaciones callejeras, audiencias con funcionarios públicos, especialización y coordinación de tareas técnicas, y *contraprestación* en proyectos comunitarios o productivos. Tal como lo expuse en el capítulo III, en el marco de correlaciones de fuerzas variables, los programas de empleo se constituyeron en objeto de demanda y se resignificaron como premios al *mérito en la lucha*. Para comprender con mayor detalle este proceso es preciso centrarse en las modalidades de ingreso de beneficiarios.

Después de cursos de demandas que incluían piquetes u otras alternativas de manifestación pública, se concertaba con las autoridades gubernamentales la cantidad de ingresos a programas de empleo. Un problema asociado con esto consistía en que el gobierno raramente efectivizaba de manera rápida la cantidad de ingresos acordados; por lo general, mes tras mes se producía la incorporación de un porcentaje de beneficiarios sobre el total convenido. Este hecho ocasionaba la formación de *listas de espera* sobre la base de los registros de aspirantes confeccionados por *referentes* o *dirigentes* barriales, y desencadenaba procesos de movilización orientados a aprontar las altas.

El reparto de las vacantes efectivamente alcanzadas, sobre todo luego de los piquetes de noviembre de 2000 y mayo de 2001, requería de una ingeniería precisa que se concretaba en diversas instancias. Esas vacantes se redistribuían entre los grupos barriales; así, se tornaba relevante el nivel de participación en las carpas durante los cortes de ruta o el aporte de contingentes de manifestantes en otro tipo de movilizaciones. Cada grupo obtenía un porcentaje (*cupos*) sobre el total de vacantes asignadas:

"El otro barrio no creció [se refiere al desdoblamiento de un grupo perteneciente a un mismo barrio²]. A mí sí me interesa crecer. El hombre que dirige el otro barrio es todo para él y su familia: su yerno, su mamá, sus hijas, sus sobrinos. Pero no es corrupto, yo me llevo bien, lo conozco desde que nació. En el caso de otros dirigentes nosotros sabemos que por ahí venden la mercadería, inflan los listados, no cumplen con la mesa, cuando el autosostenimiento es parte de la línea y veo que por ahí cuando sale algo consiguen más que nosotros... Nosotros nos matamos trabajando, y hay veces que no quiero seguir más y hablo con Adelina o con Rosa, y ellas no quieren que deje, me insisten en que no deje, incluso querían que yo vaya a trabajar

² En el capítulo IV analicé la división de los grupos como parte de disputas por el liderazgo.

allá, a la Escuela Blanca. A mí me gusta el trabajo técnico, pero no quiero ir porque después capaz que no puedo sostener el viático todos los días hasta allá" (Norma, 58 años, dirigente barrial de la CCC).

Como lo expresa el testimonio citado, ese nivel de redistribución implicaba tensiones entre *referentes o dirigentes* barriales, ya que lograr un mayor porcentaje de ingresos significaba cancelar parcialmente las *listas de espera* y limitar conflictos en los grupos que funcionaban en los barrios. Esto se relacionaba de modo directo con otra instancia de redistribución cuyo eje pasaba por establecer quiénes accederían a programas de empleo.

Esa instancia de redistribución era sumamente compleja y las tensiones que se producían atravesaban el conjunto de las relaciones sociales. Todos aquellos que habían cumplido con el criterio de participación estaban en posición de reclamar el ingreso a programas de empleo; sin embargo, como señalé previamente, los ingresos acordados con autoridades gubernamentales se diferían. A la vez, los *planes* efectivamente otorgados podían rechazarse o cancelarse aduciendo errores en el ingreso de datos o ausencia de documentación probatoria. Desde mi punto de vista, estos procesos generaban una situación de "*deuda*", que se expresaba en el **desequilibrio** entre el valor entregado (la *participación*) y la **retribución diferida**³ (los planes).

³ Desde que Marcel Mauss escribió el "Ensayo sobre el Don" y puso de relieve que lo que aparentaba ser un regalo libre y desinteresado era en realidad un puro formalismo que escondía el carácter obligatorio e interesado de la prestación, los estudios antropológicos han tratado de comprender cuáles son las fuerzas que obligan a los grupos y a los individuos a intercambiar y a mantener en el tiempo esa relación. En los análisis de Malinowski (1986 [1922], 1935, 1969 [1926]), el orgullo, la vanidad y el temor a la humillación fuerzan a los individuos a intercambiar y a mantener la equivalencia de los valores que se intercambian, ya que si así no lo hicieran se expondrían a la pérdida de prestigio y de poder, sobre todo porque el aspecto ceremonial y público de los intercambios contribuye a la exhibición, la evaluación y la sanción social. En los casos analizados por Mauss (1979 [1923-24]), el desequilibrio en el intercambio se debe al principio de rivalidad y antagonismo que se expresa en la humillación del rival para ganar prestigio y jerarquía. Sahlins (1974 [1970]), por su parte, ha reconstruido diversos tipos de intercambio, poniendo énfasis, en particular, en la centralidad de la "reciprocidad generalizada", puesto que se trata de la circulación de bienes en una sola dirección, en la cual el dador no espera una retribución equiparada en calidad y cantidad, y la expectativa de recibir un contra-regalo queda diferida. No obstante, esta forma de intercambio también obliga; por ejemplo, a brindar apoyo político. Para el caso que venimos estudiando, es particularmente interesante el aporte de Leach (1976 [1954]) sobre el pueblo Kachin. Este investigador ha puesto de manifiesto que las obligaciones legales se expresan en forma de deuda (HKA) y se objetivan en la declaración de reclamación sobre medios de circulación HPAGA. El problema de la retribución diferida también ha sido abordado por Bourdieu (1991 [1960]) para ensayar una explicación sobre la dimensión

Las organizaciones de desocupados se transformaron en propietarias de una deuda respecto del Estado y aquellas personas que permanecían en *lista de espera*, habiendo cumplido con el criterio de participación, se convirtieron en propietarias de una deuda frente a *referentes o dirigentes* barriales. Los reclamos sobre esa deuda se reavivaban de manera profunda cuando el ANSeS remitía mensualmente la nómina de beneficiarios registrados para la percepción de la ayuda económica de ciento cincuenta pesos. Ese documento ponía de manifiesto quiénes habían logrado acceder *al plan*, quiénes aún permanecían en espera y quiénes habían perdido el *beneficio*.

La experiencia del grupo de Sandra, *referente* de la FTV en el barrio San Alfonso, permite dimensionar estos procesos. Tras el corte de ruta de dieciocho días en mayo de 2001, obtuvo *cincuenta cupos*, de los cuales veinticuatro fueron efectivamente otorgados y los veintiséis restantes, diferidos. En el año 2002, veinticuatro personas *trabajaban con el plan*, y sus obligaciones eran *cumplir* con la *contraprestación y participar* en piquetes y movilizaciones, mientras que las veintiséis restantes permanecían en *lista de espera* y su obligación se limitaba a *participar*. Pasados algunos meses, de esas veintiséis personas sólo continuaban *participando* diez. Sandra expresaba su disconformidad por esas pérdidas y repetía de modo insistente: "Yo pasé los papeles de todos, pero de ahí a que el Ministerio apruebe o no apruebe...". Con el objetivo de acortar ese intervalo y retener a las personas en *lista de espera*, procuraba reducir el descontento practicando innovaciones en la distribución de *mercaderías*.

En una oportunidad, Sandra abrió un cuaderno color naranja y extendió una lista donde se encontraban asentadas cuarenta personas para recibir mercaderías. De todas maneras, por la posición que ocupaba su grupo en la FTV, sólo le correspondían *veinte cupos* (en este caso, el término *cupos* refería a bolsas equipadas con cada uno de los productos recibidos). Frente a esa situación, Sandra decidió reasignar mercadería a los "más necesitados", así como también a aquellos

estratégica y práctica de los agentes. Para Bourdieu, el intervalo que transcurre en el proceso de intercambio contribuye para que se vea como irreversible un acto reversible, pero sobre todo, permite vislumbrar los contornos de una teoría sobre las prácticas.

que aguardaban en *lista de espera* por un *plan* de empleo. Para precisar los criterios de selección, visitó las viviendas de los inscriptos:

“Yo fui a ver, un día a la tarde, cada una de las casitas. Fui a ver a los abuelos, a la gente que estaba anotada para mercadería. Es como que ‘hola, te vengo a visitar’... Me senté y hablé con todos, y fui viendo a quién se lo podía ayudar y a quién... o sea, no es no ayudar, sino quién es el que tiene más necesidad”.

La *visita*, mencionada en el capítulo II como una de las prácticas ejercidas por las CEBs, constituía un mecanismo de producción de verdad (Foucault, 1996) para determinar quiénes eran los realmente necesitados; de sus resultados dependían los criterios de selección de candidatos al beneficio. Se estableció como beneficiarios a ancianos con hijos desocupados y sin pensión o jubilación estatal, y a quienes, por lo general, atravesaban un problema de salud agudo. Además, se decidió suspender el reparto de mercaderías entre los que percibían el beneficio de un *plan* para transferir esos alimentos, según palabras de Sandra, *“a gente que nos está acompañando y todavía no sale en los planes”*. Los fundamentos de estos criterios se apoyaban en la referencia a valores de la Iglesia y apelaban a trayectorias formadas en las CEBs:

“Yo siempre lo trabajé más por el lado de la Iglesia, porque si vamos a lo político, sería darle a todos los que me siguen; en cambio, si vos vas por el lado de la Iglesia, buscás de ayudar al que más lo necesita”.

De la misma manera que Sandra ponía en juego estrategias en un contexto de intercambio diferido, también lo hacían aquellos con dificultades para acceder a un programa de empleo:

“Me fui con Alderete, después me fui a una unidad básica. La unidad básica me decía que me tenía que afiliarse y Alderete que tenía que ir a los cortes. Y eso no me gusta a mí. Ahora, si tengo que ir a defender el cupo de trabajo, sí que voy a los cortes. Ahora, trabajando, sí. Con el corte de los dieciocho días, yo ya estaba trabajando y fui a defender mi cupo. Yo me había anotado con Alderete. Fui tres veces a las reuniones, fui a unas marchas con ellos cuando Palito Ortega estaba para gobernador, hace muchísimo... 97, 98... Fuimos para pedirle a los políticos que nos ayuden y en ese tiempo Palito Ortega nos mandó mercadería. Después, en la unidad básica me anotaron, pero ahí nos tenían como sirvientas; no quise ir más. Y ya ahí conocí a Violeta, que me trajo mi comadre, y me anotó y a los dos meses ya

salí trabajando” (Carmen, 40 años, beneficiaria, perteneciente a la FTV, barrio Tierra Nueva).

“Antes de entrar a la CCC yo me anoté con los políticos, en una unidad básica. Nunca jamás me dieron el plan, nunca. Te querían usar para la interna, te querían usar para los padrones, para que vos les juntes gente, pero jamás me dijeron: ‘Vamos a darle un plan para que por lo menos vaya sobreviviendo’. Bueno, entonces, como yo estaba adentro de una agrupación metalúrgica, fui a un corte de los seis días, de los que se hicieron primero. Ahí me contacto con Juan Carlos y Alfredo. Ellos me dijeron: ‘Mirá, vos tenés un lugar acá; venís, mirás y decidí si estás conforme, porque éste es un movimiento de lucha; hay que salir a luchar para que no nos pisen la cabeza’. Yo dije: ‘Bueno, me voy a meter a luchar’. Una por mi familia, mal o bien, yo acá tenía una bolsa de mercadería que me ayudaban. Acá tenía el cupo, porque después me dan el cupo, me lo gano en la lucha, digamos. Yo tuve que ir a los cortes, a las movilizaciones. Hacían movilizaciones, ponele, de Morón al Obelisco a pie. Hicimos mucha lucha” (López, 53 años, dirigente de la CCC).

Una vez que los programas de empleo se incorporaban como una expectativa, las opciones de los sujetos se ordenaban en función de un marco limitado de alternativas. Aparte de anotarse en listados confeccionados por *referentes* y *dirigentes* de organizaciones de desocupados, así como también por “*políticos*” – término que refería fundamentalmente a la inscripción en unidades básicas del Partido Justicialista–, se esperaba una pronta percepción del beneficio de ciento cincuenta pesos. Si esto no ocurría, la misma competencia entre diferentes sitios de inscripción en los barrios permitía el desplazamiento de los sujetos de uno a otro espacio.

Otro problema asociado era la selección para cubrir ingresos periódicos a programas de empleo que ocurrían tras procesos de presión y concertación. Por un lado, estaban aquellos que habían cumplido con el requisito de participación y aguardaban desde hacía tiempo en *lista de espera*; por otro, se hallaban todas las personas que se declaraban imposibilitadas para participar en cortes de ruta o manifestaciones públicas:

“Yo tengo una señora que la nieta es discapacitada: no camina, no habla, nada; entonces yo a esa señora no le puedo decir: ‘Venite al corte y dejá a tu nieta’. A otra abuela que está en silla de ruedas no le puedo decir: ‘Vení como puedas, vení con la silla, que te empujen’... Por eso vi de trabajarlo por el lado de la solidaridad. Si nosotros estamos bien de salud, podemos decir: ‘Está bien, la señora no viene’. Pero

nosotros la estamos ayudando, estamos siendo solidarios” (Sandra, 30 años, referente de la FTV).

“Si hay planes nuevos, la discusión es quién tendría que entrar y quién no tendría que entrar, porque dentro de un barrio nosotros evaluamos muchas cosas. Más vale que nosotros luchamos por que el plan sea universal y que lo tenga todo el mundo. Ahora, si de repente vos en un barrio tenés treinta personas que están en lista de espera, es un imposible que te den treinta y un planes; siempre te van a dar diez. Entonces hay un debate de fondo: a quién le corresponderían esos diez. Se evalúa los que más lucha tienen, los que están de antes, las necesidades. A lo mejor te encontrás con una situación que tenés que decirle a una persona que está de los primeros: ‘Bueno, vos sos soltero, ¿cómo podemos ver, cómo lo discutimos, que hay una compañera que entró después que vos y que tiene cinco pibes?’...” (Mario, 40 años, dirigente de la CCC).

Enfermos, ancianos o mujeres con determinado número de hijos a cargo se convertían en ingresos prioritarios frente a aquellos que habían cumplido con la norma de *participación* en cortes de ruta o movilizaciones callejeras.

Como se anticipó en el capítulo III, el reconocimiento de esas situaciones era elástico y conflictivo. La CCC tenía reservado el término *prioridades* para referirse a ese sector de la población, pero mediaba un mecanismo para que las personas pudieran encuadrarse en esa categoría. A lo largo del trabajo de campo pude observar una serie de acciones que conformaban un procedimiento regular para encuadrarse como *prioridades*. Varones y mujeres esperaban en el patio de la Escuela Blanca con el objetivo de conversar con Adelina, integrante de la Mesa Ejecutiva de la CCC; por lo general, traían pequeñas bolsitas de nailon que guardaban papeles. En el transcurso de mis visitas a ese patio entablé múltiples conversaciones y fui descubriendo el contenido de esas bolsitas: recetas médicas, diagnósticos de enfermedades, órdenes para tratamientos, etc. Quienes formaban fila conversaban entre sí y competían en el relato sobre la agudeza de sus dolencias. En una ocasión, una joven me preguntó si yo estaba en la “cola”; luego, con el rostro dolorido, se apoyó contra un auto estacionado en el patio y al cabo de unos minutos me miró con la intención de iniciar un diálogo: “*No puedo más –me dijo–. Es que me tienen que operar de la vesícula la semana que viene*”. A esa exposición sumó el padecimiento cardíaco de su padre, el accidente de una hija, y una madre hipertensa.

El cuerpo enfermo y sufrido otorgaba reconocimiento, es decir, permitía el encuadramiento dentro de las *prioridades*. Se trataba de un recurso para acceder a programas de empleo evitando el cumplimiento de otras normas establecidas en el marco de relación entre las organizaciones de desocupados y el Estado.

Fassin (1999, 2003), retomando aportes de Foucault y de Hannah Arendt, destacó una modalidad política centrada en argumentaciones de enfermedad y sufrimiento que expresaba una forma de gobernar a los hombres a partir del cuerpo como fuente de derecho. En otros términos, se trataba de un mecanismo de biolegitimidad que reconocía como bien supremo a la vida. El autor analizó cartas enviadas a una dependencia estatal instalada en las periferias de París como parte de la puesta en práctica de un fondo de urgencia social cuyo objetivo era dar respuesta al "movimiento de desempleados y precarios". Ese análisis identificó la estructuración de una "argumentación patética" mediante la cual los sujetos se contaban a sí mismos, revelaban su desamparo y presentaban los signos más demostrativos de su deterioro físico para certificar extrema necesidad material y convencer de ese modo a la comisión gubernamental para que les entregara un subsidio.

Ahora bien, el estudio de Fassin se concentró en la forma en que las "argumentaciones patéticas" procuraban convencer a agentes estatales; pero en este caso, eran otros los actores que gestionaban y decidían sobre los problemas puestos en escena:

"Vos has visto la cola que se forma acá. Yo estoy adentro y escucho que dicen: 'Estoy yo primera, y pongo acá mi silla y no me importa esperar, pero que me va a atender, me va a atender. Tengo paciencia y espero. Ahora, si vos querés que te atiendan, ponete ahí, donde te corresponde'... 'Uh, no podés', digo yo. Entonces salgo y digo: '¿Qué pasa acá, hay algún piquete?'... Y me dicen: 'No, compañera Adelina, yo quería hablar con usted'... 'Bueno, pero no era necesario tampoco que se pusieran acá; yo los iba a atender igual'. Y ahí empezamos, ¿viste?, empezamos a atender a uno, a otro... que ésta, que aquélla... me contaba uno, me contaban los otros... el otro tal cosa... A cada uno lo iba atendiendo. Y digo: 'Ya está, listo'. Y se fueron conformes" (Adelina, 45 años, integrante de la Mesa Ejecutiva de la CCC).

En la división de tareas entre los tres integrantes de la Mesa Ejecutiva de la CCC, Adelina –la única mujer– se encargaba de escuchar los argumentos que exponían todos aquellos que aspiraban a ser reconocidos como *prioridades*. Su testimonio señalaba la regularidad de un procedimiento cotidiano: llegar, esperar y formar fila para que ella escuchase lo que tenían para decir. Al respecto, Adelina agregaba:

“Hay un compañero que está enfermo; yo ya sé que está enfermo, los compañeros ya saben que está enfermo, todos saben que está enfermo este compañero. Entonces, ese compañero, por respeto, porque no lo hago cumplir porque sé que está mal, trae su certificado médico (...). Por ahí salgo y lo atiendo, lo hago pasar al compañero y le digo: ‘Siéntese, ¿qué pasó?’. Y dice: ‘Yo le quería decir que ando enfermo’... ‘Sí, ya sé que está enfermo, pero ¿qué pasó ahora?’... ‘¿Y no vio que tuve que ir al médico, que me mandó a hacer esto, me mandó a hacer aquello?... Porque me dolía por acá, me dolía por allá...’. Y me entra a contar, me entra a hacer una historia. Y me dice: ‘Yo no quiero perder el plan’. Y le digo: ‘Pero no se haga problema, ¿quién le va a sacar el plan? Vaya tranquilo’. A veces, los dirigentes se enojan y me dicen: ‘Éstos son unos vivos bárbaros’... Pero no es así, no es así. Yo también me doy cuenta cuando me toman para el churrete”.

Se ponía en juego un mecanismo encadenado de argumentación, convencimiento y concesión. Adelina gozaba de la capacidad para otorgar el reconocimiento como *prioridades* y de ese modo eximir del cumplimiento de una serie de normas centrales, como la participación en cortes de ruta o la contraprestación de cuatro horas en proyectos de trabajo. Quien procuraba convencer apoyaba su relato en la veracidad que conferían los certificados médicos. De todas formas, el reconocimiento descansaba sobre la confianza personal que depositaba Adelina sobre algunos casos frente a las acusaciones de simulación (*viveza*) que esgrimían otros *dirigentes*. En esa interacción se operaba con una serie de jerarquías:

“Hay compañeros con enfermedad de cáncer, hay otros que tienen tuberculosis, hay otros que tienen HIV, hay otros que tienen una depresión de la gran siete, hay otros que de repente tienen problemas de alcoholismo, drogadicción; hay parejas jóvenes con HIV y sus criaturas que tienen un grado de desnutrición porque no están bien alimentados, y esa enfermedad va creciendo día a día... ¿Y quién se fija en ellos? Bueno, si nadie se fija, me voy a fijar yo” (Adelina, 45 años, integrante de la Mesa Ejecutiva de la CCC).

En síntesis, cáncer, tuberculosis, HIV, problemas de “alcoholismo” y “drogadicción” encabezaban el rango de padecimientos que configuraban el modo operatorio para definir *prioridades*.

El intercambio diferido y las estrategias que se ponían en juego para acortar el intervalo, las formas mediante las cuales se administraban los ingresos y la permanencia en los programas de empleo, y la especialización en tareas técnicas, configuraban relaciones sociales que aparecían ante los ojos de los beneficiarios como escindidas del Estado. Con el propósito de profundizar sobre este aspecto, transcribo un fragmento de un registro de campo tomado en una asamblea de la CCC:

Mirta: Buen día, compañeros, soy del barrio Altavista. Estamos en asamblea sesenta del barrio y veinticinco de lista de espera. Tenemos dificultad para decidir quiénes van a entrar porque tenemos una lista de espera de un año y medio. Me gustaría que los compañeros de Altavista den su opinión.

Orador: Buen día, compañeros. Doy gracias a la compañera Mirta, que siempre está en la lucha, poniendo garra a los proyectos. Agradezco que hace un año y pico que estoy laburando con el plan.

Mirta: Quiero aclarar que hay un compañero de lista de espera que está cumpliendo, muestra su voluntad, y no lo podemos hacer entrar. Hace la limpieza cuando se da la copa de leche.

Juan Carlos: Si no se los dijo Mirta, se los digo yo: No tienen que agradecer a ningún dirigente. El esfuerzo es de ustedes.

Orador: Buenos días, compañeros. En mi barrio teníamos veinticuatro compañeros en lista de espera y nosotros veíamos que se venían quedando, y empezaron a peligrar, y quedaron seis en lista de espera, y que luchan a muerte, pero hace tanto que estaban y no entraban, que reclamaban que nosotros no hacíamos lo posible para que entraran. Yo les dije que no era así, que es por el gobierno, el sistema, no es que los dirigentes no se ocupan; los dirigentes están haciendo lo posible. Quiero ver que salga algún cupo para el barrio nuestro (Registro de campo/asamblea en la Escuela Blanca/mayo de 2004).

Los fragmentos transcritos ponen en evidencia tensiones entre el agradecimiento y la desaprobación de los *dirigentes* como parte del reconocimiento por el ingreso a programas de empleo. Así, se desdibujaba la presencia del gobierno como actor central de ese complejo de interacciones y los reclamos y la aprobación se dirigían hacia *líderes*, *dirigentes* o *referentes* de las organizaciones de desocupados. En relación con esto, otros entrevistados sostenían:

"Me pasó con una vecina una cosa horrible; pero uno va aprendiendo. Estaba en la puerta del banco, en ese momento se cobraba en Ramos Mejía, en el banco Nación. Estaba en la puerta y cuando le tocó cobrar a ella, entrega el documento y le dicen: 'Usted ya cobró'. Y ella le dice al empleado del banco: 'Estoy desde las seis de la mañana acá y no cobré'... 'Mire, ya cobró'... La llevan adentro y le muestran el recibo, y le decían: 'Acá está la firma'... 'No, pero no cobré', decía ella. Claro, la señora me viene a buscar con la mamá también. Me empezaron a gritar en la cola: 'Usted es un ladrón que le cobra el sueldo a los demás'. Yo no entendía nada. Y me cuenta lo que pasó, y me decían: 'Usted se tiene que hacer cargo'. Me fui para El Campo a hablar con Marcelito. Me explicó todo, y al otro día me fui al banco a la mañana, hablé con el contador y se hicieron cargo. Cobró la señora adelante mío, porque le pagaron en ese momento. Y le digo: '¿Está todo bien?'. Y me dice: 'Sí, sí, gracias'. Y yo le digo: 'Bueno, dígale a su mamá que no me trate de ladrón porque todo el barrio se enteró y andan diciendo que yo le cobraba a la gente, y eso no lo borrás más'" (Julio, 36 años, referente de la FTV).

"Hay problemas que se van a agravar: el pensar que el que te anota, la organización que te anota, es la responsable de pagarte, cuando los responsables de los barrios quedan en un lugar, más de una vez... Bueno, ¿viste el tema de que salga el plan? Eso de estar en el padrón y no sale, o sale uno y el otro no sale... A veces sí que es responsabilidad de la organización, pero otras te dan diez lugares y vos tenés veinte personas. Otras veces no salen por el documento o por un problema de esos, y te matan a vos... 'porque vos sos la que me anotaste'. Yo me acuerdo que una vez, en El Campo, estuve como cuarenta minutos explicándole a una mujer que no era la cooperativa la que le pagaba" (José, 46 años, ex seminarista salesiano, integrante de la FTV).

Como puede apreciarse en los testimonios, en torno a *los planes* se construyó una malla de deberes y obligaciones que entrelazaba al Estado con el conjunto de los miembros de las organizaciones de desocupados estudiadas. Sin embargo, debido a las particularidades que asumía este proceso de intercambio, en el nivel cotidiano se desdibujaba la centralidad del Estado en la construcción de esas relaciones y se personalizaban los vínculos en las figuras de *líderes, dirigentes y referentes*, en términos de agradecimiento o de reclamo. Desde otro ángulo, las organizaciones de desocupados también eran desplazadas del lugar de mediación en la implementación de esas políticas y, dentro de ese entramado relacional, terminaban constituyéndose en un agente directo de gestión.

COMPUTADORAS Y PLANILLAS: LA ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA

Rosa, Noelia y Caro, integrantes del *Equipo Técnico de Nación* de la CCC, me invitaron al salón de la Escuela Blanca donde trabajaban para que conociera una nueva máquina fotocopidora. *“Es usada, pero es digital; porque la que tenemos allá es más viejita”*, afirmó Rosa con entusiasmo mientras deslizaba una lona para cubrirla. *“Todos los barrios colaboraron y la pudimos comprar”*, agregó. Además de las dos fotocopadoras, había cuatro computadoras, cinco escritorios, ficheros y estantes con carpetas y cajas. De las paredes pendían anuncios, teléfonos y direcciones de diversos ministerios nacionales, un extenso mapa de La Matanza y fotos que retrataban el trabajo en distintos proyectos.

Las tres mujeres me explicaron la utilidad de la nueva fotocopidora para la *vinculación de beneficiarios* que estaban desarrollando por aquellos días. Rosa fue hasta uno de los ficheros, extrajo una carpeta de cartulina color gris y la depositó en mis manos; su intención era que comprendiera el alcance de esa tarea. Abrí la carpeta y descubrí planillas y fotocopias prolijamente ordenadas y foliadas. Una carilla con el escudo argentino encabezaba la documentación y funcionaba como carátula de un *“Proyecto de Serigrafía”*. En las hojas siguientes se registraban las características de ese proyecto: fecha de inicio y finalización, cantidad y nombre de los beneficiarios incorporados, lugar donde se llevarían a cabo las actividades, resultados esperados y detalle de insumos, herramientas y materiales. Tras esa presentación, se adjuntaban copias para atestiguar las características de cada uno de los beneficiarios: las dos primeras hojas del documento nacional de identidad, constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y certificados relacionados con la *“carga”*, es decir, con hijos menores de 18 años o discapacitados de cualquier edad, tales como partidas de nacimiento, constancias de escolaridad y vacunación, y diagnósticos médicos/psicológicos.

Rosa guiaba mi recorrido visual por la documentación, al mismo tiempo que comentaba:

“No nos podemos equivocar. A veces estamos en casa pasando a la computadora, porque todos estos datos van en un disquete y después hay que hacer dos copias,

una queda acá, otra va al Ministerio y otra a la Municipalidad... a veces estamos a la una de la mañana en casa y ya no damos más, y éstas [refiriéndose a Caro y Noelia] me dictan, y me dictan cualquier cosa. Ella [señalando a Caro] tiene un problema entre la 'c' y la 's'. Yo siempre le digo: '¿La de casa o la de sol?'. Y Mima, que es otra compañera nuestra, siempre tiene problema con el número de CUIL, porque lo quiere hacer rápido, y yo me doy cuenta que falta un número porque me salta en el campo de la computadora".

Caro asintió, mientras Rosa se reía. Ambas completaron la explicación:

Rosa: La gente de los barrios piensa que yo soy muy hincha con esto, con cómo tiene que ser la presentación. Pero yo un día fui al Ministerio y en otras organizaciones se encargan los empleados del Ministerio de hacer todo lo que hacemos nosotros acá, y yo vi cómo las cosas estaban apiladas; llegué a pisar una constancia de CUIL. Y yo dije: "No, nosotros tenemos que mandar todo bien prolijo, encarpetao, con sus respectivos folios".

Caro: Ella vino del Ministerio y nos contaba eso, de cómo estaba todo tirado, que por ahí pisabas algo de alguna persona.

Rosa: Vi cosas de [nombre del líder de una organización] que estaban armando en el Ministerio. Yo no sé cómo ellos confían tanto, porque ese papel se puede ir a la basura y el compañero no cobra, porque van a rechazar la solicitud porque falta documentación.

El conjunto de tareas asignadas al *Equipo Técnico de Nación*⁴ de la CCC se relacionaba enteramente con tareas propias de la administración de programas de empleo, entre las cuales se destacaban el ingreso de datos en sistemas informáticos, la vinculación de cada beneficiario con actividades productivas o comunitarias, la centralización de registros de asistencia de los diversos proyectos, la recepción de la nómina mensual de la liquidación del beneficio de ciento cincuenta pesos remitida por el ANSeS y el reclamo por solicitudes "rechazadas".

El trabajo más arduo, desde el punto de vista de quienes integraban ese *equipo*, se iniciaba tras la remesa mensual del ANSeS:

"Nosotros tenemos una base de datos específica de la CCC en el Ministerio de Trabajo; entonces, ellos hacen un cruce con la liquidación y nos mandan la liquidación a nosotros. Directamente lo mandan al correo y nosotros de ahí lo bajamos. Y bueno, ahí empieza la corrida, porque son mil, porque desde acá le

⁴ A la par del *Equipo Técnico de Nación*, funcionaba otro denominado *Provincial*. Tal como su nombre lo indica, su especialidad era la administración de programas de empleo dependientes del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

tenemos que mandar la liquidación a todo el país. Y bueno, ése es el día, ésa es la semana que más suena el teléfono, que más correo hay, que más tarde nos vamos... porque hay algo raro que pasa, que por ahí hay gente que no te figura en el listado de cobro, pero que tampoco está rechazada” (Rosa, 38 años, coordinadora del Equipo Técnico Nacional de la CCC).

La recepción de esos listados intensificaba vínculos cotidianos con dependencias estatales con el objetivo de identificar las causas de las solicitudes rechazadas. Además, como esos “rechazos” implicaban la cancelación del beneficio mensual de ciento cincuenta pesos, las acciones se dirigían a la reincorporación de beneficiarios.

La inadecuación de la documentación probatoria requerida por las normativas estatales constituía una de las principales causas para el rechazo de solicitudes:

“Había un compañero de Altos de Laferrere, él es viudo, la señora de él era una compañera del movimiento que falleció, y él quedó con tres hijos chiquititos a cargo. Nosotros, claro, llevamos desesperadamente... los tres meses seguidos hicimos el seguimiento del reclamo. Cuando nos quisimos dar cuenta, era porque el certificado de escolaridad que tenía uno de los hijos era del 2003 y estamos en el 2004. Entonces te dicen: ‘No, el certificado tiene que estar acertado’, pero para todo eso el tipo se comió cuatro meses sin cobrar. Porque tres meses vos decías: ‘Yo presenté todo y no sé qué pasa’. Y después, al cuarto mes que te dicen cuál era el papel que faltaba... Ya para eso eran cuatro meses. De ahí hasta que hacen el reclamo pasa un mes más; ya pasan cinco meses” (Rosa, 38 años, coordinadora del Equipo Técnico Nacional de la CCC).

Algunos beneficios se cancelaban debido a problemas en la documentación probatoria referida a la “carga familiar”. Como se analizó en el capítulo III, eran destinatarios del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados los hogares con menores de 18 años a cargo o discapacitados de cualquier edad. El compromiso del beneficiario consistía en asegurar la concurrencia escolar de los menores y efectuar los controles sanitarios; muchas veces, las certificaciones que atestiguaban el cumplimiento de esos compromisos eran objetadas y, en consecuencia, las solicitudes resultaban rechazadas.

En otros casos, se interpretaba que los jefes de hogar no se hallaban comprendidos en situaciones de desocupación:

"A veces te salta 'cónyuge o pareja no desocupada', y hace diez años que la tipa está separada y que el marido nunca le pasó un centavo, pero como están cruzando con todo tipo de bases, con el Registro Nacional de las Personas, con el ANSeS, que son todos los subsidios que puede haber de beca y todo eso... Entonces se cruza todo. ¿Cuál es el trámite que tenemos que hacer ahí? Esto te lo cuento porque es increíble: el Ministerio te exige que tenés que llevar dos testigos a un juez de paz y que el juez de paz te dé una certificación de que vos hace tantos años que estás separada. Sin ese papel es imposible levantar el reclamo, y así lo presentes, nunca sale al mes para cobrar, capaz que sale a los dos, tres meses" (Rosa, 38 años, coordinadora del Equipo Técnico Nacional de la CCC).

"Nosotros, los reclamos que tenemos es, más que nada, pasa en el interior: el trabajo golondrina. Por ejemplo, los limoneros de Tucumán agarraron esa temporada que laburaron tres meses y quedaron enganchados en el fondo de desempleo, y le dan la baja por eso. Andá a hacerles entender a estos tipos que el tipo hizo una changa, que no era un trabajo efectivo. Después tenés los albañiles. ¿Viste que cuando ellos trabajan en una obra, así sea una changuita, ellos tienen que pagar el seguro? Entonces se quedan enganchados con aportes, por veinticinco centavos muchas veces" (Rosa, 38 años, coordinadora del Equipo Técnico Nacional de la CCC).

Las solicitudes también podían ser rechazadas a causa de errores cometidos durante el ingreso de datos en el sistema informático:

"Hemos tenido momentos, cuando todavía no entendíamos colectivamente, golpes duros... Nosotros tuvimos lo máximo acá solo, en Matanza, una baja de 1600 planes. En aquel entonces entendimos que fueron por errores nuestros: un programa que se borró. Producto de la crítica y autocrítica, a pesar de ser muy difícil, lo pudimos sobrellevar. Y los compañeros pudieron entender que era producto de un error humano, pero no mal intencionado o por secundarizar el trabajo, sino que fue un error. A partir de ahí y de las críticas que obviamente recibimos, fuimos entendiendo que a eso había que ir consolidándolo. Y bueno, hoy es que todos los barrios tienen su equipo técnico. Existe el equipo técnico central, se reúnen entre sí, discuten; teniendo en cuenta que la primera discusión es política, porque la lucha no es administrativa. Más allá de que esas bases son netamente administrativas, pero el fondo de nuestra lucha y lo que marca el sistema con estos programas son acciones políticas. Pero igual, a pesar de que nosotros tomamos recaudos, como no depende sólo de nosotros sino también del propio programa, el propio programa de los planes, seguíamos viviendo esas situaciones de que son cientos, en algunos casos miles de compañeros que por un motivo o por otro –un error nuestro, del Ministerio, del ANSeS o de Economía– van dejando de cobrar. Esto nos llevó a tomar mucho más en serio el tema de los equipos técnicos" (Alfredo, 53 años, integrante de la Mesa Ejecutiva de la CCC).

La conformación de equipos técnicos dentro de la CCC y la creación del cargo técnico en las comisiones barriales tuvieron como propósito la especialización de tareas para limitar *errores* en la administración de programas de empleo. La mayoría de los inconvenientes se concentraban en el ingreso de datos de beneficiarios en el sistema informático, y consistían en problemas de ortografía y de tipeado, omisión o alteración de números de documentos de identidad o claves laborales, y limitaciones para la operación de programas computarizados.

Más allá de la variedad de causas que motivaban el rechazo de solicitudes, me interesa señalar el movimiento acompasado entre el *Equipo Técnico de Nación* y los *técnicos* de las comisiones barriales dirigido a la reincorporación de beneficiarios. Se trataba de un movimiento intenso y cotidiano cuyas energías se orientaban a la detección de las causas de la cancelación del beneficio, la readecuación de los casos dentro de las normativas estatales y el reingreso de beneficiarios en el sistema informático del Estado a fin de que se restableciera el beneficio económico de ciento cincuenta pesos mensuales.

El *Equipo Técnico de Nación* se había creado de manera conjunta con el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados para aglutinar la documentación de 36.000 beneficiarios de todo el país pertenecientes a la CCC:

“Tuvimos veinte días para presentar todo, y teníamos que terminar tal día... Era un lunes, me acuerdo, a las nueve de la mañana había que terminar. Estuvimos veinte días acá instalados, en la escuela, donde mi mamá nos traía la comida, la ropa, porque no volvíamos a casa; dormíamos dos horas por día y nos tumábamos, y hacía frío; era terrible el frío que hacía. Bueno, terminamos a las nueve menos cuarto de la mañana, me acuerdo. Fue el pasaje a Jefas y Jefes, cuando conseguimos los 36.000 planes de Jefas y Jefes de todo el país. Como muchas zonas del interior no tenían una computadora, ellos traían la documentación y la teníamos que cargar nosotros. Y más allá que venga cargado, lo tenías que revisar, porque al ser un programa nuevo no es lo mismo que se les explique telefónicamente o vía un mail cómo había que cargarlo. Eso te genera un despelote bárbaro. Entonces, lo que hacíamos era revisar continuamente, y aquellos compañeros que no tenían una computadora, lo cargábamos desde acá. Tal es así que al margen que llegaran los disquetes con la carga, tenían que mandar todas las declaraciones juradas. Entonces, eran pilas y pilas de cajas... La cuestión es que terminamos el día que dijimos a las nueve menos cuarto de la mañana, todo encarpetao. Según el Ministerio, fue la única organización que lo presentó como la gente, porque toda la

documentación estaba encarpetaada con su respectivo proyecto” (Rosa, 38 años, coordinadora del Equipo Técnico Nacional de la CCC).

Las actividades de este equipo estaban predefinidas por una modalidad de política estatal cuyos rasgos he analizado en el capítulo III. De algún modo, la propia denominación *técnicos* reconocía un lenguaje en uso en dependencias del Estado:

“Yo creo que nació del Ministerio de Trabajo. A mí no me gusta el nombre ‘técnico’. A mí no me gusta la palabra; pero nació justamente de los Ministerios de Trabajo y fue trasladada acá. A mí no me gusta esa palabra, la odio a esa palabra, te juro. Por eso yo a ellos [señalando a dos jóvenes integrantes del equipo] les digo ‘compañeros’: ‘los compañeros de provincia’ o ‘los compañeros de nación” (Adelina, 45 años, integrante de la Mesa Ejecutiva de la CCC).

Me interesa profundizar sobre una serie de aspectos relacionados con las funciones técnicas para precisar modos de relación con el Estado.

“Cuando comenzamos con setenta planes, hacíamos todas las presentaciones al Ministerio que correspondía con planillitas que eran hechas a mano. Ahora, el propio sistema se ha ido tecnificando y tuvimos la necesidad de la primera computadora... En fin. Porque esto todo se maneja a través de distintos programas. Nosotros, la primera computadora que tuvimos la conseguimos de un compañero abogado. Era una computadora muy viejita, que tenía muchas limitaciones para lo que se iba requiriendo; pero después, producto del autosostenimiento, nos vimos obligados y armamos nuestra propia estructura. Después vino la segunda computadora, la tercera... Hoy hay unas cuantas, porque requiere un trabajo continuo, un seguimiento diario. Por eso nosotros entendimos que cada barrio tenía que tener su equipo técnico. Y hay un equipo técnico central. Porque si vos no hacés un seguimiento, el Estado siempre te acuesta; porque en la actualidad son continuas las bajas del plan, por distintos motivos. Por lo tanto, equivocarte en poner una tilde donde no va te lleva a que un beneficiario no cobre, y un beneficiario que no cobre te lleva a hablar que es una familia que no come por un mes y que no tiene garantizada la inserción en el programa el mes que viene. Por eso tiene que haber una parte, un grupo o un compañero en cada barrio, que pueda seguir, que tenga como tarea central hacer el seguimiento cotidiano” (Alfredo, 53 años, integrante de la Mesa Ejecutiva de la CCC).

Tal como puso de relieve el testimonio de Alfredo, desde fines de la década del 90 se produjo una creciente especialización en el manejo administrativo de programas de empleo que se expresó en la adecuación tanto de estructuras como de

tareas. El almacenamiento de documentación, así como también de mercaderías provenientes de otras acciones estatales, ocupaba la mayor parte del espacio en los locales donde funcionaban organizaciones de desocupados (fuera la CCC o la FTV). El dinero recaudado del aporte mensual de beneficiarios de *planes* y de otras actividades (rifas, bailes y ferias) se destinaba fundamentalmente a la mejora de equipamientos. En este sentido, sobresalía la adquisición de fotocopiadoras, computadoras, cartuchos para impresoras y papel. Los fondos reunidos también se empleaban para cubrir los gastos de traslado a dependencias estatales, que incluían boletos de autobuses, combustible de dos autos y estipendio para el almuerzo. En otro orden, aquellas personas que cumplían tareas de *autodefensa* en piquetes o manifestaciones públicas conformaron un sistema de guardias nocturnas y rotativas para custodiar las instalaciones de la Escuela Blanca con el objetivo de proteger los bienes y la documentación que se acopiaban en ese lugar.

Otro aspecto que se ha venido puntualizando en este apartado refiere a la especialización en la función técnica. En este sentido, Rosa, quien se desempeñaba como coordinadora del *Equipo Técnico de Nación*, sostenía:

“Empecé a ayudar en el armado de los proyectos por el tema de que tengo buena letra, porque a pesar de tener nada más que la primaria, siempre tuve la ansiedad de aprender. Bueno, como a mi vieja no le daba el presupuesto, porque se quedó sola con nueve hijos, no pude seguir estudiando, pero me hubiera gustado seguir la carrera de contaduría... contadora. Bueno, ahí comencé armando proyectos, así, de puño y letra; y después, sin querer me fui metiendo, y al meterte mucho es como que vas adquiriendo más conocimientos. Tenía ciertos amigotes en el Ministerio de Trabajo que me enseñaron a realizar las cargas, porque yo cero en computación; no sabía nada. Aprendí acá”.

La buena caligrafía representaba inicialmente una habilidad valorada para el manejo administrativo de programas de empleo; sin embargo, nuevos requerimientos en las normativas estatales exigieron de pericias ligadas a la operación informática. Sobre el total de los quince integrantes de los equipos técnicos de la CCC, dos contaban con estudios secundarios incompletos, uno tenía estudios primarios inconclusos y los doce restantes, como era el caso de Rosa, habían completado la

instrucción primaria. En ese marco, se destacaba el aprendizaje de destrezas específicas en la interacción cotidiana con agentes estatales:

“Es todo mucha burocracia. A veces nos llaman urgente por una hojita que nos habíamos olvidado de firmar o porque faltaba completar cosas. Ya te tenés que preparar, tomar el colectivo y salir para los ministerios. Decí que el trato es muy cordial, muy buena onda con las chicas empleadas; te ayudan en todo, te explican todo. Ellas también son medianamente explotadas porque tienen contratos de tres meses, no gran cosa. La ministra tampoco agrandó sueldos. Más de una vez nos ocurrió de ir a un ministerio y encontramos con un piquete adentro. Una vez, que fue uno de los más fuertes, se había caído un ascensor en el Ministerio. El Ministerio tiene veintidós pisos, y se había caído un ascensor y de milagro no se había matado alguien. Y la ministra pasa todos los días por ahí, pero se ve que tampoco ve eso” (Matilde, 42 años, integrante del Equipo Técnico de Nación)

La valoración de los agentes estatales –considerados buenas personas, incluso “amigotes”– sobresalía en la mayoría de los relatos de quienes ejercían funciones técnicas. Eran ellos quienes habían incidido de manera directa en el aprendizaje de nuevas habilidades. Por el contrario, las acciones de contingentes de estudiantes universitarios ligados a la CCC fueron nulas en relación con los equipos técnicos, pues se concentraban en el armado de talleres de periodismo, censos barriales, la recuperación de la historia del asentamiento y la colaboración en la sala de primeros auxilios. Fue un estudiante inglés, que había viajado a la Argentina para conocer la experiencia *piquetera* y colaborar con ella, el que dictó, en el año 2005, el primer curso sobre operación de sistemas informáticos.

Los integrantes del equipo técnico también eran beneficiarios de un *plan* por el cual percibían ciento cincuenta pesos mensuales. A diferencia del resto de los beneficiarios, su contraprestación superaba las cuatro horas diarias. Las motivaciones que impulsaban a formar parte de esos equipos eran variadas y deben entenderse en el marco de trayectorias de vida.

Rosa aportó su testimonio en diferentes asambleas de la CCC:

“Compañeros, ustedes saben que yo era adicta, y que gracias al movimiento yo soy otra persona. Aprendí a compartir con los demás y aprendí a sufrir las necesidades de los demás” (Registro de campo/ septiembre de 2004).

Rosa tenía 38 años, seis hijos, y la mayoría de los miembros de su familia se habían incorporado a la CCC. Su hermana era *dirigente* del barrio El Futuro, su madre colaboraba con la distribución de mercaderías y su hija mayor atendía al público en un local del barrio Santa Emilia donde funcionaba la administración de cooperativas de trabajo. Rosa había formado pareja en el año 2003 con Mario, quien había sido promocionado a la coordinación nacional del conjunto de las cooperativas de trabajo de la CCC y había viajado a Venezuela para conocer experiencias similares. María, la madre de Rosa, oriunda de la provincia de Tucumán, se había instalado en La Matanza a inicios de la década del 70 y había trabajado durante veinte años como cocinera en el comedor de una planta industrial. En una entrevista que mantuve con ella, manifestó, entre lágrimas:

“La organización me dio de ver y sentir por el otro, no por mí misma. Después, las satisfacciones más grandes me dio este movimiento, porque mi hija Rosa tiene séptimo grado y ella aprendió acá el teclado de la computadora. Primero todo era planillas, porque era todo a mano; pero hoy, verla a mi hija que es la técnica de todo el país, que tiene una responsabilidad enorme, es una cosa que a mí me llena de orgullo. Me llena de orgullo ver que ella pudo salir adelante, porque con el estudio que tenía jamás pensé que mi hija iba a llegar a estar con muchísima responsabilidad en su mochila”.

En el caso de Rosa, entonces, las tareas técnicas representaban un hito o, más precisamente, una inflexión en su trayectoria de vida y en la de su familia. El cargo despertaba orgullo y su entorno familiar colaboraba para que ella se desarrollara con éxito en él; por ejemplo, cuidaban de sus hijos pequeños cuando viajaba al interior del país para brindar asesoramiento sobre las tareas de su especialidad.

En otros casos, sobresalía la rotación por la función técnica debido al peso de apremios económicos. Caro tenía 31 años y vivía con sus cinco hijos y un nieto de cuatro meses. Una de las últimas veces que visité el barrio Santa Emilia me encontré con ella. Iba vestida con ropa azul de gabardina y se dirigía a un predio donde la CCC estaba construyendo viviendas como parte de un programa del Ministerio de Planificación Federal. Al verme se detuvo para conversar:

“Cómo me gustaba el trabajo de técnica... pero tuve que dejar. Rosa me ayudó para que entre en la cooperativa. Ahora me estaba yendo para allá. Acomodo los ladrillos, ayudo a preparar la mezcla. Son buenos los compañeros que me tocaron. En la cooperativa, aparte del plan, cobro trescientos o cuatrocientos pesos más, eso según cómo vaya la obra. Pero ya son cuatrocientos cincuenta pesos, más la mercadería. Ya con eso me voy arreglando”.

Consideradas en conjunto, es posible observar que las motivaciones para desempeñar la función técnica estaban centradas en el prestigio que confería ese cargo, los aprendizajes que reportaba y el gusto por una tarea diferente a las que se ejercían en otros proyectos, como copas de leche, comedores comunitarios o manualidades.

Este equipo se reunía una vez por semana con los *técnicos* elegidos en las comisiones barriales. Éstos, como señalé en el capítulo IV, informaban en sus respectivos barrios sobre cuestiones vinculadas con programas de empleo y recolectaban la documentación que atestiguaba la situación de los beneficiarios. Cuando se realizaba la *vinculación de beneficiarios*, se asignaban a cada barrio un día y un horario para que el *técnico* concudiese con toda la documentación, de modo de evitar demoras y desórdenes durante el ingreso de datos.

Como mencioné en el capítulo III, el equipo técnico de la FTV estaba compuesto por graduados y estudiantes universitarios, en su mayoría egresados de la carrera de Trabajo Social; funcionaba en una oficina de la sede nacional de la CTA, en Capital Federal, y, tal como pude observar, sus tareas también estaban modeladas por los requerimientos del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.

El espacio donde *los técnicos* desarrollaban sus actividades permanecía acordonado por innumerables cajas de cartón con etiquetas que identificaban localidades y pueblos de distintas provincias de Argentina y del conurbano bonaerense. También había tres computadoras, cuatro escritorios, estantes con carpetas, y papeles esparcidos sobre el piso. El 23 de abril de 2002 hallé en ese lugar a cuatro personas que habían viajado desde las provincias de Santiago del Estero, Salta y Chaco. Sonia, una trabajadora social, atendió en primer término a los dos representantes de Santiago del Estero. Trataron la dificultad del pueblo de

Quimili, desde donde se había enviado un listado de beneficiarios, pero restaba una copia en disquete. Sonia propuso que remitiesen la nómina por correo electrónico. *"Pero no tienen computadora, por eso llegó por fax a La Banda"*, explicó la mujer que venía en representación de la provincia. *"Uh, que macana"*, se lamentó Sonia. Hizo silencio, se acercó a una computadora, la encendió y pidió a los dos representantes de la provincia que ingresasen los datos de Quimili. Luego siguió con Salta y más tarde con Chaco. A esa altura se habían sumado a la fila dos hombres del barrio de La Boca que transportaban cajas con planillas. Por último, arribó un representante de la provincia de Misiones que expuso como problema la incapacidad para vincular a los beneficiarios con proyectos. Sonia intentó solucionar ese inconveniente fotocopiando dos proyectos de La Matanza, pero con tono de consejo y recriminación, advirtió: *"No trabajen atados a los planes, fortalezcan lo que ya venían haciendo"*.

En el transcurso de mi trabajo de campo volví a releer el registro del 23 de abril de 2002. Fue entonces cuando comprendí que en esa ocasión el equipo técnico desarrollaba dos actividades de rutina: ingreso de datos en sistemas informáticos y vinculación de beneficiarios con proyectos productivos o comunitarios. Al igual que en la CCC, ese equipo centralizaba información de beneficiarios del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados pertenecientes a la FTV en diferentes puntos geográficos de Argentina.

En La Matanza, quienes ejercían tareas técnicas se limitaban a recopilar datos de beneficiarios de la FTV del distrito. Esa actividad tenía lugar en la sede de la cooperativa del barrio El Campo y la ejercían dos mujeres que habían colaborado estrechamente con el presidente de la FTV cuando, a mediados de los 90, éste había sido elegido concejal de La Matanza por la fuerza política Frepaso.

En los barrios, la tarea técnica estaba asociada al cargo de *referente*. En este sentido, Sandra afirmaba:

"Lo más importante para un referente es que la gente cobre. O sea, el referente es el responsable de llevar y traer los papeles, y de no equivocarse cuando pasan las planillas. Si yo me equivoco en un número, la gente al mes siguiente no cobra. Y ahí está tu responsabilidad" (Sandra, 30 años, referente de la FTV).

En el barrio San Alfonso pude observar cómo Sandra se dedicaba a recolectar los “papeles” de los integrantes de su grupo (fotocopias de documentos de identidad, constancia de CUIL, certificados de escolaridad, vacunación y partidas de nacimiento de los hijos de los beneficiarios). Se dirigía con el conjunto de la documentación a la sede de la cooperativa del barrio El Campo y allí aguardaba su turno. Seguía con la mirada atenta el proceso de ingreso de datos en el sistema informático y advertía sobre errores. Otro momento clave era la remisión al barrio El Campo de la nómina del ANSeS o, como se reconocía en términos coloquiales, “*el listado de los que salieron para cobrar*”. Una vez que retiraba ese listado, corroboraba quiénes de su grupo habían conservado el *plan*, quiénes habían sido dados de *baja* y quiénes todavía no habían sido incorporados como *alta*. Ante casos de “*bajas*”, debía iniciar el reclamo para que se restableciera el beneficio de ciento cincuenta pesos. Al mismo tiempo, con los integrantes de su grupo impulsaba prácticas de ayuda mutua para otorgar un aporte monetario a las personas cuyos beneficios habían sido cancelados (colectas, venta de alimentos en el barrio, etc.).

Un consenso generalizado en las investigaciones dedicadas al movimiento piquetero sostiene que las organizaciones de desocupados se afianzaron entre 1999 y 2001 porque durante ese período se estableció que ONGs u otras entidades de la sociedad civil podrían presentar proyectos ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de forma alternativa a los gobiernos municipales (Svampa y Pereyra, 2003, 2005; Delamata, 2004). Aún teniendo en cuenta estas afirmaciones, considero que el análisis requiere una mayor profundidad. Como señalé en capítulos precedentes, desde los inicios de la década de los noventa, pero sobre todo a partir de 1995, con el lanzamiento del Programa Trabajar, las reglamentaciones de los programas de empleo reconocían como organismos responsables para la presentación de proyectos y selección de beneficiarios tanto a gobiernos municipales como a ONGs. En este sentido, la FTV gestionaba programas de empleo en calidad de asociación civil mientras que la CCC, por tratarse de una corriente político-gremial, operaba con avales de la Asociación Amas de Casa del País⁵ para trámites

⁵ Amas de Casa del País era una organización de mujeres vinculada al Partido Comunista Revolucionario, con injerencia en distintas provincias de Argentina.

vinculados con ministerios nacionales y de la Junta Vecinal "7 de Mayo" para aquellos de la órbita de la provincia de Buenos Aires⁶.

Un punto a destacar, entonces, es el desarrollo de iniciativas dentro de los marcos impuestos por las políticas estatales. En ese espacio, se fueron apropiando de saberes técnicos con la intención de ejercer un "control" sobre el trabajo de las dependencias estatales. En términos conceptuales, la apropiación⁷ refiere tanto al carácter coactivo de los marcos dentro de los que se toman decisiones como a la capacidad de acción e iniciativa de los sujetos (Grimbeg, 1997; Rockwell, 2004).

En un contexto de intensa movilización social de Argentina, como el mes de diciembre de 2001 y el verano de 2002, ambas organizaciones lograron mayor control sobre las tareas técnicas a partir del lanzamiento del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Esto se expresó en una creciente autonomía respecto de los gobiernos municipales:

"Fuimos viendo que dentro del despelote que tenía el municipio, con lo que ellos tenían y con lo de otras organizaciones, era mejor buscar nuestra propia estructura - que sería la ONG- que nos represente. De esa manera, nosotros podíamos hacer el reclamo más puntual, porque de la otra forma teníamos que ir al municipio a reclamarle que menganito, fulanito y sultanito no salieron para cobrar, que los papeles que faltaban eran éstos...y el municipio en el medio de todo el kilombo que tiene, porque ellos tienen miles capaz, no tomaban en cuenta el nuestro y el nuestro salía perjudicado. Entonces, con nuestra estructura se iba a hacer más directo el trámite. De esa forma fuimos fundamentando porque nos teníamos que independizar como organización, porque igualmente dentro del municipio estábamos como organización, no es que estábamos como municipio, pero la independencia era porque iba a ser más directo y aparte también el intendente se sacaba un peso de encima, porque algunos cachetazos iban a ir para él también."

⁶ En el año 2004, a partir de la puesta en marcha de programas estatales centrados en la formación de cooperativas de trabajo para la construcción de viviendas y la extensión de la red de agua potable, se conformó la Federación Nacional de Cooperativas René Salamanca, que obtuvo el reconocimiento del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Solidaria (INAES).

⁷ Las definiciones del concepto de apropiación son variadas e indican la complejidad de ese proceso. En el paradigma reproductivista indicaba concentración del capital económico y simbólico por parte de los grupos dominantes. En otros esquemas se sugiere que la apropiación de recursos y prácticas puede ocurrir en múltiples direcciones. De este modo, el sentido del concepto se desmarca de un modelo de referencia inicial ligado a la apropiación unidireccional de la plusvalía que se da en la producción capitalista (Rockwell, 2004).

Tal como pone de manifiesto el testimonio citado, los trámites correspondientes a los programas de empleo comenzaron a realizarse de manera directa ante los funcionarios nacionales logrando independencia respecto de los gobiernos municipales. Hasta el año 2002, ambas organizaciones desarrollaban actividades previstas en las reglamentaciones oficiales para las ONG's como la selección de beneficiarios y el armado de proyectos. Con el lanzamiento del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, sumaron a esas tareas aquellas responsabilidades que las normativas estatales preveían para gobiernos municipales y comunas, entre ellas:

- Coordinar la inscripción de los candidatos a beneficiarios a partir de la administración de un Formulario Unico de Inscripción proporcionado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
- Construir un legajo de cada uno de los beneficiarios propuestos que debe contener: fotocopias del Documento Unico de Identidad y de la Clave Unica de Identificación Laboral; certificados de escolaridad y del plan de vacunación completo de cada uno de los hijos menores de dieciocho años; constancias médicas que certifiquen estados de gravidez de miembros del grupo familiar y, en caso que corresponda, certificados de discapacidad-confeccionados de acuerdo con normativas legales-.
- Efectuar la carga informática de todos los datos y remitir la información al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
- Vincular a cada uno de los beneficiarios propuestos a proyectos productivos y comunitarios para el cumplimiento de la contraprestación horaria.
- Comunicar a los beneficiarios si fueron incorporados y dados de alta en Registro Nacional de Beneficiarios de Planes Sociales, a partir de lo cual comienza a regir el beneficio económico estipulado en la suma mensual de 150 pesos.

En suma, la CCC y la FTV ganaron control sobre la implementación de programas de empleo tomando responsabilidades asignadas a los gobiernos municipales, esto se expresó en una rutina diaria modelada por las tareas de especialización técnica.

TRABAJO CON LOS PLANES Y TRABAJO GENUINO: MODALIDADES Y SENTIDOS DEL TRABAJO

En mayo de 2002 visité por primera vez la vivienda de Violeta, una *referente* barrial de la FTV, en el asentamiento Tierra Nuestra. Cuatro hombres manipulaban maderas con martillos y tenazas en el patio delantero y un grupo de personas, en su mayoría mujeres, permanecía dentro de la casa, en una extensa cocina. Violeta me presentó a todos, y al cabo de unos instantes circulaban por mis manos muñecos, juguetes de madera y arreglos florales. Pregunté cómo habían aprendido a realizar esos objetos y, entre risas, una mujer gritó: "¡La profesora Violeta!".

El grupo de mujeres conversaba en un extremo de la cocina. Dos salieron a la calle y retornaron luego de unos minutos con una bolsa de pan; compartieron ese alimento entre todas, barrieron, acomodaron y se despidieron. Cuando estaban por retirarse, una de ellas se paró frente a Violeta y le avisó que al día siguiente se ausentaría porque tenía un hermano enfermo. Cristian, el yerno de Violeta, extrajo unas planillas del interior de una carpeta para que las mujeres firmaran, y Violeta le recomendó que saliera al patio delantero y preguntara quiénes restaban firmar.

Las acciones que registré en mi primera visita a la vivienda de Violeta se relacionaban con la organización de la contraprestación de cuatro horas diarias en el marco de programas de empleo estatales. La categoría *trabajar con el plan* expresaba una modalidad de trabajo específica que recuperaba pautas del mundo laboral, como la organización de turnos de trabajo (mañana y tarde), el registro de asistencias e inasistencias, la justificación de ausentismo y los períodos de vacaciones anuales de quince días, generalmente durante el mes de enero.

El movimiento cotidiano en esa casa era sumamente intenso porque se organizaba en función de la contraprestación de los beneficiarios de programas de empleo. A las siete de la mañana arribaban los primeros grupos de trabajo que ocupaban la cocina, una habitación, el patio delantero y el trasero. En horas del mediodía se producía el recambio y se volvían a ocupar los mismos espacios que en el turno mañana. El ritmo se aceleraba a las cinco de la tarde cuando se servía una *copa de leche* para ciento cuarenta niños. Recién a las siete de la tarde retornaba

cierta calma y disminuía la concurrencia de personas. A partir de esa hora, las hijas mayores de Violeta se dedicaban a limpiar la casa, lavar ropa y calentar agua para bañarse y bañar a sus bebés. Los hijos más chicos esparcían sobre la mesa útiles para realizar tareas escolares y la madre de Violeta se sentaba en un pequeño sillón y encendía el televisor.

Me interesa centrarme en la descripción del funcionamiento de un proyecto, el de *copa de leche*, con el objetivo de realzar una serie de particularidades y tensiones que definían una modalidad de trabajo configurada en torno a los programas de empleo.

Las tareas del proyecto de *copa de leche* se iniciaban con el ingreso del turno tarde. Cinco mujeres amasaban y preparaban alimentos (churros, tortas fritas, galletas o dulces caseros) que se distribuían entre los niños. La preparación de cada alimento requería del aprendizaje de una técnica particular que era transmitida por alguna de las mujeres del grupo o por Violeta. En una oportunidad en que se cocinaba dulce, Claudia explicó: *“Este dulce se hace con zapallo rallado, y eso da jugo y después se agrega agua y azúcar, y hay que revolver así, sin parar”*. Cuando parecía que la cocción había llegado a su punto, se acercó Violeta, probó el dulce, dio su aprobación y felicitó a Claudia: *“¿Viste que aprendiste, que todo se aprende?”*.

En el patio trasero de la casa, cuatro hombres calentaban agua para preparar mate cocido. Habían montado una empalizada, frente a un sector de terreno reservado para una huerta comunitaria, donde encendían fuego y vertían agua en un gran recipiente de acero inoxidable denominado cilindro. Tres veces por semana partían hacia un descampado cercano con el propósito de recolectar leña para encender el fuego y evitar el uso de la cocina a gas de la casa debido a los costos de las garrafas. Las mujeres tampoco utilizaban gas, ya que freían las masas en un artefacto eléctrico.

Día a día, poco antes de la cinco de la tarde, se repetía la misma escena: quienes trabajaban con madera guardaban herramientas y cargaban a pulso dos bancos largos que ubicaban sobre cada uno de los costados de la mesa de la cocina. Los hombres que habían preparado mate cocido transportaban el cilindro hacia el interior de la vivienda al grito de *“¡cuidado, guarda, guarda!”* y depositaban ese

recipiente en un lugar distante de los niños. Grupos de costura y manualidades recogían sus elementos de trabajo y colaboraban para extender manteles y preparar la mesa. La mayoría firmaba las planillas y se retiraba; sólo permanecían cinco mujeres que servían la merienda a los niños.

Entretanto, en la puerta se apostaba alguna de las hijas de Violeta y ordenaba la fila de los niños; los hacía ingresar a la cocina en tandas de veinte y anotaba los datos de cada uno (apellido y nombre) en un cuaderno. Finalizada esa actividad, sumaban la cantidad de concurrentes y estimaban un promedio que variaba entre ciento cuarenta y ciento cincuenta.

Cuando ingresaba la primera tanda de comensales, dos mujeres vertían mate cocido en vasos y tasas, y otras tres distribuían una ración de alimentos a cada uno de los niños. Esta pauta se alteraba en eventos festivos, como el Día del Niño o Navidad, ocasiones en las cuales las bandejas con alimentos quedaban en el centro de la mesa y no se racionaban. Un día después de Navidad, refiriéndose a ese hecho, Irma comentaba: *"A mí me gusta, eso está bueno, eso es lo mejor. Nosotras, cuando empezamos, hacíamos así: poníamos las bandejas y que se sirvieran todo lo que quisieran, porque serían treinta; pero ahora eso no se hace, y si no repartimos nosotras, algunos se quedan sin nada. Por eso me gustó que ayer hayamos hecho eso"*.

Violeta supervisaba el conjunto de las tareas, alternaba en el control de la puerta, prestaba su colaboración para servir y ordenaba a los niños en la mesa. También intervenía sobre innumerables decisiones que se tomaban en el transcurso de la tarde para superar problemas y desarrollar con éxito la actividad. Entre los inconvenientes se destacaba la falta de algún insumo, como azúcar o esencia de vainilla, para completar la cocción de alimentos; la escasa cantidad de utensilios (cucharas y tasas) para servir determinados tipos de comida, y la amabilidad con que se debía comunicar a los niños que, una vez terminada su merienda, debían retirarse porque había otros aguardando para ingresar.

Aproximadamente a las seis de la tarde, las mujeres retiraban los manteles y se llevaban la olla vacía al patio trasero. Se reunían para tomar la merienda y se turnaban para lavar el cilindro con las cenizas del fogón, distribuir alimentos

sobrantes entre ellas y recorrer junto con una hija de Violeta comercios mayoristas en busca de donaciones para la *copa de leche*. Antes de retirarse firmaban planillas de asistencia y luego caminaban en grupos hacia distintos puntos del barrio.

El proyecto de *copa de leche* se caracterizaba por el procesamiento de materias primas, la asignación y división de tareas, incluso división sexual de tareas, la jerarquía de supervisión y la obtención de un producto final. Se organizaba en turnos de trabajo, se controlaba la asistencia y se requería del aprendizaje de destrezas específicas para el desarrollo de las labores. La articulación de todas esas actividades conformaba un proceso de trabajo rutinizado. *Ropero comunitario, manualidades, carpintería, huerta comunitaria y limpieza de calles*: cada uno de los proyectos que observé repetía el mismo esquema; sólo variaban las materias primas procesadas, las técnicas y habilidades requeridas, y el producto final.

Esos procesos de trabajo se encuadraban en una modalidad específica: el *trabajo en los planes*. En primer lugar, las materias primas debían ser provistas por los propios beneficiarios a través de la gestión de donaciones o de recursos complementarios de otros programas estatales. En segundo lugar, en los espacios donde funcionaban las actividades, el trabajo no aparecía separado de la vida familiar y barrial. En el caso de Violeta, su familia pautaba la vida doméstica en torno a *los planes* y cinco de sus siete hijos también *trabajaban con los planes*. Más allá de esto, relaciones de parentesco unían a los integrantes de los grupos entre sí. Era común que las mujeres fueran a cumplir la contraprestación junto con sus hijos más pequeños, quienes jugaban o dormían cerca de ellas; también era frecuente que otros miembros de sus familias entraran y salieran de ese espacio para acercar recados domésticos (búsqueda de una llave, anuncio del arribo de visitas, etc.). En tercer lugar, y esto es fundamental, los productos obtenidos en esos procesos de trabajo se ofrecían en el marco de relaciones de intercambio social y político. La *copa de leche* se destinaba diariamente a niños del barrio, pero también los productos de otros proyectos, como juguetes de madera, ropa acondicionada en el *ropero comunitario* y manualidades, se acumulaban y se envolvían con papel elegante para ser entregados como regalo en ocasiones festivas: el Día del Niño, Navidad y el Día de la Madre.

De acuerdo con mis datos de campo, esta modalidad de trabajo se repetía en la mayoría de los grupos que integraban la FTV y la CCC; por ejemplo, los proyectos de *copas de leche* presentaban pequeñas variaciones en la calidad de los insumos y alimentos. En el barrio San Alfonso se recibían donaciones de Cáritas y de iglesias de la zona de Recoleta; entonces, se cocinaba con gas y se incorporaban al menú yogur, leche y galletas dulces. Por su parte, en el barrio Santa Emilia, la variedad de alimentos era mayor porque se obtenían recursos de otros programas de asistencia social del Estado y de la colaboración de estudiantes universitarios.

Los significados que asumían esos procesos de trabajo eran variados y se relacionaban con las trayectorias de vida, sociales y políticas, así como también con diversos marcos relacionales. La mayoría de las mujeres se referían al *trabajo con los planes* en términos de aprendizaje y sociabilidad:

“Todo lo que hago me gusta, aprendo cosas que nunca hice. Después se lo hago a mis hijos; por ejemplo, las muñequitas nunca las había hecho. Les enseñé a mis hijas y ahora hacen todas polleritas para las muñequitas” (Carmen, 40 años, beneficiaria, integrante de la FTV, barrio Tierra Nueva).

“Yo acá aprendo a hacer muchas cosas; aprendí a hacer adornos, cortinas con botellas, churros y bolitas de fraile. Lo que yo aprendo acá le enseñé a mi marido. Como él está sin trabajo, aprendió a hacer churros y bolitas, y sale a venderlas en la ruta” (Claudia, 41 años, beneficiaria, integrante de la FTV, barrio Tierra Nueva).

Tal como se puso de manifiesto, uno de los componentes del trabajo era el aprendizaje de técnicas precisas para la elaboración de diferentes objetos y alimentos. Ese aspecto era uno de los más valorados por el conjunto de mujeres entrevistadas; fundamentalmente, se lo estimaba como una posibilidad de transmitir saberes en contextos familiares y alcanzar fuentes alternativas de ingresos.

Para la mayoría, el *trabajo con los planes* tenía un sentido específico: era una instancia en la que se *compartían problemas* con otros:

“Acá es parte de mi desahogo. Parte, no es directamente como te estoy contando todo esto a vos, pero parte de mi desahogo, sí... Yo vengo y les cuento a ellas mis problemas. También las ayudo. Con la que más estoy es con Marta; me da mucha pena todo lo que le pasa con la hija. Yo siempre cuido a la nietita de Marta porque es una personita tan dulce, tan frágil. Yo digo: ‘¿Dónde está ese corazón de madre que

no supo lo que es darle el pecho a la hija?'. Qué sé yo... Yo me muero por los chicos" (Karina, 29 años, beneficiaria de la FTV, barrio San Alfonso).

"Con las compañeras converso. Yo no cambiaría este trabajo. Cuando llueve, miro por la ventana y trato de venir igual; si no, me aburro, me agarra depresión. Si me llevo a sacar un número en la quiniela, pondría un comedor para los chicos, porque a mí me gustan los chicos, porque siempre trabajé en un jardín evangélico" (Juana, 63 años, beneficiaria, perteneciente a la FTV, barrio Tierra Nuestra).

"Venir para acá me gusta mucho, porque será que me distraigo mucho acá. Porque la vez pasada estaba mal, y hablé con las compañeras y me puse bien. Porque yo pienso que todos tenemos problemas, pero me siento bien acá, me gusta, me siento como si fuera mi casa. Tanto Violeta como las hijas no nos molestan para nada, nos dejan trabajar libres, no están encima de nosotras. Los días de lluvia sufro porque hay mucho barro y tengo que hacer muchas cuadras para venir acá" (Carmen, 40 años, beneficiaria, integrante de la FTV, barrio Tierra Nuestra).

Para un gran número de mujeres, *trabajar con los planes* significaba una instancia de sociabilidad en la que se compartían problemas personales. El trabajo se interpretaba como un momento de *"desahogo"* y *"distracción"*. En mis registros sobre sus conversaciones sobresale la recurrencia de temáticas tales como problemas de salud, acceso a servicios médicos, crianza de los niños, conflictos con hijos adolescentes referidos al uso de drogas, alcohol o robos, violencia doméstica y vínculos de pareja. Alguna exponía sus problemas, otras escuchaban, y con un lenguaje sencillo se relataban experiencias sobre cómo se habían atravesado y enfrentado situaciones similares.

En el caso de los varones, de acuerdo con sus trayectorias de vida, el *trabajo con los planes* revestía otros significados. Tal como se analizó en el capítulo IV, los programas de empleo tardaron en incorporarse como una expectativa porque no eran considerados un *trabajo útil*. En este sentido, don Barrera sostenía:

"Cuando entré, me dijeron qué quería hacer, y dije enseguida: 'Yo, productivo'. A mí que me den lo productivo, si no, no agarro. Entonces, con otros tres hombres nos pusieron para armar escobillones".

Esa afirmación provenía de un hombre nacido en Tucumán en el año 1939, que había trabajado desde niño en un ingenio de azúcar en su provincia natal y había migrado a Buenos Aires en 1965, donde había sido empleado en un frigorífico

de La Matanza durante treinta años. Igual que en este caso, tensiones sintetizadas en las nociones de *trabajo útil y productivo* atravesaron gran parte de los relatos.

Desde otro ángulo, las nociones de *trabajo útil y productivo* también formaban parte de los fundamentos que se motorizaban para valorar el *trabajo con los planes*. En una cartilla difundida por la CCC en el año 1999 se afirmaba:

“6 hs. de cualquier mañana: los pañoles son un hervidero de ‘chalecos amarillos’ (nombre que se les da a los que participan del plan Barrios Bonaerenses en La Matanza, por el color de sus casacas). Hombres, mujeres, jóvenes, va cada grupo con su capataz, sus herramientas y la tarea del día. Le han cambiado la cara a estos queridos asentamientos. Con machete y pala limpian el zanjón y mantienen las cunetas. Hay alegría, porque no trabajan como esclavos; sí, pero también por que saben que lo que hacen es útil. ¿Qué les puede importar a los funcionarios si el agua corre o se estanca? Poco y nada. No es que en la cuadrilla no haya algún indiferente, pero si el agua corre, este verano lloraremos menos chiquilines muertos. No hacen el refugio de colectivos para figurar: conocen los amaneceres fríos y con barro. Si salta de alegría el corazón al ver que se aprobó una cuadrilla para ampliar la salita de salud. Si cada pedazo de estos asentamientos fue un parto, con su dolor y alegría” (Alderete y Gómez, 1999: 11).

En este relato se definía el *trabajo con los planes* como un *trabajo útil* desde la trayectoria de los asentamientos urbanos. Un trabajo que asumía ribetes heroicos frente a la desatención de funcionarios estatales y que se ejercía con alegría en pos del bien común. Con diferentes matices, el énfasis sobre la utilidad del trabajo aparecía también en otros registros:

“La emoción más grande fue a la noche, después de las doce, que venían a saludarme los chiquitos con la ropita que les habíamos regalado a la tarde. Era tan lindo ver eso; ése era el objetivo. Porque los papás no les pueden comprar nada, entonces, que puedan estrenar algo fue relindo” (Violeta, 46 años, referente de la FTV).

El relato de Violeta hacía referencia al regalo de ropa confeccionada por el proyecto *ropero comunitario* en la Navidad. Desde esta óptica, el *trabajo con los planes* se tornaba útil en el marco de relaciones de intercambio social y político con los pobladores del barrio, y se expresaba en forma de “regalo desinteresado”.

Los significados de esta modalidad de trabajo también se elaboraban en relaciones puntuales con el Estado:

Rosa: Los proyectos, digamos, comunitarios, los comunes, los de siempre, es un trámite, y los productivos es otro.

Virginia: ¿A qué le decís "comunitarios"? ¿Cuáles serían?

Rosa: Claro, la copa de leche, los roperos, los productivos que no están subsidiados por Manos a la Obra, porque hacen muñequitos de peluche y eso lo donan al comedor del barrio; ése sigue siendo un comunitario. El tema del área de los productivos es a través de Manos a la Obra. En eso sí estoy metida sola, porque es un despelote y todos le tienen miedo a eso. Porque vos tenés que armarlo al proyecto, buscar presupuestos, presentar tres boletas proforma, hacerle el seguimiento una vez que lo presentás; que siempre le encuentran algún error, que lo tenés que hacer de nuevo al proyecto. Y después, cuando se aprueba, el mayor despelote... (Rosa, 38 años, coordinadora del Equipo Técnico Nacional de la CCC).

El calificativo *productivo*, adjudicado a ciertos proyectos, se contraponía a *comunitario*, conferido a otros. Esa terminología era propia de los programas de empleo, específicamente de una iniciativa estatal lanzada en 2003 con el objetivo de reemplazar el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. De acuerdo con mis datos de campo, el carácter *productivo* se relacionaba básicamente con la posibilidad de ubicar productos en el mercado a partir de la recepción de subsidios para la compra de insumos y para el montaje de emprendimientos en otra escala de producción. A instancias del Programa Manos a la Obra,⁸ distintos proyectos que funcionaban desde hacía años, tanto en la CCC como en la FTV, se reagruparon en calidad de *productivos* y se reordenaron en rubros, como textiles, herrerías, carpinterías, pizzerías, panaderías, estampado, bordado y calzado.

Los programas de empleo lanzados a partir del cambio de autoridades en el gobierno nacional en mayo de 2003 manifestaban como propósito favorecer la formación de microemprendimientos y cooperativas. En los fundamentos de esas políticas, la noción de *productivo* estaba íntimamente ligada a la de *trabajo genuino*:

⁸ Este programa fue lanzado el 11 de agosto de 2003 por el gobierno nacional con el objetivo de fomentar el "desarrollo local" mediante la entrega de herramientas, insumos, bienes de capital y dinero en efectivo a emprendimientos productivos. Su eje pasaba por la presentación de proyectos para la formación de emprendimientos productivos y por el requerimiento de los medios para llevarlos a cabo. Inicialmente era financiado con una partida anual de setecientos millones de pesos y con préstamos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los primeros proyectos presentados fueron de tipo agroalimentario, textil, calzado, fábricas de escobas y viveros (Revista *Tercer Sector*, Año 10, N° 44, 2004).

“El Plan Nacional Manos a la Obra apunta a que las personas desocupadas se asocien y lleven adelante pequeños proyectos productivos, con capacitación y financiamiento del Estado, para pasar del clásico asistencialismo al trabajo genuino” (Informe del Ministerio de Desarrollo Social, Año 1, N° 2, junio de 2004).

Las nociones de *trabajo productivo* y *genuino* cobraban significado en contraposición con la asistencia:

*“La actual política social desalienta la cultura del trabajo. En el norte del país, el Plan Jefes y Jefas es un desincentivo porque las personas cobran 150 pesos y si van a trabajar a la zafra, por ejemplo, cobrarían apenas 160 pesos (...)”*⁹

La asistencia se interpretaba como límite para el incentivo de la “cultura del trabajo”. De esta manera, el uso del término *trabajo genuino* en contraposición a la asistencia activaba un debate clásico en las áreas sociales en torno al asistencialismo, que en el caso de América Latina se expresó con fuerza durante las décadas del 60 y el 70, asociado al problema de la “marginalidad” y la “población sobrante”.¹⁰

Este reordenamiento de los ejes de las políticas públicas generó la apertura de un espacio de debate y controversia en torno a las definiciones de *trabajo genuino*:

“Las dificultades que vamos a afrontar van a ser permanentes, porque creemos que vamos a tener que seguir peleando por trabajos genuinos. Yo no creo que sea un logro conseguir un plan social más, es un paliativo. Tampoco creo que sea un logro la cooperativa; no, no es un logro, es un paliativo con el cual vamos saliendo, porque no es lo mismo un compañero que en una cooperativa gane cuatrocientos pesos a que esté con ciento cincuenta pesos del plan. Sabemos que eso no es igual, pero

⁹ Palabras de asesores de la Ministra de Desarrollo Social, Revista *Tercer Sector*, N° 44, 2004.

¹⁰ En el marco de las políticas públicas y, en particular, de las políticas sociales ha habido un fuerte debate en torno a quiénes eran los sujetos destinatarios de éstas. En este sentido, es importante tener en cuenta las particularidades históricas de Argentina en cuanto a la centralidad que lograron desde mediados del siglo XX los trabajadores asalariados. En ese contexto, los “derechos sociales” han sido el complemento de los derechos laborales. Así, las políticas sociales de asistencia pública fueron residuales y dirigidas hacia aquellos individuos imposibilitados de integrarse al mercado de trabajo por razones ajenas a su voluntad, como invalidez, vejez, viudez, madresolterismo. Distinto fue el caso de los “pobres por desocupación”, que en ese período de expansión del empleo formal se constituyeron en los sujetos vergonzantes de las políticas de asistencia (Grassi, Hintze, Neufeld, 1994). Esto último se vincula con los debates teóricos en América Latina en torno al concepto de “marginalidad” y “modernización”. Para una revisión exhaustiva sobre estas discusiones y sobre la diversidad de enfoques pueden consultarse Germani (1973) o Lomnitz (1975).

sabemos que eso no es la solución tampoco. Nosotros, con los microemprendimientos y con las cooperativas no nos podemos decir que somos empresarios, porque no es así. Pero es cierto, lo recibimos y lo vamos a seguir recibiendo porque creemos que es un paliativo para los compañeros; pero no es la solución. Creo que el mayor desafío nuestro es el trabajo genuino, que es por lo que estamos peleando. Es una meta que tenemos fijada” (María, 55 años, dirigente de la CCC).

Si, para los diseñadores de las políticas públicas, los microemprendimientos y las cooperativas constituían formas de *trabajo genuino*, en las definiciones de la CCC representaban “paliativos” ante la situación de pobreza/desempleo. Se contraponía a esto, aquel trabajo que se desarrollaba en el espacio fabril, entendido como el ámbito en el que se expresaba la “identidad esencial” de los trabajadores. Además, se vinculaba con formas de organización social y política configuradas en torno a la relación entre el Estado y el movimiento obrero, y, en particular con una serie de derechos conquistados por la lucha de los trabajadores y posteriormente perdidos (protecciones sociales, estabilidad laboral, etc.). Para la CCC, entonces, la categoría *trabajo genuino* se transformó en una consigna y un horizonte de movilización social:

“Nosotros, esencialmente, luchamos desde el punto de vista social por cambiar temas puntuales de la política y de la economía argentina de fondo. Estratégicamente, buscamos cambiar la política para que nuevamente vuelvan a florecer las chimeneas, que yo pueda volver, no sé si al viejo laboratorio en el cual trabajaba, pero por lo menos a ese tipo de trabajo, que fue mi esencia. Y que los metalúrgicos vuelvan a las fábricas; los obreros de la construcción, a las obras... Queremos que el movimiento obrero argentino no solamente tenga un trabajo sino que recupere innumerables reivindicaciones perdidas y que costaron mucho, costaron miles de vidas” (Alfredo, 53 años, integrante de la Mesa Ejecutiva de la CCC).

En virtud de esta controversia, las ferias de exhibición de productos de proyectos comunitarios y productivos se transformaron en una forma específica de reclamo. En marzo de 2004 se montó una en Plaza de Mayo, y en mayo de 2005, otra en el patio de la Escuela Blanca, que fue visitada por funcionarios estatales que llegaron hasta allí con el propósito de monitorear la marcha de los proyectos subsidiados. Observé entonces la exposición de cortinas, escobillones, arreglos florales, velas aromáticas, acolchados, ropa, adornos, verduras y conejitos en jaulas.

Además, sobre los puestos pendían fotos que mostraban la rutina de las labores diarias y un cartel donde figuraban el título del proyecto, si estaba aprobado por el Programa Manos a la Obra, el nombre del responsable y la dirección donde funcionaba. Entre esos carteles se intercalaban otros que expresaban leyendas como la siguiente: *“Necesitamos insumos: aguja, hilo, tijeras, una recta, una overlock, una plancha. Necesitamos insumos. Necesitamos maquinaria. Necesitamos trabajo genuino”*.

En cambio, para la FTV, los microemprendimientos y las cooperativas resultaban una forma de *trabajo genuino*:

“Como organización, entramos en una nueva etapa de trabajo, donde salimos de lo que es básicamente, entiendo yo, la lucha por reclamar por nuestros derechos, y entramos en una etapa de trabajo más que nada. Esto es lo que se habló un poco con el Presidente, lo que habló Luis y otros compañeros de la Mesa Nacional: que no queríamos, nunca hicimos el piquete por el piquete mismo. Siempre lo que pedimos fue la posibilidad de poder trabajar, y que si se nos da, se nos brinda esa posibilidad, nosotros no vamos a salir a la ruta a cortarla; salvo que... qué sé yo... que alguna situación así lo requiera, como que el ALCA venga a querer imponer, o el Fondo Monetario quiera venir a imponer alguno de sus ajustes. Pero si es por trabajo, o es por pedido de planes o programas alimentarios, mientras tengamos contenida a la sociedad, mientras tengamos la posibilidad de ser protagonistas de esta distribución de la riqueza... Cuando pienso en trabajo, pienso en la posibilidad de poder entrar en los microemprendimientos productivos, en la recuperación de las fábricas en manos de los trabajadores, en que se pueda dar la posibilidad, que se puedan promover leyes que faciliten a los trabajadores acceder a administrar una empresa” (Marcelito, 40 años, miembro de la Secretaría de Organización de la FTV).

Desde la visión de la FTV, los microemprendimientos, las cooperativas y las fábricas recuperadas se transformaron en factores clave para el fomento del trabajo en el marco de un nuevo compromiso con las autoridades del gobierno nacional que habían asumido en mayo de 2003:

“Hoy estamos intentando juntar lo que ellos se encargaron de fragmentar. La peor derrota del modelo neoliberal conservador, entre todas, ha sido la cultural. La que intentó colonizar la cabeza y el corazón de nuestro pueblo. Por eso, nosotros hoy estamos haciendo lo que ellos no quieren: juntar lo social con lo político. Juntar a los del medio con los de abajo. Y, sobre todo, haciéndonos cargo de la historia de nuestro pueblo, al juntar las mejores experiencias de resistencia de los setenta y los noventa, de las cuales estamos profundamente orgullosos (...). Es cierto que hay

*que hacer mucho, mucho más de lo que se hizo, pero qué orgulloso estoy del presidente Kirchner. En un año, Kirchner creó un millón de empleos. Precarios, todavía mal pagos, pero un millón de empleos al fin. Creció veinte puntos la actividad económica. Le dio cinco aumentos a los jubilados, dos aumentos al salario mínimo, vital y móvil. Y puso 7100 millones de pesos en cuarenta programas sociales. Mi mejor encuesta no es la del INDEC, ni la Encuesta Permanente de Hogares. Mi mejor encuesta es cuando salgo a las seis de la mañana en Laferrere y vuelvo a ver los colectivos llenos” (Discurso pronunciado por Luis D’Elía, presidente nacional de la FTV, el 12 de octubre de 2004 en un acto realizado en el estadio Luna Park, con la consigna: *Junto a Kirchner por una Patria para Todos*).*

En el caso de la FTV, la noción de trabajo se enmarcaba, tal como sostuve en el capítulo IV, en una orientación política cuyas referencias eran el *pueblo* y la *nación*, y en un contexto preciso de apoyo a las iniciativas del gobierno nacional.

Más allá de los significados diferentes que asumía la categoría *trabajo genuino* de acuerdo con posiciones políticas diversas, la interpretación del trabajo como un ordenador social recorrió el conjunto de las entrevistas y los testimonios:

“El trabajo genuino es el trabajo de fábrica, donde el compañero vaya a trabajar, su mujer quede en su casa o trabajando, y que llegue a su fin de mes o a su quincena, cobre, y que el chico le diga: ‘Papá, hoy quiero comer una milanesa’, y que la mamá se la pueda hacer. Y no que siempre tengamos que darle polenta con queso, polenta hervida, polenta con agua y sal, o fideos, fideos, fideos o fideos. Porque últimamente parecemos cerdos comiendo polenta, polenta, polenta... Por eso estamos todos hinchados; porque parece que estamos gordos, pero estamos gordos de fideos y polentas. La mayor meta, al menos la mayor meta mía, es ésta: ir a un hospital y que me vea un médico, que me atienda, y salir de un hospital y tener plata para comprar la receta; que mi hijo vaya a la escuela a estudiar y no a comer. Ésa es la mayor meta, no para mí, porque para mí, con mis 55 años, quizás no vuelva a estar en una fábrica. Pero sí mis hijos, sí mis nietos. Y por ellos peleo y por ellos lucho” (María, 55 años, dirigente de la CCC).

En síntesis, la categoría *trabajo genuino* recuperaba visiones sobre formas de trabajo y de vida del pasado. Activaba expectativas de retorno a modalidades de trabajo centradas en la fábrica y en la relación salarial estable. Despertaba las intenciones de recuperación de un conjunto de protecciones vinculadas con la relación salarial en Argentina, como la estabilidad, la jubilación y una serie de derechos asociados a la condición de “trabajador” (salud, educación, salario justo, etc.). Y, de manera simultánea, aludía al reordenamiento de relaciones de género

tensionadas por la desocupación, en una concepción de familia articulada por el patriarcado y por el vínculo de las mujeres con sus hijos y el hogar. Desde esta categoría, entonces, se redefinía y cuestionaba la experiencia del *trabajo con los planes*.

LA GESTIÓN DE LA VIDA

Uno de los problemas que se me presentó cuando escribía este capítulo era la conveniencia de utilizar el título que finalmente decidí conservar. El término *gestión* puede ser interpretado como un signo de apoyo a los dictámenes de los asesores vinculados a Organismos Internacionales de Crédito. En sus interpretaciones, la calidad, la eficiencia, la eficacia y el incremento de productividad de los servicios sociales eran problemas a resolver a partir de reformas en la gestión (Sojo, 1999). La gestión era entendida como la optimización de recursos y la conversión de las restricciones presupuestarias en instrumentos activos de la política (Sojo, 1999). Como se analizó en el capítulo III, esas propuestas orientaron la formulación de *políticas activas de empleo* como era el caso de los programas de ocupación transitoria.

En términos conceptuales, cuando me refiero a gestión me baso en los aportes de la *antropología de las políticas*, en particular en el concepto de *policy* sistematizado por Shore and Wright (1997). Con esta categoría no se alude solamente a las formas de gestión de un programa en particular sino a un proceso complejo de administración de las poblaciones en el cual las políticas contribuyen imponiendo condiciones, normas y regulaciones sobre la conducta de los sujetos. Se trata de regulaciones que anudan obligaciones y procedimientos rutinarios generando distintos niveles de ordenamiento social.

Como se analizó en este capítulo, la categoría *trabajo genuino* recuperaba visiones sobre formas de trabajo y de vida del pasado. Activaba expectativas de retorno a modalidades de trabajo centradas en la fábrica y en la relación salarial estable. En entrevistas y conversaciones informales, otras referencias eran menos

precisas en términos de experiencia histórica porque apuntaban a las virtudes morales asociadas con el trabajo:

“Los sábados y domingos son feos por donde yo vivo. Falta trabajo, no trabajan los jóvenes, no trabajan los grandes... Si uno trabaja no tienen tiempo de andar molestando, boludiando, viene cansado a la casa y se va a trabajar al otro día.” (Zulema, 53 años, beneficiaria, integrante de la FTV, barrio Tierra Nuestra).

“Es difícil convencer a la gente que es más fácil trabajar y que es más rico esa lechuga cosechada que ir a pedir, tenés menos marginación, más felicidad. El ser humano tiene que tener dignidad.” [Rosa, coordinadora de un comedor en el barrio Tierra Nuestra, registro de campo/junio 2002]

“Mira aquellos [refiriéndose a un grupo de hombres que podaban el césped como parte del trabajo con los planes] ya están haciendo el fuego para poner carne, para eso son buenos, pero para el trabajo... Yo acá, llueva, truene o haya sol, estoy todos los días como cuando estaba en la fábrica, jamás falté.” [Roberto, integrante de un grupo de la CCC en el barrio Altavista, registro de campo/enero de 2004]

El trabajo no sólo era un medio para ganarse la vida sino un ordenador de la vida. Ordenaba los tiempos, las actividades, las conductas. Era una actividad por la cual se manifestaban cualidades morales como la responsabilidad, la dignidad, y el sacrificio.

La reconfiguración social de Argentina durante los últimos años, redefinió modalidades y sentidos del trabajo (Grimberg, 2005). De esta forma, las virtudes asociadas con el trabajo se convirtieron en una demanda, en una expectativa y en una manera de evaluar el *trabajo con los planes*. El mérito, el esmero y el sacrificio se demostraban “cumpliendo” con la asistencia a marchas, cortes de ruta y a la contraprestación laboral. Quien cumplía esas normas estaba en condiciones de reclamar, a su vez, las organizaciones reclamaban mayor compromiso del Estado para aprontar ingresos en programas de empleo o para subsanar la incertidumbre que provocaban las solicitudes rechazadas o las *bajas*. Para controlar el curso de esa modalidad de intercambio con las dependencias estatales se especializaron tareas y estructuras, en poco tiempo, algunas personas se vieron a sí mismas operando programas informáticos, completando planillas, formulando proyectos y colaborando con empleados públicos. Otros tuvieron que “escuchar” historias de

sufrimiento y enfermedad para decidir quienes podían ser encuadrados como prioridades. Algunas mujeres aprendieron habilidades *trabajando con el plan* y socializaron sus problemas con otras, mientras que el producto de sus tareas se intercambiaba en el ámbito del barrio en el marco de contextos festivos.

En torno a los programas de empleo, entonces, se configuró una modalidad de gestión cotidiana, una modalidad que sujetó a la población a las políticas estatales. En términos conceptuales, no se trataba simplemente de la gestión de los componentes de los programas de empleo: se trataba de la gestión cotidiana de la vida.

CAPÍTULO VI

LA MATANZA OBRERA Y PIQUETERA: LAS IMÁGENES DEL PASADO EN LA TRAMA POLÍTICA

El 3 de agosto de 2005, el recinto del Honorable Concejo Deliberante de La Matanza se dispuso de manera especial porque se celebrarían los cuatrocientos dos años de la fundación del partido y se rendiría homenaje a Eva Perón pocos días después de otro aniversario de su muerte. Se acondicionaron asientos para el público y se reservó un sector del salón para la prensa local. Se amenizaba la espera con canciones de intérpretes populares del folclore argentino, como Soledad, Horacio Guarani y el Chaqueño Palavecino.

De a poco, los concejales fueron ingresando y ocupando sus respectivas bancas. Cruzaron bromas diversas con periodistas referidas a la sexualidad y a las preferencias por los dos equipos locales de fútbol entre los que se dividían las simpatías de La Matanza (Almirante Brown y Deportivo Laferrere). El Concejo Deliberante¹ se componía de 24 miembros –16 varones y 8 mujeres–, todos elegidos en el año 2003 por el Partido Justicialista.

Tras izar la bandera argentina, entonar el himno nacional y pasar lista a los concejales presentes, el presidente de ese órgano dio por inaugurada la sesión. El concejal Tormo solicitó autorización para rendir homenaje al partido de La Matanza en su 402º aniversario. En su extenso discurso enfatizó:

“Ser matanceros es un sello, un emblema que nos diferencia, que portamos orgullosos, nativos, extranjeros, inmigrantes, nacionalizados o indocumentados, porque pertenecer a La Matanza conlleva la distinción de ser reconocidos dentro y fuera del territorio nacional como habitantes del ombligo de la Argentina, del distrito más populoso del conurbano, de un territorio de 325 kilómetros cuadrados, del lugar donde nació la primera ciudad obrera del mundo; pertenecer a un espacio que sintetiza lo bueno, lo malo y lo feo”.

¹ La ley orgánica de los municipios del año 1958 establece las funciones de los Concejos Deliberantes y su composición de acuerdo con la cantidad de electores. Entre los deberes de ese organismo se encuentra la sanción de ordenanzas y disposiciones municipales.

El discurso de Tormo movilizó imágenes para definir a La Matanza y al “ser matancero”. Destacó una pertenencia armónica (extranjeros-argentinos, documentados-indocumentados) a la vez que contradictoria, y acentuó el carácter obrero y populoso del distrito, en un marco signado por la desindustrialización y los altos índices de desocupación. Enunciados similares a los de Tormo circulaban en discursos de autoridades locales y en documentos más sistematizados difundidos por organismos especializados en la recuperación de la historia del distrito. El registro de la construcción de tradiciones, así como también de alineamientos políticos municipales, despertó en mí interrogantes sobre el modo en que las relaciones expresadas en los piquetes y procesadas en las organizaciones de desocupados se inscribían en el contexto local.

En la mayoría de los estudios sobre el movimiento piquetero, el conurbano bonaerense aparece como un bloque homogéneo en contraposición con el interior del país. Se enfatiza la especificidad del modelo territorial de las protestas del Gran Buenos Aires en comparación con las puebladas de provincias del sur y del norte de Argentina, las cuales se hallarían ligadas a la privatización de empresas públicas y a la descentralización administrativa (Svampa y Pereyra, 2003). Esta lectura procura resaltar un conjunto de procesos que habrían definido las características del conurbano durante la década del 90, como el empobrecimiento, la pauperización, la desindustrialización, el triunfo del peronismo en su versión neoliberal, la expansión de una red punteril y la centralidad del barrio como escenario de reivindicación y de inscripción social y política (Svampa y Pereyra, 2003; Delamata, 2004; Merklen, 2005). Se trata de una imagen unívoca que cede un margen limitado para dimensionar en el análisis la trayectoria histórica de los distritos que componen el Gran Buenos Aires, los alineamientos políticos locales y los estilos de gestión municipal.

El enfoque de algunos trabajos etnográficos concentrados en el distrito de Florencio Varela resultó un aporte para matizar la imagen homogénea atribuida al Gran Buenos Aires (Ferraudi Curto, 2005a). Sus análisis mostraron cómo iniciativas políticas municipales, como el Proyecto de Unidades de Gestión Local, incorporaron

a diversas entidades comunitarias y favorecieron el diálogo (conflictivo) con organizaciones de desocupados (Ferraudi Curto, 2005, 2005a).

Este capítulo, entonces, analiza cómo el piquete y las organizaciones de desocupados se entramaron en procesos históricos y políticos locales. Para ello describo la especificidad del distrito de La Matanza a nivel social e histórico, reconstruyo alineamientos políticos y estrategias del gobierno municipal que favorecieron la inscripción del piquete en la oposición entre el municipio y el gobierno nacional, y sigo la construcción de tradiciones en tanto iniciativas para conjurar los efectos de la transformación social de la década del 90.

ORÍGENES DE LA “CAPITAL OBRERA”: INDUSTRIALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN SOCIO-ESPACIAL

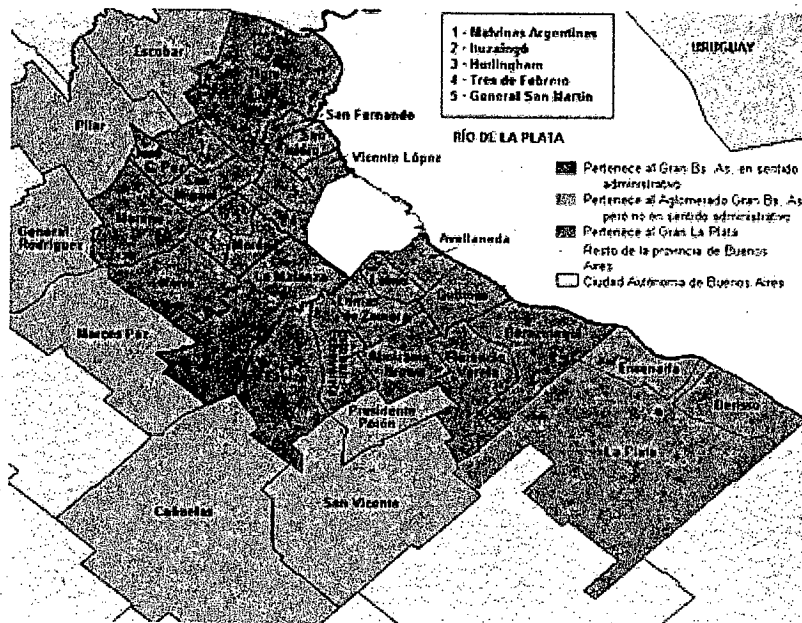
El distrito de La Matanza se encuentra ubicado en el centro-oeste del Gran Buenos Aires. Con una superficie de 325 kilómetros cuadrados, es el más extenso del conurbano bonaerense. Limita hacia el este con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al noreste con el partido de Tres de Febrero, al noroeste con Morón, al oeste con Merlo, al sudoeste con Marcos Paz y Cañuelas, y al sudeste con Ezeiza, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora. La ruta nacional 3, que une el centro del país con la región patagónica, es la principal arteria que atraviesa la zona.

El texto de un documento histórico del 29 de julio de 1603 menciona al “Pago de La Matanza”; por ello, se tomó como referencia esa fecha para la conmemoración de la fundación del partido, aunque el municipio recién fue creado en 1864, bajo la Ley 422 sancionada por la provincia de Buenos Aires con el objetivo de ordenar la división territorial y establecer límites distritales.²

Si bien las evocaciones y los relatos acentuaban el carácter obrero de La Matanza, incluso la condición de “*primera ciudad obrera del mundo*”, el distrito creció al ritmo del desarrollo industrial de forma tardía en comparación con la zona sur del Gran Buenos Aires. A pesar de ello, desde mediados de los años 50 se transformó

² Estos datos fueron consultados en el Boletín de Presentación de la Junta de Estudios Históricos, Geográficos y Estadísticos del Partido de La Matanza (s/f), y en Viglione (2000).

LA MATANZA EN EL GRAN BUENOS AIRES



en la cabeza del conurbano bonaerense en términos de concentración de industrias y de población.

La mayoría de los investigadores coinciden en afirmar la importancia de la industria para la economía argentina a partir de la década del 30. Algunos sugieren que ese consenso opacó la expansión industrial de los años precedentes, sobre todo la que se produjo durante los años 20 sobre la base de la ampliación de las oportunidades abiertas con la Primera Guerra Mundial (Villanueva, 1972; Díaz Alejandro, 1983; O'Connell, 1984). De todas maneras, la recesión económica mundial del decenio del 30 aceleró el desarrollo de ramas industriales vinculadas con la sustitución de importaciones. Se expandieron rubros como "(...) *los tejidos de algodón, los neumáticos de caucho, el petróleo y su refinamiento (...)*" (Díaz Alejandro, 1983: 221). El sector metalúrgico alcanzó su mayor impulso en el período 1948-1950, durante el cual representó entre el 53% y el 62% del total de la expansión industrial (Díaz Alejandro, 1983). Una mención aparte amerita la industrialización durante el primero de los gobiernos de Juan D. Perón, que se concentró en la multiplicación de establecimientos dedicados a la producción de bienes de consumo masivo tendientes a la extensión del mercado interno.

En términos de localización, desde fines del siglo XIX y principios del XX, la implantación industrial siguió un itinerario geográfico preciso: los establecimientos se extendieron hacia la zona sur de Buenos Aires, como Barracas y Avellaneda, para aprovechar las ventajas que proporcionaban el Riachuelo, el ramal del ferrocarril Roca y la cercanía con el centro de la ciudad (Schvarzer, 2000). Se instalaron astilleros, tal fue el caso de Penco (1876), y, fundamentalmente, plantas frigoríficas que eliminaban residuos sobre el río, aprovechaban el agua para el proceso de trabajo, contaban con una salida fluvial para los productos y se abastecían de ganado por la vía férrea. Más hacia el sur, en el partido de Berisso, se radicaron dos frigoríficos de capital estadounidense, Swift (1907) y Armour (1915), que gravitaron de manera decisiva en el comercio de carne y articularon una comunidad obrera cuyas particularidades fueron excepcionalmente retratadas en el estudio historiográfico de Lobato (2004). También se implantaron empresas metalúrgicas en el corredor Pompeya-Valentín Alsina-Avellaneda; entre ellas, Tamet (1902), Siam

(1920) y Gurmendi (1919). Las empresas del rubro de la alimentación, varias fundadas como panaderías en el centro de la ciudad o en San Telmo, se desplazaron y concentraron en Barracas; es el caso de Noel, Bagley, Canale y Terrabusi. Completaron ese panorama fabril las plantas cerveceras Bieckert y Quilmes –la primera buscó la zona de Lavallol en 1908–, así como también la industria de vidrio Rigolleau, en Berazategui, que abastecía la demanda de botellas de cerveza.

Esa pauta de localización se modificó durante los años 30 con el auge de la industrialización por sustitución de importaciones. Buenos Aires continuó siendo el eje principal para la implantación de centros fabriles (Jorge, 1971), pero se avanzó hacia la avenida General Paz, es decir, hacia el oeste. Como la instalación de industrias siguió las líneas de transporte, inicialmente el fluvial y el férreo (Schvarzer, 2000; Chiozza, 2000), el avance hacia el oeste habría estado ligado a la crisis ferroviaria que corrió pareja con la década del 40 y con el realce de las rutas y el transporte automotor. Schvarzer sintetizó en pocas palabras el derrotero de la expansión industrial por la geografía de Buenos Aires:

“Podría resumirse en una frase la historia de la localización industrial en Buenos Aires diciendo que los establecimientos ubicados sobre la vía férrea en la zona sur son anteriores a 1930, mientras que son posteriores a 1960 los que se instalan al norte sobre la autopista. En cambio, el anillo que bordea a la General Paz fue ocupado en el período intermedio” (Schvarzer, 2000: 215).

El período intermedio entre 1930 y 1960 fue aquel en el que cobró impulso el desarrollo industrial de La Matanza. Hasta ese entonces, el distrito era eminentemente rural. Las principales actividades económicas estaban asociadas con las producciones de quintas y estancias donde invernaba ganado, se sembraban frutales y se criaban gallinas, patos, pavos y equinos (Chiozza, 2000). A comienzos del siglo XX, en la localidad de González Catán, un grupo de habitantes, mayoritariamente de origen vasco, dedicados a la actividad tampera, había conformado una fábrica de caseína.³ Durante la década del 30, se ensayaron tentativas industriales en San Justo y Ramos Mejía; ambas localidades contaban con

³ Junta de Estudios Históricos, Geográficos y Estadísticos del Partido de La Matanza, Carta Informativa N° IV, agosto de 2002.

luz eléctrica desde 1911, cuando se aprobó por ordenanza municipal un convenio con la compañía Dock Sud. Además, en 1935, el intendente del distrito adoptó medidas de fomento a la industria, como la liberación del pago de impuestos por el lapso de diez años a todas aquellas plantas que se radicasen en el ejido municipal.⁴ En esa década, la implantación industrial más importante fue la de Good Year (1930); también surgieron empresas menores, como Tejeduría Rivadavia, que fabricaba toallas de hilo y de algodón; Delgado y Rubio, que producía cuerdas y piolines de cáñamo, sisal y manila, y Chissotti Hnos., que elaboraba fernet y grapa.

El 13 de febrero de 1938 se inauguró el primer tramo de pavimentación de la ruta nacional 3, que se extendía hasta el kilómetro 31. Alrededor de esa vía se habían establecido grandes estancias donde invernaba ganado antes de su ingreso a los frigoríficos situados en el barrio de Mataderos (Chiozza, 2000).

El distrito de La Matanza experimentó un intenso crecimiento en el transcurso de la década del 40, de la mano de la instalación de grandes plantas industriales de los rubros automotriz, metalúrgico y textil. Se radicaron firmas tales como Chrysler-Fevre (1946), Mercedes Benz (1952), Borgward (1954), Metalúrgica Santa Rosa (1943) y Textil Oeste (1947). Con los años se sumaron numerosas fábricas, sólo por mencionar unas pocas, se pueden citar las textiles Yute y Danubio, o las metalúrgicas Martín Amato y Yelmo. Además, proliferaron establecimientos menores, como talleres de tornería, fresado, bobinado de motores o fundiciones de hierro.

La implantación industrial motorizó el crecimiento poblacional y urbano de Buenos Aires. Ya en la década del 30, geógrafos como Romualdo Ardissonne o Besio Moreno agregaron al nombre de Buenos Aires el calificativo "Gran", inspirados en el apelativo que se empleaba por aquella época en diferentes partes del mundo para definir a ciudades que crecían integrando suburbios (Chiozza, 2000). A nivel oficial, la categoría *Gran Buenos Aires* se estableció en 1948, cuando se constituyó un ente dependiente del gobierno de la provincia de Buenos Aires para relevar y tratar problemas comunes que afectaban a las urbanizaciones lindantes con Capital Federal. Ese organismo fue disuelto en 1957, pero en términos oficiales se pasó a

⁴ Junta de Estudios Históricos, Geográficos y Estadísticos del Partido de La Matanza, Carta Informativa N° V, diciembre de 2002.

denominar Gran Buenos Aires a la región comprendida por los partidos que rodeaban a la actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que limitaban políticamente con ésta a partir del Riachuelo y la avenida General Paz.

En el caso de La Matanza, en el siglo XIX se fundaron los pueblos de San Justo (1856) y Ramos Mejía (1858). El primero se constituyó en cabecera del distrito y el segundo se erigió sobre el trazado del ramal ferroviario Sarmiento, cuya extensión desde el centro de Buenos Aires se había iniciado en 1857.⁵ Otro conjunto de poblados surgieron a inicios del siglo XX en torno al trayecto del ferrocarril Compañía General de Buenos Aires (Gral. Belgrano). Esa línea férrea unía la estación Buenos Aires (Barracas) con González Catán y se cruzaba con otra que circulaba entre Puente Alsina y Libertad (Merlo). Alrededor de ambas líneas, los emprendimientos inmobiliarios Sociedad de Tierras y Furst Zapiola & Cía. impulsaron loteos que dieron origen a Villa Madero (1907), Tapiales (1902), Gregorio de Laferrere (1912), González Catán (1910), Aldo Bonzi (1911), Isidro Casanova (1911) y Rafael Castillo (1911).⁶

Hasta la década del 40, esos villorrios reunían pocos habitantes, pero de ahí en adelante se produjo la explosión demográfica de La Matanza como parte del movimiento que envolvió al conjunto del Gran Buenos Aires. Se registró un crecimiento poblacional sostenido desde mediados de dicha década, en consonancia con el impulso industrial tanto del distrito como de otros aledaños, que tuvo como una de sus facetas más sobresalientes la atracción de contingentes migratorios de diversas provincias de Argentina. En ese sentido, los datos de los censos nacionales de población y vivienda resultan elocuentes:

⁵ Junta de Estudios Históricos, Geográficos y Estadísticos del Partido de La Matanza, Carta Informativa N° XI, diciembre de 2004.

⁶ Los datos sobre la fundación de cada localidad fueron consultados en Viglione (2000), en el diario *Casanova Hoy*, marzo de 2001, y en la Ordenanza 10022/94 del Honorable Concejo Deliberante del Partido de La Matanza, que designa el día 4 de mayo de 1911 como fecha fundacional de la ciudad de Gregorio de Laferrere.

325,7 Km²

3 DE FEBRERO

CAPITAL FEDERAL

AV. REPUBLICA AV. DIAZ VELEZ PAZ GRAL. AVDA. PAZ GRAL. AVDA.

RAMOS MEJIA
9,81 Km²

LOMAS DEL
MIRADOR
5,50 Km²

CIUDAD E. MADERO
9,51 Km²

LA TABLADA
10,71 Km²

TAPIALES
4,88 Km²

ALDO BONZI
4,94 Km²

SAN JUSTO
15,13 Km²

MORIFRON BUFAÑO (RUTA PROV. N° 4)

VILLA
LUZURIAGA
9,43 Km²

CIUDAD EVITA
16,22 Km²

ISIDRO CASANOVA
19,52 Km²

CARLOS CASARES (RUTA PROV. N° 17)

RAFAEL CASTILLO
14,25 Km²

GREGORIO DE LAFERRERE
23,73 Km²

GONZALEZ CATAN
51,38 Km²

20 DE JUNIO
14,22 Km²

VIRREY DEL PINO
116,52 Km²

MARCOS PAZ

MARCOS PAZ

CAÑUELAS

LOMAS DE ZAMORA

MORON

MERLO

EZEIZA

CAÑUELAS



DON BOSCO

CRISTINA

RODRIGO GALLO

PEDRO LEON GALLO

JOSE IGNACIO RUCCI

CRISTINA

RO MATANZA

RO MATANZA

RO MATANZA

RO MATANZA

RECTIFICACION RO MATANZA

SALCEDO

SAN MARTIN AVDA

DULCEN

PERIBEBE

AÑO DEL CENSO	CANTIDAD DE HABITANTES DE LA MATANZA
1869	3248
1895	4498
1914	17.935
1947	98.471
1960	401.738
1970	657.920
1980	949.566
1991	1.117.319
2001	1.249.958

Como se ve, la población del distrito aumentó considerablemente en el período comprendido entre los censos de 1914 y 1947, pero experimentó un crecimiento exponencial entre 1947 y 1960. Desde inicios de la década del 50, agentes inmobiliarios como Kalmar y Ezcurra remataron extensiones de campo para la formación de loteos populares; tal como pude observar, diferentes barrios llevaban impresos el nombre de esas inmobiliarias en sus arcos de bienvenida. Gregorio de Laferrere, González Catán e Isidro Casanova fueron las localidades que recibieron mayor flujo poblacional y migratorio. Todavía en los años 60, los incipientes barrios se perdían en el extenso campo sobre el que gravitaba el curso del río Matanza y sus afluentes menores. Leti, oriunda de la provincia de Formosa y una de las pobladoras pioneras del barrio San Alfonso, recordaba con congoja los desbordes frecuentes de ese río y, sobre todo, los efectos de una de las mayores inundaciones registradas en el conurbano: la de octubre de 1967. La imagen de un campo lentamente urbanizado apareció en múltiples relatos:

“En esa época, en el 65, 64, había poca gente por acá, porque por acá era todo campo. Todo campo, no había casi nada. El 96 era el único colectivo que andaba por acá” (Don Tevez, 56 años, nacido en Santiago del Estero, habitante del barrio San Alfonso, Isidro Casanova).

Las escenas rurales también marcaron el relato de Adelina, quien había nacido en 1961 en la provincia de Corrientes, y a los cinco años de edad había migrado con su padre y una hermana para radicarse con sus abuelos en un barrio de Gregorio de Laferrere:

“Mi abuelo tenía que ir para el río Matanza a cazar bichos para poder comer. Cazaba una liebre y hacíamos un guiso, y si traía nutria, hacíamos un estofado. Después, mi tío, que era un poquito más grandecito, consiguió trabajo, pero nosotros éramos una familia, éramos muchos nosotros, éramos muchos... y bueno, por eso mucha necesidad. Yo comencé a trabajar a los once años, en Querandíes. ¿Viste que de este lado están unas casitas, para el lado de la ruta 21, donde está toda la arboleda de la rotonda, que hay como un puente, que de este lado están todas las casitas?... Ahí trabajaba en una casa de familia. Me acuerdo que me había llevado a trabajar mi tía, para que yo ya me vaya haciendo y ganando la moneda, que sepa lo que es trabajar. Y bueno, ahí comencé fregando pisos, sacando mugre, bah... Y te explotaban. Después ya fui creciendo y fui valorando la plata. Al principio le traía todo a mi abuela, le daba todo; las monedas que me daban, yo venía y se las daba a ella. Después ya me fui dando cuenta de cuánto era la plata, qué valor tenía, y ahí ya me fui comprando zapatillas; iba a la escuela un poquito más arregladita. Yo con lo que ganaba le compraba cositas a mi hermana, me compraba yo, y una parte le daba a mi abuela para la comida y eso. Y ahí conocí el cine de Laferrere. Había un cine que te llenabas de pulgas, pero bueno, era un cine... Y yo ya tenía quince años, así que yo iba al cine, a escondidas de mi abuela. Le decía: ‘Me voy a trabajar’, que trabajaba hasta el mediodía, a las dos de la tarde abría el cine y hacía la cola ahí para entrar al cine; y a las cinco de la tarde ya tenía que salir corriendo porque me tenía que ir a mi casa” (Adelina, 45 años, nacida en la provincia de Corrientes. Su primer lugar de residencia en La Matanza fue el barrio La Loma, en Gregorio de Laferrere. Actualmente vive en el barrio Santa Emilia, en la misma localidad).

Tal como sucedió en otros distritos del Gran Buenos Aires, la tarea de urbanización conllevó el esfuerzo de los pobladores. Fue así que floreció una trama asociativa en la que se destacaron sociedades de fomento, asociaciones vecinales y clubes sociales y deportivos. De acuerdo con los registros de la ‘Secretaría de Asuntos Comunitarios del partido de La Matanza, sólo unas pocas asociaciones se habían fundado hasta la década del 30: la “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires” (1853) y la “Sociedad de Protección Mutua de La Matanza” (1887), ambas de tipo benéfico; una sociedad de fomento en la localidad de Aldo Bonzi (1917) y el Club Social de Villa Madero (1927).

En cambio, entre 1948 y 1967, con una marcada concentración en el período 1956- 1962⁷ y, en particular, en el año 1958, estallaron sociedades de fomento, asociaciones vecinales y clubes. Al mismo tiempo, se formaron centros de residentes provincianos, tales como "Centro de Residentes Santiagueños de Atamisquimanta", "Centro de Residentes Entrerrianos del Partido de La Matanza", "Centro de Ex Residentes Gallaretenses" y "Centro de Residentes de Bandera Bajada, Santiago del Estero". Esa trama asociativa revestía cierta particularidad en comparación con los registros municipales de las décadas del 80 y el 90, que indicaban la proliferación de *cooperativas* de vivienda o *comisiones* pro luz, pro agua, pro asfalto o pro escrituración.

El crecimiento industrial y el aumento de la población lentamente transformaron a La Matanza en un distrito visible al otro lado de la avenida General Paz. Un indicador de esto fueron los espectáculos de entretenimientos que comenzaron a circular por los clubes de barrio durante los años 50. Ensayos de periodistas locales orientados a la recuperación de la memoria barrial resaltaron las actividades del Club Social y Deportivo de Isidro Casanova; entre ellas, una exhibición de boxeo de Alfredo Prada, contrincante folclórico del púgil José María Gatica, o la actuación en los carnavales de 1954 de una compañía musical popular por aquella época, como lo era "La Mexicanita y sus Chamacos".⁸

Años después, en el decenio comprendido entre 1970 y 1980, la población del distrito creció con contingentes de personas erradicadas de villas de emergencia de Capital Federal como parte de la política represiva implementada por la última dictadura militar.⁹ Según afirmaron investigadores dedicados a esa temática, La Matanza recibió el 21% del total de esa población trasladada (Bellardi y De Paula, 1986).

⁷ García Delgado y Silva (1989) ofrecen un análisis sobre la historia del fomentismo y sobre el curso que adoptó esa forma de organización social frente a diferentes regímenes de gobierno durante el siglo XX.

⁸ Diario *Casanova Hoy*, marzo de 2001.

⁹ Una de las modalidades de la política represiva de la última dictadura militar respecto de las erradicaciones de villas de emergencia ha sido el mecanismo de "traslado propio". Se aducía la "voluntad" del habitante de la villa de trasladarse a su propio terreno y el gobierno de la ciudad se encargaba de transportar sus pertenencias.

Como señalé en la introducción de esta tesis, en varias oportunidades funcionarios municipales, dirigentes sindicales y de organizaciones de desocupados me advirtieron: *"Una cosa es La Matanza por acá (refiriéndose al área cercana al edificio municipal) y otra cosa es cruzando el Camino de Cintura"*. El Camino de Cintura (ruta provincial 4) era una circunvalación que atravesaba diferentes distritos del Gran Buenos Aires y los unía entre sí. En el caso de La Matanza, ese camino delimitaba dos zonas dentro del municipio: una de ellas más próxima al límite con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que la otra comprendía las localidades más alejadas de los centros urbanos. El énfasis puesto en esta delimitación no sólo refería a aspectos geográficos sino también a límites entre condiciones sociales de vida.

Mi propio recorrido por el partido me permitió reconocer esas distinciones, pero también advertí otras dentro de esas dos grandes zonas que demarcaba el Camino de Cintura. En el área más cercana a Capital Federal se situaban las localidades de Ramos Mejía, San Justo, La Tablada, Tapiales, Villa Luzuriaga, Aldo Bonzi y Villa Madero. Alrededor de la plaza central, emplazada en la localidad de San Justo, se erigían el edificio municipal, la Catedral, la primera escuela pública, la central de bomberos y un destacamento policial. A corta distancia de ese perímetro central se hallaban el edificio del Concejo Deliberante, la Universidad Nacional de La Matanza y las dependencias municipales vinculadas con la "cultura".

Los barrios que formaban parte de esa zona contaban con calles pavimentadas, luz eléctrica y agua corriente; sin embargo, estaban lejos de constituir un bloque homogéneo. Entre ellos se distinguía San Justo, por contener el centro político de La Matanza, y Ramos Mejía, debido a sus lujosas viviendas, habitadas por sectores que ostentaban un alto poder adquisitivo. En el trayecto, he observado pancartas que reivindicaban la autonomía de Ramos Mejía respecto del resto de La Matanza. En cambio, en otras localidades que conformaban esa zona despuntaban viviendas modestas intercaladas con ruinas edilicias de antiguos establecimientos fabriles.

Apenas se cruzaba el Camino de Cintura por la ruta 3, es decir, cuando se ingresaba en la "otra Matanza", sintomáticamente, el primero de los edificios municipales que se divisaba era la Secretaría de Acción Social. A unos pocos metros de allí también se levantaban las oficinas de la unidad ejecutora de programas de empleo y el depósito municipal que almacenaba mercaderías que se repartían como parte de programas estatales.

En términos residenciales, esa zona tampoco era homogénea, aunque compartía ciertas características que la diferenciaban de la lindera con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la mayoría de las calles eran de tierra y confluían en torno a dos o tres avenidas pavimentadas por donde circulaba el transporte público, y los barrios carecían de agua potable y gas natural. Pude identificar las urbanizaciones conformadas durante las décadas del 50 y el 60: sus rasgos edilicios se circunscribían a casas bajas, con amplios terrenos y construcciones de ladrillo y cemento. Era prácticamente imposible distinguir ese entramado urbano de aquel que se había formado tras los procesos de ocupación de tierras de la década del 80, y esto despertaba orgullo entre los dirigentes de los *asentamientos*. Al respecto, algunos afirmaban:

"La satisfacción que hoy tenemos, creo que ella y yo, es que yo tengo el boleto de mi terreno que me dice: 'El terreno pertenece a fulano de tal', y cada vecino tiene su boleto de terreno; ésa es una satisfacción. La otra satisfacción complementaria es que está la escuela, la luz... Ella gestionó un jardín, se rompió para lograr un jardín. Otra satisfacción que yo tendría, y creo que ella también, es cuando hagan la agrimensura y ahí se entrega la escritura, y ahí me sentiría realizado. Si ves el barrio que está cruzando la avenida, no sé cuántos años hace que está y no progresó como nosotros progresamos en diez años" (Mauricio y Violeta, dirigentes del asentamiento Tierra Nuestra, formado en 1988).

En mi recorrido también descubrí otras modalidades residenciales, como *los complejos o núcleos habitacionales*. Ciudad Evita se había construido durante el primer gobierno peronista sobre una de las márgenes de la autopista Richieri, punto de unión de la Capital Federal con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El 11 de diciembre de 1947 se sancionó el Decreto 38.973 mediante el cual se concedieron terrenos del partido de La Matanza para la construcción de esa ciudad, y el 28 de

enero de 1948 se produjo la transferencia al Ministerio de Obras Públicas de la Nación de la posesión de los lotes 78, 79, 80 y 89. Con la caída del gobierno peronista, en 1955, el proyecto quedó inconcluso y la ciudad fue rebautizada con el nombre General Belgrano; pero en 1984, la Ordenanza Municipal 7750 le restituyó su denominación original. Aún era posible reconocer las primeras construcciones. Se trataba de casitas similares, muy pintorescas, con techos de tejas y rodeadas de amplios jardines.

Tras la cancelación del proyecto original para la construcción de Ciudad Evita, quedaron extensos terrenos baldíos que a lo largo de los años se convirtieron en destino de emprendimientos inmobiliarios patrocinados por el Instituto Municipal de la Vivienda y la Fuerza Aérea. Durante la dictadura de Onganía (1966-1969), se construyeron *núcleos habitaciones transitorios* con el objetivo de erradicar las villas de emergencia. Esas construcciones se caracterizaban por una serie de edificios de tres pisos encadenados entre sí que, vistos desde fuera, se encontraban sumamente deteriorados. Varios de esos núcleos fueron “tomados” entre 1972 y 1973; tal fue el caso de los complejos Villegas y Los Aromos (Merklen, 1991). De acuerdo con el testimonio de integrantes de la agrupación peronista “Felipe Vallese”, esas tomas se encuadraron en un proceso más global que tuvo lugar durante el breve gobierno de Héctor Cámpora¹⁰ y fueron impulsadas por diversos agrupamientos políticos, entre ellos, Montoneros y el Comando de Organización; este último con fuerte presencia en la zona.

En esa “otra Matanza” también se hallaban las villas de emergencia más populosas del distrito¹¹ (San Petersburgo, Palito, Puerta de Hierro y San Alberto). Las edificaciones eran de ladrillo y cemento, pero a diferencia de los barrios y asentamientos, se erigían sobre sectores no delimitados como terrenos y se comunicaban por estrechos pasajes (pasillos), en lugar de calles.

¹⁰ Como expusieron otras investigaciones (Fernández Alvarez, 2006), en junio de 1973 se desarrollaron ocupaciones de espacios públicos y productivos, que abarcaron fábricas, universidades, escuelas, hospitales, diarios, canales de televisión, organismos públicos y establecimiento privados. Se calcula que se produjeron un total de 2.000 ocupaciones.

La intersección entre la ruta provincial 21 y la nacional 3, a 29 kilómetros del centro de la ciudad de Buenos Aires, marcaba otro límite. Desde ese punto hasta el kilómetro 47 (límite del distrito de La Matanza), los barrios que encontré aún permanecían insertos en extensas áreas rurales y se reconocían por los kilómetros de distancia que los separaban de la ciudad de Buenos Aires antes que por sus nombres.

De acuerdo con los resultados de los últimos censos de población y vivienda, las localidades emplazadas "cruzando" el Camino de Cintura concentraban la mayor parte de la población del distrito:

Localidad	Población censo 1991	Población censo 2001
Aldo Bonzi	13.545	13.478
Ciudad Evita	63.778	68.368
González Catán	154.361	163.815
Gregorio de Laferrere	158.364	177.119
Isidro Casanova	111.071	131.981
La Tablada	83.956	81.558
Rafael Castillo	82.892	100.964
Ramos Mejía	116.923	97.076
San Justo	158.608	109.686
Tapiales	15.002	15.231
Veinte de Junio	410	822
Villa Luzuriaga	69.337	73.681
Villa Madero	67.219	74.309
Virrey del Pino	24.622	90.382

En total, las localidades de Ciudad Evita, González Catán, Gregorio de Laferrere, Isidro Casanova, Rafael Castillo, Veinte de Junio y Virrey del Pino

¹¹ En la actualidad, La Matanza cuenta con un total de 106 villas de emergencia. En la zona más próxima a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también sobresalen ese tipo de urbanizaciones; por ejemplo, las villas Las Antenas y Santos Vega.

sumaban 733.451 pobladores, mientras que las más cercanas a Capital Federal reunían una población de 465.019 habitantes.

En el transcurso de la década del 90, los procesos desencadenados por políticas de orientación neoliberal debilitaron profundamente las bases sobre las que se había asentado desde mediados del siglo XX esa “capital obrera”. Un informe de la Secretaría Municipal de Empleo y Producción sostenía:¹²

“En las décadas del 60 y el 70 del siglo XX todo el distrito vivía un gran apogeo económico y se llegó a contar con 12.000 industrias que hoy se han transformado en unas 4000 con múltiples dificultades para producir”.

Hacia el año 2000, se estimaba que sobre un total de 575.654 personas que formaban la población económicamente activa, el 17,5% eran desocupados abiertos (100.739) y el 15,2%, subocupados (87.499). Asimismo, sobre un total de 470.000 empleados en relación de dependencia, el 39% trabajaba con modalidades de contrato en negro, y entre éstos, el 35% ganaba menos de \$300 y el 50%, menos de \$400; mientras que sobre el conjunto de empleados, el 60% percibía menos de \$520.¹³

En ese contexto signado por profundas transformaciones económicas y sociales, las palabras del concejal Tormo, citadas en la introducción de este capítulo, resonaban como evocación histórica y como proyecto político. Las imágenes movilizadas en su discurso conectaban de manera indisoluble el pasado con el futuro, como se puso en evidencia en otros tramos de su intervención:

“La Matanza de la que quiero hablarles es una Matanza que se nos parezca, la que tenga la abnegación de nuestros docentes, en particular de esos que a pesar de toda su problemática priorizan su vocación, los que caminan muchas cuadras de tierra para trasvasar sus conocimientos y muchas veces de ese salario que disputan compran la cartulina o el cuaderno que no puede llevar algún niño; que tenga la dedicación de nuestros servidores públicos, esos bomberos que le ponen el pecho a todas las llamas; el esfuerzo y la constancia de nuestros trabajadores municipales y del resto de los gremios que conviven armónicamente en el mundo del trabajo, cuyos

¹² Informe del relevamiento de industrias realizado por la Secretaría de Empleo y Producción en el año 2002; p. 5.

¹³ Datos relevados por la Consultora Equis, a cargo de Artemio López. Informe incorporado en los registros del INDEC.

obreros madrugan o trasnochan transpirando día a día para que sus salarios insuficientes motoricen la economía distrital; que tenga las contradicciones motrices de nuestra dirigencia empresarial, gremial, política y social, y la esperanza innegociable de nuestros desocupados, la inocencia de nuestros niños, la picardía de nuestros jóvenes, la sabiduría de nuestros ancianos (...). Quiero hablar de La Matanza superadora, de aquella que fuera cuna de industrias; una Matanza llena de chimeneas y de chimeneas que no contaminen. Quiero hablar de La Matanza traccionadora, que impulse, engancho a los 133 distritos de la provincia de Buenos Aires y a las veintidós provincias restantes, como el tren de las nubes, para llevar a La Argentina toda al cielo de la prosperidad”.

Las principales imágenes evocadas se relacionaban con el mundo del trabajo: los trabajadores (docentes, obreros, bomberos y empleados), la dirigencia empresarial, política y social, y los desocupados. A cada uno de los actores mencionados se le reconocía cualidades tales como el esfuerzo, la dedicación y la esperanza; pero, fundamentalmente, se instaba a un proyecto de desarrollo industrial que contuviera la disputa por el salario justo en el marco de relaciones armónicas entre los sectores integrantes del mundo del trabajo. La ligazón entre La Matanza y el mundo del trabajo fijaba sentidos en un espacio de lucha política orientado hacia la construcción de un “proyecto nacional” capaz de reservar al distrito un sitio dominante para el impulso de la prosperidad del país.

En la página web del gobierno municipal¹⁴ se definía al distrito apelando a imágenes que retrataban los efectos de las transformaciones de los 90:

“Hoy, La Matanza es un municipio multifacético en el que conviven los barrios residenciales y los de emergencia (que se convirtieron en permanentes), una Universidad Nacional y extensos bolsones de marginalidad cultural, empresas que siguen fabricando productos de alta tecnología y profesionales, técnicos y obreros que ofrecen inútilmente los saberes aprendidos a lo largo de la vida. En cada una de estas diferentes caras está intacta la esperanza y la capacidad de encontrar, otra vez, los lazos que unan la vida de La Matanza con un proyecto de Nación que ofrezca un lugar para todos”.

El contraste entre las imágenes tenía como propósito acentuar las contradicciones urbanas, sociales y laborales vinculadas con las experiencias que atravesó el distrito durante la década del 90 y que lo convirtieron en un “municipio

¹⁴ El espacio en Internet del municipio es www.lamatanza.gov.ar.

multifacético". Al igual que en el discurso del concejal Tormo, se afirmaba que esas contradicciones se superarían por obra de la conexión de La Matanza con un "proyecto nacional" de inclusión social.

En el año 1999, se sancionó la ordenanza para la creación de *la Junta de Estudios Históricos, Geográficos y Estadísticos del Partido de La Matanza*, cuya misión sería "rescatar y conservar los orígenes para forjar la identidad y fortalecer el sentido de pertenencia". Los trabajos de difusión elaborados por esa Junta – distribuidos en organismos públicos, establecimientos educativos y museos del partido– sistematizaban sentidos que aparecían de un modo fragmentario en otros espacios, como en los discursos de concejales y autoridades municipales, en ordenanzas gubernamentales o en intervenciones discursivas de los dirigentes de las organizaciones de desocupados del distrito.

Me interesa destacar que la creación de ese organismo especializado reforzaba un movimiento general de recuperación del pasado desde un contexto signado por los efectos inequívocos de la desindustrialización y el desempleo, donde poco de la *capital obrera* de antaño quedaba en pie. Como se verá, los contenidos recuperados contribuían a fundamentar prácticas y articulaciones políticas.

LA MATANZA Y EL PERONISMO: INDICIOS DE LOS ALINEAMIENTOS POLÍTICOS DE LOS 90

El 10 de diciembre de 2003 asumió el segundo mandato como intendente de La Matanza el Dr. Alberto Balestrini. En el discurso que pronunció en esa oportunidad, enfatizó:

"Quiero dar mi emocionada gratitud a los vecinos que, con su voto, ratificaron su confianza en nuestra tarea de gobierno y nos dieron mandato para continuarla y profundizarla en lo porvenir. Quiero recordar que triunfamos en todas las localidades y ciudades de La Matanza. Ganamos en todas y cada una de las mesas electorales. Los matanceros no guardamos memoria de un acontecimiento igual. Emociona lo ocurrido porque gran parte de los que nos han votado viven mal, algunos muy mal. Centenares de miles de nuestros vecinos no tienen pavimento frente a sus casas, ni agua corriente, ni cloaca, ni vivienda. Decenas y decenas de miles no tienen trabajo, otros tantos están subocupados. El sesenta por ciento está por debajo del nivel de

pobreza, miles sufren inundaciones, por la falta de las obras muchas veces proyectadas y nunca ejecutadas”.

En el fragmento seleccionado se menciona el triunfo del Partido Justicialista en todas las mesas electorales en los comicios de autoridades municipales del año 2003. La relevancia de ese suceso debe entenderse a la luz de los acontecimientos políticos ocurridos durante la década del 90 en el distrito. En la noche del 24 de octubre de 1999, en una escena casi fellinesca, la conductora televisiva Lidia Satragno, conocida como Pinky, se proclamaba sobre un palco montado en la plaza de San Justo como nueva intendenta de La Matanza, electa por la coalición Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación. Quince minutos después, descendía las escaleras del escenario tras las noticias que daban la victoria al candidato del Partido Justicialista, Alberto Balestrini. Al margen del sainete, en esa oportunidad el Partido Justicialista triunfó con un margen estrecho de cinco puntos frente a la Alianza. Esos resultados se plasmaron en la composición del Concejo Deliberante, que quedó dividido proporcionalmente entre representantes del Frepaso y la Unión Cívica Radical –ambos integrantes de la mencionada coalición– y del Partido Justicialista.

En el caso de La Matanza, la fuerza más activa dentro de la Alianza era el Frepaso, que reunía a integrantes del Frente Grande, de extracción peronista, y, en menor medida, a grupos que habían migrado de las filas del Partido Comunista. Los orígenes del Frente Grande del distrito se vinculaban estrechamente con los avatares del propio peronismo. A continuación, cito en extenso uno de los pasajes de la entrevista que mantuve con Eduardo, que expresa el recorrido de esa fuerza política a nivel local durante los años 90:

“Nuestro campo de militancia había sido más sindical; nunca militamos en La Matanza desde otro lugar. Bueno, con el menemismo, nosotros nos enteramos una semana antes que asumiera Menem cómo venía la mano. Fuimos al final de campaña que fue en Laferrere y era una cosa impresionante de ver tanto pueblo; pero nos llama una semana antes un muchacho que trabajaba en el Senado y nos dice: ‘Muchachos, en la isla Martín García estuvo Menem, Mera Figueroa y los Capitanes de la Industria, y arreglaron todo cómo van a manejar la economía’. Bueno, ahí empieza un proceso ligado a una búsqueda política que tuvo una cuestión sindical con la creación de la CTA –nosotros nos vamos de la CGT– y una cuestión política previa a la conformación del Frente Grande. Ahí tuvimos un

protagonismo importante en una agrupación que se llamaba La Corriente. Yo fui concejal en La Matanza. Había grupos primarios que estaban militando acá en lo que fue el Frente Grande; por ejemplo, unos chicos que están en Catán estaban con el Encuentro Popular, de Brunati. Éramos pequeños grupitos que decidimos encontramos en esta construcción. Me acuerdo que la primera reunión fue en el sindicato de fibrocemento, con la elección de Pino, que habíamos sacado un diputado en la provincia; y a partir de ahí fue un proceso de construcción. Nos favoreció mucho una hegemonía muy grande del pierrismo y el radicalismo como única oposición, seudooposición; con una metodología muy particular el pierrismo, acá estaba Cozzí con una cosa muy cerrada, muy ligada la cuestión de manejos económicos... O sea que se abría un espacio, sobre todo después del pacto de Menem con Alfonsín por la reforma. Ahí aparecemos de la nada. En realidad, éramos veinte tipos. Nosotros dijimos: 'Primero vamos a buscar a Bayón'. La gente que había quedado con él era muy poquita, nosotros a él lo habíamos ayudado mucho cuando fue candidato a intendente en La Matanza en la lista de Ubaldini. Nos ayudó el crecimiento del Chacho Álvarez, cuando se incorporó Luis D'Elía lo fuimos a buscar al Chacho y fue a un acto en El Campo; o sea, se constituyó un espacio político muy grande, muy importante, a leguas, a años luz de lo que es la estructura del Partido Justicialista. Con todo el problema interno del pierrismo en La Matanza, prácticamente llegamos a tener un bloque de siete concejales del Frente, cinco radicales y dos del Partido Justicialista. Previo a eso, al 95, hubo una elección de constituyentes en el 94, y en ese momento el Frente Grande era el PC, grupitos del peronismo, nosotros... Me acuerdo que era cómico porque se acercaba la constitución de las listas de constituyentes y nadie hablaba nada. Yo digo: 'Muchachos, va a haber una elección de constituyentes, ¿nadie quiere ser candidato?'. Nadie creía que íbamos a sacar algún voto. Ahí conocí a Sigal, al flaco Rodil, Mosquera, o sea, a los representantes de los distintos espacios políticos que constituyen el Frente. Yo fui segundo y fui electo constituyente. Ése fue el primer espacio institucional que nos ayudó a desarrollar en política; y ahí empezamos tres y cuatro concejales hasta que llegamos a siete, hasta que llegamos prácticamente en el 99 a la posibilidad de ganar en La Matanza, y por distintas posturas nos enfrentamos con el gallego Bayón y con Luis. Terminamos enfrentados y ellos trajeron a Pinky. Lo de Pinky fue una estupidez absoluta. O sea que nos debe mucho Balestrini... Yo cada vez que lo veo le digo: '¡Nos debes mucho!'. Y él reconoce la deuda, no es ningún tonto, es un tipo interesante. Bueno, después de seis años, el Partido Justicialista tiene veinticuatro concejales, el gallego Bayón es secretario de Obras Públicas y el viejo Barber, que era el secretario general del PC de La Matanza, está trabajando en la Municipalidad. Pero fue un proceso político muy interesante, con muchos errores, pero no deja de ser interesante, ¿no?' (Eduardo, 55 años, sindicalista del gremio docente, ex concejal de La Matanza por el Frente Grande).

Los militantes peronistas que confluyeron en el espacio Frente Grande compartían la percepción de la administración menemista como la antítesis del

proyecto histórico del peronismo.¹⁵ A nivel nacional, esa fuerza política se articuló en torno a pocas figuras con notoria presencia en los medios masivos de comunicación, así como también a partir de comicios legislativos desde 1993. En 1994 se constituyó como partido político; en 1995 impulsó la fundación del Frepaso, y en 1997, junto con la Unión Cívica Radical, conformó la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación (Abal Medina h., 1998).

Los integrantes del Frente Grande de La Matanza eran fundamentalmente sindicalistas de los gremios docente y estatal, y, en menor medida, dirigentes políticos vinculados al ámbito barrial. Un eje de acción se ordenó en función de la crítica y la oposición al gobierno nacional de Carlos Menem:

"Prometieron salarizado y tenés que vivir del mangazo; prometieron revolución productiva y tenés que ir a robar gallinas; nos prometieron vivir en el primer mundo, y cada vez son más los vagabundos; nos prometieron honestidad y justicia, y aumentaron la corrupción y la codicia; nos prometieron estabilidad y hoy el mango no nos alcanza ni por casualidad; nos prometieron educación y no hay para comprar un borrador. AL ENGAÑO Y LA MENTIRA EL PUEBLO LOS VA A PASAR POR ENCIMA" (Volante firmado por la Agrupación Peronista Felipe Vallese en el Frente Grande, s/f).

Como puso de relieve el testimonio de Eduardo, se procuró dotar a esa fuerza política de una "estructura organizativa y territorial". Ese intento se consumó de manera simultánea con la estrategia sindical de la CTA —analizada en el capítulo II— tendiente a la construcción de un "nuevo modelo sindical" inserto dentro de un movimiento político y social. La conjunción de ambas iniciativas se expresó en la conformación de la Red de Barrios en 1995:

"Después se dio un proceso de crecimiento con un grupito muy pequeño de compañeros que venían del peronismo, que nos ayudaban de alguna forma a armar

¹⁵ La historia de los orígenes del Frente Grande reconoce como hito fundacional las acciones de un grupo de diputados que, aunque provenientes del peronismo, comenzaron a votar con criterios autónomos respecto de los que fijaba el bloque justicialista en la Cámara de Diputados de la Nación. El grupo, denominado "Grupo de los Ocho", votó en contra de la privatización de los ferrocarriles y del proyecto del Ejecutivo tendiente a ampliar el número de representantes en la Corte Suprema de Justicia. En junio de 1990, ese núcleo de legisladores convocó a un encuentro de la militancia peronista en oposición a la política de Menem bajo la consigna "Peronismo o Liberalismo: para recuperar el verdadero peronismo". Entre los convocantes se encontraban Carlos Álvarez, Germán Abdala, Juan Pablo Cafiero, Luis Brunati y Darío Alessandro (Abal Medina h., 1998).

zonas. Nunca llegamos a tener una estructura territorial, nunca al nivel del PJ. El gordo D'Elía aportó un espacio, en El Campo, otro poquito por allá en Virrey del Pino, pero ni por las tapas lo que es hoy la FTV. El gordo tenía ochocientos votos. Éramos un grupo muy chiquito, pero con política, y con un desgaste muy grande de Cozzi y el pierrismo que nos hacía crecer. Después hubo todo un proceso muy grande ligado a las obras de gas, agua, cloacas, asfaltos, que se dio en toda una franja de la clase media y de las personas más postergadas. Los muchachos del secretario de Obras Públicas de ese momento habían montado una industria de la obra pública, donde se hacían fortunas a costa de la gente. Entonces se abrió un espacio de mucha lucha y era un espacio ganable, porque te imaginás que yo, que era concejal y les decía que los estaban cagando y cómo había que hacer para que no los caguen, en una asamblea ganaba. Nos abrió un espacio muy grande para hacer política, y ahí armamos muchos barrios, entre el 95 y el 99" (Eduardo, 55 años, sindicalista del gremio docente, ex concejal de La Matanza por el Frente Grande).

El "armado zonal" del Frente Grande se apoyó sobre organizaciones que integraron la Red de Barrios y posteriormente la FTV (sociedades de fomento, cooperativas y mutuales). Al mismo tiempo, la iniciativa política centrada en la demanda de obras públicas municipales expandió el alcance de la Red hacia otros barrios, varios de ellos situados en las localidades de Isidro Casanova y Ciudad Evita. En este contexto, los legajos de la Secretaría de Asuntos Comunitarios del distrito registraron el reconocimiento de doce comisiones del área de Isidro Casanova durante el año 1994, cuyas denominaciones se identificaban con el reclamo que impulsaban: "Comisión pro pavimento del barrio X", "Comisión pro asfalto del barrio Y", "Comisión pro agua y energía del barrio Z", entre otras.

Los desplazamientos entre distintas vertientes del Partido Justicialista durante la década del 90 fueron otro elemento que potenció la consolidación del Frente Grande en el distrito:

"Acá estaba Federico Russo, un personaje maravilloso en la política, un loco de la guerra, muy simpático, con una visión muy local, como Manolo Quindimil, pero sin el vuelo de Manolo. Muy simpático, un caudillo muy local, sin visión política nacional o provincial, que terminó agotado en lo que fue todo el reparto local de espacios. Hubo una elección interna donde casi le gana a Pierri y después le entregó prácticamente el municipio a Pierri, que ya venía como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Eso le daba un espacio nacional, mucha guita. Federico era cafetero en la Municipalidad y terminó siendo intendente; pero una cosa muy local, muy tribal, muy primaria, muy movimientista del peronismo, pero de los 40. Con Pierri se impuso una visión política muy cerrada, muy de los 90, del menemismo. Hicieron cosas terribles;

por ejemplo, una locura, una ordenanza que decía que por una cuestión estética no podía haber más de un canal de cable en La Matanza. Era una maquinaria ligada a hacer guita en obras públicas, pero abrió un espacio político en La Matanza donde pequeños grupos fuimos capaces de juntarnos y de articular una política” (Eduardo, 55 años, sindicalista del gremio docente, ex concejal de La Matanza por el Frente Grande).

Federico Russo fue un militante histórico del peronismo local que gobernó La Matanza entre 1983 y 1991. En varios testimonios, su figura aparecía asociada a innumerables anécdotas que denotaban simpatía y humildad, y sobre todo se resaltaba su compromiso con el “peronismo del 40” y la “Resistencia Peronista”. Russo fue desplazado en 1991 por otra vertiente del Partido Justicialista local liderada por Alberto Pierri, que contaba con el apoyo de antiguos militantes de Montoneros. Pierri era el accionista principal de una de las empresas papeleras más importantes de Argentina, radicada en La Matanza. En 1985 se incorporó a las filas del Peronismo Renovador, que proclamaba la candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires de Antonio Cafiero. En esa instancia, obtuvo un escaño en el Parlamento nacional, y durante el gobierno nacional de Carlos Menem se convirtió en Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Desde ese cargo tuvo una marcada preponderancia en la definición de los asuntos del gobierno local; por ejemplo, el contador de su empresa, Héctor Cozzi, ejerció el cargo de intendente de La Matanza entre 1991 y 1999. En las elecciones internas para definir candidatos de cara a los comicios de octubre de 1999, el *pierrismo* –término coloquial con el que se aludía a ese sector– fue derrotado por la lista encabezada por Alberto Balestrini. Los alineamientos se fundamentaban en la evocación del “verdadero peronismo”; así lo expresaba un comunicado difundido en septiembre de 1999 por una agrupación sindical papelerera:

“El peronismo rescató al hombre y lo dignificó, dotándolo de leyes para que el poder del capital (como Pierri) no se abusara de ellos, le permitió el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda propia, al trabajo, a la igualdad de oportunidades, en fin, a una vida digna, lo hizo crecer espiritualmente y en una conciencia solidaria. Está probado que Pierri no conoció nada de esto, porque hace todo lo contrario. Ahora que perdió en manos de PERONISTAS el manejo de La Matanza, procura imponer a sus secuaces para manejar la Intendencia. LLAMAMOS A TODOS LOS

TRABAJADORES Y VECINOS A NO DEJARSE ENGAÑAR MAS POR ESTOS SEUDOS JUSTICIALISTAS. ESTAS AVES DE RAPIÑA, QUE SOLO PRETENDEN HACER NEGOCIOS PARA ELLOS. POR NUESTRA DIGNIDAD NO DEBEMOS APOYARLOS. TODOS A VOTAR CONTRA ELLOS" (Agrupación Papelera "3 de abril", septiembre de 1999).

Hacia fines de la década del 90, el Partido Justicialista evidenciaba signos de debilitamiento debido a las pujas entre sectores internos. Por su parte, el Frente Grande, integrado en su mayoría por militantes de extracción peronista, había logrado consolidarse en el Concejo Deliberante y se hallaba fuertemente asociado a la CTA y a la FTV.

Los desplazamientos y alineamientos de esos años activaron, en los inicios del siglo XXI, la producción de imágenes del pasado y la recuperación de tradiciones relativas a la conexión histórica del distrito de La Matanza con el peronismo. Los principales núcleos de sentido se organizaban en torno a la defensa de Perón en 1955 y a la "Resistencia Peronista" antes que a la jornada mítica del "17 de Octubre de 1945".

Desde circuitos especializados en la recuperación del pasado, como la Junta de Estudios Históricos, Geográficos y Estadísticos del Partido de La Matanza, se produjeron documentos que afirmaban:

"El pasado 16 de junio se cumplieron 50 años de un suceso que ha sido 'ignorado' por la historiografía de nuestro país, prácticamente hasta ahora: el bombardeo del día 16, con la consecuente secuela de muertos y heridos entre civiles inocentes. En un intento de golpe de estado se dio, en aquella jornada, un intenso bombardeo, protagonizado por aviones e infantería de la marina y la fuerza aérea, sobre la Plaza de Mayo y otros lugares alejados de la casa de gobierno, como por ejemplo cuando después de bombardear el Tres de Infantería en Tablada, sobre la Avenida Crovara, y frente a la fábrica de Jabón Federal, se ametralló a una columna de obreros, dando muerte a Armando Fernández, cuyos restos descansan en el cementerio de San Justo, e hirieron a otros".¹⁶

Con estos relatos se procuraba poner en conexión la historia local con la nacional; pero, más allá de la validez historiográfica de los sucesos puestos al

¹⁶ Junta de Estudios Históricos, Geográficos y Estadísticos del Partido de La Matanza, Carta Informativa N° XIII, agosto de 2005; pp. 1-2.

descubierto, aquí interesa destacar la referencia a las “columnas de obreros” y sus mártires ocupando las calles para apoyar al gobierno de Perón. Junto con la producción documental, se organizaron talleres de historia oral sobre la “Resistencia Peronista”, con el objetivo de recuperar “acciones cotidianas”. Los expositores de esos talleres exhibieron objetos, entre ellos, copas de los campamentos infantiles “Evita”, y relataron las peripecias vividas para salvaguardarlos, como la construcción de escondites en tanques de agua o entre tirantes de techos de chapa. En otros espacios estatales también se rindió tributo a figuras locales asociadas con la “Resistencia Peronista”, como Magín del Carmen Guzmán, homenajeado por el concejal Ramos en una sesión del Honorable Concejo Deliberante en mayo de 2004:

“Hoy, compañeros, vecinos y periodistas presentes, no voy a evocar ninguna gesta, no me voy a referir a ningún prócer, simplemente voy a pretender detener con mis palabras el tiempo para hablar de un compañero que hizo de su vida una eterna lucha en defensa de la causa y del hombre que la representaba. El golpe militar del 16 de septiembre de 1955 lo sobresalta de la cama en la cual se hallaba convaleciente. Desde ese mismo lugar toma contacto con hombres de la Policía Federal cercanos a sectores del Ejército que respondían a los generales Valle y Tanco.

Con este preámbulo, empiezo a dar los perfiles de este compañero que adopta la palabra ‘resistencia’ como leitmotiv de vida. Junto con otros héroes anónimos, este joven de treinta y dos años comienza a captar compañeros, sumándolos al complot que finalizaría con el levantamiento del 9 de junio de 1956. Ese intento de retomar el poder para el pueblo fracasa; la dictadura de la Revolución Libertadora estaba al tanto de la conspiración. Ese mismo día en la casa de Beto Almada, mientras aguardaban órdenes, este hombre de la resistencia es detenido y trasladado junto a otros compañeros a la regional San Martín (...). Fue condenado a seis años de prisión y amnistiado por el gobierno de Arturo Frondizi (...). Ya en 1958 se produce la recuperación de la mayoría de los sindicatos, nacen las 62 organizaciones, en oposición a los treinta y dos gremios democráticos. Se recupera la Confederación General del Trabajo, los obreros en las fábricas se organizan e imponen, en definitiva, el único camino a seguir: la resistencia. A esta resistencia obrera liderada por dirigentes como Di Pascuale, de farmacéuticos; Sebastián Borro, de la carne; Lorenzo Pepe, de ferrocarriles, y otros tantos dirigentes de la línea dura, se suman los compañeros que acaban de salir de la cárcel. Por supuesto, ahí estaba nuestro hombre. Es la época del caño, del sabotaje, de jugarse la vida a cada instante. No duda, y junto con Claudio Adiego Francia y muchos compañeros más conforma un equipo de acción, que su labor más recordada fue la participación activa en la huelga del frigorífico Lisandro de La Torre (...).

Compañero presidente, este compañero peronista matancero se llamaba Magín del Carmen Guzmán. Magín del Carmen Guzmán irremediabilmente rebelde,

irremediablemente honesto, irremediablemente peronista (...). Compañero presidente, era de los hombres que no querían acceder a ningún cargo público, pues decía que la burocracia administrativa o legislativa retrasaba la acción; era un genuino movimientista. Dicen que la única causa que se pierde es aquella que se abandona. No fue tu caso; por ello, gracias, compañero Magín del Carmen Guzmán, sinónimo de perseverancia, por vos y por otros tantos compañeros de la resistencia, los peronistas en este recinto presente pueden seguir llevando los nombres de Perón y Evita como banderas a la victoria y poder seguir defendiendo un solo interés: el del pueblo”.

Retomando el análisis histórico presentado es posible proponer que las maneras de evocar la irrupción de los pobladores y obreros de La Matanza en el proceso denominado “Resistencia Peronista” pueden relacionarse con las características de la industrialización y el crecimiento poblacional del distrito. Como han sostenido investigadores del tema, las crónicas de observadores de la jornada del “17 de Octubre de 1945” daban cuenta del avance de manifestantes de la zona sur del Gran Buenos Aires: Avellaneda, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Valentín Alsina, Piñeyro, Quilmes y Bernal (James, 1995). Estudios historiográficos también dieron cuenta de la dinámica que cobró la participación en esos sucesos de los obreros de la carne de Berisso, con quienes Perón había mantenido una estrecha relación desde 1943, en particular con el incipiente Sindicato Autónomo de la Industria de la Carne y con el líder gremial Cipriano Reyes (James, 1996; Lobato, 2004). La zona sur, como señalé en el apartado anterior, fue la pionera en el itinerario geográfico de la implantación industrial en el Gran Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XX; por lo tanto, fueron esos distritos y esos obreros los que protagonizaron de forma contundente la jornada fundante del peronismo. En cambio, los municipios situados tras el límite con la avenida General Paz, como La Matanza, cobraron impulso industrial y obrero bajo los gobiernos peronistas. De modo que la irrupción de La Matanza en las principales páginas de la historia del peronismo se produjo luego de 1955, y justamente en conexión con el proceso de la “Resistencia Peronista”.

En síntesis, las diferentes versiones locales que remiten a los orígenes peronistas acentúan la resistencia, la lucha y el movimiento. En uno de los textos citados, se recuperaba la resistencia y la lucha de los obreros frente al bombardeo

aéreo del 16 de junio de 1955 cuando las fuerzas armadas intentaron derrocar a Perón del gobierno. En el otro, se seguía el itinerario de una figura “matancera” ligada a la “Resistencia Peronista” para resaltar el coraje, el heroísmo, la lucha, la abnegación y el compromiso con la “causa del pueblo”. El conjunto de esas evocaciones se desplegaron tras una década de profundos desplazamientos en el espacio político identificado con el peronismo tanto a nivel nacional como local.

CAPITAL NACIONAL DEL PIQUETE: ARTICULACIONES NACIONALES Y LOCALES

La primera semana de agosto de 2002, trescientos manifestantes pertenecientes a la CCC, la FTV, ATE y SUTEBA caminaron uniendo el conurbano bonaerense desde Tigre hasta La Plata en la marcha “*Por escuelas, por hospitales y por trabajo*”. Miles de personas aguardaban a la vera de la ruta nacional 3 el arribo de los caminantes. Cuando comenzaron a divisarse las columnas, desde el camión que abría paso a esas hileras humanas, Alfredo, dirigente de la CCC, arengaba: “*Un fuerte aplauso a los compañeros caminantes. Bienvenidos. Bienvenidos a La Matanza, Capital Nacional del Piquete*”.

El calificativo de La Matanza como *Capital Nacional del Piquete* se ponía de manifiesto en distintos eventos en los que participaban organizaciones de desocupados, así como también en reportes de la prensa local. Ese apelativo fue el resultado de una serie de tentativas orientadas a la construcción de un movimiento nacional de desocupados.

El 24 de julio de 2001, dos meses después del piquete que se prolongó durante dieciocho días sobre la ruta nacional 3, se celebró en La Matanza la “Asamblea Nacional de Organizaciones Sociales, Territoriales y de Desocupados”. El evento fue convocado por los líderes de la CCC y la FTV, quienes también actuaron como anfitriones de las delegaciones que provenían de diferentes puntos de Argentina. El encuentro tuvo lugar en el gimnasio de la iglesia Sagrado Corazón, situada en uno de los bordes del Camino de Cintura, en la localidad de Villa Luzuriaga, y cuyos sacerdotes pertenecían a la Orden Salesiana. En el recinto

flameaban banderas con siglas de organizaciones que representaban a la mayoría de las provincias –excepto Tierra del Fuego, San Luis, La Rioja, Catamarca, La Pampa y Chubut– y a una cantidad de distritos del Gran Buenos Aires. Algunas insignias llevaban inscriptas consignas tales como *“Libertad a Barraza, Rainieri y Gil, piqueteros de Salta”*. De una extensa bandera con los colores celeste y blanco, que cubría la parte trasera del escenario, sobresalía el nombre del encuentro y la leyenda: *“Si no sabemos vivir todos juntos como hermanos pereceremos todos juntos como idiotas. Martin Luther King.”*¹⁷

La simbología desplegada y la leyenda unida al nombre del evento reforzaban las intenciones de articular un espacio nacional de oposición al gobierno a partir de la “unidad” entre los múltiples proyectos políticos e ideológicos que se procesaban en las organizaciones de desocupados.

En el acto de apertura, luego de entonar las estrofas del himno nacional argentino, uno de los dos locutores vivaba desde el palco: *“Bienvenidos. Bienvenidos a La Matanza, tierra de don Juan Manuel de Rosas, héroe del interés nacional”*, y el otro agregaba: *“Bienvenidos a La Matanza, tierra de las coordinadoras de fábrica de los 70”*. Tras esa recepción, el líder de los desocupados de la CCC pronunció enfáticamente:

“Aquí está naciendo el movimiento de desocupados nacional; aquí está la unidad de las organizaciones de desocupados. Juntos, con el movimiento obrero y respetando a todas las organizaciones, seguiremos recorriendo el camino de la lucha”.

Ese encuentro cobró centralidad para definir a La Matanza como cuna del movimiento nacional de desocupados. También se intentó inscribir ese nacimiento en orientaciones políticas diferenciadas que convivían tensamente en las organizaciones de desocupados del distrito, como la tradición nacional expresada en el proyecto rosista y aquella que recuperaba la acción autónoma del movimiento

¹⁷ Martin Luther King fue un pastor baptista estadounidense, nacido en el año 1929. Se convirtió en un impulsor de los derechos civiles de la población negra y un militante activo contra la segregación social y racial. Inspirado en la figura de Mahatma Gandhi propuso el uso de métodos pacíficos en la lucha y tomó de la teoría de Henry Thoreau el método de la desobediencia civil. A mediados de los 50 organizó un boicot a las compañías de autobuses, que se prolongó durante un año, y en el verano de 1963 protagonizó la marcha sobre Washington. Recibió el premio Nobel de La Paz en 1964 y fue asesinado en 1968 en el estado de Memphis.

obrero plasmada en la formación de coordinadoras fabriles en el año 1975¹⁸. Algunas voces contestaron la pretensión de convertir a La Matanza en cuna del movimiento de desocupados; a media mañana, ascendió al palco el padre de Teresa Rodríguez, quien, emocionado al recordar a su hija asesinada por la gendarmería en un piquete de Cutral-Co en 1997, afirmó: *“Acá está Cutral-Co, porque el primer piquete se hizo en Cutral-Co”*.

En esa asamblea se votaron consignas y un programa de acción a ejecutarse de manera sincronizada a lo largo del país:

“-Realizar cortes progresivos en las principales 50 rutas del país a partir del martes próximo, 31 de julio, y de 48 y 72 horas para los martes siguientes.

- Reclamar la liberación de los presos sociales.

- Rechazar el plan de ajuste del gobierno nacional, adoptado para lograr el déficit cero.

-La conservación de todos los planes ‘Trabajar’, y la adjudicación de nuevos planes para los jefes y jefas de familia desocupados”.¹⁹

El gobierno nacional intervino aduciendo la ilegalidad de los cincuenta cortes de ruta y calles programados:

“Aunque la realidad no da tregua, en la Casa Rosada evalúan que el gobierno ha dejado de correr detrás de los acontecimientos y está haciendo ‘todo el esfuerzo posible para que los cortes programados para hoy no produzcan daño’. Lo muestra la denuncia presentada ayer por el secretario de Seguridad, Enrique Mathov, al juez federal Jorge Ballesteros: ahí se dice que los piquetes pretenden ‘alterar gravemente el orden público y afectar el derecho de miles de personas’ y se habla de la eventual ‘comisión de diversos delitos –que abarcan hasta atentados al orden constitucional y a la vida democrática– establecidos en el Código Penal”.²⁰

¹⁸ Estas coordinadoras se consolidaron en el proceso de movilización intensificado entre junio y julio de 1975 en oposición a las medidas tomadas por el ministro de Economía Celestino Rodrigo. También se opusieron a la conducción de la CGT y a la alianza de esa entidad obrera con el gobierno de Isabel Perón. Se formaron coordinadoras en Capital Federal y en la zona sur, norte y oeste del Gran Buenos Aires. Su eje consistía en fomentar la democracia interna en las fábricas a partir de decisiones tomadas en asambleas. La cabecera de la coordinadora oeste se hallaba en La Matanza, sostenida fundamentalmente por delegados de empresas como Martín Amato, Santa Rosa y Mercedes Benz (Colom y Salomone, 1998).

¹⁹ *Documentos del Conflicto. Observatorio Social de América Latina*, septiembre de 2001.

²⁰ *Diario Clarín*, 31/7/01; p. 8.

Desde el gobierno nacional se procuró encuadrar los cortes de ruta dentro de las figuras delictivas previstas en el Código Penal.²¹ Se citó a los líderes de las organizaciones de desocupados de La Matanza a una reunión con la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, y el viceministro del Interior, Lautaro García Batallán, por medio de un telegrama que aseveraba: *"Como es de público conocimiento se decidieron actos sediciosos"*.²²

Dos aspectos de ese proceso se deben destacar: primero, como ya he señalado, la disputa trabada en torno a la legalidad de las medidas de protesta; segundo, el reconocimiento estatal de los líderes de las organizaciones de desocupados de La Matanza en tanto representantes de un movimiento nacional aún en ciernes.

Los cincuenta bloqueos de rutas y calles intensificaron la presencia de los medios masivos de comunicación en aquellos piquetes considerados como puntos álgidos del conflicto. En las crónicas se definió como epicentro de la protesta nacional el corte de ruta de La Matanza:

"El epicentro de la protesta se ubicará frente al hospital Paroissien de La Matanza, en el kilómetro 21 de la ruta 3".²³

Por su parte, los medios de comunicación del ámbito local acentuaron el lugar central que le cabía a La Matanza en esa acción nacional:

"El partido de La Matanza será hoy una vez más la capital argentina del piquete cuando, desde las 10. 00 horas, el combativo Juan Carlos Alderete y el concejal Luis D'Elía lideren el segundo corte de la ruta nacional 3 contra el ajuste implementado por el gobierno nacional".²⁴

²¹ El Código Penal estipula la prisión de tres meses a dos años para quien "impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua y aire". Otros delitos previstos por el Código y plausibles de ser aplicados en estos casos son el de "sedición", que prevé una pena de entre uno y seis años de cárcel para quienes "se alcen en armas para arrancar una medida o concesión de los poderes públicos", y el de "intimidación pública", que castiga con tres a seis años de cárcel al que "incite a la violencia contra instituciones". Finalmente, la acusación más grave que se puede aplicar es la de "asociación ilícita", que pena con prisión de entre tres y diez años a quien arme una banda para delinquir.

²² Diario *Clarín*, 26/7/01; p. 9.

²³ Diario *Clarín*, 31/7/01; p. 8.

²⁴ Diario *NCO*, 8/08/01; p. 4.

En el piquete de La Matanza se centralizó la información sobre los cortes de ruta de todo el país y los dirigentes fueron los encargados de organizar conferencias de prensa diarias. Para los funcionarios del Estado nacional y para los medios masivos de comunicación, los dirigentes de las organizaciones de desocupados del distrito se convirtieron en los virtuales “conductores” de un movimiento nacional de desocupados y La Matanza fue reconocida como “Capital Nacional del Piquete”.

Ese reconocimiento era activado en diferentes contextos de relaciones sociales. El semanario del Partido Comunista Revolucionario guardaba un sitio especial para La Matanza:

*“Que la Asamblea se haya hecho en Matanza también indica otro problema de fondo. Que más allá de las enormes luchas que han hecho todos los afluentes, muy importantes, Matanza ha ido graficando esa unidad, ese camino que es la lucha masiva, muy amplia, con una gran base, y un gran frente unitario. Por eso no es por casualidad que se da en Matanza, podría darse en Mosconi donde es gloriosa la lucha de los compañeros, pero se da en Matanza por estas razones, porque ha mostrado cómo es posible la unidad más firme, aun en los momentos más difíciles, como febrero, cuando era atacado uno u otro sector para dividirlos, nadie le sacó el cuerpo a la defensa del aliado. Y esto ha soldado la unidad más allá de la lucha de líneas en cómo conducir”.*²⁵

Desde esa visión, las organizaciones de La Matanza ponían en práctica las premisas políticas que propugnaban la lucha masiva, el frente único y la unidad como tácticas para la “toma” del poder.

Pero el reconocimiento no era sólo simbólico; también se expresaba en disputas hacia el interior de las organizaciones en torno a espacios de toma de decisiones. En un diálogo que sostuve con Adelina, ésta expresó, refiriéndose a un plenario de Amas de Casa del País:

Adelina: Un día fueron a un plenario, al cual yo no pude ir; fueron a un plenario las compañeras, y entonces yo las agarré y les dije: “Después del corte de los dieciocho días, Matanza está en condiciones de pulsar la vicepresidencia de Amas de Casa del País”.

Virginia: ¿A nivel nacional?

²⁵ *Semanario del Comunismo Revolucionario de Argentina. Hoy. Servir Al Pueblo, Nº 872, 1/08/01; p. 6.*

Adelina: Sí, y no importa quién sea, el tema es que ustedes hoy están en condiciones porque la CCC jugó un rol muy importante dentro de lo que es el corte de ruta y me parece que nos ha dejado posicionadas en un muy buen lugar. No es una experiencia vivida en muchos lugares; fue única la de los dieciocho días (Adelina, 45 años, integrante de la Mesa Ejecutiva de la CCC).

De modo similar, en el Plenario Nacional de la CCC celebrado en febrero de 2004, el taller sobre desocupados informó:

“El taller debatió sobre los métodos punteriles dentro de la Corriente, y si la democracia directa es un método o parte fundamental de nuestra línea. Se propusieron jornadas de lucha que se aprobaron en el plenario y se reafirmó que Matanza es el corazón del movimiento de desocupados”.

El reconocimiento de La Matanza como “Capital Nacional del Piquete” y, por extensión, como el corazón del movimiento de desocupados, era activado por los dirigentes zonales para disputar hacia el interior de sus respectivas organizaciones cargos jerárquicos, el mérito de viajar al exterior para difundir las ideas de sus agrupamientos, el derecho a participar en las mesas de negociación con el Estado nacional, y las prerrogativas para fijar criterios de redistribución de los recursos obtenidos a lo largo del país.

En documentos difundidos por organismos del gobierno municipal también se reservaba un lugar especial para incorporar a la historia del distrito la “experiencia piquetera”:

*“A nadie se le escapa que el partido de La Matanza es hoy escenario de un importante capítulo de la historia nacional, el que hace referencia al denominado y ya reconocido internacionalmente como ‘movimiento piquetero’”.*²⁶

“Poco de ese pasado industrial queda hoy, donde puede verse el cierre de aquellas fuentes productivas, de la conversión de algunas de ellas en galpones vacíos, grandes cascarones custodiados u ocupados ilegalmente por nuestros propios sin techo, dentro de lo que fuera un importante polo industrial del conurbano bonaerense. Estas otrora grandes fábricas y su desaparición tienen su correlato en la pérdida de puestos de trabajo y en la aparición de importantes grupos que son

²⁶ Junta de Estudios Históricos, Geográficos y Estadísticos del Partido de La Matanza, Carta Informativa N° IV, agosto de 2002; p. 6.

excluidos sociales y que en algunos casos conforman movimientos como el conocido 'movimiento piquetero', que tiene dos fuertes vertientes en el partido de La Matanza, y que aún desocupados, gente con necesidades básicas insatisfechas, estudiantes universitarios, descontentos en general y militantes políticos, en una protesta organizada contra la actual situación socio-económica".²⁷

Esas interpretaciones colocaban al partido de La Matanza en un "capítulo" importante de la historia nacional y, de alguna manera, legitimaban las movilizaciones de los desocupados del distrito poniendo el foco en el carácter organizado de la protesta y en las causas que la motivaban: la desindustrialización, la pérdida de puestos de trabajo y la exclusión social.

Los enunciados provenían de ámbitos locales especializados en el estudio estadístico y social del distrito, y en la recuperación de la memoria. Se trataba de interpretaciones articuladas, que fijaban sentidos, pero que de un modo u otro no hacían más que expresar sistemáticamente una serie de prácticas que los funcionarios locales ejecutaban en otras instancias. Como se vio en el capítulo I, miembros del Partido Justicialista de la línea vinculada al intendente del distrito se acercaron a los cortes de ruta de noviembre de 2000 y mayo de 2001 con distintas misiones. Algunos concejales del bloque oficialista visitaban varias veces al día el piquete para acercar alimentos y frazadas; en tanto, el intendente y secretarios municipales se dedicaban a establecer nexos para entablar negociaciones con funcionarios de los gobiernos provincial y nacional.

El vínculo entre los funcionarios municipales y los dirigentes de organizaciones de desocupados se puso de manifiesto en distintos testimonios:

"En La Matanza hemos tenido momentos de mucha confluencia con el peronismo que está en el poder en La Matanza, como hubo momentos en los que ha habido mucho enfrentamiento. Como te decía, por momentos hemos tenido mucho acercamiento y por momentos hemos tenido mucha confrontación. Hoy en La Matanza tenemos una relación política con el sector de Balestrini que es buena (...). En La Matanza, por distintas situaciones, tanto del gobierno nacional como provincial, el distrito de La Matanza es el gran distrito olvidado de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta los 1.700.000 habitantes y que hay situaciones que se van menguando gracias a la acción, casualmente, a la lucha de

²⁷Junta de Estudios Históricos, Geográficos y Estadísticos del Partido de La Matanza, Carta Informativa N° V, diciembre de 2002; p. 2.

estos sectores. La Matanza, hasta hace dos años, tenía un hospital provincial, que creo que tenía cuatrocientas camas. Bueno, hoy está el otro hospital del 32, que muy lentamente lo van reacondicionando; pero eso es producto de una lucha conjunta, donde hay que tener en cuenta que el hospital del 32 fue una de las primeras reivindicaciones de los dieciocho días de las organizaciones sociales encabezadas, podemos decir, por la CCC y la FTV. Por lo tanto, no es producto de que el Estado entendió la necesidad. Fue producto de que la lucha popular le arrancó como reivindicación al Estado eso; y como eso hay otras reivindicaciones que es producto más de la presión, de la lucha, de la organización de los de abajo que por propia decisión gubernamental” (Alfredo, 53 años, integrante de la Mesa Ejecutiva de la CCC).

La visión de La Matanza como un distrito populoso y olvidado por las administraciones estatales del orden provincial y nacional se constituyó en un tópico que acercaba las posiciones de las organizaciones de desocupados zonales con las de sectores del Partido Justicialista que apoyaban al intendente municipal. Como puso de manifiesto el testimonio citado, el piquete también representó un medio para alcanzar la construcción de hospitales y escuelas. Es preciso mencionar que, hasta el año 2001, La Matanza sólo contaba con el Hospital Zonal General de Agudos Dr. Diego Paroissien, inaugurado en 1982.

Esa interpretación del piquete se vio favorecida por un estilo de gestión local que resaltaba públicamente las carencias del municipio como una manera de solicitar recursos a otras instancias de gobierno:

“Gobernar La Matanza no es fácil, es abrumador, extenuante (...). Lo que abruma es que, pese a los inmensos esfuerzos realizados, a la intensa tarea desempeñada sin horario y sin almanaque, nada alcanza, todo es poco, las soluciones son parciales y menguadas. Las necesidades y las demandas populares se multiplican en forma geométrica y los recursos son siempre los mismos. Somos la quinta provincia con el presupuesto de una biblioteca popular. Reiteraré algo que ya he dicho en público: no me hubiera presentado para la reelección de no haber sido por el ingeniero Solá, el candidato a gobernador, y el doctor Kirchner, el presidente de la República. En ellos dos confío para que conduzcan con acierto los destinos de la provincia y de la nación, respectivamente. En ellos dos confío para que se ponga fin a la injusta y secular postergación de La Matanza. El pueblo de La Matanza y su dirigencia política nos pusimos tempranamente detrás de sus candidaturas y realizamos un destacado esfuerzo para ayudar a consagrarlos como nuestros gobernantes. Lo hicimos sin condicionamiento alguno y con la convicción de que apoyábamos a los mejores, que nos pronunciábamos por un proyecto que propiciaba la integración nacional, la producción, la industria y la distribución del ingreso, que es bandera del peronismo.

En lo local, los acompañamos con la fundada esperanza de que, luego del triunfo, no olvidarían a este sufrido distrito”.

El fragmento citado es parte del discurso pronunciado en septiembre de 2003 por Alberto Balestrini, en un acto proselitista que contó con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires y el Presidente de la Nación. Al igual que el testimonio de Alfredo, el eje argumental del discurso señalaba la carencia, la postergación y el olvido del distrito de La Matanza como una forma de reivindicar recursos frente a otras instancias de gobierno.

Ese estilo de gestión también se puso en evidencia cuando el 10 de diciembre de 2005 asumió Fernando Espinoza como intendente de La Matanza en reemplazo de Alberto Balestrini, quien pasó a ocupar la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. En un reportaje concedido al diario *Página 12*, Espinoza afirmaba:

“–Es muy difícil. La Matanza es la capital de la desigualdad. Nosotros tenemos dos millones de habitantes y los recursos de una biblioteca popular. La ciudad de Buenos Aires tiene para gastar por año 2700 pesos por habitante, Morón 500 pesos, La Plata 600, y el intendente de La Matanza tiene para gastar 150 pesos por habitante al año.

–¿Por qué todos los matanceros, casi sin distinción política, opinan que el censo de 2001 perjudicó notoriamente al distrito?

–El censo de 2001 nos mató. Si De la Rúa le pudo haber hecho algo peor a La Matanza, además de todas las macanas que hizo, fue el censo, que hasta las dictaduras militares hicieron bien. No censaron más de 177 villas y asentamientos ni las zonas rurales. Nos sacó la mitad de los habitantes.

–¿Cuántos habitantes reales creen ustedes que tiene?

*–El censo marcó 1.224.000 y nosotros creemos que llegan a 2 ó 2,2 millones de habitantes. Es decir que hoy la coparticipación provincial nuestra es de 6,7 puntos y deberíamos tener 12 puntos. En recursos, esto significa 120 millones más por año, sobre un presupuesto de 300 millones en un municipio que tiene el 58 por ciento de su población en la pobreza y el 28 por debajo de la línea de indigencia”.*²⁸

La cantidad de habitantes de La Matanza y la deficiencia presupuestaria, agravada por falencias del último censo nacional de población y vivienda que incidieron en la disminución del porcentaje de coparticipación provincial, se transformaron en variables preponderantes para disputar recursos. En síntesis, se trataba de un estilo de gestión municipal centrado en el reconocimiento del conflicto,

la pobreza y la desocupación como núcleos de negociación con el gobierno nacional y provincial para la obtención de mayor presupuesto, recursos en general y candidaturas electorales.

Los tópicos compartidos sobre la situación de La Matanza se movilizaron en distintas situaciones para fundamentar iniciativas políticas. Como se vio en el capítulo I, en mayo de 2000, una ordenanza municipal declaró al partido en "Emergencia Ocupacional, Sanitaria y Educacional", y se creó un Consejo de Emergencia al que se incorporaron la CCC y la FTV. En junio de ese mismo año, ambas organizaciones, en calidad de miembros del mencionado Consejo, bloquearon la ruta nacional 3 para solicitar alimentos y programas de empleo a las autoridades del gobierno nacional. En ese marco, los piquetes de noviembre de 2000 y mayo de 2001 resultaron ser otros espacios de confluencia entre autoridades locales y agrupamientos de desocupados, fundamentados en discursos que enfatizaban la carencia, la postergación y las demandas populares como ejes clave para la negociación con instancias provinciales y nacionales de gobierno. Fundamentalmente, se activaron reclamos dirigidos a las autoridades nacionales pertenecientes a la Alianza, es decir, a una fuerza política opositora a aquella que gobernaba el municipio. Acerca del corte de ruta de mayo de 2001, Adelina sostenía:

"Fue duro, pero hoy uno recuerda las cosas, y las recuerda bien, porque no todo fue malo y eso es lo que nos ayudó a fortalecernos. Y cuando triunfamos, cuando triunfamos realmente, que fue en el corte de los dieciocho días, ahí se beneficiaron todos, no sólo la Corriente Clasista y Combativa, ni la FTV. Hasta el municipio, porque habíamos conseguido que baje a través del municipio no sé cuántas toneladas de alimentos desde la nación y desde la provincia, y que lo maneje el municipio" (Adelina, 45 años, integrante de la Mesa Ejecutiva de la CCC).

Los recursos "conquistados" al Estado tras los piquetes de noviembre de 2000 y mayo de 2001 fortalecieron a todas las fuerzas sociales y políticas del distrito de La Matanza. Tal como se mencionó en el capítulo I, entre esos recursos figuraban vacantes en programas de empleo, toneladas de alimentos, tres hospitales móviles, el equipamiento de un nuevo hospital, la construcción de aulas y la refacción de

²⁸ Diario *Página 12*, 12/12/05; p. 8.

escuelas, y el ensanchamiento de la ruta nacional 3 como prioridad del Plan de Obras de Infraestructura de la Nación. Considero que uno de los logros más significativos ha sido el aumento en la cantidad de vacantes en programas de ocupación transitoria. En junio de 2000, el distrito de La Matanza contaba con 1400 beneficiarios de programas de empleo, mientras que en el transcurso del año 2002, la cifra ascendió a 60.000 en el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados; en tanto, la CCC y la FTV pasaron a controlar una nómina de 9000 beneficiarios cada una.

Las profundas transformaciones sociales que minaron las bases sobre las que se había construido una ciudad obrera e industrial hacia mediados del siglo XX, los desplazamientos y alineamientos políticos que incidieron para que el Partido Justicialista ganara la intendencia en 1999 por un escaso margen sobre la Alianza, y el estilo de gestión municipal que subrayaba la carencia, la postergación y el conflicto como variables para disputar presupuesto y otro tipo de beneficios configuraron una trama política local en la cual los piquetes se convirtieron en un medio posible para proyectar reivindicaciones a otras instancias de gobierno y capturar recursos. Así, no resultó un dato menor el haber consagrado a La Matanza como "Capital Nacional del Piquete".

DE IMÁGENES Y TRADICIONES

En la introducción de la tesis mencioné que una visita al edificio municipal, en noviembre de 2000, me permitió advertir que *planes* y mercaderías representaban aspectos fundamentales de relaciones sociales y políticas. En esa ocasión, el recinto del Concejo Deliberante desbordaba, muchas personas habían ocupado el pasillo y desde allí seguían, como podían, las alternativas de una reunión. Con un poco de cautela y timidez, permanecí en el pasillo dialogando con militantes de la Agrupación Felipe Vallese –Frente Grande, Frepaso–, quienes también eran *referentes* de la Red de Barrios en zonas como Ciudad Evita y Virrey del Pino. Mi curiosidad (antropológica) me invadía y trataba de registrar que ocurría dentro del salón: divisé al intendente rodeado por personas que supuse concejales y por otras que

permanecían de pie. Alzaban las voces y, por momentos, reían con estruendosas carcajadas.

Los militantes de la agrupación Felipe Vallese intentaban traducirme los puntos en discusión. Se refirieron a una “deuda” que el gobierno nacional mantenía con el distrito de La Matanza debido al retraso en la entrega de *planes* y mercaderías, y me anticiparon la intención de cortar la ruta nacional número 3. Una semana después me encontré registrando el piquete montado la primera semana de noviembre de 2000 y, días más tarde, volví al edificio municipal para repasar con algunos concejales del Frepaso cómo habían vivido la experiencia de cortar rutas.

En el caso de La Matanza, entonces, la interpretación acabada sobre el sentido de los piquetes requería dimensionar en el análisis el peso de las tramas políticas locales. En particular, los procesos de realineamiento político del peronismo durante los años 90, expresados en la conformación del Frente Grande –Frepaso-, en pujas internas dentro del Partido Justicialista local y en la victoria del justicialismo en las elecciones de 1999 por un estrecho margen sobre la coalición Alianza.

Las tramas sociales y políticas del ámbito local se articulaban con la recuperación de imágenes del pasado y con un proceso más amplio de selección de tradiciones. Las “imágenes del pasado”, sostuvo Roseberry (2002), ponen en movimiento la recuperación del pasado desde un presente que se interpreta como “desordenado”, por ejemplo la valorización positiva del mundo rural en contextos de transformación de los modos de trabajo con la transición hacia el capitalismo. Se trata de versiones poco sistematizadas pero que activan o configuran sentidos políticos para resistir, acomodar o disputar diversos procesos de transformación social.

Como se mostró a lo largo de este capítulo, los relatos sobre La Matanza apelaban a la fuerza de las imágenes del pasado para ponerlas en conexión con un presente distante de ellas. Se acentuaba una imagen unívoca condensada en las magnitudes de una ciudad industrial y obrera: “*otrora grandes fábricas*”, “*pasado industrial*”, “*lo que fuera un importante polo industrial del conurbano bonaerense*”, “*aquella que fuera cuna de industrias*”, eran las postales más evocadas en los relatos, discursos y documentos.

La fuerza de las imágenes recuperadas actuaba para interpretar el presente en términos de "pérdida": "*Poco de ese pasado industrial queda hoy*", "*cierre de aquellas fuentes productivas*", "*galpones vacíos*", "*pérdida de puestos de trabajo*", "*excluidos*", "*desocupados*", "*técnicos y obreros que ofrecen inútilmente los saberes aprendidos a lo largo de la vida*", "*salarios insuficientes*".

Desde una visión teórica de relaciones de hegemonía, Williams (1980) definió el concepto de tradición selectiva como un proceso por el cual los sujetos seleccionan significados de un área posible del pasado, que al ponerse en conexión con el presente operan como fuerza configurativa.

La mayoría de los sujetos, más allá de sus posiciones en la trama política y social, seleccionaban sentidos e imágenes del pasado asociados con procesos que configuraron a La Matanza desde la década de los 40. Se recordaba, entonces, la fábrica, los obreros, los empresarios, los gremios, el sacrificio, la abnegación, el salario justo y la disputa "armónica" por las condiciones de trabajo.

Hacia fines de la década del 90, se fundaron instituciones específicas, como la Junta de Estudios Históricos, Geográficos y Estadísticos del Partido de La Matanza, para el "rescate" del pasado y de la "memoria". Desde la óptica de Williams (1980), las instituciones contribuyen a establecer y reificar tradiciones. En este sentido, la mencionada Junta producía versiones sistematizadas sobre el pasado, apoyadas sobre pruebas testimoniales y documentos históricos. Se trataba de versiones que confirmaban las visiones que aparecían de un modo más fragmentario en discursos de funcionarios del gobierno local y de *políticos* o en los relatos de integrantes de las organizaciones de desocupados.

La selección de tradiciones actuaba como una fuerza configurativa de proyectos políticos y procesos de demanda. Tal como ponían de relieve los discursos analizados, la evocación histórica era al mismo tiempo la formulación de un proyecto político centrado en el desarrollo industrial de La Matanza como un eje clave de "prosperidad", no sólo del distrito sino de todo el país. De algún modo, ese horizonte político incorporaba la experiencia histórica condensada en la categoría *trabajo genuino*. Esa categoría, como mostré en el capítulo anterior, activaba expectativas de retorno a modalidades de trabajo fabriles y a una relación salarial estable que

recuperara protecciones y derechos ligados históricamente a la "condición de trabajador" (jubilación, aguinaldo, licencias por enfermedad, salud, educación, etc.).

La recuperación de tradiciones también favorecía un estilo de gestión del gobierno municipal que acentuaba la pobreza –*“El sesenta por ciento está por debajo del nivel de pobreza”*-, la desocupación –*“Decenas y decenas de miles no tienen trabajo, otros tantos están subocupados”*- y la postergación –*“Centenares de miles de nuestros vecinos no tienen pavimento frente a sus casas, ni agua corriente, ni cloaca, ni vivienda”*- para ganar posiciones en la negociación con el gobierno nacional y provincial.

En ese marco más amplio de procesos de realineamiento político y de selección de tradiciones, el piquete se insertó en el contexto local como otro signo de los efectos de las transformaciones sociales de la década del 90 y se convirtió en una oportunidad para generar procesos de demandas hacia el gobierno nacional.

CONCLUSIONES

OCUPAR PARA NEGOCIAR

En varios tramos de este trabajo sostuve que el enfoque centrado en el concepto de protesta social limita el análisis de la vinculación entre la acción de protesta y la cotidianidad de los sujetos y desarrolla una narración del proceso histórico reducida a la sucesión de ciclos o repertorios de acción colectiva. El sentido de la protesta se interpreta como resultado de ciclos de acción colectiva y la vida cotidiana se aborda con el objetivo de resaltar los factores subjetivos de los episodios de “beligerancia popular”. Como se refirió en la introducción de esta tesis, estos enfoques expresan una tradición académica más amplia sobre la que gravitan, en muchos casos soterradamente, las formulaciones de Parsons sobre “sistemas sociales de acción”. De esa manera, el foco de las investigaciones recae sobre la reconstrucción de “factores” (culturales, subjetivos, emocionales, identitarios, materiales, etc.) considerados capaces de explicar el origen, desarrollo y declive de la acción colectiva.

Inquieta por los vacíos interpretativos que dejaban las teorías de la acción colectiva, cuyo enfoque se tornó dominante en la interpretación de los procesos de movilización social ocurridos en Argentina durante la última década, emprendí una investigación orientada a restituir las tramas de relaciones sociales, políticas y cotidianas. Desde una perspectiva antropológica, que recupera una mirada de los procesos históricos y las experiencias de vida cotidiana (Grimberg, 2005), analicé el sentido y la forma de las protestas a partir de la reconstrucción del contexto en el que se inscribían y de la capacidad de significación de sujetos sociales activos.

Desde esa perspectiva, entonces, he planteado que el piquete reactualizó experiencias ligadas a las ocupaciones de tierras de la década del 80 y que, en ese sentido, no constituyó simplemente un **bloqueo** de ruta sino una **ocupación** de la ruta, basada en el modelo de la ocupación de tierras.

Durante la década del 90, también se ocuparon edificios públicos y plazas para demandar mercaderías, y delegaciones municipales para “exigir” chapas y

colchones ante situaciones provocadas por “desastres naturales”, como inundaciones o granizo. En consecuencia, debe destacarse que, más allá de los “objetos” de demanda (tierra, alimentos, programas de empleo, colchones, chapas, etc.), la *acción de ocupación* aparece como una forma constante de vinculación con el Estado.

Una visión histórica indica la recurrencia de ocupaciones, fundamentalmente de espacios productivos. Así lo señala Grimberg: “(...) *la ocupación de empresas por parte de los trabajadores frente al peligro de cierre, como el ‘salvataje’ por parte del Estado han sido parte de las ‘tradiciones gremiales’ y las políticas estatales de Argentina (...)*” (Grimberg, 2005: 5). Diversos análisis sostuvieron que las ocupaciones de centros productivos se generalizaron desde mediados de la década del 50, tras el derrocamiento del gobierno peronista. Impulsadas por diversas líneas sindicales, se planteaban en oposición a medidas tales como la racionalización de la producción, la disminución salarial, el deterioro de las condiciones laborales y la pérdida de puestos de trabajo, y se inscribían en acciones de huelga; en pocos casos, se intentó poner en marcha la producción bajo control obrero o a partir de la cogestión obrera (Lobato y Suriano, 2003; Fernández Álvarez, 2006).

A la luz de esta tradición histórica, las acciones analizadas en esta tesis reúnen características específicas: por un lado, se trata de ocupaciones de espacios públicos; por otro, se plantean desde relaciones estatales. Los datos de campo pusieron en evidencia que uno de los propósitos centrales de este tipo de ocupaciones era que “*bajaran los funcionarios*”; es decir que se orientaban a iniciar o retomar negociaciones con funcionarios estatales para establecer o resituar compromisos de las autoridades gubernamentales.

Las ocupaciones de espacios públicos, entonces, representaban acciones directas para forzar el compromiso de autoridades gubernamentales. En caso de tener éxito, se abrían espacios de negociación y se desencadenaban una serie de pasos rutinarios que ponían en contacto cotidiano a los protagonistas de las ocupaciones con distintos niveles de gobierno: trámites, inicios de expedientes, presentación de documentación, elaboración de censos, reuniones y audiencias.

Thompson (1995), refiriéndose a los motines de subsistencia en Inglaterra en el siglo XVIII, sostuvo que las acciones directas ponían a prueba a los gobernantes a partir de las respuestas que daban y que, en varios casos, se transformaban en oportunidades para legitimar y reforzar la autoridad. Recuperando ese aporte, se puede señalar que los cortes de ruta prolongados de noviembre de 2000 y mayo de 2001 se convirtieron en una posibilidad para el intendente municipal de La Matanza, quien sometió a prueba un estilo de gestión centrado en el reconocimiento del conflicto, la pobreza y la desocupación, para ganar posiciones en la negociación con el gobierno nacional y provincial. A partir de relaciones anteriores, como la declaración del estado de "Emergencia Ocupacional, Sanitaria y Educativa" del distrito y la creación de un Consejo de Emergencia, en el cual participaron la CCC y la FTV, los piquetes se convirtieron en otro medio posible para proyectar reivindicaciones a otras instancias de gobierno y capturar recursos.

Ahora bien, en esta tesis también se expusieron situaciones en las cuales las ocupaciones de ruta fracasaron en su propósito de establecer negociaciones con autoridades gubernamentales y, a la inversa, oportunidades en las que se obtuvo el compromiso de funcionarios estatales sin recurrir a la acción de fuerza directa. Se puede concluir, entonces, que el sentido, el alcance y los límites de las acciones resultaron relativos al contexto histórico y a la trama relacional en la que se entretajeron.

Con los cortes de ruta de noviembre de 2000 y mayo de 2001 se procuraba "resituarse" la relación configurada con el Estado, desde el año 1997, en torno a los programas de ocupación transitoria. A su vez, el sentido y las demandas de esas ocupaciones deben entenderse a partir de la convergencia y el reforzamiento mutuo entre una serie de procesos, como el aumento en los niveles de desocupación y subocupación, el tipo de intervención estatal centrado en programas de ocupación transitoria, el engrosamiento de los listados que registraban la cantidad de personas que aspiraban a obtener un programa de empleo a partir del vínculo con la FTV y la CCC, y la disminución de vacantes en programas de empleo durante el año 2000 con motivo de modificaciones en el empadronamiento de beneficiarios.

Si bien los cortes de ruta se enmarcaban en una tradición de ocupación de espacios públicos, el sostenimiento de esa medida requería de saberes y habilidades específicas. La posibilidad de ocupar la ruta 3 obedeció fundamentalmente a un progresivo proceso de apropiación y aprendizaje de la tecnología del piquete antes que a la inercia de un ciclo de acción colectiva. Como se puso de relieve en este trabajo, la CCC se apropió de los componentes del piquete en un marco de relaciones políticas y sindicales que favorecían el vínculo con quienes habían cortado rutas en las provincias de Salta y Jujuy. De todas formas, la puesta en práctica del piquete en La Matanza demandó precisiones y redefiniciones, y, centralmente, se resignificó desde la experiencia de ocupación de tierras.

El piquete se erigió como una forma social que expresó actos ritualizados, categorías sociales para definir modos de participación, técnicas de organización del espacio y las actividades, normas y prohibiciones, y terminologías para definir la experiencia de los sujetos. Esta forma se puso en acto para anunciar la ruptura de los compromisos estatales y para forzar la negociación con autoridades gubernamentales.

Finalmente, en el piquete se expresaron diversas motivaciones y experiencias de vida cotidiana. En su mayoría, los participantes eran movilizados en pequeños grupos coordinados por *referentes* o *dirigentes* barriales con la expectativa de ingresar como beneficiarios a programas de empleo o sostener ese beneficio. Esas expectativas remitían, por un lado, a la falta de trabajo, y por otro, a la manera en que *los planes* se habían transformado en una demanda para los pobladores de los barrios. Pero el piquete también se convirtió en un espacio de articulación y confluencia entre diversos sectores sociales, políticos y religiosos (Grimberg, Fernández Álvarez y Manzano, 2004). Los sindicatos de trabajadores docentes y estatales formularon reivindicaciones relacionadas con las áreas de educación y salud (nombramiento de personal, construcción de nuevos hospitales o escuelas, insumos, reparaciones edilicias, etc.); integrantes de CEBs ejercieron sus convicciones religiosas, como la creencia de que Jesús vive entre el pueblo, y miembros de fuerzas políticas zonales plantearon su disconformidad con medidas

tomadas por funcionarios gubernamentales a quienes habían apoyado con su militancia para acceder a esos cargos.

LOS SUJETOS EN LA(S) TRAMA(S)

La preocupación relativa a la manera en que la participación en piquetes y organizaciones de desocupados se inscribía en trayectorias de vida orientó gran parte de esta investigación. Fue así que se reconstruyeron experiencias de vida heterogéneas que se articulaban en una trama de relaciones sociales anudadas en torno a los programas de empleo. Un procedimiento estandarizado, mediado por los programas de ocupación transitoria, producía vínculos cotidianos: *anotarse*, presentar *papeles* (documentación), *participar en cortes de ruta y marchar*, esperar salir en listados, cobrar el beneficio mensualmente y trabajar cuatro horas diarias en proyectos colectivos. Esas prácticas se experimentaban en grupos cuyos integrantes mantenían entre sí relaciones de vecinazgo, amistad y parentesco, y eran coordinados por las figuras de *referentes* o *dirigentes* barriales.

En “la trama” de investigaciones recientes en ciencias sociales, las múltiples trayectorias de vida y el conjunto de las relaciones sociales y cotidianas se fundieron en una identidad colectiva homogénea: piqueteros o clases populares (Svampa y Pereyra, 2003, 2005; Delamata, 2004; Merklen, 2005). En algunos trabajos, la heterogeneidad de las trayectorias fue definida en términos de dimensiones que atravesaban a un “actor colectivo unificado” (Svampa y Pereyra, 2003). Se destacó que la situación de desocupación reunía a un conglomerado heterogéneo de sectores sociales que habían sido arrojados a un “costado” de la sociedad a causa de procesos de “descolectivización”. En síntesis, la preocupación se concentró en explicar las características del actor colectivo atendiendo fundamentalmente a cambios estructurales.

En este trabajo, en cambio, he otorgado mayor peso al análisis de procesos de significación y a las tramas de relaciones sociales y políticas en las que se

insertaban sujetos sociales activos, operando, para ello, con la categoría de modos de vida aportada por Grimberg et al. (1998):

“(…) En lugar del concepto de condiciones de vida que connota situacionalidad y remite a ‘condiciones materiales’ y ‘exteriores’ a los sujetos, operamos con la categoría modos de vida que permite recuperar tanto la historicidad, como la articulación materialidad-simbolización, subjetividad-objetividad (...). El concepto implica, al mismo tiempo, situaciones resultantes de procesos sociales históricos de diferentes órdenes, que tanto se imponen a... como son construidas por... los sujetos sociales.

En otros términos, son experimentadas, sufridas, interpretadas, problematizadas, reproducidas, resistidas o modificadas –entre otras– por las prácticas de sujetos activos (...)” (Grimberg, et al., 1998: 225).

Desde el marco conceptual de modos de vida, he reconstruido y analizado trayectorias con el propósito de captar la manera en que los sujetos percibían, interpretaban, experimentaban y significaban la configuración histórica de situaciones de vida, y, en particular, los procesos de transformación social de la década del 90. En el caso de La Matanza, como se puso de relieve en el capítulo VI, esas transformaciones debilitaron las bases sobre las que se había iniciado la construcción de una “ciudad obrera” a partir de los años 50, y se expresaron en la desindustrialización y en la extensión del desempleo, el subempleo y la precarización.

Para aquellos sujetos cuyas trayectorias estuvieron signadas por procesos migratorios, que implicaron el desplazamiento desde provincias del interior de Argentina hasta La Matanza, así como también de tareas rurales a empleos fabriles, las transformaciones de esa década se experimentaron como “pérdida” y se procesaron desde emociones (angustia, nervios, miedo, etc.). El arribo a Buenos Aires había representado una mejora en las condiciones de vida, y la estabilidad laboral en centros productivos durante períodos de veinte o treinta años había hecho posible la materialización de proyectos tales como la adquisición de terrenos en loteos populares, la construcción de viviendas de paredes de ladrillo y techo de losa, la cobertura de la escolaridad de los hijos y la recreación en complejos sindicales. En algunos casos, también se aprendieron “oficios” que favorecieron el ascenso en las

categorías laborales estipuladas en los convenios de trabajo por ramas de actividad y, como consecuencia, el aumento proporcional del salario.

Otras trayectorias estuvieron marcadas por empleos inestables, separaciones de pareja y presencia de hijos o parientes enfermos, y por la búsqueda de alternativas para "arreglárselas". En ellas, las transformaciones de los años 90 se percibieron menos como una "pérdida" y más como una disminución del rango de opciones disponibles para obtener ingresos monetarios.

En aquellas trayectorias en las que la participación social y política había definido una dimensión sustancial de la vida, los cambios ocurridos se interpretaron desde la continuidad de la "lucha"; es decir, se trataba de la misma "lucha" que se había emprendido en otros momentos históricos por *la tierra, la sala de salud o las mejoras del barrio*. De ese modo, contribuyeron a definir escenarios de disputa en torno al eje de la desocupación.

La tesis también puso en evidencia que la participación en cortes de ruta y en organizaciones de desocupados representaba una experiencia más entre otras que conformaban la totalidad de la vida. Para quienes tenían una trayectoria de militancia social y política, esa participación se transformó en una dimensión fundamental; para otros, en cambio, recibir un *plan* y participar en *cortes de ruta* formaba parte de compromisos pautados en relaciones de intercambio. El conjunto de los datos de campo permite sostener que las aspiraciones, expectativas y sentidos se modelaban en diversas experiencias: la asistencia a iglesias evangélicas, la participación en CEBs, la imputación de delitos y las energías cotidianas dispensadas en el seguimiento de causas judiciales, el ingreso y egreso periódico de prisiones, las competencias futbolísticas en las que se apostaba dinero, la membresía en parcialidades de los dos equipos de fútbol más importantes de La Matanza, los tratamientos médicos, las desventuras de las relaciones de pareja, las situaciones de "violencia doméstica", la crianza de los niños y, sobre todo, los conflictos con hijos adolescentes referidos al uso de drogas, alcohol o robos. Se debe destacar que parte de esas experiencias se incorporaron como problemas a ser procesados por las organizaciones de desocupados. En este punto sobresalían las actividades desarrolladas por la CCC, tales como la implementación de talleres sobre "violencia

doméstica”, la construcción de refugios para mujeres golpeadas, la formación de grupos de autoayuda para jóvenes con problemas de “adicciones”, y la puesta en marcha de un proyecto de entrenamiento de “letrados populares” para que asesorasen sobre causas judiciales.

La variedad de trayectorias reconstruidas permite relativizar la imputación sociológica de un ser piquetero homogéneo para avanzar en el análisis de la complejidad de los procesos sociales y de las prácticas que se ponen en juego para articular en determinados escenarios sociales y políticos experiencias de vida fragmentarias.

Para la reconstrucción de experiencias de vida cotidiana he retomado aportes de Scott (1985, 1990), especialmente para apuntar que las situaciones en las que no se registraban confrontaciones abiertas no implicaban consenso ideológico respecto de las condiciones y relaciones de dominación. Sin embargo, coincidiendo con aquellas propuestas que pusieron en cuestión la visión romántica de un “sujeto resistente unitario”, así como también la existencia de un espacio autónomo de la subalternidad (Abu-Lughod, 1990; Roseberry, 1994; Ortner, 1995; Gledhill, 2000; Grimberg, 2005), he analizado las características de los contextos históricos y cotidianos que abrían y cerraban alternativas para la toma de decisiones y para la elección de opciones.

Durante las últimas décadas, se reconfiguraron modalidades de vida cotidiana que comprometieron la supervivencia y redefinieron los alcances y sentidos del trabajo (Grimberg, 2005). En ese contexto, las personas entrevistadas generaron una diversidad de iniciativas y respuestas, como el empleo en trabajos eventuales, la venta ambulante, la participación en clubes de trueque, la preparación de comidas caseras para su venta en ferias zonales y el cirujeo. Tal como pusieron de relieve los testimonios citados a lo largo de los capítulos, las decisiones familiares se ordenaron en función de la administración de recursos escasos; por ejemplo, la cocción de alimentos una sola vez al día, el envío de niños a comedores comunitarios, la restricción de algunos alimentos (carne vacuna) y la recolección de leña para cocinar con el objetivo de limitar el uso de garrafas. Este modo de administrar la vida familiar contenía innumerables e intensos conflictos. Algunas de las disputas que registré se

relacionaban con el uso de insumos (por ejemplo, el hecho de calentar agua para tomar un baño y luego dejarla enfriar, lo cual obligaba a tener que calentarla otra vez), el manejo del dinero (disconformidad con la prioridad fijada para realizar gastos: algunos preferían la compra de cigarrillos en lugar de ropa) y el préstamo de documentación para el acceso a los programas de empleo (un pariente figuraba como titular del beneficio, pero era otro el que contraprestaba en los proyectos productivos o comunitarios, y participaba en movilizaciones y cortes de ruta).

Los programas de empleo se incorporaron como otra oportunidad en ese marco de administración familiar de la supervivencia. Medió un proceso que se caracterizó por la tarea de *referentes* y *dirigentes* barriales para transformar esa política estatal en objeto de demanda y en una expectativa social. Una vez que los programas de empleo fueron incorporados como una meta, las opciones de los sujetos se ordenaron en un marco de alternativas que incluían el registro en listados confeccionados por *referentes* y *dirigentes* de organizaciones de desocupados, así como también por "*políticos*" –término que refería fundamentalmente a la inscripción en unidades básicas del Partido Justicialista–, la espera de una pronta recepción del beneficio y, si esto último no ocurría, el desplazamiento entre los distintos sitios de inscripción que competían en los barrios.

La contraprestación de cuatro horas diarias en los programas de empleo contribuyó a redefinir modalidades y sentidos del trabajo. *Trabajar con los planes* se convirtió en una tarea de rutina. Esas cuatro horas diarias se combinaban, sobre todo en el caso de las mujeres, con la organización de otras actividades, como lavar y planchar ropa, cocinar, limpiar las viviendas y enviar a los hijos a la escuela; incluso la elección del turno de trabajo se definía de acuerdo con el horario escolar de los niños. Como mostré en el capítulo V, ese trabajo se realizaba con una modalidad específica, que implicaba la autogestión para la provisión de materias primas, tareas rutinizadas y la circulación de productos por relaciones de intercambio social y político. Sostuve también que, debido a los espacios donde se desarrollaban las tareas y a la composición de los grupos, el trabajo no aparecía separado de la vida familiar y barrial. La labilidad de las fronteras entre el trabajo y la vida también se expresaba en una serie de casos en que hijos varones o esposos de mujeres

entrevistadas permanecían en talleres o fábricas durante la semana para evitar gastos de traslados diarios.

Trabajar con los planes significaba para un gran número de mujeres una instancia de sociabilidad y aprendizaje. Para aquellos que se incorporaban a tareas técnicas, el trabajo también despertaba orgullo y cierto placer. En cambio, para los varones que habían tenido experiencias previas en fábricas, los empleos eventuales y las tareas en los programas de empleo representaban la “degradación” de oficios y la ejecución de un trabajo poco *útil* o *productivo*. En esos casos, se acentuaba fundamentalmente la responsabilidad en el cumplimiento de normas, como la asistencia diaria a la contraprestación y la participación en cortes de rutas y movilizaciones. En el capítulo V, desarrollé cómo las expectativas y los sentidos se rearticulaban en la categoría de *trabajo genuino*. Con esta categoría se activaban expectativas de retorno a modalidades de trabajo centradas en la fábrica y en la relación salarial estable, y se despertaban las intenciones de recuperación de un conjunto de protecciones y derechos asociados históricamente, en el caso argentino, con la condición de “trabajador”, como la estabilidad laboral, la jornada de ocho horas, la jubilación, el salario justo y el acceso a la educación y la salud.

ESCENARIOS DE DISPUTA Y PROCESOS TRANSACCIONALES

A través de un rastreo histórico sobre dos procesos de movilización que ocurrieron en La Matanza entre los años 1995 y 1996, se reconstruyó la configuración de un escenario de disputa en torno al problema de la desocupación en el que convergieron experiencias de ocupaciones de tierras, iniciativas de organizaciones de base de la Iglesia Católica (CEBs) y tradiciones político-gremiales representadas en la CTA y la CCC, cuyas propuestas se orientaron a impulsar acciones sindicales tanto en el espacio laboral como en el barrial/territorial. También favorecieron la construcción de ese escenario los procesos de realineamiento político del peronismo durante los años 90, expresados en la conformación del Frente Grande –Frepasso–, en pujas internas dentro del Partido Justicialista local y en la

victoria del justicialismo en las elecciones de 1999 por un estrecho margen sobre la coalición Alianza. Los concejales del Frepaso, casi todos ellos dirigentes sindicales y barriales, aunaron estrategias con la CTA para la consolidación de un “armado territorial”, y desde escaños legislativos asumieron las demandas ligadas a la desocupación para convertirlas en objeto de debate gubernamental. Por su parte, el intendente elegido en 1999 se apoyó sobre las movilizaciones colectivas para proyectar reivindicaciones a instancias nacionales de gobierno.

Las organizaciones conformadas en los procesos de ocupación de tierras de la década del 80 (juntas vecinales, cooperativas, mutuales, etc.) actualizaron una modalidad de relación con el Estado asociada a la reivindicación de la tierra para incorporar en ella la demanda por *trabajo*. Desde esa modalidad se generaron prácticas de carácter autónomo (ayuda mutua, trabajo colectivo y vecinal) y otras perfiladas por diversas políticas estatales orientadas a la obtención de diferentes bienes (tierra, agua, servicio eléctrico, transporte público, recolección de residuos, etc.).

Desde relaciones históricas, sociales y políticas, la construcción de la desocupación como problema implicó tanto la ocupación de espacios públicos como mecanismos de producción de saber, tal es el caso de **censos y encuestas**. En el marco de las ocupaciones de tierras, los censos se transformaron en un recurso clave para extender la intervención del Estado y de empresas privadas (suministro eléctrico o transporte público) en la provisión de bienes. Las organizaciones vecinales contaron con el apoyo y el asesoramiento técnico de trabajadores sociales encargados de la implementación de políticas públicas y de un rango de profesionales –maestros, médicos, psicólogos sociales, sociólogos, antropólogos y estudiantes universitarios en general– vinculados por afinidad política e ideológica. Así, los censos se tornaron procedimientos rutinizados en el marco de la relación con el Estado para volver visibles problemas, demandas y poblaciones, y para acomodar las regulaciones estatales sobre diversas cuestiones. También convergieron en la práctica del censo la experiencia religiosa de “*la visita*” y el entrenamiento de agentes sanitarios en función del desarrollo de estrategias de atención primaria en salud.

De un modo general, se puede sostener que el censo, en tanto mecanismo empleado para registrar “fenómenos” de la población y convertir situaciones sociales en problemas sociales, constituye uno de los resortes clave del “arte de gobierno” que, tal como formuló Foucault (1991), tiene por blanco a la población (número de muertos, enfermos, natalidad, etc.). En otros términos, se trata de una forma específica y compleja de poder, asentada principalmente en el saber de la economía política y en dispositivos de seguridad (Foucault, 1991); por lo tanto, es plausible afirmar que las demostraciones que remiten a datos censales se inscriben en modos específicos de saber-poder y se convierten en pruebas de verdad para ser interpretadas fundamentalmente por el gobierno a partir de la puesta en acto de un lenguaje común que favorece la apertura de espacios de disputa y negociación.

A partir de esas experiencias históricas, las primeras movilizaciones en torno a la desocupación se insertaron en un encuadre más amplio de problemas vinculados con la *desnutrición*, el *hambre* o los inconvenientes alimentarios y sanitarios en general. En otros términos, esas movilizaciones se sustentaron en nociones legitimadoras (Thompson, 1995) que apelaban a costumbres, normas y expectativas sociales configuradas en una tradición de intervención estatal que durante la década del 80 había extendido la asistencia alimentaria a *familias pobres* de acuerdo con los criterios de NBI y con la situación de desocupación de los jefes de hogar. Ese modo de formular el problema también se relacionaba con el creciente papel del *hambre* y la *desnutrición* como indicadores de desarrollo para la obtención de préstamos y subsidios de Organismos Internacionales de Crédito.

También contribuyeron al encuadre del problema de la desocupación tradiciones políticas y gremiales que pusieron énfasis en las “causas políticas” del desempleo. La CTA apuntó al proyecto neoliberal de acumulación propiciado por grandes grupos económicos, mientras que la CCC puso el foco en la crisis de sobreproducción del sistema capitalista a nivel mundial y, en particular, en la “*modernización reaccionaria basada en el atraso y la dependencia*”. Más allá de la diferencia entre ambas caracterizaciones, las dos propuestas colocaron el problema del desempleo en la trama de relaciones políticas antes que en aspectos técnicos de los procesos de trabajo; así, aportaron para transformar la desocupación en un

objeto de disputa: en un caso, contra el neoliberalismo, y en el otro, contra el sistema capitalista.

La construcción de relaciones de poder y la configuración de escenarios de disputa han sido problemas abordados en distintos trabajos de investigación para encuadrar las relaciones entre el Estado y los trabajadores. Centrado en el análisis de la dictadura militar y el triunfo de Raúl Alfonsín en 1983, el estudio de Villarreal (1985) mostró tanto el carácter represivo como productivo de las estrategias de poder desarrolladas en el marco del último gobierno militar. El autor sostuvo que las estrategias del poder dictatorial alteraron "el terreno" sobre el que se movían las maniobras políticas y económicas de diferentes actores. Fundamentalmente, mutaron las bases sociales de poder sobre las que se había asentado la capacidad de movilización de los grupos subalternos desde la década del 40, como el peso del trabajo asalariado, el alto nivel de organización sindical y la presencia de sectores medios de significativa importancia en comparación con el resto de Latinoamérica. En particular, el autor se refirió a la relación de los trabajadores con el Estado expresada en el Peronismo:

"(...) A través de múltiples enfrentamientos que los situaban en algún punto de determinadas relaciones de fuerza, en diálogo permanente con el poder, acumulando toda una tradición cultural gestada en la lucha cotidiana, organizados desde y contra el Estado, los obreros fueron desarrollando su propia unidad política peronista bajo una envoltura contradictoria de identidad de clase y armonía de clase, de lucha contra el poder y subordinación al Estado, de autoconciencia y conciencia difusa." (Villarreal, 1985: 225)

Desde esa visión histórico-conceptual, Villarreal se basó en la terminología de Gramsci para afirmar que durante la última dictadura militar se modificaron las normas de funcionamiento de los actores políticos.

En la investigación de Grimberg (1997), sobre las prácticas de los trabajadores gráficos en Argentina en relación con la salud-enfermedad en el espacio social del trabajo, se reconstruyeron las cambiantes intervenciones estatales que se convirtieron en marco de construcción de prácticas gremiales. A partir de una visión de relaciones de hegemonía, la autora sostuvo que los trabajadores disputaban y negociaban desde variables correlaciones de fuerzas, *desde y contra* estructuras,

modelos y políticas que disponen y generan mecanismos de coerción -incluida la represión- y de consenso. En se marco se analizó la combinatoria de procesos que permitieron a los trabajadores gráficos desarrollar estrategias políticas-gremiales de confrontación-negociación durante gran parte del siglo XX.

Recuperando esos aportes histórico-conceptuales, se puede extraer como conclusión que a lo largo de la década del 90 se configuró un escenario de disputa en torno al problema de la desocupación *desde y contra* modalidades de política estatal. En diferentes movilizaciones se reclamó el compromiso del Estado con la situación de desocupación apelando a normas y expectativas que remitían a modos estandarizados de intervención gubernamental centrados en la entrega de alimentos a *familias pobres*. Las iniciativas impulsadas abrieron un espacio de negociación y concertación cuyos límites estuvieron dados por el recorte de las demandas a la cantidad de mercaderías, a la forma de distribución de los alimentos y a la fecha de entrega de ese recurso.

El escenario de disputa inicial configurado alrededor del problema de la desocupación fue remodelado y redefinido por propuestas estatales expresadas en los programas de ocupación transitoria. Estos programas comenzaron a implementarse en 1993, pero alcanzaron una mayor extensión a partir de 1995, con la creación del Programa Trabajar, y se unificaron en 2002 en el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Las intervenciones, definidas en fuentes ministeriales como "políticas activas de empleo", requerían la contraprestación de los beneficiarios, en forma de capacitación laboral o de trabajo durante cuatro horas diarias en proyectos de *utilidad social o comunitaria*, como condición para el acceso a un beneficio monetario. Esta modalidad de política pública cimentó un vocabulario (*beneficiarios, proyectos, unidades ejecutoras y organismos responsables*); se distinguió por la transitoriedad de los beneficios y de los proyectos, así como también por niveles de descentralización que otorgaron un papel preponderante a organismos responsables (ONGs o gobiernos municipales) en la elaboración y ejecución de actividades y en la selección de beneficiarios, y, fundamentalmente, motorizó estrategias de "focalización" de las asignaciones presupuestarias sobre el "desocupado pobre" y sobre regiones marcadas por elevados índices de pobreza.

Como se destacó en el cuerpo de la tesis, sobre todo en el capítulo III, este tipo de políticas eran financiadas por Organismos Internacionales de Crédito (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) y expresaban, no sin matices, orientaciones para los “países pobres” a nivel mundial. Los programas de ocupación transitoria se implementaron en un contexto de reformas impulsadas en América Latina a comienzos de la década del 90, sintetizadas en el “Consenso de Washington”, como la puesta en marcha del régimen de convertibilidad, con su correlato en las privatizaciones de áreas del Estado y en medidas de ajuste estructural y disciplinamiento fiscal. En los documentos, informes y publicaciones de los citados Organismos Internacionales de Crédito se recomendaba la “focalización” de las políticas públicas atendiendo a la relación entre el equilibrio macroeconómico y el gasto social. Se proponían alternativas para la “selectividad” de los beneficiarios optimizando recursos y partidas presupuestarias, como la “focalización” del gasto social sobre aquellos grupos sociales y regiones delimitados previamente como pobres.

En síntesis, desde correlaciones de fuerza internacionales, los programas de ocupación transitoria representaron la adaptación vernácula de intervenciones que el Banco Mundial denomina *workfare*, cuya característica central es el requerimiento de trabajo a cambio de la obtención de beneficios monetarios. La aplicación de este tipo de políticas se recomienda para aquellas zonas donde crisis macroeconómicas o desastres agroalimentarios han convertido a una porción significativa de pobres en desempleados. En esta interpretación, entonces, el desempleo fue visto como un problema *aleatorio y agravante* de la pobreza preexistente.

El enfoque relacional adoptado en esta tesis hizo posible entender no sólo cómo estos programas se transformaron en la principal respuesta del Estado frente al desempleo, desplazando a un segundo plano otras alternativas posibles, como el Seguro por Desempleo, sino también cómo se transformaron en *objeto de demanda* y de *intercambio* desde tradiciones políticas, gremiales y de organización barrial. En suma, se trató de analizar a partir de la puesta en circulación de los programas de ocupación transitoria de qué modo se redefinieron las relaciones entre el Estado y la población a partir de la década del 90.

El tiempo prolongado del trabajo de campo y mis interrogantes referidos al proceso de construcción de demandas me permitieron identificar un hito en la relación con el Estado alrededor de programas de ocupación transitoria: me refiero a la negociación en el año 1996 entre integrantes de una Junta Vecinal de un asentamiento de La Matanza, que luego consolidaron la vertiente de desocupados de la CCC, y autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en torno al ingreso de beneficiarios al Programa Barrios Bonaerenses. La reconstrucción del curso de esas negociaciones puso en evidencia cómo los programas de empleo se transformaron en un objeto de demanda dirigida al Estado, pero, al mismo tiempo, mostró la manera en que *referentes* y *dirigentes* debieron crearlos como demanda entre los pobladores de los barrios: recorrieron viviendas promocionando *los planes* e inscribiendo en un registro a quienes aspiraban a obtenerlos; organizaron reuniones, algunas de ellas con la presencia de funcionarios estatales, y activaron vínculos de parentesco, vecindad y amistad para cimentar expectativas sociales acerca del beneficio de esos programas. De manera simultánea, se fue pautando un modo de interacción que priorizaba como norma para el acceso a ese beneficio la "participación en la lucha" (*cortes de rutas o marchas*). Es posible afirmar que la demanda debió ser creada porque *los planes* representaban una novedad en comparación con la intervención estatal "normatizada" durante los 80 y, en otros casos, porque desde las trayectorias de vida de obreros industriales, el beneficio de esos programas no era visto como una opción viable.

La relación con el Estado a partir de la circulación de estos programas generó una modalidad de intercambio que articulaba distintos niveles de interacción. Esto se expresó en la construcción de un complejo "sistema de administración" de programas de empleo, en la creciente especialización técnica que implicó la adecuación de estructuras y tareas, y en la organización de un proceso de trabajo (*trabajar con los planes*) que recuperó pautas del mundo laboral (turnos de trabajo, registro de asistencias, justificación de ausentismo y períodos de vacaciones anuales), pero insertas en tramas domésticas y barriales.

Ahora bien, ¿cómo interpretar las múltiples interacciones que se generaron en torno a los programas de ocupación transitoria? Más aún, ¿cómo entenderlas en el

escenario de disputa construido desde experiencias históricas en torno al problema de la desocupación? A mi criterio, la categoría de *transacción* posibilita la comprensión de aspectos sustanciales de los procesos de demanda e intercambio reconstruidos y analizados en esta tesis.

Desde la década del 50, investigaciones antropológicas desarrollaron propuestas para analizar las prácticas sociales en términos de *transacción* en un marco de cuestionamiento del enfoque del estructural-funcionalismo británico. Los trabajos de Barth (1959, 1959a) situaron en otra perspectiva los conceptos elaborados por análisis estructural-funcionalistas; fundamentalmente, destacaron que las estructuras genealógicas no se expresaban de manera mecánica en grupos políticos sino que eran relevantes en la medida en que definían rivales y aliados en sistemas de dos bloques políticos opuestos. Así, recuperando los aportes de la teoría de los juegos, se desplazó la atención desde las estructuras y las instituciones hacia la naturaleza de las **interacciones**. El enfoque de Barth se concentró en las elecciones individuales entre lealtades alternativas como unidad mínima de acción política. Reconstruyó el sistema de propiedad de la tierra, de estatus y casta como marco de las elecciones, pero otorgó un papel relevante a las estrategias manipulativas de los jefes para el reclutamiento y la adhesión de seguidores. Los líderes competían entre sí y se procuraban clientelas a través de una serie sistemática de intercambios y transacciones diádicas. Si bien el autor reconoció la jerarquía en la constitución de las interacciones, acentuó el carácter recíproco, contractual, voluntario y revocable de las elecciones individuales.

Otros planteos cuestionaron la centralidad conferida al carácter diádico de las interacciones en la propuesta de Barth y la concepción de la reciprocidad como una relación voluntaria y consensuada (Menéndez, 1981; Asad, 2002). Se propuso, entonces, un nuevo uso del concepto de *transacción* para ahondar en un nivel de prácticas que remitían a procesos más amplios de dominación y subordinación. En lugar del consenso voluntario, se hizo hincapié en la aceptación de normas y reglas determinadas desde fuera, asimétricamente, sin la participación de los sectores subalternos. El foco se desplazó a la operatoria de los procesos de coerción y

hegemonía. En ese sentido, Menéndez argumentó la diferencia de esta propuesta respecto de la de Barth del siguiente modo:

"(...) estos autores, si bien plantean la existencia de relaciones jerarquizadas en todo sistema de transacciones, enfatizan y focalizan sus análisis en las relaciones de reciprocidad. Nosotros, a partir de las propuestas de Gramsci y de Martino, planteamos también la existencia de transacciones, pero afirmamos que las mismas están determinadas por los mecanismos de coerción y hegemonía. Distinguimos la existencia de relaciones de reciprocidad subordinadas; de relaciones de no reciprocidad subordinadas dentro del sistema de clases en el cual se incluyen dichas transacciones, y de relaciones de reciprocidad no subordinadas, pero que operan dentro de las mismas categorías socioeconómicas. En las sociedades capitalistas las transformaciones dominantes son las asimétricas y subordinadas, y operan dentro de las clases subalternas como los mecanismos ideológicos y sociales básicos que manifiestan su autoexplotación (explotación) y autolimitación (limitación). Las concepciones ideológicas dominantes establecen como 'normales' esas transacciones subordinadas" (Menéndez, 1981: 381).

La propuesta de Menéndez (1981), al finalizar la década del 70, también apuntaba a señalar debilidades de los puntos de vista comunes en la práctica política de un sector del marxismo. En particular, sostuvo que los grupos subalternos no planteaban necesariamente estrategias cuestionadoras para la solución radical de sus problemas, sino que lo más frecuente eran sistemas de transacciones cuyas vías de desarrollo solían ser canales institucionales, legitimados por las clases dominantes, que tendían a fundamentar el poder y la hegemonía. De este modo, la transacción suponía la aceptación y la solución de problemas dentro de límites establecidos por las clases dominantes.

A diferencia de Menéndez, Grimberg (1997) utilizó el concepto de transacción como categoría descriptiva para dar cuenta de los modos de operatoria cotidiana de las relaciones de hegemonía. Distanciándose del énfasis puesto en "sistemas de transacción" o en la transacción como un rasgo estructural del poder y la desigualdad, en sus trabajos el foco de interés estuvo puesto en captar las contradicciones de los procesos y las relaciones de hegemonía, entendidos como:

"(...) una relación de dominación/subordinación activa por parte de ambos términos. Una relación social en la que el poder se construye, se mantiene y se transforma a través de procesos económicos, políticos e ideológicos" (Grimberg, 1997: 252).

Esa perspectiva del concepto de transacción permite una interpretación de los procesos reconstruidos en esta tesis acentuando tanto la contradicción como los límites y las posibilidades que se abren en los intersticios que dejan las relaciones de poder activamente construidas. Una mirada desde los procesos de transacción posibilita releer los resultados de esta investigación del siguiente modo:

-Los programas de ocupación transitoria expresaban decisiones tomadas en contextos internacionales de correlaciones de fuerzas político-económicas y sustentadas en orientaciones neoliberales promovidas por Organismos Internacionales de Crédito. Diversas iniciativas políticas impulsaron esas orientaciones desde la última dictadura militar en Argentina y se intensificaron con un ritmo inusitado a inicios de la década del 90, a partir de la implementación del régimen de convertibilidad, de medidas de ajuste fiscal y estrategias de concentración del capital cuyos efectos han sido la desindustrialización y el aumento en los índices de desempleo. En este contexto, las *políticas activas de empleo* asumieron un carácter coercitivo, impuesto "desde arriba" y asimétricamente como única propuesta posible frente a la desocupación.

-Desde diversas tradiciones sindicales, políticas y sociales se aceptó de manera subordinada la propuesta expresada en los programas de ocupación transitoria. Estas políticas redefinieron y modelaron el escenario de disputa en torno a la desocupación, estrechando el rango de iniciativas y demandas posibles. Se cerró el margen de negociaciones sobre propuestas formuladas por los Barrios de la Olla Popular de San Justo en 1996 o por la Comisión sobre Desocupados que funcionó en el Primer Congreso de Delegados de la CTA. El contenido de esas propuestas incluía, entre otras cuestiones, la reorganización del trabajo a partir de la reducción de la jornada laboral y del reparto del empleo socialmente disponible, el congelamiento de despidos, y el aumento del monto y la extensión de la cobertura del Seguro por Desempleo para todos los casos de desocupación.

Al mismo tiempo, estas políticas se transformaron en objeto y oportunidad de demanda, y activaron procesos de movilización social en los que se destacaron las

ocupaciones de espacios públicos. Se abrió de ese modo un intersticio para demandas que se expresaban en los propios términos de los componentes de las políticas estatales (vacantes, cantidad de beneficiarios, fechas de ingresos, herramientas, etc.) con el objetivo de ganar mayor control sobre su implementación. Así, *los planes* se reelaboraron simbólicamente como producto de la “lucha”, como un “acto de lograr”, antes que como una acción generosa y controlada acabadamente por las autoridades gubernamentales. En determinadas coyunturas se ensancharon márgenes para disputar sobre la naturaleza de *los planes* a partir de reivindicaciones que remitían a un marco histórico de garantías y protección al trabajo (estabilidad laboral, coberturas familiares, licencias por embarazo y enfermedad, aguinaldo, aumento salarial –del beneficio–, etc.).

-La gestión colectiva de los programas de empleo reprodujo mecanismos básicos de las políticas orientadas por la “focalización” del gasto social. A las normativas estatales se selección de beneficiarios se sumaron otras que hacían hincapié en la “participación en la lucha”. Para controlar el cumplimiento de las normas se diseñaron tecnologías específicas, por ejemplo, el *sistema de puntaje*; se utilizaron herramientas estatales, como las planillas de asistencia para monitorear la contraprestación laboral, y se especializaron tareas técnicas para seguir las alternativas del curso global del ingreso y la permanencia en *los planes*. *Referentes y dirigentes* se transformaron en figuras clave para el ejercicio del control tanto en manifestaciones públicas como en actividades cotidianas enmarcadas en la contraprestación de cuatro horas diarias (*trabajar con el plan*). Las normativas se instituyeron como una “prueba de mérito” y dieron lugar a la proliferación de estrategias que oscilaban tensamente entre el cumplimiento de los requerimientos establecidos y la posibilidad de evadir algunas de las normas en función de estados de enfermedad, ancianidad o discapacidad.

-A la vez que se reprodujeron mecanismos básicos de las políticas orientadas por la “focalización” del gasto social, se generaron procesos de apropiación de saberes técnicos en el marco de los vínculos cotidianos con funcionarios estatales y se “capturaron” recursos que se “aprovecharon” para el crecimiento y la consolidación de estructuras organizativas. Además, se multiplicaron actividades en

distintas dimensiones de la vida cotidiana, como el trabajo, la alimentación, la salud y la educación. Se ensayaron modelos de organización política enmarcados en distintas tradiciones y se dictaron cursos de formación destinados a *referentes* y *dirigentes* barriales, considerados propagadores de la "línea clasista", en el caso de la CCC, o del movimiento nacional-popular, en el caso de la FTV. El crecimiento organizacional fortaleció la capacidad para sostener acciones de fuerza directas, como cortes de ruta prolongados, y se expresó en el reconocimiento de la FTV y la CCC a nivel nacional e internacional. Esto último se tradujo en la conformación de ámbitos de intercambio con otras experiencias de movilización social tanto de Argentina como del exterior; así, *líderes*, *dirigentes* y *referentes* viajaron a Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay, Sudáfrica, Kenia, Canadá y Francia para difundir sus mensajes e interiorizarse acerca de líneas de trabajo de diversas organizaciones sociales y políticas.

-A partir de la gestión de programas de empleo, los beneficiarios se sujetaron a políticas estatales de modo cotidiano y experimentaron esa relación en el marco de grupos barriales coordinados por *referentes* o *dirigentes*. Ese nivel relacional también se caracterizó por prácticas de cuestionamiento, aceptación, demanda y reproducción. De manera contradictoria, se aceptaron las normas requeridas para el ingreso y la permanencia en programas de empleo en el marco del compromiso por la supervivencia (trabajos eventuales, trueque, préstamo de dinero de algún familiar mejor posicionado, etc.). El carácter coercitivo de las normas se percibió como imposiciones de los líderes de las organizaciones de desocupados ("*Los de Alderete*" o "*Los de D'Elía*") o de *referentes* y *dirigentes* (*mi dirigente* o *mi referente*). De esa forma, los cuestionamientos apuntaron a la pericia de los dirigentes para resolver el pronto ingreso de beneficiarios a *los planes* o a la cantidad de cortes de ruta y marchas en las que se debía participar. Se desarrollaron estrategias orientadas al pasaje entre una organización y otra, o se expusieron situaciones de enfermedad en tanto derecho a un programa de empleo, más allá de las normas establecidas. En suma, se reprodujeron concepciones básicas de las políticas estatales, pero también se generaron procesos de aprendizaje en el *trabajo con los planes* que favorecieron la circulación y adquisición de saberes, y se conformaron circuitos de sociabilidad

que permitieron compartir colectivamente problemas y, en algunos casos, redefinir situaciones complejas de vida a partir de oportunidades que ofrecían las organizaciones de desocupados, como talleres contra la violencia doméstica, asesoramiento jurídico o cursos de agentes sanitarios.

Una mirada desde los procesos transaccionales permite afirmar que en torno a los programas de ocupación transitoria se configuró un campo de transacción que articuló prácticas de coacción, aceptación, reproducción, cuestionamiento, control, sujeción, disputa, movilización, apropiación, demanda-negociación y confrontación-concertación. El conjunto de estas prácticas y la complejidad de las relaciones de poder construidas y reproducidas activamente rebasan los límites que imponen visiones académicas sobre este tipo de políticas centradas fundamentalmente en modelos de ciudadanía social, en estrategias gubernamentales tendientes a institucionalizar movimientos sociales disruptivos (*piqueteros* en este caso) o en una lógica racional y abstracta imputada a las “clases populares” por fuera de contextos y procesos históricos.

DE LA FUERZA TEÓRICA DE LOS CAMPOS A LOS CAMPOS DE FUERZA

Los estudios sobre la acción colectiva y los movimientos sociales definieron un campo de investigación científica que se concentró en una serie de preocupaciones fundamentales: las formas en que el sistema político procesaba demandas y las transformaba en reformas estructurales, los mecanismos de cooptación de los líderes de los movimientos, la institucionalización de acciones disruptivas, y la decadencia o desaparición de movimientos sociales. Esa agenda temática, modelada por teóricos estadounidenses y europeos, fue incorporada a las ciencias sociales de Argentina, y en general de América Latina, en la década del 80, en un marco de reflexión sobre la “transición democrática”.

Científicos sociales inspirados en la transición hacia la democracia en países como España, Grecia y Portugal formularon, con el apoyo del Consejo Asesor del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Center For International Scholars, una línea de estudios abocada a la comprensión de la **transición democrática en**

América Latina. Se plantearon como temas de investigación la gobernabilidad, el consenso, la participación y la representación política, y los procesos de institucionalización democrática (Lechner, 1996; O'Donnel, 1997). Dentro de esos lineamientos, los movimientos sociales se incorporaron como problema de investigación a partir de la recuperación de los aportes teóricos de Touraine y Melucci (Edelman, 2001). La expresión "nuevos movimientos sociales" fue reemplazada en América Latina por la de "movimientos populares" para referir a movimientos de pobladores urbanos, indígenas, mujeres, ecologistas y CEBs (Restrepo, 1992; Calderón, 1995).

En ese marco, se generalizó también el uso del concepto de *cultura política*¹ para estudiar cambios en las formas de participación popular (Restrepo, 1992; Calderón, 1995; Gutiérrez y Romero, 1995). Se asumió como un punto de vista compartido que la cultura política de Occidente se orientaba por principios racionalistas, universalistas e individualistas; en contraste, la cultura política dominante en América Latina se había caracterizado por el control de esos principios con el fin de excluir políticamente a otros en sociedades jerárquicas y desiguales. Se destacaron como rasgos de la cultura política latinoamericana la indistinción entre el ámbito público y el privado; el favoritismo y el personalismo; el clientelismo y el paternalismo; la asociación de la política con una actividad de las elites, y la incorporación de las masas en proyectos populistas que limitaban su participación autónoma debido a la relación subordinada con los líderes políticos (Alvarez, Dagnino y Escobar, 1998). Algunos autores, como Calderón (1995), sostuvieron que tras la Revolución Mexicana se constituyeron los ejes que marcaron las prácticas políticas de los sectores populares en Latinoamérica como la orientación de la lucha

¹El concepto de cultura política tiene una historia que excede el debate latinoamericano. En el caso del estudio de la acción colectiva y los movimientos sociales, como he mostrado en la introducción de la tesis, ha sido reemplazado por el de enmarcado. De modo general, se puede decir que el trabajo de Sewel (1990) procuró mostrar cómo grandes eventos, como la controversia de la ley de impuestos, la abolición del comercio británico de esclavos y la Revolución Francesa, fueron los crisoles en los que nacieron nuevas culturas políticas para Occidente. Por su parte, Aldmon y Verba (1989), en la década del 60, introdujeron el concepto de cultura política para conectar las bases estructurales de la política con sus resultados institucionales. Estos autores consideraban que cada sistema político disponía de un mayor o menor grado de consenso en torno a sus símbolos legitimadores y que los ciudadanos contribuían al mantenimiento del sistema al conocer y apoyar esos símbolos.

hacia el poder del Estado para lograr el reconocimiento de ciudadanía, la integración político-económica, la participación social y la industrialización.

Los supuestos relativos a la "cultura política latinoamericana" funcionaron como puntos de partida para generar interrogantes y expectativas en torno al rol que asumirían los nuevos movimientos sociales en la "transición democrática". La mayoría de los investigadores coincidían en que el origen de estos nuevos movimientos se debía tanto a la crisis del Estado capitalista como al fracaso de sus alternativas revolucionarias. Además, se subrayó que los nuevos movimientos populares identificaban amplias gamas de opresión y metas de liberación, y luchaban en espacios reivindicativos y autorreferidos, ya que su objetivo no era la disputa por el poder del Estado (Jelín, 1987; Restrepo, 1992; Calderón, 1995; Gutiérrez y Romero, 1995). Los analistas celebraron la autonomía respecto de los partidos políticos o de "caciques políticos", así como también la construcción de estructuras participativas que, se suponía, contribuirían a la democratización del Estado y del sistema político (Jelín, 1987; Restrepo, 1992).

De esos trabajos pioneros sobre el rol de los nuevos movimientos sociales se heredó un esquema dicotómico que aún actúa como generador de preguntas e interpretaciones sobre los procesos políticos que protagonizan los "sectores populares". En ese esquema se revalorizó la política (luchas propositivas) por sobre lo que se definía como estrategias de supervivencia y luchas reivindicativas. Las disputas reivindicativas en torno a la redistribución económica —consideradas propias del movimiento urbano y obrero— fueron vistas como instrumentales y "cortoplacistas", en contraste con las metas expresivas de los nuevos movimientos sociales que apuntaban a redefinir las relaciones de la sociedad civil y de la vida cotidiana (Jelín, 1987; Restrepo, 1992). Se consideraron atributos de los nuevos movimientos sociales al carácter autónomo y a las formas democráticas de participación, en tanto que superación de vínculos políticos definidos como clientelares (Jelín, 1987; González Bombal y Palermo, 1987; Restrepo, 1992; Cavarozzi y Palermo, 1994). Se afirmó que los nuevos movimientos sociales, debido a su autonomía, contaban con potencialidades para democratizar el Estado a partir de la incorporación de demandas. Sin embargo, se apuntó que esa potencialidad

sería debilitada si no lograban mantenerse autónomos y a salvo de las tentativas de institucionalización y cooptación por parte del Estado (Restrepo, 1992; Calderón, 1995; Munck, 1995).

En el caso de Argentina, la preocupación por la relación entre el modo de participación de los sectores populares y la construcción de un proyecto de democracia participativa ha sido el eje de estudios sociológicos e históricos desde la década del 80 (Jelín, 1987; Gutiérrez y Romero, 1995). Algunos abordaron los movimientos vecinales, de derechos humanos y juveniles con la intención de comprender la relación entre éstos y el proceso de democratización (Jelín, 1987; González Bombal y Palermo, 1987; García Delgado y Silva, 1989). Por su parte, los estudios históricos investigaron las formas de participación política de los sectores populares bajo la siguiente hipótesis: *“En épocas de clausura política, la experiencia de la democracia, y sobre todo de la participación, anida en los sectores populares y en sus instituciones, para volver a desarrollarse en épocas más propicias (...)”* (Gutiérrez y Romero, 1995: 18). Una meta de estos trabajos era localizar ámbitos propicios para la participación igualitaria como requisito para la construcción de una cultura política democrática. Los investigadores definieron al período de entreguerras –anterior al peronismo– como una época fundacional de prácticas democráticas, en la cual una identidad trabajadora y contestataria, ligada al anarquismo, fue paulatinamente disolviéndose y, en su lugar, se constituyó otra, popular, conformista y reformista, contenida en sociedades de fomento y comités barriales (Gutiérrez y Romero, 1995). Todos estos estudios suponían que la derrota del peronismo en el año 1983 constituía una crisis y una oportunidad para un nuevo ordenamiento político, en el cual las identidades se hallarían ligadas a proyectos de democracia participativa y los partidos políticos asumirían la función de agregar demandas formuladas por movimientos sociales que el Estado procesaría en la agenda pública (Jelín, 1987; Gutiérrez y Romero, 1995).

En el decenio del 90, los trabajos académicos sobre movimientos sociales en América Latina se preguntaron si era posible construir democracias estables en medio de crisis y ajustes económicos, Estados débiles, con pocas posibilidades de satisfacer demandas mínimas de la población, y mercados internacionales fuertes

(Calderón, 1995). Para algunos, se vivía una situación paradójica, en la cual se podían disfrutar derechos civiles y políticos alcanzados con la institucionalización democrática, pero sin tener asegurada las condiciones básicas de subsistencia (Jelín, 1998). En este contexto, gran parte de los debates giraron en torno a las posibilidades que tenían los movimientos sociales de impulsar proyectos democráticos alternativos frente a los niveles de violencia, pobreza, discriminación y exclusión (Alvarez, Dagnino y Escobar, 1998).

Las formulaciones y los esquemas del campo de investigación sobre los movimientos sociales se impusieron con fuerza en las visiones de un importante número de trabajos sobre el *movimiento piquetero*. Se configuró una imagen homogénea que acentuó la confrontación de las diversas organizaciones de desocupados con el Estado, así como también los intentos gubernamentales por “cooptarlas” o “institucionalizarlas”. Se dieron supuestos por hechos como la “autonomía” y la “horizontalidad” de los diversos agrupamientos, y se generó un razonamiento tautológico que enfatizaba que tanto el surgimiento como el declive de estas organizaciones estaban dados por la presencia del peronismo entre los “sectores populares”. Ese razonamiento se sostenía sobre una doble reducción: la del peronismo a un tipo de vínculo político clientelar, y la de las organizaciones piqueteras a exponentes de formas políticas autónomas y democráticas.

Los resultados de esta tesis ponen de relieve una variedad de prácticas que tensionan las reificaciones analíticas que hacen hincapié en la distinción normativa entre los movimientos sociales, los partidos políticos y el Estado. Vistas desde los procesos transaccionales, las acciones de los movimientos sociales y las del Estado no pueden ser interpretadas por fuera de relaciones de poder históricamente construidas. Más aún, la gestión cotidiana de programas de empleo, las ocupaciones de espacios públicos, la configuración de escenarios de disputa constituyen indicadores de un proceso de producción conjunta de políticas estatales y modalidades de acción de los grupos subalternos.

El camino seguido en esta investigación procuró evadir los constreñimientos normativos impuestos por el campo académico sobre los movimientos sociales para restituir una visión de la sociedad como campo de fuerza, retomando los aportes de

Thompson (1984, 1992), Roseberry (1994) y Grimberg (1997). El concepto de campo de fuerzas se formuló para describir a la sociedad inglesa del siglo XVIII y analizar la "formación de clases", atendiendo a las particularidades históricas y al marco relacional, en el cual se destacaban la fortaleza militar e imperial del Estado inglés, y, al mismo tiempo, su debilidad en el manejo de asuntos internos a causa de las disputas entre la propia gentry, el control de los trabajadores sobre instrumentos y ritmos de producción en un contexto de transformación de modos de trabajo, las acciones directas de la plebe, y la expresión simbólica del conflicto y la lucha. En otros términos, el concepto se utilizó con un sentido descriptivo para comprender la configuración de relaciones sociales desde una visión de hegemonía:

"El concepto de hegemonía es inmensamente valioso, y sin él no sabríamos entender la estructuración de las relaciones del siglo XVIII. Pero mientras que esta hegemonía cultural pudo definir los límites de lo posible, e inhibir el desarrollo de horizontes y expectativas alternativos, este proceso no tiene nada de determinado y automático. Una hegemonía sólo puede ser mantenida por los gobernantes mediante un constante y diestro ejercicio de teatro y concesión. En segundo lugar, la hegemonía, cuando se impone con fortuna, no impone un visión de la vida totalizadora; más bien impone orejeras que impiden la visión en ciertas direcciones mientras que dejan libre otras" (Thompson, 1984: 60).

En esta tesis, el concepto de campo de fuerzas también actuó como una herramienta descriptiva que permitió comprender la configuración de relaciones desde y contra el Estado, así como también las particularidades que éstas asumieron a partir de la década del 90. Se trató de captar las tensiones, las correlaciones de fuerzas cambiantes y los condicionamientos recíprocos entre las políticas estatales y las modalidades de acción. Pero como bien apuntó Roseberry (1994), en el planteo de Thompson se iluminó fundamentalmente una relación bipolar *-plebe y gentry-*, tensamente equilibrada por las particularidades del siglo XVIII. En cambio, tanto Roseberry (1994) como Grimberg (1997) sugirieron el empleo de este concepto para reconstruir campos de fuerzas de múltiples disputas y múltiples formas de dominación. En el desarrollo de esta tesis, estos aportes resultaron fundamentales para entender las maneras de disputar, demandar, negociar y concertar con autoridades gubernamentales, pero también para advertir cómo las intervenciones

estatales se desdibujaban en un nivel de relación y las políticas aparecían como iniciativas personalizadas de *líderes, referentes y dirigentes*.

ÚLTIMOS DESPLAZAMIENTOS, ÚLTIMAS CONCLUSIONES

Inicié este trabajo relatando una serie de desplazamientos (de espacios, temas, categorías, enfoques) que me permitieron definir el problema de investigación y la tesis misma. Durante cuatro años, mi rutina cotidiana estuvo pautaada por viajes en la línea de colectivo 180, el descenso en algún punto de La Matanza y caminatas de entre diez y veinte cuadras hasta los lugares seleccionados para realizar trabajo de campo. En esos espacios permanecí largas horas, participando de conversaciones, escuchando relatos de vida, preguntando acerca de lo desconocido o desconcertante, observando y registrando escenas laborales, disputas y deliberaciones colectivas. Esa rutina se invirtió cuando me desplazé hacia otra instancia del *proceso de trabajo antropológico*: la escritura y la ardua tarea de representar en un texto emociones, el detalle de lo observado, percepciones, indicios y, sobre todo, a los sujetos que me habían confiado aspectos sustanciales de sus vidas. Por cierto que evoqué todas y cada una de las cuestiones abordadas en los debates disciplinares de las últimas dos décadas acerca de la producción de textos etnográficos (Clifford, 1996).

Sin embargo, considero que el aspecto crucial del problema no pasa por el desplazamiento de mi *yo* o el *yo del investigador*, sino por cómo abordar los efectos de intensas transformaciones sociales, políticas y económicas que reconfiguraron la experiencia cotidiana de los sujetos, desplazándolos hacia sitios inimaginables décadas atrás. Sólo para traer unos pocos ejemplos, trabajadores fabriles se transformaron en trabajadores eventuales (changarines), beneficiarios de programas de empleo y, al mismo tiempo, marcharon y cortaron rutas. Mujeres que se habían entregado a la crianza de sus hijos se encontraron *trabajando con los planes*, aprendiendo nuevas habilidades y, en muchos casos, socializando con sus compañeras problemas íntimos. Jóvenes en los que se habían cifrado expectativas de estudio y trabajo deambulaban por empleos sumamente temporarios, o por la

maraña de tribunales y jueces, mientras que otros habían perdido ya la vida. Militantes históricos redefinieron sus trayectorias para comprometerse en la disputa social y política en torno al problema de la desocupación. Antiguos sindicalistas, sobre todo de la CCC, que habían seguido de cerca la experiencia del Cordobazo de 1969, continuaban soñando con una revolución social encabezada por la clase obrera, pero de manera resignada, a la vez que enérgica, tomaban posición diariamente en infinitas riñas domésticas y barriales, como una escaramuza desatada por la sustracción de una olla en un piquete.

Las características de estos procesos y la complejidad de las tramas de relaciones políticas y cotidianas escapan a las capacidades de interpretación de las teorías de la acción colectiva, los movimientos sociales o el actor colectivo. Dado que varios de los temas tratados en esta tesis se inscriben, de algún modo, en un campo de estudio hegemónico por dichas teorías, considero que uno de los mayores desplazamientos ha sido el distanciarme de ellas y recuperar, reelaborar y redefinir conceptos y enfoques de la tradición antropológica de investigaciones sobre la política y el poder. Los resultados alcanzados se presentaron a lo largo de este trabajo, pero desde la perspectiva antropológica adoptada se manifiestan como desafío una serie de núcleos temáticos sobre los cuales se debe seguir avanzando en términos descriptivos y analíticos.

Los procesos de configuración y redefinición de escenarios de disputa política y social desde y contra el Estado constituyen un problema a seguir estudiando. Más allá del objeto de la disputa (tierra, trabajo, vivienda, programas de empleo, etc.), será preciso preguntarse por el peso de las experiencias históricas, por las tecnologías de formulación y presentación de demandas (censos, encuestas, petitorios, etc.), por la movilización de nociones legitimadoras, por los procesos de creación de demandas entre la población, y por la fuerza de políticas estatales para modelar y redefinir esos escenarios.

En esta tesis también se delineó otro núcleo temático referido a las "ocupaciones" de espacios públicos (rutas, edificios gubernamentales, plazas, puentes, viviendas construidas por programas estatales, etc.) y se sostuvo que esas ocupaciones se orientaban a la apertura de espacios de negociación con autoridades

gubernamentales (*"hacer bajar a los funcionarios"*), que desencadenaban un proceso rutinario y cotidiano de vinculación con el Estado y que se transformaban en oportunidades tanto para reforzar como para debilitar la legitimidad de los gobernantes. Para comprender los sentidos que ponen en juego esas acciones se deben reconstruir minuciosamente los contextos históricos y las tramas relacionales con las que se entretajan. Considero, entonces, que resta una reflexión más acabada sobre la manera en que los procesos de negociación se generan desde las dependencias gubernamentales; por ejemplo, cómo se seleccionan los funcionarios para encabezar los diálogos con los protagonistas de acciones de fuerza directa, cuáles son las trayectorias políticas y qué tipo de vínculo establecen cotidianamente con *dirigentes* o *líderes* de organizaciones sociales dedicadas a diversas temáticas.

La relación entre los "sujetos" y *las políticas* es otro foco temático que requiere de mayor análisis para la elaboración de categorías y conceptos teórico-metodológicos precisos. Durante el trabajo de campo, me impactó la manera en que las personas relataban experiencias de "sufrimiento" y las atestiguaban exhibiendo marcas en sus cuerpos (cicatrices de balas y cuchillos, pérdida de miembros en las extremidades, ceguera progresiva, tatuajes con el nombre o el rostro de parientes asesinados, etc.). Como he mostrado, las instancias de *trabajo con el plan* eran visualizadas, sobre todo en el caso de las mujeres, como una oportunidad para "desahogarse", como un ámbito en el que se compartían problemas íntimos con otros. De algún modo, desde esa dinámica relacional y esa interpretación se fue incorporando mi presencia en los barrios. Las personas entrevistadas recomendaban a otros brindar su testimonio expresando: *"Está bueno, porque uno hablando se desahoga"*; en varias ocasiones, luego de concluir las entrevistas, vociferaban: *"Uf, estoy más livianita, me saqué un montón de peso de encima"*.

Las actividades de campo vinculadas con la "escucha" de relatos de vida se convirtieron en una preocupación metodológica. En este sentido, reflexioné sobre cuestiones clásicas en nuestra disciplina; por ejemplo, la conveniencia de grabar entrevistas, fundamentalmente porque en varias oportunidades los entrevistados irrumpían en llanto; la demarcación de la tarea del antropólogo respecto de la de otros profesionales (en este caso, psicólogos), y el análisis sobre la naturaleza de los

datos surgidos en ese tipo de interacción. El ir y venir entre el trabajo de campo y las lecturas teóricas me permitió descubrir que me encontraba ante un problema de inmensa complejidad, que no se limitaba a cavilaciones sobre resoluciones metodológicas puntuales. Se trataba de un problema relacionado con modalidades políticas de gestión de la población y, en particular, con lo que varios autores, siguiendo los aportes de Foucault sobre la hermenéutica del sujeto, denominaron subjetivación (Shore and Wright, 1997; Fassin, 1999). Fassin (1999, 2003) analizó la emergencia de una política del sufrimiento, basada en la definición del individuo como *ser sufriente*, en términos de padecimiento psíquico, de dolor moral, concerniente a la mente antes que al cuerpo. Desde esa orientación, las políticas sociales francesas trataron problemas como la pauperización, la exclusión social y la violencia urbana, incorporando la “escucha” como una acción orientada a devolver humanidad a *seres sufrientes* frente al reconocimiento de que no se podía hacer demasiado para mejorar sus condiciones objetivas de existencia. El autor observó la rutina de “centros de escucha” destinados a jóvenes en las periferias parisinas, gestionados por asociaciones privadas con fondos públicos y distinguidos por la labor de psicólogos y trabajadores sociales.

En el caso de esta tesis, se ha mostrado cómo dirigentes de las organizaciones de desocupados asumían la tarea de “escuchar” relatos de padecimientos y enfermedades para encuadrar a ciertos sectores de la población dentro de políticas públicas sorteando una serie de normas elaboradas colectivamente. En otros casos, algunos *referentes* barriales sostenían: “*Yo no puedo hacer nada con lo que me cuentan, son historias terribles, de violaciones, abusos, pero por lo menos escucho y quiero que entre el grupo también se escuchen*”. En definitiva, se expresa un problema sumamente complejo que, en principio, revela dos aristas por las cuales es posible avanzar. Por un lado, resulta pertinente la descripción y el análisis de la conformación de experiencias sociales de sufrimiento, prestando atención a procesos históricos, a modalidades de desigualdad y opresión, y a las formas de percibir e interpretar de acuerdo con trayectorias de vida y con las condiciones de género y edad. Será preciso, entonces, recuperar los aportes de elaboraciones antropológicas sobre el “trauma” y la violencia estructural (Kleinman,

Das y Lock, 1997; Epele, 2001; Farmer, 2002; Grimberg, 2003). Por otro lado, y en relación con lo anterior, despunta como tema a profundizar la gestión política del sufrimiento, otorgando peso en el análisis tanto a las políticas públicas como al conjunto de actores que en la vida cotidiana administran esas experiencias. En este sentido, la reconstrucción de tramas relacionales permitirá captar el sentido político de esa gestión, o las combinaciones entre prácticas de disciplinamiento y control, así como también la transformación del sufrimiento en eje para la autogestión colectiva y para el fundamento de demandas hacia el Estado.

Finalmente, es probable que los piquetes y las organizaciones de desocupados sean dentro de pocos años materia de historiadores. Quizás las personas que anudaron sus vidas en esos procesos de movilización se desplacen hacia otros escenarios de disputa. Varios volverán a empleos estables; otros encontrarán cierta regularidad en trabajos eventuales, y circunstancialmente los sujetos participarán en acciones de fuerza directa en torno a diferentes objetos de demanda (tierra, vivienda, salud, educación, condiciones de trabajo, etc.). En esta tesis, los piquetes y las organizaciones de desocupados funcionaron como *sitios* desde los cuales se observó la articulación entre tradiciones históricas de organización sindical, social y política, experiencias de vida cotidiana y políticas estatales. Sitios clave que posibilitaron la reconstrucción de tramas de relación social y política para echar luz sobre las características que asumieron los vínculos entre el Estado y los grupos subalternos durante las dos últimas décadas. Un dato, sin lugar a dudas, aparece como constante: los hombres y las mujeres protagonistas de esas tramas vieron transformadas (deterioradas) sus condiciones de vida en ese intenso desplazamiento de *La Matanza Obrera a la Capital Nacional del Piquete*.

FUENTES CONSULTADAS

- **Fuentes ministeriales y gubernamentales**

-Instituto Nacional de Estadística y Censo. Censos de Población y Vivienda de los años 1947, 1960, 1970, 1980, 1991, 2001.

-Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de La Matanza. Expediente 17728/96. Objeto: Vecinos de los Barrios de la Olla Popular solicitan cumplimiento de los ocho puntos pactados con el Consejo de Emergencia.

-Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Resolución 03 del 10 de enero de 1996. Reglamentación del Programa Trabajar.

-Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Resolución 202 del 8 de mayo de 1997 (Secretaría de Empleo y Capacitación Laboral). Reglamentación del Programa Trabajar II.

-Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Resolución 327 dictada el 8 de mayo de 1998. Creación del Programa Trabajar III.

-Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Resolución 312 dictada el 16 de abril de 2002. Reglamentación del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.

-Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Resolución 420 dictada el 10 de junio de 2002. Reglamentación de la modalidad de "contraprestación" de los beneficiarios.

-Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Resolución 07 dictada el 27 de enero de 2003. Creación del Programa de Empleo Comunitario.

-Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Resolución 155 dictada el 21 de marzo de 2003. Creación del Plan Mayores.

-Ministerio de Trabajo (1999): *Estadísticas Laborales*. Nº 5

-Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Encuesta provincial nutricional de niños y embarazadas, 1994.

-Municipalidad de La Matanza. Acta de compromiso Acuerdo de Trece Barrios. San Justo, 24 de mayo de 1996.

-Municipalidad de La Matanza. Secretaría de Asuntos Comunitarios. Legajos de reconocimiento institucional de asociaciones de las localidades de Gregorio de Laferrere e Isidro Casanova.

-Poder Ejecutivo Nacional. Decreto 165 promulgado el 22 de enero de 2002. Creación del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.

-Poder Ejecutivo Nacional. Decreto 565 promulgado el 3 de abril de 2002. Segunda Creación del Programa Trabajar como "Derecho Familiar a la Inclusión".

- **Publicaciones de Organismos Internacionales de Crédito y de Asesorías Técnicas**

-Gallasso, Emanuela, Ravallion, Martín y Salvia, Agustín (2001): "Assisting the Transition from Workfare to work: A randomized experiment". In *Working Paper Nº 2738*. The World Bank, Washington DC,

-Jalan, Jyotsna and Ravallion, Martín (1999): "Income Gains to the Poor from Workfare. Estimates for Argentina's Trabajar Program". *Development Research Group. Poverty and Human Resources*. World Bank, Washington, D.C, U.S.A.

-Kliksberg, Bernardo (1998): "Seis Tesis no convencionales sobre participación". En *Revista Paraguaya de Sociología*, N° 102.

-Ravallion, Martin (1999): "Monitoring Targeting Performance when Decentralized Allocations to the Poor are Unobserved". *Development Research Group. Poverty and Human Resources*. World Bank, Washington, D.C, U.S.A.

-Ravallion, Martin (1999): "Is More Targeting Consistent with Less Spending?". World Bank, Washington, D.C, U.S.A.

-Ravallion, Martin; Galasso, Emanuela; Lazo, Teodoro; Philipo, Ernesto (2001): "Do workfare participants recover quickly from retrenchment?". The World Bank, Washington, DC.

-Sojo, Ana (1999): "La política social en la encrucijada: ¿opciones o diyuntivas?". En Carpio y Novacovsky (comp.): *De igual a igual. El desafío del Estado ante los nuevos problemas sociales*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica-SIEMPRO-FLACSO, pp. 267-288

-The World Bank (1988) *Argentina. Social Sectors in Crisis. A World Bank Country Study*. Washington, DC, U.S.A.

-The World Bank (1996): "Poverty Assessment Summaries-Argentina-". In *Poverty Reduction and the World Bank. Progress and challenge in the 1990s*. Washington, D.C.

-The World Bank (1996a): "Panel Discussion: The Role of the State in Reducing Poverty". In *Annual World Bank Conference on Development in Latin American and The Caribbean: Poverty and Inequalities*. Washington, D.C

-Casanova Hoy, marzo de 2001: "90 años de vidas, historias y crecimientos"

-Gregorio de Laferrere: Historia de una ciudad (1911-1973). Documento presentado por la Dirección de la Juventud de La Matanza en los "Torneos Juveniles Bonaerenses 2000"

-Junta de Estudios históricos, Geográficos y Estadísticos del Partido de La Matanza. Cartas Informativas números I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII. Período Noviembre 2000 a Agosto 2005.

-Viglione, Edgardo (2000): *Memorias de San Justo (1637-1940)*. Buenos Aires: Editorial Puma.

- **Publicaciones vinculadas con la CCC y el Partido Comunista Revolucionario**

-Alderete, Juan Carlos y Gómez, Arnoldo (1999): *La desocupación en el infierno menemista*. Buenos Aires: Cuadernos de la Editorial Agora.

-Doval, H.; H. Micucci; y E. Stein (1992): *Salud: crisis del sistema. Propuestas desde la medicina social*. Buenos Aires: Editorial Agora.

-*Revista época*, año 2, Nº 2, noviembre de 2000. Reportaje a Amancay Ardura (Coordinador de la Corriente Clasita y Combativa). Pp. 233-242.

-*Semanario Del comunismo Revolucionario de Argentina. Hoy. Servir Al Pueblo*.

Año 2001: números 863, 865, 866, 867, 868, 869, 872, 873, 874, 875, 876, 885.

Año 2002: números 906, 907, 908, 909.

Año 2003: números 958, 959, 991.

Año 2004: números 1005, 1006, 1039.

Año 2005: números 1075, 1078, 1082.

Declaraciones y presentaciones oficiales

-Boletín de los Barrios de la Olla Popular Mayo de 1996.

-“Carta Abierta a los Vecinos de Nuestros Barrios”. Delegados de los 22 barrios de la Olla Popular. 6/7/96.

-“Totales parciales del Censo entregado por los Barrios de la Olla a la Municipalidad de La Matanza”. 29/5/96.

- **Publicaciones vinculadas con la FTV y la CTA**

-Brancoli, Javier, Rosso, Daniel; y Giraldez, Soraya: “Federación de Trabajadores por la Tierra, la vivienda y el Hábitat-FTV”. S/F.

-Debate para la organización de los Trabajadores. Encuentro de Organizaciones y dirigentes sindicales reunidos en la localidad de Burzaco (Provincia de Buenos Aires) el 17 de diciembre de 1991.

-Documentos del 1º Congreso Nacional de Delegados de la CTA, 4 y 5 de noviembre de 1996.

- **Prensa Gráfica**

-*Diario Crónica*: 19/6/96 y 20/6/96.

-*Diario Clarín*: 14/2/86, 20/6/96. 27/6/96, 31/7/01, 26/7/01/ 25/7/01, 27/7/01. Primera Quincena de noviembre de 2000 y primera quincena de mayo de 2001.

-*Diario Noticias Con Objetividad (NCO)*: 23/5/96 y 6/6/96.

-*Diario Página 12*: 6/6/96, 20/6/96, 4/7/00.

- **Publicaciones vinculadas con la Iglesia Católica**

Bosco, Teresio (1986): *Don Bosco, una biografía nueva. Edición para la Juventud*. Buenos Aires: Ediciones Don Bosco.

Los Sacerdotes para el Tercer Mundo y la Actualidad Nacional (1973). Ediciones La Rosa Blindada: Buenos Aires.

Vernazza, Jorge (1989) *Para comprender una vida con los pobres: los curas villeros*. Buenos Aires: Editorial Guadalupe.

- **Otras Organizaciones**

-Flores, Toty (2002): *De la culpa a la autogestión. Un recorrido del Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Matanza*. La Matanza: MTD Editora.

-MTD de Solano y Colectivo Situaciones (2002): *La Hipótesis 891. Más allá de los piquetes*. Buenos Aires: Ediciones de Mano en Mano.

BIBLIOGRAFIA

- Abal Medina, Juan Manuel –h.– (1998): "Los herederos del populismo. La experiencia del PRD y el Frente Grande". En *Nueva Sociedad*, N° 157, pp. 87-106.
- Abu -Lughod, Lila (1990): "The romance of resistance: tracing transformations of power through Bedouin women". En *American Ethnologist*, V. 17 (1), pp. 41-55.
- Achilli, Elena (2005): *Investigar en Antropología Social. Los desafíos de transmitir un oficio*. Rosario: Laborde Editor.
- Alavi, Hamsa (1976): *Las clases campesinas y sus lealtades primordiales*. Barcelona: Anagrama.
- Alayón, Norberto (1992): *Historia del trabajo social en Argentina*. Buenos Aires: Espacio Editorial.
- (2000): *Asistencia y asistencialismo. Pobres controlados o erradicación de la pobreza*. Buenos Aires: Lumen-Humanitas.
- Albro, Robert (2005): "The Water is Ours, Carajo!. Deep Citizenship in Bolivia's Water War". En Nash, June (org.): *Social Movements. An Anthropological Reader*. Malden, Oxford and Carlton: Blackwell Publishing. Pp. 249-271.
- Aldmon, Gabriel y Verba, Sidney (1989): *The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Newbury Park y Londres: Sage Publications.
- Alvarez, Sonia; Dagnino, Evelina; y Escobar, Arturo (1998): *Cultures of politics/politics of cultures: Re-visioning Latin American Movements*. Boulder: Westview Press.
- Alvarez, Sonia (1998): "Latin American Feminisms 'Go Global': Trenches of the 1990s and challenges for the New Millennium". En Alvarez, Sonia; Dagnino, Evelina; y Escobar, Arturo (1998): *Cultures of politics/politics of cultures: Re-visioning Latin American Movements*. Boulder: Westview Press. Pp. 293-324.
- Anderlini, Silvia (2004): "Teología de la Liberación y Globalización en América Latina". En Bonetto, Susana; Casarin, Marcelo; y Piñero, María (org.): *Escenarios y nuevas construcciones identitarias en América Latina*. Córdoba: Universidad Nacional de Villa María, Centro de Estudios Avanzados-Universidad Nacional de Córdoba. Pp. 25-36.
- Anderson, Perry (1981): *Las antinomias de Antonio Gramsci. Estado y revolución en occidente*. Barcelona: Fontamara.

Andrenacci, Luciano; Neufeld, María Rosa; y Raggio, Liliana (2000): "Elementos para un análisis de programas sociales desde la perspectiva de los receptores". Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento.

Aristizábal, Zulema e Izaguirre, Inés (1988): *Las tomas de tierras en el Sur del Gran Buenos Aires. Un ejercicio de formación de poder en el campo popular*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Armellino, Martín (2004): "La protesta laboral en los '90: El caso de la CTA". En *Estudios del Trabajo*, N° 28, pp. 3-26.

Asad, Talal (2002): "Market model, class structure and consent: a reconsideration of Swat political organization". En Vincent, Joan (comp.): *The Anthropology of politics. A reader in ethnography, theory and critique*. Massachusetts. Blackwell Publishers. [Edición original, *Man*, 7(1), 1972, pp. 74-89]

----- (2004): "Where are the margins of the State?". En Das, Veena and Poole, Deborah: *Anthropology in the margins of the State*. Santa Fe-Oxford: School of American Research Press & James Currey. Pp. 279-288.

Auyero, Javier (2001): *La política de los pobres*. Buenos Aires: Manantial.

----- (2002): *La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina Democrática*. Buenos Aires: Libros del Rojas-UBA.

----- (2004): *Vidas Beligerantes. Dos mujeres argentinas, dos protestas y la búsqueda de reconocimiento*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

Azpiazu, Daniel (1997): "El nuevo perfil de la elite empresaria. Concentración del poder económico y beneficios extraordinarios". En *Realidad Económica*, N° 145, pp. 7-32.

Aspiazu, Daniel; Basualdo, Eduardo; y Schorr, Martín (2000): *La reestructuración y el redimensionamiento de la producción industrial argentina durante las últimas décadas*. Buenos Aires: Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos.

Balandier, Georges (1975): *Antropo-lógicas*. Barcelona: Ediciones Península.

Barth, Frederik (1959): "Segmentary opposition and the theory of games: a study of Pathan organization". En *The Journal of the Royal Anthropological Institute*, V. 89 (1), pp. 5 - 21.

Barth, Frederik (1959a): *Political Leadership among the Swat Pathans*. London: Althone Press.

Basualdo, Eduardo (2000): *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década del noventa. Una aproximación a través de la reestructuración económica y el comportamiento de los grupos económicos y capitales extranjeros*. Buenos Aires: FLACSO/Universidad Nacional de Quilmes/IDEP.

-----(2001): *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina. Notas sobre el transformismo argentino durante la valorización financiera (1976-2001)*. Buenos Aires: FLACSO/Universidad Nacional de Quilmes/IDEP.

Beccaria, Luis y López, Néstor (1994): "Reconversión productiva y empleo en la Argentina." En *Revista Doxa*, N° 11/12, pp. 49-57.

Beccaria, Luis (2002): "Empleo, remuneraciones y diferenciación social en el último cuarto del siglo XX". En Murmis, Miguel y Feldman, Silvio (org.): *Sociedad y sociabilidad en la Argentina de los 90*. Buenos Aires: Biblos-Universidad de General Sarmiento. Pp. 27-54.

Bellardi, Marta y De Paula, Aldo (1986): *Villas miseria: origen, erradicación y respuestas populares*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Berger, Thomas y Luckmann, Peter (1972): *La construcción de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu.

Bourdieu, Pierre (1981): "La représentation politique: Éléments pour une théorie du champ politique". *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, 36/37, pp. 3-24.

-----(1990): *Sociología y Cultura*. México: Grijalbo-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

-----(1991): *El sentido práctico*. Madrid: Taurus.

-----(1996): *Cosas Dichas*. Barcelona: Gedisa.

-----(1999): *La miseria del mundo*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Burdick, John (1998): *Blessed Anastácia. Women, race and popular Christianity in Brazil*. New York-London: Routledge.

Bustelo, Eduardo (1992): "La producción del Estado de Malestar. Ajuste y política social en América Latina". En Murmis, Miguel y Feldman, Silvio (comp.): *Cuesta abajo. Los nuevos pobres: efectos de la crisis en la sociedad argentina*. Buenos Aires: Losada. Pp. 119-142.

Bustelo, Eduardo y Minujín, Alberto (1997): "La política social esquiva". En *Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes*, N° 6.

Cafassi, Emilio (2002): *Olla a Presión. Cacerolazos, Piquetes y Asambleas sobre Fuego Argentino*. Buenos Aires: Libros del Rojas-UBA.

Calderón, Fernando (1995): *Movimientos sociales y política. La década de los ochenta en Latinoamérica*. México: Siglo XXI.

Calhoun, Craig (1999): "El problema de la identidad en la acción colectiva". En Auyero, Javier (comp.): *Caja de Herramientas. El lugar de la cultura en la sociología norteamericana*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes. Pp. 77-114.

Carvalho Rosa, Marcelo (2005): "Quando o sentido é o movimento: a "forma movimento" como modelo contemporâneo de ação coletiva no Brasil". Ponencia Presentada en la VI Reunión de Antropología del MERCOSUR, Montevideo-Uruguay.

Castel, Robert (1997): *La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado*. Buenos Aires: Paidós.

Castellani, Ana (2003): "Modelo neoliberal y grandes agentes económicos. Un análisis de las principales transformaciones ocurridas en la cúpula empresarial argentina durante la década de los noventa". En Ramos, Laura (coord.): *El fracaso del consenso de Washington. La caída de su mejor alumno: Argentina*. Barcelona: Icaria-Más Madera. Pp. 51-66.

Cavarozzi, Marcelo y Palermo, Vicente (1994): "Estado, sociedad civil y organizaciones populares vecinales en Buenos Aires". En Reilly, Charles (comp.): *Nuevas políticas urbanas*. Virginia: Fundación Interamericana.

Certau, Michel de (1996): *La invención de lo cotidiana. I. Artes de hacer*. México: Universidad Iberoamericana. Departamento de Historia. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos.

Cerulo, Karen (1997): "Identity Construction: New Issues, New Directions". En *Annual Review of Sociology*, N° 23, pp. 385-409.

Chiara, Magdalena (1991): "El modelo de gestión del Programa Alimentario Integral y Solidario: Una relectura de su implementación". En Peñalva, Susana y Rofman, Alejandro (comp.): *Desempleo y pobreza estructural en la Argentina*. Buenos Aires: OIT-CLACSO.

----- (1996): "La focalización: Del ajuste del gasto a la construcción de nuevas relaciones sociales". En *Cuadernos de Antropología Social*, N° 9, pp. 39-51.

Chiozza, Elena (2000): "La integración del Gran Buenos Aires". En Romero, José Luís y Romero, Luís Alberto (editores): *Buenos Aires. Historia de cuatro siglos*.

Buenos Aires: Altamira. Pp. 411-434 [Edición original: Buenos Aires, Editorial Abril, 1983].

Clifford, James (1995): *Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna*. Barcelona: Gedisa [Edición original en inglés: Harvard University Press, 1988].

Cohen, Jean (1985): "Estrategia o identidad: Paradigmas teóricos nuevos y movimientos sociales contemporáneos". En *Cuadernos de Ciencias Sociales. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)*. Pp. 3-42.

Colom, Yolanda y Salomone, Alicia (1998): "Las coordinadoras inter-fabriles de Capital y Gran Buenos Aires, 1975-76". En *Razón y Revolución*, N° 4, pp. 111-122.

Comaroff, Jean and John (1991): *Of Revelation and Revolution, vol 1: Christianity, colonialism, and consciousness in South Africa*. Chicago: University of Chicago Press.

Craig Jenkins, J. (1994): "La teoría de la movilización de recursos y el estudio de los movimientos sociales". En *Zona Abierta*, N° 69, pp. 5-45.

Cravino, María Cristina (1998): "Los asentamientos del Gran Buenos Aires. Reivindicaciones y contradicciones". En Neufeld, María Rosa; Grimberg, Mabel; Tiscornia, Sofía y Wallace, Santiago (comp.): *Antropología Social y Política. Hegemonía y poder: el mundo en movimiento*. Buenos Aires: EUDEBA. Pp. 261-284.

Cravino, María Cristina y Neufeld, María Rosa (2001): "Los saqueos y las ollas populares de 1989 en el Gran Buenos Aires. Pasado y presente de una experiencia formativa". Ponencia presentada a las V Jornadas Rosarinas de Antropología Social. Rosario.

Crehan, Kate (2004): *Gramsci, Cultura y Antropología*. Barcelona: Bellaterra.

Cross, Cecilia y Montes Cató, Juan (2002): "Crisis de representación e identidades colectivas en los sectores populares. Acerca de las experiencias de las organizaciones piqueteras". En Battistini, Osvaldo (comp.): *La atmósfera incandescente. Escritos sobre la Argentina movilizada*. Buenos Aires: ASET.

Dagnino, Evelina (1998): "Culture, Citizenship, and Democracy: Changing Discourses and Practices of the Latin American Left". En Alvarez, Sonia; Dagnino, Evelina; y Escobar, Arturo (1998): *Cultures of politics/politics of cultures: Re-visioning Latin American Movements*. Boulder: Westview Press. Pp. 33-63.

Das, Veena and Poole, Deborah (2004): "State and Its Margins. Comparative Ethnographies". En Das, Veena and Poole, Deborah: *Anthropology in The Margins of The State*. Santa Fe-Oxford: School of American Research Press & James Currey. Pp. 3-34.

Dean, Michael (1999): *Governmentality. Power and Rule in Modern Society*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.

Delamata, Gabriela (2004): *Los barrios desbordados. Las organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires*. Buenos Aires: Libros del Rojas.

Delrio, Walter (2001): "Confinamiento, deportación y bautismos: misiones salesianas y grupos originarios en la costa del Río Negro (1883-1890)". En *Cuadernos de Antropología Social*, N° 13, pp. 131-155.

Díaz Alejandro, Carlos (1983): *Ensayos sobre la historia económica argentina*. Buenos Aires: Amorrortu.

Doane, Molly (2005): "The Resilience of Nationalism in a Global Era: Megaprojects in México's South". En Nash, June (Org.): *Social Movements. An Anthropological Reader*. Malden, Oxford and Carlton: Blackwell Publishing. Pp. 187-202.

Doyon, Louise (1988): "La organización del movimiento sindical peronista". En Torre, Juan Carlos (Org.): *La formación del sindicalismo peronista (1946-1955)*. Buenos Aires. Legasa. Pp. 184-219

Edelman, Marc (2001): "Social Movements: Changing paradigms and forms of politics". En *Annual Reviews of Anthropology*, 30, pp. 285-317.

-----(2005): "When Networks Don't Work: The Rise and Fall and Rise of Civil Society Initiatives in Central America". En Nash, June (org.) *Social Movements. An Anthropological Reader*. Malden, Oxford and Carlton: Blackwell Publishing. Pp. 29-45.

-----(2005a): "Bringing the Moral Economy back in . . . to the Study of 21st-Century Transnational Peasant Movements". En *American Anthropologist*, V. 107 (3), pp. 331-345.

Epele, María (2001): "Violencias y traumas: políticas del sufrimiento social entre usuarias de droga". En *Cuadernos de Antropología Social*, N° 14, pp. 117-138.

Ernandez Macedo, Marcelo (2005): "Entre a violência e a espontaneidade: reflexões sobre os proceos de mobilização para ocupações de terra no Rio de Janeiro". En *Mana*, 11 (2), pp. 473-497.

Escobar, Arturo (1992): "Culture, practice and politics. Anthropology and the study of social movements". En *Critique of anthropology*, 12 (4), pp. 395-432.

Falcón, Romana (1994): "Force and the search for consent: the role of the *jefaturas políticas* of Coahuila in National State Formation". En Joseph, Gilbert and Nugent,

Daniel (editors): *Everyday forms of state formation. Revolution and the negotiation of rule in modern Mexico*. Durham and London: Duke University Press. Pp. 107-134.

Farinetti, Marina (1999) "¿Qué queda del "movimiento obrero" ?". Las formas del reclamo laboral en la nueva democracia argentina". En *Trabajo y Sociedad Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas*, V. 1 (1).

Farmer, Paul (1997): "On Suffering and Structural Violence: A View from Below". En Kleinman, Arthur; Das, Vena; y Lock, Margaret (1997): *Social Suffering*. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press. Pp. 261-284.

Fassin, Didier (1999): "La Patetización del Mundo. Ensayo de antropología política del sufrimiento". En: Garay, G. y Viveros, M. (Eds.): *Cuerpos, diferencias y desigualdades*. Bogotá: Edición Universidad Nacional. Pp. 31-41.

----- (2003): "Gobernar por los cuerpos. Políticas de reconocimiento hacia los pobres y los inmigrantes en Francia". En *Cuadernos de Antropología Social*, N° 17, pp. 49-78.

Fernández Alvarez, María Inés (2006): "De la supervivencia a la dignidad. Una etnografía de los procesos de recuperación de fábricas en la ciudad de Buenos Aires." Tesis de Doctorado: Universidad de Buenos Aires-Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris).

Fernández Alvarez, María Inés y Virginia Manzano (2005): "La construcción social del desempleo: Producción de sentidos y prácticas en la Argentina contemporánea". Ponencia presentada al 1º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología, Rosario, Facultad de Humanidades y Artes.

Ferraudi Curto, María Cecilia (2005): "*Lucha y papeles: Categorías de enfrentamiento en torno a la distribución de recursos en una organización de desocupados del Sur del Gran Buenos Aires*". Buenos Aires: Mimeo.

----- (2005a): "Ni pobreza ni piqueteros: El Proyecto de las Unidades de Gestión Local en Varela, Gran Buenos Aires". Ponencia presentada al 1º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología, Rosario, Facultad de Humanidades y Artes.

Foucault, Michel (1976): *Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

----- (1977): *Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber*. México: Siglo XXI.

-----(1991): "La gubernamentalidad". En AA. VV: *Espacios de Poder*. Madrid: La Piqueta.

-----(1992): *Microfísica del Poder*. Madrid: Ediciones de La piqueta.

-----(1996): *La verdad y las formas jurídicas*. Barcelona: Gedisa.

Fortes, M y Evans Pritchard, E. (1979): "Sistemas políticos africanos". En LLObera (comp.): *Antropología política*. Barcelona: Anagrama.

Frankenberg, Ronald (1982): "Introduction: A social anthropology for Britain?". In Frankenberg (ed.): *Custom and conflict in British Society*. Manchester: Manchester University Press.

Frederic, Sabina (2003): "De la plaza al barrio. Los científicos sociales y la identidad de los Sectores Populares en la transición democrática (1982-1987)". En Rosato, Ana y Balbi, Fernando (comp.) *Representaciones Sociales y Procesos Políticos. Estudios desde la antropología Social*. Buenos Aires: Antropofagia. Pp. 247-267.

----- (2004): *Buenos vecinos, malos políticos. Moralidad y política en el Gran Buenos Aires*. Buenos Aires: Prometeo.

Galín, Pedro y Novick, Marta (1990): *La precarización del empleo en la Argentina*. Buenos Aires: CEAL-OIT-CLACSO.

García Delgado, Daniel y Silva, Juan (1989): "El movimiento vecinal y la democracia: Participación y control en el Gran Buenos Aires". En Jelín, Elizabeth (comp.): *Los nuevos movimientos sociales. Mujeres. Rock nacional. Derechos humanos. Obreros. Barrios*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. Pp. 217-240.

Gellner, Ernest (1986): "Patronos y clientes". En Gellner, Ernest: *Patronos y clientes en las sociedades mediterráneas*. Gijón: Jucar Universidad. Pp. 9-16.

Germani, Gino (1973): *El concepto de marginalidad. Significado, raíces históricas y cuestiones teóricas, con particular referencia a la marginalidad urbana*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

Giménez, Gilberto (1994): "Los movimientos sociales. Problemas teórico-metodológicos". En *Revista mexicana de sociología*, N° 2, pp. 4-14.

Girbal Blacha, Noemí (2003): "La Junta Nacional para Combatir la Desocupación. Tradición y Modernización Socioeconómica en la Argentina de los años treinta". En *Revista Estudios del Trabajo*, N° 25, pp. 25-53.

Gledhill, John (1996): "Putting the State back in without leaving the dialectics out social movements, elites and neoliberalism". Department of Social Anthropology. University of Manchester.

----- (1998): "Thinking about State, subalterns and power relations in a World of flows". *ICCCR International Conference on Transnationalism*. Department of Social Anthropology, University of Manchester.

----- (2000): *El poder y sus disfraces. Perspectivas antropológicas de la política*. Barcelona: Ediciones Bellaterra.

Gluckman, Max (2003): "Análisis de la situación en Zululandia moderna: La organización social". En *Bricolage*, N° 1.

Gomes da Cunha, Olivia (1998): "Black Movements and the Politics of Identity in Brazil". En Alvarez, Sonia; Dagnino, Evelina; y Escobar, Arturo (1998): *Cultures of politics/politics of cultures: Re-visioning Latin American Movements*. Boulder: Westview Press. Pp. 220-251.

González Bombal, María Inés y Palermo, Vicente (1987): "La política local". En Jelin, E. (comp.): *Movimientos sociales y democracia emergente/1*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. Pp. 34-83.

Goodwin, Jeff; Jasper, James; Polleta, Francesca (2001): "Why Emotions Matter". En Goodwin, Jeff; Jasper, James; Polleta, Francesca (comp.): *Passionate Politics. Emotions and Social Movements*. Chicago-Londres: The University of Chicago Press. Pp. 1-24.

Gould, R. (1995): *Insurgent identities: class, community and protest in Paris from 1848 to the commune*. Chicago: University of Chicago Press.

Gramsci, Antonio (1997): *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*. Buenos Aires: Nueva Visión [Primera edición 1984, traducción de José Aricó].

Grassi, Estela (2003): *Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra década infame (I)*. Buenos Aires: Espacio Editorial.

Grassi, Estela; Hintze, Susana; y Neufeld, María Rosa (1996): "Crisis del Estado de bienestar y construcción del sentido de las políticas sociales". *Cuadernos de Antropología Social*, N° 9, pp. 15-38.

Grassi, Estela y Neufeld, María Rosa (2003): "A la vuelta de la globalización neoliberal. La crisis social en Argentina". En Ramos, Laura (comp): *El fracaso del consenso de Washington. La caída de su mejor alumno: Argentina*. Barcelona: Icaria-Más Madera. Pp. 83-96.

Grimberg, Mabel (1997): *Demanda, negociación y salud. Antropología social de las representaciones y prácticas de trabajadores gráficos 1984-1990*. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras-CBC/UBA.

----- (2003): "Narrativas del cuerpo. Experiencia cotidiana y género en personas que viven con VIH". En *Cuadernos de Antropología Social*, N° 17, pp. 79-100.

----- (2005): "Protesta Social y Resistencia o el problema de los límites de la hegemonía". Ponencia presentada al 1º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología, Rosario, Facultad de Humanidades y Artes.

Grimberg, Mabel; Carrozzi, Blanca; Lahite, Leticia; Mazzatelle, Liliana; Risech, Estela; y Olrog, Catalina (1998): "Modos y Trayectorias de vida, una aproximación a las relaciones de género (estudio de dos casos)". En Neufeld, María Rosa; Grimberg, Mabel; Tiscornia, Sofía; y Wallace, Santiago (comp.): *Antropología Social y Política. Hegemonía y poder: el mundo en movimiento*. Buenos Aires: EUDEBA. Pp. 225-232.

Grimberg, Mabel; Fernández Álvarez, María Inés; y Manzano, Virginia (2004): "Modalidades de acción política, formación de actores y procesos de construcción identitaria: un enfoque antropológico en piqueteros y fábricas recuperadas". En: Bonetto, Susana; Casarin, Marcelo; y Piñero, María (org.): *Escenarios y nuevas construcciones identitarias en América Latina*. Córdoba: Universidad Nacional de Villa María, Centro de Estudios Avanzados-Universidad Nacional de Córdoba. Pp. 185-198

Grimberg, Mabel; Schavelzon, Salvador; Barna, Agustín; Peluso, Maximiliano; y González Martín, Miranda (2004): "Identificaciones y disputas de sentido en asambleas barriales. Análisis de la construcción política de la categoría vecino". En *Intersecciones en Antropología*, N° 5, pp. 167-175.

Grueso, Libia, Rosero, Carlos y Escobar, Arturo: "The Process of Black Community Organizing in the Southern Coast Region of Colombia". En Alvarez, Sonia; Dagnino, Evelina; y Escobar, Arturo (1998): *Cultures of politics/politics of cultures: Re-visioning Latin American Movements*. Boulder: Westview Press. Pp. 196-219.

Guha, Ranajit (1983): *Elementary aspects of peasant insurgency in colonial India*. New Delhi: Oxford University Press.

Gutiérrez, Leandro (2000): "Los trabajadores y sus luchas". En Romero, José Luis y Romero, Luis Alberto: *Buenos Aires. Historia de Cuatro Siglos*. Buenos Aires: Grupo Editor Altamira. Pp. 65-81. [Edición original: Buenos Aires, Editorial Abril, 1983]

Gutiérrez, Leandro y Romero, Luis Alberto (1995): *Sectores populares, cultura y política. Buenos Aires en la entreguerra*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

Handler, Joel (2003): "Ciudadanía social y workfare en Estados Unidos y Europa occidental: de status a contrato". En Lindenboim, Javier y Danani, Claudia: *Entre el trabajo y la política. Las reformas de las políticas sociales argentinas en perspectiva comparada*. Buenos Aires: Editorial Biblos. Pp. 169-204.

Heller, Agne (1972): *Historia y vida cotidiana. Aportación a la sociología socialista*. Barcelona: Grijalbo.

Hobsbawm, Eric (1983): *Marxismo e historia social*. México: Universidad Autónoma de Puebla.

Hyatt, Susan (1997): "Poverty in a 'post-welfare' landscape: Tenant management policies, self-governance and the democratization of knowledge in Great Britain". En Shore, Cris and Wright, Susan (ed.): *Anthropology of policy. Critical perspectives on governance and power*. London & New York: Routledge. Pp 217-238.

James, Daniel (1995): "El 17 y 18 de Octubre de 1945: El peronismo, la protesta de masas y la clase obrera argentina". En Torre, Juan Carlos (comp.): *El 17 de Octubre de 1945*. Buenos Aires: Ariel. Pp. 83-129.

Jelín, Elizabeth (1987): "Movimientos sociales y consolidación democrática en la Argentina actual". En Jelín, Elizabeth (comp.): *Movimientos sociales y democracia emergente/1*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. Pp. 7-33.

----- (1998): "Toward a Culture of Participation and Citizenship: Challenges for a More Equitable World". En Alvarez, Sonia; Dagnino, Evelina; y Escobar, Arturo (1998): *Cultures of politics/politics of cultures: Re-visioning Latin American Movements*. Boulder: Westview Press. Pp. 405-414.

Jorge, Eduardo (1971): *Industria y concentración económica. Desde principios de siglo hasta el peronismo*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Joseph, Gilbert and Daniel Nugent (1994): "Popular culture and state formation in Revolutionary Mexico". En Joseph, Gilbert and Nugent, Daniel (editors): *Everyday forms of state formation. Revolution and the negotiation of rule in modern Mexico*. Durham and London: Duke University Press.

Kleinman, Arthur; Das, Vena; y Lock, Margaret (1997): *Social Suffering*. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press.

Kutz, Donald (1996): "Hegemony and anthropology: Gramsci, exegeses, reinterpretations". En *Critique of anthropology*, V. 16 (2), pp. 105-155.

Laclau, Ernesto (2005): *La razón populista*. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica de Argentina.

Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal (2004): *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica [Edición original: Londres, Verso, 1985].

Lagos, María (1993): "We have to learn to ask: hegemony, diverse experiences, and antagonistic meanings in Bolivia". En *American Ethnologist*, 20 (1), pp. 52-71.

----- (1997): *Autonomía y poder. Dinámica de clase y cultura en Cochabamba*. Bolivia: Plural Editores y Centro de Información para el Desarrollo.

Landé, Carl (1977): "The Dyadic Basis of Clientelism". In Schmidt, S. (eds.): *Friends, followers and factions: A reader in political clientelism*. Berkley: University of California Press. Pp. 75-99.

Lazzari, Axel (1993): "Panorama de la Antropología Política del clientelismo". En *Cuadernos de Antropología Social*, N° 7, pp. 9-34.

Leach, Edmund (1976): *Sistemas políticos de la Alta Birmania. Estudio sobre la estructura social Kachin*. Barcelona: Editorial Anagrama.

Lechner, Norbert (1996): "Los nuevos perfiles de la política". En *Revista Nueva Sociedad*, N° 130, pp. 32-43.

Levine, Daniel y Mainwaring, Scott (2001): "Religión y protesta popular en América Latina: Experiencias contrastantes". En Eckstein, Susan (comp.): *Poder y Protesta Popular. Movimientos Sociales Latinoamericanos*. México: Siglo XXI. Pp. 237-273.

Lewellen, Ted (1985): *Introducción a la antropología política*. Barcelona: Bellaterra.

Llistar, David (2003): "El consenso de Washington una década después". En Ramos, Laura (coord.): *El fracaso del consenso de Washington. La caída de su mejor alumno: Argentina*. Barcelona: Icaria, Más Madera.

Lindenboim, Javier (2003): "El mercado de trabajo en la Argentina en la transición secular: cada vez menos y peores empleos". En Lindenboim, Javier y Danani, Claudia: *Entre el trabajo y la política. Las reformas de las políticas sociales argentinas en perspectiva comparada*. Buenos Aires: Biblos. Pp. 57-88.

Lins Ribeiro, Gustavo (1998): "Cybercultural Politics: political Activism at a Distance in a Transnacional World". En Alvarez, Sonia; Dagnino, Evelina; y Escobar, Arturo (1998): *Cultures of politics/politics of cultures: Re-visioning Latin American Movements*. Boulder: Westview Press. Pp. 325-352.

Lobato, Mirta (2004): *La vida en las fábricas. Trabajo, protesta y política en una comunidad obrera, Berisso (1904-1970)*. Buenos Aires: Prometeo.

Lobato, Mirta y Suriano, Juan (2003): *La protesta social en Argentina*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Lomnitz, Larissa (1975): *Cómo sobreviven los marginados*. México: Ediciones Siglo XXI.

McAdam, Doug; McCarthy, John; and Zald, Mayer (1999): "Oportunidades, estructuras de movilización y procesos enmarcadores: Hacia una perspectiva sintética y comparada de los movimientos sociales". En McAdam, Doug; McCarthy, John; and Zald, Mayer: *Movimientos Sociales: Perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*. Madrid: Editorial Istmo. Pp. 21-46.

McAdam, Doug; Tarrow, Sidney; and Tilly, Charles (2001): *Dynamics of contention*. New York: Cambridge University Press.

Malinowski, Bronislaw (1935): *Coral Gardens and their Magic*. London: George Allen & Unwin Ltd.

----- (1969): *Crimen y costumbre en la sociedad salvaje*. Barcelona: Ediciones Ariel.

----- (1986): *Los Argonautas del Pacífico Occidental*. Barcelona: Planeta-Agostini.

Manzano, Virginia (2005): "La formación de agentes de salud en el movimiento de desocupados de La Matanza: Aproximaciones desde la antropología de la política". En *Revista de la Escuela de Antropología*. Universidad Nacional de Rosario. Pp. 59-70.

----- (2006): "Movimiento de desocupados y Educación: Etnografía de procesos de articulación política en Argentina reciente y de los sentidos de la igualdad/desigualdad". En Martinis, Pablo y Redondo, Patricia (Comp.): *Igualdad y Educación. Escrituras entre (dos) orillas*. Buenos Aires: Editorial Libros del Estante. Pp. 225-245.

Marshall, Adriana (1994): "Les conséquences économiques de la protection juridique des travailleurs en Amérique Latine". En *Revue Internationale du Travail*, 133 (1), pp. 59-7.

----- (1996): "Protección del empleo en América Latina: las reformas de los años 1990 y sus efectos en el mercado de trabajo.". En *Estudios del trabajo*, Nº 11, pp. 3-28.

Masseti, Astor (2004): *Piqueteros. Protesta social e identidad colectiva*. Buenos Aires: Editorial de las Ciencias-FLACSO.

Masson, Laura (2004): *La política en femenino. Género y poder en la provincia de Buenos Aires*. Buenos Aires: Antropofagia.

Mauss, Marcel (1979): *Sociología y Antropología*. Madrid: Editorial Tecnos.

Mayer, Adrián (1980): "La importancia de los cuasi-grupos en el estudio de las sociedades complejas". En Banton, M. (comp.): *Antropología Social de las Sociedades Complejas*. Madrid: Alianza. Pp. 108-133.

Melucci, Alberto (1994): "Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales". En *Zona Abierta*, N° 69, pp. 153-178.

Menéndez, Eduardo (1981): *Poder, estratificación y salud. Análisis de las condiciones sociales y económicas de la enfermedad en Yucatán*. México: Ediciones de la Casa Chata.

----- (1998): "Participación social en salud como realidad técnica y como imaginario social privado". En *Cuadernos Médicos Sociales*, N° 73, pp. 5-22.

Merklen, Denis (1991): *Asentamientos de La Matanza. La terquedad de lo nuestro*. Buenos Aires: Catálogos Editora.

----- (2000): "Vivir en los márgenes: la lógica del cazador. Notas sobre la sociabilidad y cultura en los asentamientos del Gran Buenos Aires hacia fines de los 90". En Svampa, Maristella (comp.): *Desde abajo. La transformación de las identidades sociales*. Buenos Aires: Biblos. Pp. 81-120.

----- (2005): *Pobres Ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*. Buenos Aires: Editorial Gorla.

Mintz, S. (1985): *Sweetness and power: The place of sugar in Modern History*. Penguin Books, Harmondsworth.

Morgan, Lynn (1993): *Community participation in health. The politics of primary care in Costa Rica*. New York: Cambridge University Press.

Munck, Gerardo (1995): "Algunos problemas conceptuales en el estudio de los movimientos sociales". En *Revista Mexicana de Sociología*, N° 3, pp. 17-39.

Naishtat, Francisco; Schuster, Federico; Nardacchione, Gabriel; y Pereyra, Sebastián: "Introducción". En Schuster, Federico; Naishtat, Francisco; Nardacchione, Gabriel; y Pereyra, Sebastián (comp.): *Tomar la Palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Prometeo. Pp. 9 -23.

Nash, June (1979): *We eat the mines and the mines eat us. Dependency and exploitation in Bolivian tin mines*. New York: Columbia University Press.

----- (1992): "Interpreting social movements: Bolivian resistance to economic conditions imposed by the International Monetary Fund". En *American Ethnologist*, 19 (2), pp. 275-293.

-----(2005): "Social Movements and Global Processes". En Nash, June: *Social Movements. An Anthropological Reader*. Malden, Oxford and Carlton: Blackwell Publishing. Pp. 1-26.

-----(2005a): "Defying Deterritorialization: Autonomy Movements against Globalization". En Nash, June: *Social Movements. An Anthropological Reader*. Malden, Oxford and Carlton: Blackwell Publishing. Pp. 177-186.

Neufeld, María Rosa et. al. (2002): "Sociabilidad y micropolítica en un barrio bajo planes". En Andrenacci, Luciano (org.): *Cuestión social y política social en el Gran Buenos Aires*. Buenos Aires: Editorial Al Margén-Universidad Nacional de General Sarmiento.

Nugent, Daniel y Alonso, Ana María (1994): "Multiple selective traditions in agrarian reform and agrarian struggle: Popular cultures and State formation in the Ejido of Namiquipa, Chihuahua." En Joseph, Gilbert and Nugent, Daniel (editors): *Everyday forms of state formation. Revolution and the negotiation of rule in modern Mexico*. Durham and London: Duke University Press. Pp. 209-246.

O'Connell, Arturo (1984): "La Argentina en la depresión. Los problemas de una economía abierta". En *Desarrollo Económico*, N° 22.

O'Donnell, Guillermo (1997): *Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*. Buenos Aires: Paidós.

Ortner, Sherry (1995): "Resistance and the problem of ethnographic refusal". En *Comparative studies in society and history*, 37 (1), pp. 173-193.

Paoli María y da Silva Telles, Vera (1998): "Social Rights: Conflicts and Negotiations in Contemporary Brazil". En Alvarez, Sonia; Dagnino, Evelina; y Escobar, Arturo (1998): *Cultures of politics/politics of cultures: Re-visioning Latin American Movements*. Boulder: Westview Press. Pp. 64-92.

Parsons, Talcott (1984): *El sistema social*. Madrid: Alianza Editorial [Edición original, New York, The Free Press of Glencoe, 1959].

Pires do Rio Caldeira, Teresa (1989): "Antropología y poder. Una reseña de etnografías americanas recientes". En *BIB. Rio de Janeiro*, N° 17, pp. 3-50.

Polleta, Francesca and Jasper, James (2001): "Collective Identity and Social Movements". En *Annual Review of Sociology*, N° 27, pp. 283-305.

Quirós, Julieta (2006): *Cruzando la Sarmiento. Una etnografía sobre piqueteros en la trama social del sur del Gran Buenos Aires*. Buenos Aires: Antropofagia.

Raggio, Liliana (2003): "Evaluación de programas sociales desde una perspectiva cualitativa. En torno de la definición de las necesidades a partir de los destinatarios". En Lindenboim, Javier y Danani, Claudia: *Entre el trabajo y la política*. Buenos Aires: Biblos. Pp. 205-224.

Rangel Loera, Nashieli (2005): "Limpiando os maus elementos: arranjos políticos e disciplina num acampamento do MST". Ponencia Presentada a la *VI Reunión de Antropología del MERCOSUR*, Montevideo-Uruguay.

Restrepo, Luís (1992): "Movimientos Sociales y Democracia en América Latina". *Boletín Americanista*. Publicaciones Universidad de Barcelona.

Rockwell, Elsie (1994): "Schools of the Revolution: Enacting and contesting State Forms in Tlaxcala, 1910-1930.". En Joseph, Gilbert and Nugent, Daniel (editors): *Everyday forms of state formation. Revolution and the negotiation of rule in modern Mexico*. Durham and London: Duke University Press. Pp. 170-208.

----- (2004): "La apropiación, un proceso entre muchos que ocurren en ámbitos escolares". En *Memoria, Conocimiento y Utopía. Anuario de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación*, pp. 28-38.

Roseberry, William (1994): "Hegemony and the language of contention". En Joseph, Gilbert and Nugent, Daniel (editors): *Everyday forms of state formation. Revolution and the negotiation of rule in modern Mexico*. Durham and London: Duke University Press. Pp. 355-366.

----- (2002): "Images of the peasant in the consciousness of the venezuelan proletariat". En Vincent, Joan (org.): *The anthropology of politics. A reader in ethnography, theory, and critique*. Malden, Massachussets-Oxford. Blackwell. Pp. 187-202 [Edición original, *Anthropologies and Histories: Essays in Culture, History and Political Economy*, NJ, Rutgers University Press, 1985].

Sahlins, Marshall (1970): *Economía de la Edad de Piedra*. Madrid: Akal Editora.

Scaglia, María Cecilia y Woods, Marcela (2000): "Políticas sociales y redes clientelares en un municipio del Gran Buenos Aires". En *Cuadernos de Antropología Social*, N° 12, pp. 253-278.

Schick, Horacio (1999): "Nueve años de modelo laboral de mercado". *Mimeo*.

Schild, Verónica (1998): "New Subjects of Rights?. Women's Movements and the Construction of Citizenship in the New Democracies". En Alvarez, Sonia; Dagnino, Evelina; y Escobar, Arturo (1998): *Cultures of politics/politics of cultures: Re-visioning Latin American Movements*. Boulder: Westview Press. Pp. 93-117.

Schorr, Martín (2004): *Industria y nación. Poder económico, neoliberalismo y alternativas de reindustrialización en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Edhasa.

Schuster, Federico (2005): "Las protestas sociales y el estudio de la acción colectiva". En Schuster, Federico; Naishtat, Francisco; Nardacchione, Gabriel; y Pereyra, Sebastián (comp.): *Tomar la Palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Prometeo. Pp.43-84.

Schuster, Federico y Pereyra, Sebastián (2001): "La Protesta Social en la Argentina democrática: Balance y perspectivas de una forma de acción política". En Giarraca, Norma (comp.): *La Protesta Social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior*. Buenos Aires: Alianza Editorial. Pp. 41-63.

Schuster, Federico y Scribano, Adrián (2001): "Protesta social en la Argentina de 2001: entre la normalidad y la ruptura". En *Revista del Observatorio Social de América Latina (CLACSO)*, N° 5, pp. 17-22.

Scott, James (1976): *The moral economy of the peasant: Rebellion and subsistence in southeast Asia*. New Haven and London: Yale University Press.

----- (1985): *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale, University Press, New Haven.

----- (2000): *Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos*. México: Ediciones Era [Edición original en inglés, Yale, University Press, New Haven, 1990].

Senén González, Santiago y Boser, Fabián (1999): *El sindicalismo en tiempos de Menem. Los ministros de Trabajo en la primera presidencia de Menem: sindicalismo y Estado (1989-1995)*. Buenos Aires. Corregidor.

Sigaud, Lygia (2000): "A forma acampamento: Notas a partir da versão Pernambucana". En *Novos Estudos*, N° 58, pp. 73-92.

----- (2004): "Ocupações de terra, Estado e Movimentos Sociais no Brasil". En *Cuadernos de Antropología Social*, N° 20, pp.11-23.

Sigaud, Lygia et. al. (2006) "Os acampamentos da reforma agrária: historia de uma surpresa". En Benoît de L'Estoile y Sigaud, Lygia (org.): *Ocupações de terra e transformações sociais*. Rio de Janeiro: Editora FGV. Pp. 29-63.

Silverman, Sydel (1986): "El patronazgo como mito". En Gellner, Ernest (comp.): *Patrones y clientes en las sociedades mediterráneas*. Gijón: Jucar Universidad. Pp. 17-33.

Schvarzer, Jorge (2000): "La implantación industrial". En Romero, José Luís y Romero, Luís Alberto: Buenos Aires. *Historia de Cuatro Siglos*. Buenos Aires: Grupo Editor Altamira. Pp. 209-226 [Edición original: Buenos Aires, Editorial Abril, 1983].

Sewell, William (1990): "Collective Violence and Collective Royalties in France: Why teh French Revolution Made a Difference". En *Politics and Society*, N° 18, pp. 527-552.

Shore, Cris and Wright, Susan (1997): "Policy: A new field of anthropology". En Shore, Cris and Wright, Susan (ed.): *Anthropology of policy. Critical perspectives on governance and power*. London & New York: Routledge. Pp 3-42.

Simmel, Georg (2002 [1908]): *Sobre la individualidad y las formas sociales*. Buenos Aires. Universidad Nacional de Quilmes.

Soares, Rosemary (2000): Gramsci, o Estado e o debate sobre a escola. Rio Grande do Sul-Brasil: Editorial UNIJUI.

Svampa, Maristella (2005): *La sociedad excluyente. La Argentina baja el signo del neoliberalismo*. Buenos Aires: Taurus.

Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián (2003): *Entre la Ruta y el Barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.

----- (2005): "La política de los movimientos piqueteros". En Schuster, Federico, Naishtat, Francisco; Nardacchione, Gabriel; y Pereyra, Sebastián (comp.): *Tomar la Palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Prometeo. Pp.343-364.

Swartz, Marc; Victor Turner; y Arhtur Tuden (1966): *Political Anthropology*. Chicago: Aldine.

Tarrow, Sydney (1997): *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza.

Taussig, Michael (1993): *El Diablo y el fetichismo de la mercancía en Sudamérica*. México: Nueva Visión.

Tenti Fanfani, Emilio (1991): "Pobreza y política social: Más allá del neoasistencialismo". En AA.VV: *El estado benefactor un paradigma en crisis*: Buenos Aires: Miño y Dávila.

Tilly, Charles (2000): "Acción colectiva". En *Apuntes de Investigación del CECyP*, pp. 9-32.

Thompson, E. P. (1984): *Tradición, revuelta y conciencia de clases*. Madrid: Crítica.

----- (1992): "Folklore, antropología e historia social". En *Entrepasados*, N° 2, pp.63-86.

----- (1995): *Costumbres en común*. Madrid: Crítica.

Touraine, Alain (1984): *Los movimientos sociales*. México: El Nacional.

----- (1987): *El Regreso del Actor*. Buenos Aires: EUDEBA.

Triguboff, Matías (2005): "La experiencia de las asambleas populares como movimiento social urbano". En *Actas del 1º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología*, Rosario.

Troncoso, Oscar (1983): *Fundadores del Gremialismo Obrero*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, V. I y II.

Trouillot, Michel-Rolph (2001): "The Anthropology of the State in the Age of Globalization". En *Current Anthropology*, 42(1), pp. 125-138.

Vike, Halvard (1997): "Reform and resistance. A Norwegian illustration". En Shore, Cris and Wright, Susan (ed.): *Anthropology of policy. Critical perspectives on governance and power*. London & New York: Routledge. Pp 195-216.

Villanueva, Javier (1972): "El origen de la industrialización argentina". En *Desarrollo Económico*, N° 47.

Villarreal, Juan (1985): "Los hilos sociales del poder". En AA.VV: *Crisis de la dictadura argentina. Política económica y cambio social, 1976-1983*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Vincent, Joan (1998): "Political Anthropology". En Barnard y Sperber (comp.): *Enciclopedia of Social and Cultural Anthropology*, Routledge, London & New York. Pp. 428-433.

----- (2002): *The anthropology of politics. A reader in ethnography, theory and critique*: Oxford: Blackwell Publishers.

Wallace, Santiago (1998): "Hacia un abordaje antropológico de los movimientos sociales". En Neufeld, María Rosa; Grimberg, Mabel; Tiscornia, Sofía; y Wallace, Santiago (comp.): *Antropología Social y Política. Hegemonía y poder: el mundo en movimiento*. Buenos Aires: EUDEBA. Pp. 329-357.

Weingrod, Alex (1986): "Patronazgo y poder". En Gellner, Ernest (comp.): *Patronos y clientes en las sociedades mediterráneas*. Gijón: Jucar Universidad. Pp. 63-77.

Williams, Raymond (1980): *Marxismo y literatura*. Barcelona: Ediciones Península.

Wolf, Eric (1971): "Introduction". En Aya, R. and Miller, N. (eds): *National Liberation*. San Francisco: The New Press. Pp. 1-13

-----(1980): 'Relaciones de parentesco, de amistad y de patronazgo en las sociedades complejas'. En Banton, M. (comp.): *Antropología Social de las Sociedades Complejas*. Madrid: Alianza. Pp.19-39.

-----(1993): *Europa y la gente sin historia*. México: Fondo de Cultura Económica.

Wood, Elisabeth (2001): "The Emocional Benefits of Insurgency in El Salvador". En Goodwin, Jeff; Jasper, James; and Polleta, Francesca (Eds.): *Passionate Politics. Emotions and Social Movements*. Chicago-Londres: The University of Chicago Press. Pp.267-281.

Woods, Marcela (2005): "Instituciones de la sociedad civil y dominación estatal: efectos de despolitización de la intervención social de la Iglesia Católica". Ponencia Presentada a la *VI Reunión de Antropología del MERCOSUR*, Montevideo-Uruguay.

Worsley, Peter (1980): *Al son de la trompeta final: estudios de cultos "cargo" en Melanesia*. Madrid: Siglo XXI.

Zapata, Laura (2005): *La Mano que acaricia la pobreza. Etnografía del voluntariado católico*. Buenos Aires: Antropofagia.

Zeller, Norberto (1999): "Principales normas y planes formulados por el estado nacional en materia laboral durante los años noventa". En *Desarrollo Institucional y Reforma del Estado*, Documento N°64.